



NACIONES UNIDAS

ASAMBLEA
GENERAL



Distr.
GENERAL

A/9215 (Vol.I)
7 noviembre 1973
ESPAÑOL
ORIGINAL: INGLES

Vigésimo octavo período de sesiones
Tema 96 del programa

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS CONFLICTOS ARMADOS

Normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición
o restricción del uso de determinadas armas

Estudio preparado por la Secretaría

Volumen I*

* En el presente volumen figuran la introducción y los capítulos I y II del estudio. El capítulo III y los anexos figuran en el volumen II.

INDICE

Volumen I

	<u>Párrafos**</u>	<u>Página</u>
INTRODUCCION	1 - 20	8
CAPITULO I. TRATADOS	1 - 59	17
PARTE I. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DE CARACTER GENERAL .	1 - 7	17
SECCION 1. PRINCIPIO DE QUE LA ELECCION DE LOS MEDIOS Y METODOS DE COMBATE NO ES ILIMITADA	1 - 2	17
SECCION 2. NORMAS EN QUE SE ESPECIFICA EL PRINCIPIO DE QUE LA ELECCION DE LOS MEDIOS Y METODOS DE COMBATE NO ES ILIMITADA	3 - 6	17
A. Sufrimientos innecesarios y daños superfluos . . .	3 - 4	17
B. Efectos indiscriminados	5	18
C. Traición	6	19
SECCION 3. LA CLAUSULA MARTENS	7	19
APENDICE DE LA PARTE I		20
PARTE II. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES RELATIVAS A ARMAS ESPECIFICAS	8 - 48	29
SECCION 1. VENENO Y ARMAS ENVENENADAS	8 - 9	29
SECCION 2. ARMAS QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS	10 - 18	29
SECCION 3. PROYECTILES DE DIVERSOS TIPOS	19	40
SECCION 4. ARMAS INCENDIARIAS	20 - 21	41
SECCION 5. ARMAS NUCLEARES	22 - 32	42
SECCION 6. GLOBOS	33 - 34	74
SECCION 7. PROYECTILES	35 - 39	76
SECCION 8. ARMAMENTOS NAVALES	40 - 48	87
PARTE III. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE ARMAMENTOS, RESULTANTES DE LA PROTECCION CONCEDIDA A CIERTAS PERSONAS, ZONAS, LUGARES U OBJETOS . . .	49 - 59	101
SECCION 1. PERSONAS CIVILES	50 - 52	101
SECCION 2. CIUDADES, ALDEAS, PUERTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS INDEFENSOS	53 - 56	108

** La introducción y todos los capítulos han sido numerados independientemente.

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
SECCION 3. BIENES CULTURALES	57	111
SECCION 4. ZONAS PROTEGIDAS	58 - 59	120
CAPITULO II. PRACTICA Y DOCTRINA DE LOS ESTADOS	1 - 209	122
PARTE I. LAS ARMAS CLASIFICADAS SEGUN SU NATURALEZA	1 - 196	122
SECCION 1. VENENO Y ARMAS ENVENENADAS	1 - 13	122
A. Práctica de los Estados	1 - 5	122
B. Doctrina	6 - 13	124
SECCION 2. ARMAS QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS	14 - 45	127
A. Práctica de los Estados	14 - 30	127
a) Las normas del derecho internacional consuetudinario relacionadas con el derecho convencional, especialmente el Protocolo de Ginebra de 1925	14 - 21	127
b) Los tipos prohibidos de armas químicas y bacteriológicas	22 - 25	129
c) La cuestión de si las armas químicas y bacteriológicas pueden utilizarse en respuesta o represalia	26 - 28	132
d) La cuestión de los tipos de conflicto en los que se prohíben las armas químicas y bacteriológicas	29	133
e) Incorporación de las normas al derecho interno	30	134
B. Doctrina	31 - 45	135
a) Las Normas del Derecho Consuetudinario Internacional en Relación con el Derecho Convencional, Particularmente el Protocolo de Ginebra de 1925	31 - 39	135
i) Guerra química	34 - 38	136
ii) Guerra bacteriológica	39	139
b) Aplicabilidad del derecho convencional y consuetudinario a tipos particulares de armas	40 - 41	139
i) Agentes lacrimógenos	40 - 41	139
ii) Herbicidas	42	140
iii) Armas psicoquímicas	43	141
c) Otras circunstancias en las que el uso de armas químicas y bacteriológicas es o no es permitido	44 - 45	141

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
SECCION 3. PROYECTILES DE DIVERSOS TIPOS	46 - 58	143
A. Práctica de los Estados	46 - 51	143
B. Doctrina	52 - 58	145
SECCION 4. ARMAS INCENDIARIAS	59 - 86	148
A. Práctica de los Estados	59 - 72	148
a) proyectiles de menos de 400 gramos que sean explosivos, o estén cargados con sustancias fulminantes o inflamables	59 - 62	148
b) Lanzallamas y otras armas incendiarias	63 - 65	149
c) Napalm	66 - 72	150
B. Doctrina	73 - 86	152
a) proyectiles de menos de 400 gramos que son explosivos o están cargados con sustancias fulminantes o inflamables	74 - 77	153
b) Lanzallamas y otras armas incendiarias	78 - 80	154
c) Napalm	81 - 84	155
C. Consideraciones pertinentes sobre la prohibición del empleo de tales armas que se deriva de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales	85 - 86	157
SECCION 5. ARMAS NUCLEARES	87 - 110	158
A. Práctica de los Estados	87 - 100	158
B. Doctrina	101 - 109	167
a) Las armas nucleares consideradas como no violatorias del derecho internacional	103	168
b) Las armas nucleares consideradas como violatorias del derecho internacional	104 - 105	170
c) Armas nucleares estratégicas y tácticas	106	174
d) Utilización de las armas nucleares como represalia o en legítima defensa	107	175
e) Examen de la cuestión por el Instituto de Derecho Internacional	108 - 109	176
C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales	110	177

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
SECCION 6. BOMBARDEO DESDE EL AIRE, LA TIERRA Y EL MAR .	111 - 146	179
A. Práctica de los Estados	111 - 124	179
a) La prohibición de atacar a la población civil como tal.	113 - 116	179
b) Objetivos de bombardeo permisibles y prohibidos	117 - 121	181
c) Heridas causadas a la población civil como consecuencia del bombardeo de objetivos militares	122	184
d) Bombardeo del área general del objetivo	123	184
e) Bombardeo con intención de aterrorizar a la población civil	124	185
B. Doctrina	125 - 146	185
a) La prohibición de atacar a la población civil como tal	126 - 128	186
b) Objetivos de bombardeo permisibles y no permisibles	129 - 134	188
c) Daños a la población civil como consecuencia de bombardeos de objetivos militares	135	190
d) Bombardeo de zonas-objetivo	136	191
e) Bombardeo con intención de aterrorizar a la población civil	137	191
f) Proporcionalidad entre los daños a la población civil y las ventajas militares obtenidas	138	192
g) Examen de la cuestión por el Instituto de Derecho Internacional	139 - 140	192
C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales	141 - 146	194
SECCION 7. BOMBAS DE FRAGMENTACION	147 - 150	200
A. Práctica de los Estados	147	200
B. Doctrina	148 - 150	200
SECCION 8. MINAS TERRESTRES Y TRAMPAS EXPLOSIVAS	151 - 155	200
A. Práctica de los Estados	151 - 152	200
B. Doctrina	153 - 155	201

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>	<u>Página</u>
SECCION 9. PROYECTILES	156 - 163	202
A. Práctica de los Estados	156	202
B. Doctrina	157 - 161	203
C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales	162 - 163	204
SECCION 10. ARMAS DE ACCION DIFERIDA	164 - 169	205
A. Práctica de los Estados	164	205
B. Doctrina	165 - 168	205
C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales	169	206
SECCION 11. ARMAS NAVALES	170 - 181	207
A. Práctica de los Estados	170 - 181	207
a) Minas	170 - 177	207
b) Submarinos	178 - 181	211
B. Doctrina	182 - 192	213
a) Minas	182 - 185	213
b) Submarinos	186 - 192	214
SECCION 12. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS	193 - 196	218
A. Práctica de los Estados	193 - 194	218
B. Doctrina	195 - 196	218
PARTE II. CLASIFICACION DE ARMAS SEGUN SUS EFECTOS	197 - 209	220
SECCION 13. ARMAS QUE CAUSAN DAÑOS SUPERFLUOS	197 - 203	220
A. Práctica de los Estados	197 - 200	220
B. Doctrina	201 - 203	222
SECCION 14. ARMAS DE EFECTOS INDISCRIMINADOS	204	225
SECCION 15. ARMAS QUE PRODUCEN LA MUERTE A TRAICION . .	205 - 209	226
A. Práctica de los Estados	205 - 209	226
B. Doctrina	207 - 209	226

INDICE (continuación)

	<u>Párrafos</u>
CAPITULO III. DECISIONES JUDICIALES	1 - 28
SECCION 1. DECISIONES DE TRIBUNALES INTERNACIONALES . . .	1 - 5
A. Corte Internacional de Justicia	1 - 2
B. Arbitraje de demandas en la zona española de Marruecos	3
C. El Tribunal mixto greco-alemán de arbitraje	4 - 5
SECCION 2. DECISIONES DE TRIBUNALES NACIONALES	6 - 10
A. Francia	6 - 7
B. Alemania	8
C. Japón	9
D. Países Bajos	10
SECCION 3. DECISIONES DE TRIBUNALES MILITARES	11 - 28
A. El Tribunal Militar Internacional de Nuremberg . . .	11 - 13
B. Tribunal Militar Internacional del Lejano Oriente . .	14 - 16
C. Tribunal Militar Británico de Hamburgo para el juicio de criminales de guerra	17
D. Tribunal Militar de los Estados Unidos en Nuremberg .	18 - 27
E. Tribunal Militar de la URSS de la Zona Militar de Primorye	28

ANEXOS

- I. RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL RELATIVAS A LA PROHIBICION DE ARMAS Y SU USO
- II. PROYECTOS DE PROTOCOLOS ADICIONALES A LOS CONVENIOS DE GINEBRA DEL 12 DE AGOSTO DE 1949, PREPARADOS POR EL COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA

INTRODUCCION

1. El presente estudio sobre las normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas ha sido preparado por la Secretaría conforme a la petición contenida en el párrafo 4 de la resolución 3032 (XXVII) de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1972. La resolución, titulada "Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados", dice lo siguiente:

"La Asamblea General,

Consciente de que únicamente mediante el total respeto a la Carta de las Naciones Unidas y el desarme general y completo bajo un control internacional eficaz es posible lograr plenas garantías contra los conflictos armados y los sufrimientos ocasionados por dichos conflictos, y decidida a seguir haciendo toda clase de esfuerzos para lograr tales fines.

Consciente de que el desarrollo de muchas armas y métodos de guerra ha hecho que los modernos conflictos armados sean cada vez más crueles y destructivos de bienes y vidas civiles,

Reafirmando la necesidad urgente de asegurar una aplicación plena y eficaz de las normas jurídicas existentes relativas a los conflictos armados, y de complementar dichas normas con otras nuevas, para tener en cuenta la moderna evolución de métodos y medios bélicos,

Observando con preocupación que frecuentemente se hace caso omiso de las normas y obligaciones jurídicas existentes en lo relativo a los derechos humanos en los conflictos armados,

Recordando las resoluciones sucesivas que las Naciones Unidas han aprobado en relación con los derechos humanos en los conflictos armados, en particular las resoluciones 2852 (XXVI) y 2853 (XXVI) de la Asamblea General, de 20 de diciembre de 1971, y la resolución XIII aprobada en la XXI Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Estambul en 1969 1/, acerca de la reafirmación y el desarrollo de las normas y costumbres aplicables en los conflictos armados,

Tomando nota con beneplácito del informe del Secretario General 2/ sobre los resultados obtenidos en el segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, que se celebró en Ginebra del 3 de mayo al 3 de junio de 1972, a invitación del Comité Internacional de la Cruz Roja,

1/ Véase A/7720, anexo I, Secc. D.

2/ A/8781.

Habiéndose impuesto del informe preparado por el Comité Internacional de la Cruz Roja sobre la labor de la Conferencia de expertos gubernamentales 3/,

Expresando su reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja por la dedicación con que se ha esforzado para promover la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,

Subrayando la importancia de una colaboración continua y estrecha entre las Naciones Unidas y el Comité Internacional de la Cruz Roja,

Acogiendo con beneplácito el progreso logrado en el segundo período de sesiones de la Conferencia de expertos gubernamentales,

Advirtiendo con preocupación, no obstante, que no ha habido acuerdo entre los expertos gubernamentales sobre proyectos relativos a varias cuestiones fundamentales, tales como:

- a) Los métodos para asegurar una mejor aplicación de las normas existentes relativas a los conflictos armados,
- b) Las definiciones de los objetivos militares y de los objetos protegidos, a fin de contrarrestar la tendencia en los conflictos armados a considerar como blancos cuyo ataque está permitido a categorías cada vez más amplias de objetos,
- c) Las definiciones de combatientes y personas protegidas, que respondan a la necesidad de una mejor protección de civiles y combatientes en los conflictos armados modernos,
- d) La cuestión de la guerra de guerrillas,
- e) La prohibición del uso de armas y métodos de guerra que afectan indistintamente a civiles y a combatientes,
- f) La prohibición o restricción del uso de determinadas armas que se considera que causan sufrimientos innecesarios,
- g) Las normas que faciliten el socorro humanitario en los conflictos armados,
- h) La definición de cuáles son los conflictos armados de carácter no internacional que deben ser objeto de normas adicionales a las que figuran en los Convenios de Ginebra de 1949 4/,

3/ Informe sobre los trabajos de la Conferencia, Ginebra, julio de 1972.

4/ Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, Nos. 970 a 973.

Considerando que es indispensable lograr progresos substanciales en cuestiones fundamentales, tales como las enumeradas precedentemente, para que los esfuerzos por complementar el derecho internacional humanitario con nuevas normas adquieran importancia para aliviar los sufrimientos producidos por los modernos conflictos armados,

Acogiendo con beneplácito la disposición del Consejo Federal de Suiza, comunicada al Secretario General, de convocar a una conferencia diplomática sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados,

Considerando que tanto los ulteriores preparativos como la organización de dicha conferencia deben ser de índole tal que se logren progresos considerables en cuestiones fundamentales que aún no han sido resueltas,

Expresando su reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja por haber emprendido una serie de consultas para completar la preparación de la Conferencia,

1. Insta a todos los gobiernos e invita al Comité Intergubernamental de la Cruz Roja a que, mediante consultas, continúen tratando de lograr un acercamiento en las posturas de los gobiernos para asegurar que la conferencia diplomática prevista adopte normas que constituyan un progreso considerable en las cuestiones jurídicas fundamentales relacionadas con los modernos conflictos armados y que contribuyan de manera significativa a aliviar los sufrimientos que tales conflictos ocasionan;

2. Exhorta a todas las partes en conflictos armados a que acaten las normas humanitarias internacionales que sean aplicables, en especial las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 5/, el Protocolo de Ginebra de 1925 6/ y los Convenios de Ginebra de 1949, y a que, a tales efectos, proporcionen instrucción acerca de dichas normas a sus fuerzas armadas, e información sobre esas mismas normas a la población civil;

3. Pide al Secretario General que estimule el estudio y la enseñanza de los principios de respeto a las normas internacionales humanitarias aplicables en los conflictos armados;

4. Pide al Secretario General que informe a la Asamblea General en su vigésimo octavo período de sesiones sobre los acontecimientos pertinentes producidos en relación con los derechos humanos en los conflictos armados, y que prepare lo antes posible un estudio acerca de las normas de derecho internacional existentes sobre la prohibición o restricción del uso de determinadas armas;

5/ Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907. Nueva York, Oxford University Press, 1916.

6/ Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XCIV, No. 2138, pág. 65.

5. Decide incluir en el programa provisional de su vigésimo octavo período de sesiones un tema titulado "Los derechos humanos en los conflictos armados: respeto de los derechos humanos en los conflictos armados".

2. Contrariamente a lo que sucedía en el período anterior a la primera guerra mundial, del que puede decirse que la guerra y el uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados se consideraban entonces medios legítimos de resolver controversias internacionales, el derecho internacional contemporáneo se caracteriza por la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza en las relaciones internacionales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, principio que constituye en la actualidad uno de los principales pilares jurídicos de la comunidad internacional. Culminación de una evolución histórica, el principio de la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza está consagrado en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, conforme al cual los Estados, en sus relaciones internacionales, "se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". En 1970, la Asamblea General formuló el principio y lo incluyó en la Declaración sobre los Principios de Derecho Internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, aprobada como resolución 2625 (XXV), con ocasión del vigésimo quinto aniversario de las Naciones Unidas. El principio ha sido igualmente subrayado y confirmado por la Asamblea General en otras resoluciones, tales como la resolución 2160 (XXI), de 30 de noviembre de 1966, y la resolución 2734 (XXV), de 16 de diciembre de 1970, tituladas respectivamente "Observancia estricta de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y del derecho de los pueblos a la libre determinación" y "Declaración sobre el fortalecimiento de la seguridad internacional".

3. Sin embargo, existen casos en que el uso de la fuerza es legítimo conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el Artículo 51 estipula que ninguna disposición de esta Carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado, y con arreglo al Capítulo VII, las propias Naciones Unidas pueden utilizar legítimamente la fuerza como parte de su acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos de la paz o actos de agresión con el propósito de mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales. Debe tenerse presente asimismo que aunque el principio de la Carta se refiere a la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en "las relaciones internacionales", los conflictos armados también pueden ser no internacionales, y la línea divisoria entre conflictos internacionales y conflictos no internacionales no siempre es fácil de trazar. Además, el principio por el que se prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales puede, como cualquier otro principio o norma de índole jurídica, ser ilícitamente desatendido o transgredido. En su discurso de apertura del actual período de sesiones de la Asamblea General, su Presidente recordó que "... según el anuario del Stockholm International Peace Research Institute, abreviadamente SIPRI, de 1969, después de la creación de las Naciones Unidas y de la vigencia de

la Carta ha habido 101 conflictos entre guerras civiles con o sin apoyo internacional, intervenciones, choques fronterizos y guerras propiamente dichas" y agregó: "Tengo la convicción de que en todos esos conflictos existió la violación de uno o más de los principios que antes he enunciado" 7/.

4. Estas consideraciones, junto con el hecho de que los modernos adelantos en materia de armamentos son tales que los métodos y medios bélicos se están volviendo, por su propia naturaleza o efectos, cada vez más crueles y destructivos, han hecho que en los últimos años se volviera a centrar la atención en las normas de derecho internacionalmente llamadas "leyes y costumbres de la guerra" - el denominado "derecho de La Haya" - y del "derecho humanitario" - el denominado "derecho de Ginebra" - con miras a efectuar una evaluación de las mismas y proceder, finalmente, a desarrollar las que puedan necesitar ser actualizadas a la luz de las condiciones contemporáneas. Se han emprendido esfuerzos a este fin con plena conciencia de la suprema importancia del objetivo del desarme general y completo bajo un control internacional eficaz. En el derecho internacional actual, y especialmente con arreglo al sistema de la Carta de las Naciones Unidas, los acontecimientos en las esferas relativas a los conflictos armados tales como las "leyes y costumbres de la guerra", el "derecho humanitario" y el "desarme" se interrelacionan íntimamente.

5. Esto fue reconocido por la Asamblea General en su resolución 2932 A (XXVII) de 29 de noviembre de 1972. En esta resolución la Asamblea recuerda que "todos los conflictos armados y el empleo de cualquier arma ocasionan sufrimientos y ... que los únicos medios eficaces de terminar con esos sufrimientos son la eliminación de los conflictos armados y el desarme general y completo", y manifiesta, entre otras cosas, que está "convencida de que el empleo generalizado de muchas armas y la aparición de nuevos métodos bélicos que causan sufrimientos innecesarios o son indiscriminados en sus efectos exigen urgentemente que los gobiernos renueven sus esfuerzos por lograr, por medios jurídicos, la prohibición del empleo de esas armas y de métodos bélicos de efectos indiscriminados y crueles y, de ser posible, con medidas de desarme, la eliminación de determinadas armas de efectos particularmente crueles o indiscriminados". La relación entre las normas de derecho internacional relativas a la prohibición o restricción del uso de determinadas armas y el principio de la prohibición de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas también ha sido subrayada recientemente por la Asamblea General en su resolución 2936 (XXVII), de 29 de noviembre de 1972, titulada "No utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y prohibición permanente del uso de las armas nucleares".

6. En las Naciones Unidas, la cuestión del fortalecimiento y modernización de la parte del derecho internacional que se relaciona principalmente con la limitación de los sufrimientos humanos en los conflictos armados se debatió en la Conferencia Internacional de Derechos Humanos celebrada en Teherán (22 de abril a 13 de mayo de 1968). Posteriormente, la Asamblea General ha examinado periódicamente un

7/ Véase A/PV.2117, pág. 31.

tema titulado "Respeto de los derechos humanos en los conflictos armados". Fuera de las Naciones Unidas, se ha tratado el problema en las Conferencias de la Cruz Roja Internacional y en conferencias y reuniones de expertos gubernamentales convocadas bajo los auspicios del Comité Internacional de la Cruz Roja. Los proyectos de protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, relativos a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales y no internacionales, que se examinarán en la conferencia diplomática convocada para 1974 por el Consejo Federal Suizo, contienen varias disposiciones relativas a métodos y medios de combate 8/.

7. La nueva dimensión agregada a la relación tradicional entre las "leyes y costumbres de la guerra" y el "derecho humanitario" se explica fácilmente por el desarrollo de las normas de derecho internacional relativas a los derechos humanos y las libertades fundamentales, conforme al párrafo 3 del Artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas. La relación entre, por una parte, la protección y fomento de los derechos humanos y, por la otra, el desarrollo de las leyes y costumbres de la guerra y del derecho humanitario, se ha reconocido en la resolución XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968 9/. En esa resolución, la Conferencia, al tiempo que considera que "la paz constituye la condición básica para la plena observancia de los derechos humanos y que la guerra es la negación de esos derechos", afirma su convicción de que "los principios humanitarios deben prevalecer incluso en épocas de conflicto armado". En relación con esto, cabe señalar que algunos acuerdos existentes relativos a los derechos humanos, como por ejemplo, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, prevén expresamente protección "en tiempo de paz o en tiempo de guerra", mientras que otros instrumentos de derechos humanos que prevén su derogación parcial en algunas situaciones - incluidas las que pueden caracterizarse como conflicto armado - lo hacen sólo en aspectos más o menos limitados - por ejemplo, el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 15 de la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales 10/, y el artículo 27 de la Convención Internacional sobre Protección de Derechos Humanos. Otros instrumentos de derechos humanos nada dicen sobre esa cuestión. La necesidad de respetar los derechos humanos esenciales e inalienables "incluso durante las vicisitudes de la guerra" ha sido reconocida por el Consejo de Seguridad en su resolución 237 (1967), de 14 de junio de 1967.

8. La humanización de los conflictos armados responde a ciertos principios fundamentales reconocidos tiempo atrás por el derecho internacional y frecuentemente reafirmados. Estos principios pueden estudiarse en una perspectiva amplia, o, por razones de comodidad, mediante una simple referencia a uno o varios de los

8/ Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 1973. Se reproducen en parte en el anexo II, infra.

9/ Acta final de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.68.XIV.2), pág. 19.

10/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 213, No. 2889, pág. 221.

aspectos de los conflictos armados. El presente estudio se refiere técnicamente a sólo uno de esos aspectos, a saber, la prohibición o restricción del uso de determinadas armas en los conflictos armados, como pidió la Asamblea General.

9. Toda evaluación jurídica de los problemas relacionados con diferentes aspectos de la prohibición o restricción del uso de determinadas armas en los conflictos armados debe partir del principio de que la elección de medios y métodos de combate no es ilimitada. Este principio, las normas que lo establecen prohibiendo las armas que causan sufrimientos innecesarios, las armas de efectos indiscriminados y las armas traicioneras, y la máxima consagrada en la denominada cláusula de Martens, están firmemente establecidos en el derecho internacional. Estos principios y normas tienen por objeto restringir la conducta arbitraria de las partes en un conflicto a fin de éste sea lo menos inhumano posible. Ya presentes, en su mayor parte, en la Declaración de San Petersburgo de 29 de noviembre/11 de diciembre de 1868, destinada a prohibir el uso de ciertos proyectiles en tiempo de guerra, estos principios y normas fueron luego incorporados expresamente por remisión a las Reglamentaciones de La Haya de las leyes y costumbres de la guerra terrestre, de 1899 y 1907, y otros instrumentos convencionales y, posteriormente, reconocidos por la práctica de los Estados, las decisiones judiciales y la doctrina más autorizada como parte del derecho internacional consuetudinario. No parecen caber dudas razonables de su validez universal en el derecho internacional contemporáneo. Las disposiciones de los tratados que las formulan son en la actualidad meramente "declaratorias" del derecho consuetudinario. Los problemas dimanantes de la "cláusula de participación general" que contienen algunos de estos instrumentos se ven, por consiguiente, superados a este respecto.

10. Además de los principios y normas generales mencionados en el párrafo precedente, se ha incluido en tratados una serie de disposiciones relativas a prohibiciones o restricciones del uso de determinadas armas. Ejemplos bien conocidos del período anterior a la primera guerra mundial son la declaración de San Petersburgo de 1868 que, entre otras cosas, prohibía el empleo de todo proyectil ~~cuyo peso fuera inferior a 400 gramos y que fuese explosivo o que estuviese cargado con materias explosivas o inflamables~~, y la Declaración de La Haya (IV.3) de 1899 relativa a la abstención del uso de armas que se expanden o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano (balas "dum-dum"). Durante la época de la Sociedad de las Naciones un logro notable fue la celebración del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 11/. Desde la creación de las Naciones Unidas, se han celebrado varios tratados relativos a determinadas armas, como resultado de negociaciones sobre desarme. En su mayoría, estos tratados se refieren a la reglamentación de actividades tales como la fabricación, ensayo, almacenamiento, transferencia, etc. de armas y no a su utilización en conflictos armados. No obstante, son sumamente pertinentes a los efectos de determinar el contexto en que debe concebirse el tema del estudio en las condiciones actuales. Entre estos tratados, pueden mencionarse el Tratado de 1963 por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua 12/,

11/ Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCLV, No. 2138, pág. 65.

12/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 480, No. 6964, pág. 43.

el Tratado de 1968 sobre la no proliferación de las armas nucleares, el Tratado de 1971 sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo y la Convención de 1972 sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción. También se han celebrado tratados regionales y bilaterales relativos a determinadas armas tales como el Tratado de 1967 para la Proscripción de las Armas Nucleares en América Latina y los acuerdos entre los Estados Unidos y la Unión Soviética de 1971, 1972 y 1973 sobre algunas medidas para reducir el riesgo de estallido de una guerra nuclear, respecto de la limitación de armamentos ofensivos estratégicos la limitación de sistemas de proyectiles antibalísticos y la prevención de la guerra nuclear.

11. Se ha aducido que, en una época caracterizada por la revolución científica y tecnológica, se hace cada vez más difícil distinguir entre medios y métodos humanos e inhumanos de combate remitiéndose a conceptos tales como "sufrimientos innecesarios" o "efectos indiscriminados" ante armas de destrucción en masa o en gran escala. Además de ser crueles, estas armas tienden a destruir la distinción fundamental entre combatientes y población civil y entre objetivos militares y no militares. Además, cabe señalar que los principios y normas de que se trata estaban destinados a regular la conducta en los conflictos armados en una etapa de desarrollo de las relaciones internacionales en que conceptos tales como la seguridad colectiva y el desarme por conducto de una organización universal permanente encargada de mantener la paz y la seguridad internacionales no se habían expresado aún concretamente.

12. La complejidad del desarme y su ítima relación con el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales han hecho necesario proceder por etapas en la consecución del objetivo declarado del desarme general y completo bajo un control internacional eficaz. En este proceso de negociación, se ha centrado la atención en la tarea de concertar acuerdos sobre actividades relativas a armas de destrucción en masa o en gran escala. Sin embargo, los adelantos tecnológicos modernos también han hecho cada vez más crueles y destructivos otros tipos de armas, como se ha señalado recientemente 13/. En estas circunstancias, sólo cabe reconocer el valor permanente y general de los principios y normas relativos a la prohibición o restricción del uso de determinadas armas en conflictos armados. Por lo menos, dichos principios y normas continúan cumpliendo su papel civilizador de proporcionar un criterio jurídico objetivo para evaluar las aseveraciones subjetivas de necesidad militar.

13. El estudio está destinado a ser un documento informativo que se limita a presentar en forma sistemática y no exhaustiva materiales e información pertinentes acopiados por la Secretaría durante su investigación 14/. De carácter técnico y descriptivo, evita toda evaluación independiente del valor jurídico de los materiales mencionados y la formulación de conclusiones.

13/ Comité Internacional de la Cruz Roja, "Weapons That May Cause Unnecessary Suffering or Have Indiscriminate Effects: Report on the Work of Experts" (Ginebra 1973).

14/ No se solicitaron materiales de los gobiernos.

14. Los materiales consisten en tratados, prácticas de los Estados, individuales o colectivas, decisiones judiciales y doctrina. La mayoría de ellos se originaron durante este siglo. En particular, la práctica de los Estados y doctrina mencionadas se originan, en su mayor parte, en la segunda guerra mundial. Los materiales se presentan en tres capítulos y dos anexos, y cada capítulo constituye una unidad autónoma a los efectos de su presentación.

15. El capítulo I, dedicado a los tratados, contiene los textos de tratados o disposiciones de tratados pertinentes agrupados en tres partes diferentes relativas a prohibiciones o restricciones de naturaleza general (parte I), prohibiciones o restricciones relativas a determinadas armas (parte II) y prohibiciones o restricciones del uso de armas resultantes de la protección concedida a algunas personas, zonas, lugares u objetos (parte III). Cada parte se divide a su vez en secciones y subsecciones, según proceda.

16. El capítulo II, sobre la práctica y doctrina de los Estados, está compuesto por dos partes. La parte I contiene 12 secciones (secciones 1 a 12) relativas a normas y acontecimientos concretos relacionados con armas determinadas según su naturaleza. Cada una de estas secciones se divide en dos subsecciones que contienen, respectivamente, información sobre la práctica de los Estados y doctrina pertinentes al tipo de armas considerado. En algunos casos, se ha incluido una tercera subsección relativa a la práctica de las organizaciones internacionales, que ilustra sobre la situación del arma o sistema de armamentos a la luz del derecho internacional. La parte II se compone de tres secciones (secciones 13 a 15) que se refieren a la clasificación de las armas según sus efectos. Como estas tres categorías son simplemente otra manera de concebir las armas, hay cierto grado de duplicación entre la parte I y la parte II, lo cual explica la brevedad de las secciones de esta última.

17. El capítulo III contiene pasajes de decisiones judiciales que se refieren al tema del estudio. Los pasajes escogidos abarcan diversos aspectos, que van desde dictámenes relativos a la interpretación de algunos tratados o de normas de derecho internacional general a casos en que las circunstancias de hecho invocan directamente el uso de un arma determinada. El capítulo se ha dividido en tres secciones: "Decisiones de tribunales internacionales" (sección 1), "Decisiones de tribunales nacionales" (Sección 2) y "Decisiones de tribunales militares (nacionales e internacionales)" (sección 3).

18. En el primero de los dos anexos se reproducen resoluciones de la Asamblea General relativas a la prohibición de determinadas armas y su uso, y en el segundo, disposiciones escogidas de los proyectos de protocolo adicional a los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, preparados por el Comité Internacional de la Cruz Roja.

19. Finalmente, cabe señalar que en los capítulos I y II se han agrupado armas determinadas del mismo tipo bajo encabezamientos comunes, elegidos exclusivamente por razones de comodidad.

CAPITULO I. TRATADOS

PARTE I. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DE CARACTER GENERAL^{1/}

SECCION 1. PRINCIPIO DE QUE LA ELECCION DE LOS MEDIOS Y METODOS DE COMBATE NO ES ILIMITADA

1. El primer instrumento internacional en que se proclamó el principio de que la elección de los medios y métodos de combate no era ilimitada fue la Declaración de San Petersburgo de 29 de noviembre/11 de diciembre de 1868. Entre otras cosas, en dicha Declaración se indicaba:

"Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo;

"Que, para estos efectos, basta con poner fuera de combate al mayor número posible de hombres;"

2. Este principio fue también reconocido expresamente en las Conferencias de la Paz de La Haya de 1899 y 1907, según se refleja en los "Reglamentos concernientes a las leyes y costumbres de la guerra terrestre" que figuran como anexo a las Convenciones de 1899 (II) y de 1907 (IV). El artículo 22 de los Reglamentos estipula que

"Los beligerantes no gozan del derecho ilimitado de elegir los medios de perjudicar al enemigo."

SECCION 2. NORMAS EN QUE SE ESPECIFICA EL PRINCIPIO DE QUE LA ELECCION DE LOS MEDIOS Y METODOS DE COMBATE NO ES ILIMITADA

A. Sufrimientos innecesarios y daños superfluos

3. Además de señalar que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo, la Declaración de San Petersburgo de 1868 estipula también que esta finalidad "quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravaran inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien hicieran que su muerte fuese inevitable". La Declaración agrega que "el empleo de tales armas sería, por tanto, contrario a las leyes de la humanidad".

4. El texto auténtico en francés del inciso e) del artículo 23 de los Reglamentos que figuran como anexo a las Convenciones de La Haya de 1899 (II) y 1907 (IV) señala

^{1/} Los instrumentos a que se hace referencia en la parte I se reproducen infra, íntegramente o en parte, como apéndice a la parte I.

que: "Outre les prohibitions établies par des conventions spéciales, il est notamment interdit: ... d'employer des armes, des projectiles ou des matières propres à causer des maux superflus;". El texto auténtico en francés ha sido reproducido en forma distinta en las traducciones al inglés de las dos convenciones que ha hecho el Departamento de Estado de los Estados Unidos. La traducción al inglés de la Convención de 1899 dice "Besides the prohibitions provided by special Conventions, it is especially prohibited:- ... To employ arms, projectiles, or material of a nature to cause superfluous injury;", mientras que la traducción al inglés de la Convención de 1907 dice "In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden - ... To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering;" (sin subrayar en el original) 2/.

B. Efectos indiscriminados

5. La norma de que las partes en un conflicto armado deben limitar sus actividades a malograr los objetivos militares del adversario y de que deben asegurarse de que los civiles y sus propiedades sean respetados y protegidos constituye también una regla firmemente establecida en el derecho internacional e incorporada

2/ Dotación Carnegie para la Paz Internacional, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907, J.B. Scott, ed. (Nueva York, Oxford, 1915). La versión en inglés de ambas Convenciones hecha por el Departamento de Estado de los Estados Unidos figura también en Treaties, Conventions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States and Other Powers, recopilados por W.M. Malloy, U.S. Senate, 61st Congress, 2d Session, documento No. 357 (Washington, U.S. Gov't. Printing Office, 1910), vol. II, págs. 2042 y 2269. Cabe hacer notar que la versión en inglés de la frase en francés "ou des matières propres à causer des maux superflus;" que figura en la Treaty Series británica es igual a la versión en inglés preparada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Véase, Gran Bretaña, Treaty Series, 1901 (No. 11) e ibid., 1910 (No. 9). "En lo que respecto a determinar qué sufrimientos se considerarán "innecesarios" o qué daños se considerarán "superfluos", en un informe publicado recientemente se señala que, en todo caso, debe considerarse que los conceptos examinados rigen para todas las armas que no ofrecen mayores ventajas militares que otras armas disponibles, pero que, en cambio, sí causan males o lesiones mayores. Esta interpretación concuerda con el principio básico de que, si se puede poner fuera de combate a un soldado tomándolo prisionero, no debe herírsele; si puede ponérsele fuera de combate hiriéndolo, no debe matársele; y, si puede ponérsele fuera de combate mediante una herida leve, debe evitarse lesionarlo gravemente. Además, los conceptos de "males superfluos" y "lesiones excesivas" parecen exigir que se sopesen respectivamente las ventajas militares del empleo de cualquier arma, y las consideraciones de carácter humanitario". (Comité Internacional de la Cruz Roja, Armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación, op. cit., párr. 23).

también en la Declaración de San Petersburgo de 1868 y en los Reglamentos de La Haya 3/. Como se ha señalado supra, la Declaración de San Petersburgo establece expresamente "que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo" (subrayados añadidos) 4/.

C. Traición

6. Las Convenciones de La Haya de 1899 (II) y 1907 (IV) prevén en el inciso b) del artículo 23 de los Reglamentos que figuran como anexo a cada una de las Convenciones que, además de las prohibiciones establecidas por convenios especiales, "queda particularmente prohibido... matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la nación o ejército enemigos".

SECCION 3. LA CLAUSULA MARTENS

7. Los redactores de las Convenciones de La Haya de 1899 (II) y de 1907 (IV) incluyeron en el preámbulo de las mismas un principio general, conocido como "cláusula Martens", a fin de destacar la aplicabilidad del derecho internacional incluso en los casos en que en las convenciones internacionales existentes no se estipularan prohibiciones en cuanto al empleo de armas específicas. La "cláusula" estipula que, en tales casos, las poblaciones y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre las naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública. El texto auténtico en francés de la "cláusula" dice:

"En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les dispositions réglementaires adoptées par elles, les populations et les belligérants restent sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique." 5/.

3/ Este principio fue reconocido por la Asamblea General en la resolución 2444 (XXIII) de 19 de diciembre de 1968, en la que se afirmó la resolución XXVIII de la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Viena en 1965 y en la que, entre otras cosas, se establecía el principio de que "en todo momento ha de distinguirse entre las personas que participan en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se respete a estos últimos lo más posible".

4/ "La prohibición de la guerra sin discriminación atañe más frecuentemente a los métodos de la guerra y a los métodos con que se emplean las armas, que a determinadas armas específicas como tales. Todas las armas pueden emplearse sin discriminación. Ello no constituye, desde luego, base suficiente para prohibir que se recurra a ellas en los conflictos armados, sino un motivo para prohibir esa clase de utilizaciones. Sin embargo, hay armas que por su misma naturaleza sólo pueden emplearse sin discriminación. Además, en otros casos, puede ser tal el uso normal o típico de ciertas armas, que sus efectos sean sin discriminación." (Comité Internacional de la Cruz Roja, Armas que pueden causar males superfluos o dañar sin discriminación, op. cit., párr. 27).

5/ Véanse las notas de pie de página 7 y 9 infra.

/...

APENDICE DE LA PARTE I

a) Declaración firmada en San Petersburgo el 29 de noviembre (11 de diciembre) de 1868 6/

Habiéndose reunido en San Petersburgo, por invitación del Gabinete Imperial de Rusia, una Comisión Militar Internacional con el objeto de examinar la conveniencia de prohibir el empleo de determinados proyectiles en tiempos de guerra entre naciones civilizadas y habiendo esta Comisión fijado de común acuerdo los límites técnicos dentro de los cuales las necesidades de la guerra deben ceder a las exigencias humanitarias, los infrascritos han sido autorizados por sus Gobiernos para hacer la siguiente declaración:

Considerando que los progresos de la civilización deben tener por efecto atenuar en cuanto sea posible las calamidades de la guerra;

Que la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo;

Que para estos efectos basta con poner fuera de combate el mayor número posible de hombres;

Que esta finalidad quedaría sobrepasada por el empleo de armas que agravaran inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien que hicieran que su muerte fuera inevitable;

Que el empleo de tales armas sería por tanto, contrario a las leyes de la humanidad;

Las Partes Contratantes se comprometen mutuamente, en caso de guerra entre ellos, a renunciar al empleo, por sus fuerzas militares o navales, de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables.

Las Partes Contratantes acuerdan invitar a todos los Estados que no han participado, mediante el envío de delegados, en las deliberaciones de la Comisión Militar Internacional, reunida en San Petersburgo, a que se adhieran al presente compromiso.

Este compromiso sólo es obligatorio para las Partes Contratantes o adherentes, en caso de guerra entre dos o más de ellos; no es aplicable respecto de las Potencias no contratantes o no adherentes.

Dejará también de ser obligatorio desde el momento en que, en una guerra entre Partes Contratantes o adherentes, una Parte no contratante o no adherente se una a alguno de los beligerantes.

6/ De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, t. 18, pág. 474 [texto francés auténtico]. Traducido al inglés en American Journal of International Law, vol. I (1907), Supp., pág. 95.

Las Partes Contratantes o adherentes se reservan la facultad de ponerse de acuerdo ulteriormente cada vez que sea formulada una proposición precisa, habida cuenta de los perfeccionamientos que la ciencia pudiera introducir en el armamento de las tropas, con el objeto de mantener los principios que han sido establecidos y conciliar las necesidades de la guerra con las leyes de la humanidad.

- b) Convención (II) relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre firmada en La Haya el 29 de julio de 1899 7/

"... /Las Altas Partes Contratantes/

Considerando que al mismo tiempo que se buscan los medios de garantizar la paz y prevenir los conflictos armados entre las Naciones, importa preocuparse asimismo del caso en que la apelación a las armas fuese traída por acontecimientos que su solicitud no hubiera podido evitar;

Animados por el deseo de servir, aun en esa hipótesis extrema, los intereses de la humanidad y las siempre crecientes exigencias de la civilización;

Estimando que importa revisar, a dicho fin, las leyes y costumbres generales de la guerra, bien sea para definir las con mayor precisión, bien para limitarlas, con objeto de restringir en lo posible sus rigores;

Inspirándose en esos fines, recomendados hoy, como hace veinticinco años en la Conferencia de Bruselas de 1874 8/, por una generosa y sabia previsión;

Han adoptado en ese espíritu gran número de disposiciones que tienen por objeto definir y regular los usos de la guerra terrestre.

Según el criterio de las Altas Partes contratantes, estas disposiciones, cuya redacción ha sido inspirada por el deseo de disminuir los males de la guerra en cuanto las necesidades militares lo consientan, están destinadas a servir de regla general de conducta a los beligerantes en las relaciones entre sí y con los pueblos.

Ha sido imposible, sin embargo, concertar desde ahora estipulaciones que se extiendan a todas las circunstancias que se presentan en la práctica.

7/ De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 2ème série, t. 26, pág. 949 /texto francés auténtico/. Traducción al español: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907, compiladas por J.B. Scott, director (Nueva York, Oxford University Press, 1916), pág. 100.

8/ La Conferencia de Bruselas de 1874 aprobó un proyecto de declaración internacional relativo a las leyes y costumbres de la guerra, pero ésta no entró nunca en vigor. (Véase De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 2ème serie, t. 4, pág. 219. Traducción al inglés: American Journal of International Law, vol. I (1907), Supp., pág. 96).

Por otra parte, no podía entrar en las intenciones de las Altas Partes contratantes que los casos no previstos fueran, a falta de estipulación escrita, dejados a la apreciación arbitraria de los que dirijan los ejércitos.

En espera de que un Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, tales como resultan de los usos establecidos entre Naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

Declaran que en ese sentido deben entenderse especialmente los artículos 1 y 2 del reglamento adoptado.

Las Altas Partes contratantes, deseando celebrar un Convenio a ese efecto, han nombrado a sus plenipotenciarios, a saber:

...

Los cuales, después de haberse comunicado sus plenos poderes y hallándolos en buena y debida forma, han convenido lo que sigue:

Artículo 1

Las Altas Partes contratantes darán a sus fuerzas armadas de tierra instrucciones de acuerdo con el Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anejo al presente Convenio.

Artículo 2

Las disposiciones contenidas en el Reglamento que se cita en el artículo 1, sólo serán obligatorias para las Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o más de ellas.

Estas disposiciones dejarán de ser obligatorias desde el momento en que en una guerra entre Potencias contratantes otra no contratante se uniera a uno de los beligerantes.

...

Anexo de la Convención

REGLAMENTO CONCERNIENTE A LAS LEYES Y COSTUMBRES DE LA GUERRA TERRESTRE

...

SECCION II. DE LAS HOSTILIDADES

CAPITULO PRIMERO. De los medios de dañar al enemigo, de los sitios y de los bombardeos.

Artículo 22

Los beligerantes no tienen un derecho ilimitado en cuanto a la elección de medios para dañar al enemigo.

Artículo 23

Además de las prohibiciones establecidas por convenios especiales queda particularmente prohibido:

- a) Emplear veneno o armas envenenadas;
- b) Matar o herir a traición a individuos pertenecientes a la Nación o ejército enemigos;
- c) Matar o herir a un enemigo, que, habiendo depuesto las armas, o no teniendo ya medio de defenderse, se ha rendido a discreción;
- d) Declarar que no se dará cuartel;
- e) Emplear armas, proyectiles o materiales destinados a causar males superfluos /propres à causer des maux superflus, en el texto auténtico en francés;
- f) Usar indebidamente la bandera de parlamento, la bandera nacional o las insignias militares y el uniforme del enemigo, así como los signos distintivos del Convenio de Ginebra;
- g) Destruir o apoderarse de las propiedades enemigas, excepto los casos en que estas destrucciones o apropiaciones sean imperiosamente reclamadas por las necesidades de la guerra.

Artículo 24

Las estratagemas de guerra y el empleo de los medios necesarios para procurarse informes del enemigo y del terreno se consideran lícitos.

Artículo 25

Queda prohibido atacar o bombardear ciudades, pueblos, casas o edificios que no están defendidos.

Artículo 26

El jefe de las tropas asaltantes, antes de empezar el bombardeo, y excepción hecha del caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer cuanto de él dependa para advertir de ello a las Autoridades.

Artículo 27

En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medidas necesarias para respetar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen dichos edificios con un fin militar.

El deber de los sitiados es señalar estos edificios o sitios de reunión con signos visibles y especiales, que serán notificados de antemano al sitiador.

Artículo 28

Se prohíbe entregar al pillaje una población o localidad aunque sea tomada por asalto.

...

- c) Convención (IV) concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. Firmada en La Haya el 18 de octubre de 1907 9/

/En muchos casos, esta Convención contiene disposiciones idénticas a las incluidas en la Convención de La Haya de 1899 (II), que se reproduce parcialmente supra. Para fines de comparación, en los textos que figuran infra se subrayan las disposiciones incluidas en la Convención de 1907 pero que no aparecen en la Convención de 1899/

"... /Las Altas Partes Contratantes/

Considerando que, mientras se buscan los medios para asegurar la paz y prevenir los conflictos armados entre las naciones, es igualmente importante preocuparse del caso en que la llamada a las armas fuere motivada por acontecimientos que su solicitud no hubiere podido evitar;

Animados del deseo de servir, aun en esta hipótesis extrema, los intereses de la humanidad y las exigencias siempre progresivas de la civilización;

Estimando que es importante, con este objeto, revisar las leyes y costumbres generales de la guerra, sea con el fin de definirlas con mayor precisión, o para trazar ciertos límites destinados a restringir, en cuanto sea posible, sus rigores;

9/ De Martens, Nouveau Recueil général de Traites, 3ème série, t. 3, pág. 461. /texto francés auténtico/. Traducción al español: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, op. cit., pág. 100.

Han juzgado necesario completar y precisar en ciertos puntos, la obra de la Primera Conferencia de la Paz, que, inspirándose, a continuación de la Conferencia de 1874 10/ en aquellas ideas recomendadas por una previsión sabia y generosa, adoptó disposiciones que tienen por objeto, definir y arreglar los usos de la guerra terrestre.

Según las miras de las Altas Partes contratantes, esas disposiciones, cuya redacción ha sido inspirada por el deseo de aminorar los males de la guerra, tanto como las necesidades militares lo permitan, están destinadas a servir de regla general de conducta a los beligerantes, en las relaciones entre ellos y los pueblos.

Sin embargo no ha sido posible concertar desde ahora estipulaciones extensibles a todas las circunstancias que puedan presentarse en la práctica.

Por otra parte, no podría entrar en las intenciones de las Altas Partes contratantes, que los casos no previstos, por falta de estipulación escrita, fuesen dejados a la apreciación arbitraria de los que dirigen las fuerzas.

Esperando que un Código más completo pueda ser redactado, en lo que concierne a sus leyes, las Altas Partes contratantes juzgan oportuno hacer constar que, en los casos no comprendidos en las disposiciones reglamentarias adoptadas por ellas, los pueblos y los beligerantes queden bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes, como resulta de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de la humanidad y de las exigencias de las conciencias públicas.

Declaran que en este sentido deben principalmente, entenderse los artículos 1 y 2 del Reglamento adoptado.

Las Altas Partes contratantes, deseando concluir una nueva Convención a este efecto, han nombrado a sus Plenipotenciarios:

...

Los cuales, después de haber depositado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Las Potencias contratantes darán a sus ejércitos de tierra instrucciones que estarán de acuerdo con el reglamento concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo a la presente Convención.

10/ Véase la nota de pie de página 8 de este capítulo.

Artículo 2

Las disposiciones contenidas en el Reglamento, mencionado en el artículo 1 así como en la presente Convención, no son aplicables más que entre las Potencias contratantes y solamente si los beligerantes forman parte de la Convención.

Artículo 3

La parte beligerante que viole las disposiciones de dicho Reglamento será condenada, si hubiere lugar, a pagar una indemnización. Será responsable de todos los actos cometidos por las personas que formen parte de su ejército.

Artículo 4

La presente Convención, debidamente ratificada, reemplazará, en las relaciones entre las Potencias contratantes, a la Convención de 29 de julio de 1899, concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre.

La Convención de 1899 quedará en vigor para las Potencias que la hayan firmado y que no hayan ratificado la presente Convención.

...

Anexo de la Convención

REGLAMENTO CONCERNIENTE A LAS LEYES Y COSTUMBRES
DE LA GUERRA TERRESTRE

...

SECCION II. DE LAS HOSTILIDADES

Capítulo Primero. De los medios de perjudicar al enemigo, de los sitios y bombardeos.

Artículo 22

Los beligerantes no gozan del derecho ilimitado de elegir los medios de perjudicar al enemigo.

Artículo 23

Además de las prohibiciones establecidas por convenios especiales, queda terminantemente prohibido:

a) Emplear veneno o armas envenenadas;

b) Matar o herir a traición a individuos que pertenezcan a la nación o ejército enemigos;

/...

c) Matar o herir a un enemigo que, habiendo depuesto las armas o careciendo ya de medios de defensa, se haya rendido a discreción;

d) Declarar que no se dará cuartel;

e) Emplear armas, proyectiles o materias que causen daños superfluos /propres à causer des maux superflus, en el texto auténtico en francés/;

f) Usar indebidamente del pabellón parlamentario, del nacional o de las insignias militares y del uniforme del enemigo, así como de los signos distintivos de la Convención de Ginebra;

g) Destruir o detentar propiedades enemigas, salvo los casos en que esas destrucciones o detentaciones fuesen imperiosamente exigidas por las necesidades de la guerra;

h) Declarar extinguidos, suspensos o inadmisibles en justicia, los derechos y acciones de los nacionales de la Parte adversa.

Está igualmente prohibido a un beligerante obligar a los nacionales de la Parte adversa o tomar participación en las operaciones de guerra dirigidas contra su país, aun en el caso de que hubieren estado antes de principiar la guerra a su servicio.

Artículo 24

Los ardides de la guerra y el empleo de los medios necesarios para procurarse informes sobre el enemigo y sobre el terreno, se considerarán lícitos.

Artículo 25

Está prohibido atacar o bombardear, de cualquier modo, ciudades, aldeas, habitaciones, o edificios que no estén defendidos.

Artículo 26

El comandante de las tropas asaltantes, antes de emprender el bombardeo, y salvo el caso de ataque a viva fuerza, deberá hacer todo lo que de él dependa para dar el correspondiente aviso a las autoridades.

Artículo 27

Durante los sitios y bombardeos se deben tomar todas las medidas necesarias para respetar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia; los monumentos históricos, los hospitales y los lugares en donde se hallen reunidos los heridos y enfermos, salvo el caso en que dichos edificios estén destinados al mismo tiempo a algún objeto militar.

Los sitiados tienen la obligación de designar esos edificios o lugares de concentración con señales visibles especiales, que de antemano se notificarán al sitiador.

Artículo 28

Queda prohibido el saqueo, aun en las ciudades o localidades tomadas por asalto.

...

/...

PARTE II. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES RELATIVAS A ARMAS ESPECIFICAS

SECCION 1. VENENO Y ARMAS ENVENENADAS^{11/}

8. En el inciso a) del artículo 23 del reglamento que figura como anexo a las Convenciones de La Haya de 1899 (II) y 1907 (IV) se estipula que, además de las prohibiciones establecidas por convenios especiales, queda terminantemente prohibido ... "emplear veneno o armas envenenadas" ^{12/}.

9. El 7 de febrero de 1923, se firmó en Washington la Convención de los Estados Centroamericanos sobre limitación de armamentos. El artículo V de dicha Convención estipula que: "Las partes contratantes reconocen que el uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o materias similares, lo mismo que de líquidos, materias o elementos análogos, es contrario a todo principio humanitario y al derecho internacional y se obligan por la presente Convención a no usar en tiempo de guerra los referidos elementos" ^{13/}.

SECCION 2. ARMAS QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS

10. En la Conferencia Internacional de la Paz de La Haya, celebrada en 1899, el 29 de junio de ese año se suscribió la siguiente declaración (IV,2) relativa a los gases asfixiantes:

"Los abajo firmados, plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, debidamente autorizados a este efecto por sus Gobiernos, inspirándose en los sentimientos expresados en la Declaración de San Petersburgo de 29 de noviembre (11 de diciembre) de 1868,

Declaran:

Las Potencias contratantes se prohíben el empleo de proyectiles que tengan por único objeto el esparcir gases asfixiantes o deletéreos.

^{11/} Se puede considerar que esta sección está relacionada con la siguiente, relativa a las armas químicas y bacteriológicas. En dicha sección siguiente se incluirán las disposiciones convencionales relativas a los agentes químicos de guerra, vale decir las sustancias químicas, ya sea en forma gaseosa, líquida o sólida, que podrían emplearse por sus efectos tóxicos.

^{12/} Véase el apéndice de la Parte I supra.

^{13/} Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos (Washington, U.S. Government Printing Office, 1923), pág. 339 /texto español auténtico y traducción al inglés/;

La presente Declaración sólo es obligatoria para las Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o más de ellas.

Dejará de ser obligatoria desde el instante en que en una guerra entre Potencias contratantes una Potencia no contratante se una a alguno de los beligerantes."

...^{14/}

11. El 6 de febrero de 1922, en la Conferencia de Washington sobre Limitación de Armamentos, celebrada ese año, se firmó un tratado relativo al uso de submarinos y gases nocivos en la guerra que nunca entró en vigor. El artículo 5 de dicho tratado estipulaba lo siguiente:

"Considerando que el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos, ha sido condenado justamente por la opinión general del mundo civilizado y que la prohibición de tal empleo ha sido formulada en tratados en que es parte la mayoría de las Potencias civilizadas del mundo,

"Las Potencias signatarias, a fin de que esta prohibición sea aceptada universalmente como parte del derecho internacional, que se impone por igual a la conciencia y a la práctica de las naciones, declaran que aceptan esta prohibición, convienen en considerarse obligadas entre ellas e invitan a todas las naciones civilizadas a que se adhieran a ella." ^{15/}

12. El 7 de febrero de 1923, se firmó en Washington la Convención de los Estados Centroamericanos sobre limitación de armamentos. El artículo 5 de esta Convención estipula que: "las Partes Contratantes reconocen que el uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o materias similares, lo mismo que de líquidos, materias o elementos análogos, es contrario a todo principio humanitario y al derecho internacional y se obligan por la presente Convención a no usar en tiempo de guerra los referidos elementos" ^{16/}.

13. El Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos, fue firmado

^{14/} De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 2ème série, t. 26, pág. 998 [texto francés auténtico]. Traducción al español: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, op. cit., pág. 225.

^{15/} Conference on the Limitation of Armaments (Washington, U.S. Gov't Printing Office, 1922), pág. 1605.

^{16/} Conferencia sobre Asuntos Centroamericanos (Washington, U.S. Government Printing Office, 1923), pág. 339 [texto español auténtico y traducción al inglés].

en Ginebra el 17 de junio de 1925 y entró en vigor el 8 de febrero de 1928. Este Protocolo dice lo siguiente:

"LOS PLENIPOTENCIARIOS QUE SUSCRIBEN, en nombre de sus respectivos Gobiernos:

Considerando que el empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos, ha sido condenado justamente por la opinión general del mundo civilizado;

Considerando que la prohibición de tal empleo ha sido formulada en Tratados en que es Parte la mayoría de las Potencias del mundo; y

A fin de que esta prohibición sea aceptada universalmente como parte del Derecho Internacional, que se impone por igual a la conciencia y a la práctica de las naciones;

DECLARAN:

Que las Altas Partes Contratantes, en tanto que no sean ya Partes en tratados que prohíban tal empleo, aceptan esta prohibición, acuerdan extender tal prohibición al empleo de métodos de guerra bacteriológicos y convienen en considerarse obligadas entre ellas en los términos de la presente Declaración.

Las Altas Partes Contratantes harán todos los esfuerzos por conseguir que otros Estados se adhieran al presente Protocolo. Esa adhesión será notificada al Gobierno de la República Francesa y por éste a todas las Potencias que sean signatarias del Protocolo o se hayan adherido a él, y tendrá efecto en la fecha de la notificación hecha por el Gobierno de la República Francesa.

El presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente auténticos, será ratificado a la brevedad posible. Llevará la fecha de este día.

Las ratificaciones del presente Protocolo se dirigirán al Gobierno de la República Francesa, que inmediatamente comunicará el depósito de dichas ratificaciones a cada una de las Potencias signatarias o adheridas.

Los instrumentos de ratificación del presente Protocolo o de adhesión al mismo quedarán depositados en los archivos del Gobierno de la República Francesa.

El presente Protocolo entrará en vigor, para cada Potencia signataria, a partir de la fecha del depósito de su ratificación, y desde ese momento la Potencia estará obligada para con las otras Potencias que hayan depositado ya sus ratificaciones.

En fe de lo cual los Plenipotenciarios han firmado el presente Protocolo.

Hecho en Ginebra, en un solo ejemplar, el diecisiete de junio de mil novecientos veinticinco." 17/

14. El 10 de abril de 1972 se firmó en Londres, Moscú y Washington un tratado titulado "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción". El tratado, que aún no ha entrado en vigor, dice lo siguiente:

"Los Estados Partes en la presente Convención,

Resueltos a actuar con miras a lograr progresos efectivos hacia un desarme general y completo que incluya la prohibición y la eliminación de todos los tipos de armas de destrucción en masa, y convencidos de que la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y su eliminación, con medidas eficaces, han de facilitar el logro de un desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional,

Reconociendo la gran importancia del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, así como el papel que ese Protocolo ha desempeñado y sigue desempeñando para mitigar los horrores de la guerra,

Reafirmando su adhesión a los principios y objetivos de ese Protocolo e instando a todos los Estados a observarlos estrictamente,

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado, en varias ocasiones, todos los actos contrarios a los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925,

Deseando contribuir a reforzar la confianza entre las naciones y a mejorar en general la atmósfera internacional,

Deseando asimismo contribuir a la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Convencidos de la importancia y urgencia de eliminar de los arsenales de los Estados, con medidas eficaces, armas de destrucción en masa tan peligrosas como las que emplean agentes químicos o bacteriológicos (biológicos),

Reconociendo que un acuerdo sobre la prohibición de las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas representa un primer paso posible hacia el logro de un acuerdo sobre medidas eficaces para prohibir asimismo el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas, y decididos a continuar las negociaciones con ese fin,

Resueltos en bien de toda la humanidad, a excluir completamente la posibilidad de que los agentes bacteriológicos (biológicos) y las toxinas se utilicen como armas,

Convencidos de que el empleo de esos métodos repugnaría a la conciencia de la humanidad y de que no ha de escatimarse ningún esfuerzo para conjurar ese peligro,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no desarrollar, producir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia:

1. Agentes microbianos u otros agentes biológicos, o toxinas sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos;

2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados.

Artículo II

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a destruir o a desviar hacia fines pacíficos lo antes posible, y, en todo caso, dentro de un plazo de nueve meses contado a partir de la entrada en vigor de la Convención, todos los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la Convención que estén en su poder o bajo su jurisdicción o control. Al aplicar lo dispuesto en el presente artículo deberán adoptarse todas las medidas de precaución necesarias para proteger a las poblaciones y el medio.

Artículo III

Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no traspasar a nadie, sea directa o indirectamente, ninguno de los agentes, toxinas, armas, equipos o vectores especificados en el artículo I de la Convención, y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos de otra manera.

Artículo IV

Cada Estado Parte en la presente Convención adoptará, en conformidad con sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la retención de los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la Convención en el territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar.

Artículo V

Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan en relación con el objetivo de la Convención o en la aplicación de sus disposiciones. Las consultas y la cooperación previstas en este artículo también podrán realizarse mediante procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta.

Artículo VI

1) Todo Estado Parte en la presente Convención que advierta que cualquier otro Estado Parte obra en violación de las obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas las pruebas posibles que la sustenten, así como de una solicitud para que la examine el Consejo de Seguridad.

2) Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a cooperar en toda investigación que emprenda el Consejo de Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia de la denuncia recibida por éste. El Consejo de Seguridad informará a los Estados Partes en la Convención acerca de los resultados de la investigación.

Artículo VII

Cada Estado Parte de la presente Convención se compromete a prestar asistencia o a secundarla, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a cualquier Parte de la Convención que la solicite, si el Consejo de Seguridad decide que esa Parte ha quedado expuesta a un peligro de resultados de una violación de la Convención.

Artículo VIII

Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de forma que en modo alguno limite las obligaciones contraídas por cualquier Estado en virtud del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, o les reste fuerza.

Artículo IX

Cada Estado Parte en la presente Convención afirma el objetivo reconocido de una prohibición efectiva de las armas químicas y, a tal fin, se compromete a proseguir negociaciones de buena fe con miras a llegar a un pronto acuerdo sobre medidas eficaces encaminadas a la prohibición de su desarrollo, producción y almacenamiento y a su destrucción, así como sobre las medidas oportunas en lo que respecta a los equipos y vectores destinados especialmente a la producción o al empleo de agentes químicos a fines de armamento.

/...

Artículo X

1) Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e información científica y tecnológica para la utilización con fines pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, y tienen el derecho de participar en este intercambio. Las Partes en la Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán asimismo cooperar para contribuir, por sí solas o junto con otros Estados u organizaciones internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de los descubrimientos científicos en la esfera de la bacteriología (biología) para la prevención de las enfermedades u otros fines pacíficos.

2) La presente Convención se aplicará de manera que no ponga obstáculos al desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes en la Convención o a la cooperación internacional en la esfera de las actividades bacteriológicas (biológicas) pacíficas, incluido el intercambio internacional de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas y de equipo de elaboración, empleo o producción de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones de la Convención.

Artículo XI

Cualquier Estado Parte en la presente Convención podrá proponer enmiendas a la misma. Esas enmiendas entrarán en vigor para cada Estado Parte que las acepte al ser aceptadas por una mayoría de los Estados Partes en la Convención y ulteriormente, para cualquier otro Estado Parte, en la fecha en que acepte esas enmiendas.

Artículo XII

Al cabo de cinco años de la entrada en vigor de la presente Convención, o antes de que transcurra ese plazo si así lo solicitan la mayoría de las Partes en la Convención y presentan a tal efecto una propuesta a los Gobiernos depositarios, se celebrará en Ginebra (Suiza) una conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin de examinar la aplicación de la Convención para asegurarse de que se están cumpliendo los fines del preámbulo y las disposiciones de la Convención, incluidas las relativas a las negociaciones sobre las armas químicas. En ese examen se tendrán en cuenta todas las nuevas realizaciones científicas y tecnológicas que tengan relación con la Convención.

Artículo XIII

1) La presente Convención tendrá una duración indefinida.

2) Cada Estado Parte en la presente Convención tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse de la Convención si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de la Convención, han comprometido los intereses supremos de su país. De ese retiro deberá notificar a todos los demás Estados Partes en la Convención y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que esa Parte considere que han comprometido sus intereses supremos.

Artículo XIV

1) La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. El Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor de conformidad con el párrafo 3 de este artículo podrá adherirse a ella en cualquier momento.

2) La presente Convención estará sujeta a ratificación por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en poder de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por la presente se designan como Gobiernos depositarios.

3) La presente Convención entrará en vigor una vez que hayan depositado sus instrumentos de ratificación veintidós gobiernos, incluidos los gobiernos que por la Convención quedan designados Gobiernos depositarios.

4) Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de la presente Convención, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación o de adhesión.

5) Los Gobiernos depositarios informarán sin tardanza a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido a la presente Convención de la fecha de cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión a la Convención y de la fecha de su entrada en vigor, así como de cualquier otra notificación.

6) La presente Convención será registrada por los Gobiernos depositarios de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

Artículo XV

La presente Convención, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en los archivos de los Gobiernos depositarios. Los Gobiernos depositarios remitirán copias debidamente certificadas de la Convención a los gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se adhieran a la Convención.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención.

HECHA en tres ejemplares, en Londres, Moscú y Washington, el diez de abril de mil novecientos setenta y dos." 18/

15. El Artículo 171 del Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919, estipula, entre otras cosas, que "Estando vedado el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como los líquidos, materias o procedimientos análogos, queda rigurosamente prohibida en Alemania su fabricación o importación ..." 19/.

16. Se puede encontrar una redacción similar con respecto a Austria, Bulgaria y Hungría, en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye 20/, firmado el 10 de septiembre de 1919, en el Tratado de Neuilly-sur-Seine 21/, firmado el 27 de noviembre de 1919 y en el Tratado del Trianón 22/, firmado el 4 de junio de 1922, respectivamente. No obstante, en estos tres últimos tratados se agregan los "lanzallamas" a la lista de objetos cuyo empleo está vedado, razón por la que "queda rigurosamente prohibida su fabricación e importación ...".

17. El Protocolo III (y anexos) relativo al control de los armamentos, que forma parte integrante del Protocolo que modifica y completa el Tratado de Bruselas de 1948, que regula la colaboración en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva, fue firmado en París el 23 de octubre de 1954. Entre otras cosas, este Protocolo dice:

18/ Véase la resolución 2826 (XXVI) de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 1971 y Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1971, pág. 118.

19/ De Martes, Nouveau Recueil général de Traités, 3ème série, t. 11, pág. 450.

20/ British and Foreign State Papers, vol. 112, pág. 371. (artículo 135).

21/ Ibid., vol. 112, pág. 801 (artículo 82).

22/ Ibid., vol. 113, pág. 527 (artículo 119).

"Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República Francesa, Presidente de la Unión Francesa, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República de Italia, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Su majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commonwealth, signatarios del Protocolo 23/ que modifica y completa el Tratado de Bruselas /Tratado que regula la colaboración en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 24/

...

Han convenido lo siguiente:

PARTE I - Armamentos que no han de fabricarse

Artículo 1

Las Altas Partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, toman nota y dejan constancia de su acuerdo con la Declaración del Canciller de la República Federal de Alemania (hecha en Londres el 3 de octubre de 1954 y que se adjunta como anexo I al presente Protocolo) en la que la República Federal de Alemania se comprometió a no fabricar en su territorio armas atómicas, biológicas o químicas. Los tipos de armamentos a que se hace referencia en este Artículo se definen en el Anexo II. El Consejo de la Unión Europea Occidental definirá con mayor precisión estos armamentos y actualizará las definiciones.

...

Anexo I

El Canciller Federal declara:

que la República Federal se compromete a no fabricar en su territorio ninguna de las armas atómicas, químicas o biológicas que se enumeran en los párrafos I, II y III de la lista adjunta /véase el anexo II infra/,

...

que la República Federal conviene en que la autoridad competente de la Organización del Tratado de Bruselas supervise el cumplimiento de estas obligaciones.

23/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 211, pág. 342.

24/ Ibid., vol. 19, pág. 51.

Anexo II

Esta lista abarca las armas que se definen en los párrafos I a III y las fábricas que se dedican exclusivamente a su producción. Quedan excluidos de esta definición todos los aparatos, piezas, equipos, instalaciones, sustancias y organismos que se usen para fines civiles o para la investigación científica, médica e industrial en el ámbito de la ciencia pura y aplicada.

...

II. Armas químicas

a) Se entiende por arma química todo equipo o aparato destinado expresamente a aprovechar, para fines militares, las propiedades asfixiantes, tóxicas, irritantes, paralizantes, inhibidoras del crecimiento, antilubrificantes o catalizadoras de cualquier sustancia química.

b) Con sujeción a las disposiciones del párrafo c), se considerarán incluidas en esta definición las sustancias químicas que tengan dichas propiedades y puedan ser utilizadas en los equipos o aparatos a que se hace referencia en el párrafo a).

c) No se considerarán incluidos en esta definición los aparatos y las cantidades de sustancias químicas a que se hace referencia en los párrafos a) y b) que no excedan de las necesidades civiles en tiempos de paz.

III. Armas biológicas

a) Se entiende por arma biológica todo equipo o aparato expresamente destinado a utilizar, con fines militares, insectos nocivos u otros organismos vivos o muertos, o sus productos tóxicos.

b) Con sujeción a las disposiciones del párrafo c), se considerarán incluidos en esta definición los insectos, los organismos y sus productos tóxicos de naturaleza tal y en cantidades suficientes como para que puedan ser utilizados en los equipos o aparatos a que se hace referencia en el párrafo a).

c) No se considerarán incluidos en la definición de armas biológicas los equipos o aparatos, o las cantidades de insectos, organismos o sus productos tóxicos a que se hace referencia en los párrafos a) y b), que no excedan de las necesidades civiles en tiempos de paz."

...^{25/}

^{25/} Ibid., vol. 211, pág. 364.

18. El artículo 13 del Tratado de restablecimiento de una Austria independiente y democrática, firmado en Viena el 15 de mayo de 1955, estipula, entre otras cosas, que "Austria no poseerá, construirá ni hará experimentos con ... j) materiales asfixiantes, vesicantes o tóxicos ni con sustancias biológicas, en cantidades mayores o en tipos distintos de los necesarios para fines civiles legítimos, ni con cualquier otro aparato destinado a producir, proyectar o esparcir dichos materiales o sustancias con fines bélicos". 26/

SECCION 3. PROYECTILES DE DIVERSOS TIPOS^{27/}

19. La Declaración de La Haya (IV,3) relativa a las balas expansivas (balas "dum-dum") fue firmada el 29 de julio de 1899 en La Haya y, entre otras cosas, incluye las siguientes disposiciones:

"Los infrascritos, plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia Internacional de Paz en La Haya, debidamente autorizados a estos efectos por sus Gobiernos, inspirándose en los sentimientos expresados en la Declaración de San Petersburgo de 29 de noviembre (11 de diciembre) de 1868,

Declaran:

Las Partes contratantes convienen en abstenerse de emplear balas que se expandan o aplasten con facilidad en el cuerpo humano, tales como las balas con una cápsula dura que no cubra íntegramente el núcleo o en la que se hayan hecho incisiones.

La presente Declaración no es obligatoria más que para las Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o más de ellas.

Dejará de ser obligatoria desde el instante en que en una guerra entre las Potencias contratantes, una Potencia no contratante se una a alguno de los beligerantes.

...^{28/}

^{26/} Ibid., vol.217, pág. 223.

^{27/} En la sección 4 infra de esta Parte, titulada "Armas incendiarias", se incluye la Declaración de San Petersburgo de 1868 relativa a los proyectiles de peso inferior a 400 gramos que sean explosivos, o que estén cargados con materias explosivas o inflamables. En la sección 2 supra, titulada "Armas químicas y bacteriológicas", se incluye la Declaración de La Haya de 1899 (IV,2) relativa a los proyectiles que tengan por único objeto el esparcir gases asfixiantes o deletéreos. En la sección 6 infra, titulada "Globos", se incluyen las Declaraciones de La Haya de 1899 (IV,1) y 1907 (XIV) relativas al lanzamiento de proyectiles y explosivos desde los globos. Recientemente se ha expresado preocupación en cuanto a la necesidad de regular el empleo de armas de pequeño calibre y alta velocidad y el de ojivas de fragmentación. Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, Weapons that may cause unnecessary suffering or have indiscriminate effects, op. cit., capítulos III y IV.

^{28/} De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 2ème série, t. 26, pág. 1002.

SECCION 4. ARMAS INCENDIARIAS^{29/}

20. En la Declaración de San Petersburgo de 1868 figuran, entre otras, las siguientes disposiciones:

"Las Partes contratantes se comprometen recíprocamente a renunciar, en caso de guerra entre ellas, al empleo por sus fuerzas militares o navales de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o esté cargado con materias explosivas o inflamables.

Las Partes contratantes convienen en invitar a todos los Estados que no hayan participado, mediante el envío de delegados, en las deliberaciones de la Comisión Militar Internacional, reunida en San Petersburgo, a que se adhieran a este compromiso.

La presente Declaración no es obligatoria más que para las Partes contratantes o adherentes en caso de guerra entre dos o más de ellas; no es aplicable respecto de las Potencias no contratantes o que no se hayan adherido a ella.

Dejará de ser obligatoria también desde el instante en que en una guerra entre Partes contratantes o adherentes, una Parte no contratante o no adherente se una a alguno de los beligerantes."

..."^{30/}

21. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye, firmado el 10 de septiembre de 1919, estipula en su artículo 135 que, "Estando vedado el empleo de lanzallamas, gases asfixiantes, tóxicos o similares, así como el de líquidos, materias o dispositivos análogos, quedará rigurosamente prohibida en Austria su fabricación o importación ..." ^{31/}. Disposiciones análogas aparecen, con respecto a Bulgaria y Hungría, en el Tratado de Neuilly-sur-Seine ^{32/}, de 27 de noviembre de 1919 y en el Tratado del Trianón ^{33/} de 4 de junio de 1920 respectivamente.

^{29/} En la Sección 6, *infra*, de esta Parte, titulada "Globos", se reproducen las Declaraciones de La Haya de 1899 (IV,1) y de 1907 (XIV), ambas relativas al lanzamiento de proyectiles y explosivos desde globos.

^{30/} Véase el Apéndice de la parte I de este capítulo, *supra*..

^{31/} *British and Foreign State Papers*, vol. 112, págs. 317 y 371.

^{32/} *Ibid.*, vol. 112, pág. 801 (artículo 82).

^{33/} *Ibid.*, vol. 113, pág. 527, (artículo 119).

SECCION 5. ARMAS NUCLEARES

22. El 5 de agosto de 1963 se firmó en Moscú el "Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua". En este Tratado se incluyen las siguientes disposiciones:

"Los Gobiernos de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que en adelante se denominarán "Partes Originarias",

Proclamando como su finalidad principal la de alcanzar lo antes posible un acuerdo de desarme general y completo bajo estricto control internacional de conformidad con los objetivos de las Naciones Unidas, que ponga término a la carrera de armamentos y que elimine el incentivo para la producción y el ensayo de toda clase de armas, incluidas las armas nucleares,

Procurando alcanzar la suspensión permanente de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares, determinados a proseguir las negociaciones con este fin, y deseando poner término a la contaminación del ambiente por las sustancias radiactivas,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

1. Cada una de las Partes en este Tratado se compromete a prohibir, a prevenir, y a no llevar a cabo cualquier explosión de ensayo de armas nucleares, o cualquier otra explosión nuclear en cualquier lugar que se halle bajo su jurisdicción o autoridad:

a) en la atmósfera, más allá de sus límites, incluido el espacio ultraterrestre, o debajo del agua, incluidas las aguas territoriales o la alta mar; o

b) en cualquier otro medio si tal explosión causa la presencia de desechos radiactivos fuera del límite territorial del Estado bajo cuya jurisdicción o soberanía se efectúa tal explosión. Queda entendido a este respecto que las disposiciones de este apartado no prejuzgan la celebración de un tratado del cual resulte la prohibición permanente de todas las explosiones nucleares de ensayo, incluidas todas las explosiones subterráneas, y cuya celebración las Partes procuran alcanzar, como lo manifiestan en el Preámbulo a este Tratado.

2. Cada una de las Partes en este Tratado se compromete además a abstenerse de causar o alentar el que se efectúen explosiones de ensayo de armas nucleares, o cualquier otra explosión nuclear o de participar en modo alguno en tales explosiones, cualquiera que sea el lugar en que se efectúen en cualesquiera de los medios indicados, o que tengan el efecto a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.

...

/...

Artículo IV

Este Tratado tendrá duración ilimitada.

Cada una de las Partes tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado si decide que sucesos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de este Tratado, han perjudicado los intereses supremos de su país. De esa retirada deberá notificar a todas las demás Partes en el Tratado con una antelación de tres meses.

...^{34/}

23. El 27 de enero de 1967, se abrió a la firma en Moscú, Londres y Washington el Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes. Este Tratado incluye las siguientes disposiciones:

"Los Estados Partes en este Tratado,

Inspirándose en las grandes perspectivas que se ofrecen a la humanidad como consecuencia de la entrada del hombre en el espacio ultraterrestre,

Reconociendo el interés general de toda la humanidad en el progreso de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,

Estimando que la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre se debe efectuar en bien de todos los pueblos, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico,

Deseando contribuir a una amplia cooperación internacional en lo que se refiere a los aspectos científicos y jurídicos de la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos,

Estimando que tal cooperación contribuirá al desarrollo de la comprensión mutua y al afianzamiento de las relaciones amistosas entre los Estados y los pueblos,

Recordando la resolución 1962 (XVIII), titulada "Declaración de los principios jurídicos que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre", que fue aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 1963,

Recordando la resolución 1884 (XVIII), en que se insta a los Estados a no poner en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares u otras clases de armas de destrucción en masa, ni a emplazar tales armas en los cuerpos celestes, que fue aprobada unánimemente por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de octubre de 1963,

^{34/} Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 480, pág. 43.

Tomando nota de la resolución 110 (II), aprobada por la Asamblea General el 3 de noviembre de 1947, que condena la propaganda destinada a provocar o alentar, o susceptible de provocar o alentar cualquier amenaza a la paz, quebrantamiento de la paz o acto de agresión, y considerando que dicha resolución es aplicable al espacio ultraterrestre,

Convencidos de que un Tratado sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, promoverá los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo I

La exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, deberán hacerse en provecho y en interés de todos los países, sea cual fuere su grado de desarrollo económico y científico, e incumben a toda la humanidad.

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estará abierto para su exploración y utilización a todos los Estados sin discriminación alguna en condiciones de igualdad y en conformidad con el derecho internacional, y habrá libertad de acceso a todas las regiones de los cuerpos celestes.

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, estarán abiertos a la investigación científica, y los Estados facilitarán y fomentarán la cooperación internacional en dichas investigaciones.

Artículo II

El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera.

Artículo III

Los Estados Partes en el Tratado deberán realizar sus actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, de conformidad con el derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas, en interés del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales y del fomento de la cooperación y la comprensión internacionales.

Artículo IV

Los Estados Partes en el Tratado se comprometen a no colocar en órbita alrededor de la Tierra ningún objeto portador de armas nucleares ni de ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, a no emplazar tales armas en los cuerpos celestes y a no colocar tales armas en el espacio ultraterrestre en ninguna otra forma.

La Luna y los demás cuerpos celestes se utilizarán exclusivamente con fines pacíficos por todos los Estados Partes en el Tratado. Queda prohibido establecer en los cuerpos celestes bases, instalaciones y fortificaciones militares, efectuar ensayos con cualquier tipo de armas y realizar maniobras militares. No se prohíbe la utilización de personal militar para investigaciones científicas ni para cualquier otro objetivo pacífico. Tampoco se prohíbe la utilización de cualquier equipo o medios necesarios para la exploración de la Luna y de otros cuerpos celestes con fines pacíficos.

...

Artículo IX

En la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, los Estados Partes en el Tratado deberán guiarse por el principio de la cooperación y la asistencia mutua, y en todas sus actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, deberán tener debidamente en cuenta los intereses correspondientes de los demás Estados Partes en el Tratado. Los Estados Partes en el Tratado harán los estudios e investigaciones del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, y procederán a su exploración de tal forma que no se produzca una contaminación nociva ni cambios desfavorables en el medio ambiente de la Tierra como consecuencia de la introducción en él de materias extraterrestres, y cuando sea necesario adoptarán las medidas pertinentes a tal efecto. Si un Estado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por él o por sus nacionales, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de otros Estados Partes en el Tratado en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, deberá celebrar las consultas internacionales oportunas antes de iniciar esa actividad o ese experimento. Si un Estado Parte en el Tratado tiene motivos para creer que una actividad o un experimento en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, proyectado por otro Estado Parte en el Tratado, crearía un obstáculo capaz de perjudicar las actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, incluso en la Luna y otros cuerpos celestes, podrá pedir que se celebren consultas sobre dicha actividad o experimento.

Artículo X

A fin de contribuir a la cooperación internacional en la exploración y la utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, conforme a los objetivos del presente Tratado, los Estados Partes en él examinarán, en condiciones de igualdad, las solicitudes formuladas por otros Estados Partes en el Tratado para que se les brinde la oportunidad a fin de observar el vuelo de los objetos espaciales lanzados por dichos Estados.

La naturaleza de tal oportunidad y las condiciones en que podría ser concedida se determinarán por acuerdo entre los Estados interesados.

Artículo XI

A fin de fomentar la cooperación internacional en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, los Estados Partes en el Tratado que desarrollan actividades en el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, convienen en informar, en la mayor medida posible dentro de lo viable y factible, al Secretario General de las Naciones Unidas, así como al público y a la comunidad científica internacional, acerca de la naturaleza, marcha, localización y resultados de dichas actividades. El Secretario General de las Naciones Unidas debe estar en condiciones de difundir eficazmente tal información, inmediatamente después de recibirla.

Artículo XII

Todas las estaciones, instalaciones, equipo y vehículos espaciales situados en la Luna y otros cuerpos celestes serán accesibles a los representantes de otros Estados Partes en el presente Tratado, sobre la base de reciprocidad. Dichos representantes notificarán con antelación razonable su intención de hacer una visita, a fin de permitir celebrar las consultas que procedan y adoptar un máximo de precauciones para velar por la seguridad y evitar toda perturbación del funcionamiento normal de la instalación visitada.

Artículo XIII

Las disposiciones del presente Tratado se aplicarán a las actividades de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, que realicen los Estados Partes en el Tratado, tanto en el caso de que esas actividades las lleve a cabo un Estado Parte en el Tratado por sí solo o junto con otros Estados, incluso cuando se efectúen dentro del marco de organizaciones intergubernamentales internacionales.

Los Estados Partes en el Tratado resolverán los problemas prácticos que puedan surgir en relación con las actividades que desarrollen las organizaciones intergubernamentales internacionales en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, con la organización internacional pertinente o con uno o varios Estados miembros de dicha organización internacional que sean Partes en el presente Tratado.

...^{35/}

^{35/} Ibid., vol. 610, pág. 228.

24. El 14 de febrero de 1967, se firmó en México, Distrito Federal, un tratado titulado "Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina". A continuación se citan las partes pertinentes de ese tratado:

"Preámbulo

En nombre de sus pueblos e interpretando fielmente sus anhelos y aspiraciones, los Gobiernos de los Estados signatarios del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina,

Deseosos de contribuir, en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente los nucleares, y a la consolidación de un mundo en paz, fundada en la igualdad soberana de los Estados, el respeto mutuo y la buena vecindad;

Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 808 (IX), aprobó unánimemente, como uno de los tres puntos de un programa coordinado de desarme, "la prohibición total del empleo y la fabricación de armas nucleares y de todos los tipos de armas de destrucción en masa";

Recordando que las zonas militarmente desnuclearizadas no constituyen un fin en sí mismas, sino un medio para alcanzar en una etapa ulterior el desarme general y completo;

Recordando la resolución 1911 (XVIII) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por la que se estableció que las medidas que convenga acordar para la desnuclearización de la América Latina deben tomarse "a la luz de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los acuerdos regionales";

Recordando la resolución 2028 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que establece el principio de un equilibrio aceptable de responsabilidades y obligaciones mutuas para las Potencias nucleares y las no nucleares, y

Recordando que la Carta de la Organización de los Estados Americanos establece como propósito esencial de la Organización afianzar la paz y la seguridad del hemisferio;

Persuadidos de que:

El incalculable poder destructor de las armas nucleares ha hecho imperativo que la proscripción jurídica de la guerra sea estrictamente observada en la práctica, si ha de asegurarse la supervivencia de la civilización y de la propia humanidad;

Las armas nucleares, cuyos terribles efectos alcanzan indistinta e ineludiblemente tanto a las fuerzas militares como a la población civil, constituyen, por la persistencia de la radiactividad que generan, un atentado a la integridad de la especie humana y aun pueden tornar finalmente toda la Tierra inhabitable;

/...

El desarme general y completo bajo control internacional eficaz es cuestión vital que reclaman por igual todos los pueblos del mundo;

La proliferación de las armas nucleares, que parece inevitable a menos que los Estados, en uso de sus derechos soberanos, se autolimiten para impedir la, dificultaría enormemente todo acuerdo de desarme y aumentaría el peligro de que llegue a producirse una conflagración nuclear;

El establecimiento de zonas militarmente desnuclearizadas está íntimamente vinculado al mantenimiento de la paz y la seguridad en las respectivas regiones;

La desnuclearización militar de vastas zonas geográficas, adoptada por la decisión soberana de los Estados en ellas comprendidos, habrá de ejercer benéfica influencia en favor de otras regiones, donde existan condiciones análogas;

La situación privilegiada de los Estados signatarios, cuyos territorios se encuentran totalmente libres de armas nucleares, les impone el deber ineludible de preservar tal situación, tanto en beneficio propio como en bien de la humanidad;

La existencia de armas nucleares en cualquier país de la América Latina lo convertiría en blanco de eventuales ataques nucleares y provocaría fatalmente en toda la región una ruinoso carrera de armamentos nucleares, que implicaría la injustificable desviación hacia fines bélicos de los limitados recursos necesarios para el desarrollo económico y social;

Las razones expuestas y la tradicional vocación pacifista de la América Latina determinar la necesidad ineludible de que la energía nuclear sea usada en esta región exclusivamente para fines pacíficos, y de que los países latinoamericanos utilicen su derecho al máximo y más equitativo acceso posible a esta nueva fuente de energía para acelerar el desarrollo económico y social de sus pueblos;

Convencidos, en conclusión, de que:

La desnuclearización militar de la América Latina - entendiendo por tal el compromiso internacionalmente contraído en el presente Tratado de mantener sus territorios libres para siempre de armas nucleares - constituirá una medida que evite a sus pueblos el derroche, en armamento nuclear, de sus limitados recursos y que los proteja contra eventuales ataques nucleares a sus territorios; una significativa contribución para impedir la proliferación de armas nucleares, y un valioso elemento en favor del desarme general y completo, y de que

La América Latina, fiel a su tradición universalista, no sólo debe esforzarse en proscribir de ella el flagelo de una guerra nuclear, sino también empeñarse en la lucha por el bienestar y progreso de sus pueblos, cooperando

/...

paralelamente a la realización de los ideales de la humanidad, o sea a la consolidación de una paz permanente fundada en la igualdad de derechos, la equidad económica y la justicia social para todos, de acuerdo con los Principios y Propósitos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, y en la Carta de la Organización de los Estados Americanos,

Han convenido en lo siguiente:

Obligaciones

Artículo 1

1. Las Partes Contratantes se comprometen a utilizar exclusivamente con fines pacíficos el material y las instalaciones nucleares sometidos a su jurisdicción, y a prohibir e impedir en sus respectivos territorios:
 - a) El ensayo, uso, fabricación, producción o adquisición, por cualquier medio, de toda arma nuclear, por sí mismas, directa o indirectamente por mandato de terceros o en cualquier otra forma, y
 - b) El recibo, almacenamiento, instalación, emplazamiento o cualquier forma de posesión de toda arma nuclear, directa o indirectamente, por sí mismas, por mandato a terceros o de cualquier otro modo.
2. Las Partes Contratantes se comprometen, asimismo, a abstenerse de realizar, fomentar o autorizar, directa o indirectamente, el ensayo, el uso, la fabricación, la producción, la posesión o el dominio de toda arma nuclear o de participar en ello de cualquier manera.

...

Definición de las armas nucleares

Artículo 5

Para los efectos del presente Tratado, se entiende por "arma nuclear" todo artefacto que sea susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada y que tenga un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos. El instrumento que pueda utilizarse para el transporte o la propulsión del artefacto no queda comprendido en esta definición si es separable del artefacto y no parte indivisible del mismo.

...

Sistema de Control

Artículo 12

1. Con el objeto de verificar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las Partes Contratantes según las disposiciones del artículo 1, se establece

/...

un Sistema de Control que se aplicará de acuerdo con lo estipulado en los artículos 13 a 18 del presente Tratado.

2. El Sistema de Control estará destinado a verificar especialmente.

- a) Que los artefactos, servicios e instalaciones destinados a usos pacíficos de la energía nuclear no sean utilizados en el ensayo y la fabricación de armas nucleares;
- b) Que no llegue a realizarse en el territorio de las Partes Contratantes ninguna de las actividades prohibidas en el artículo 1 del presente Tratado, con materiales o armas nucleares introducidos del exterior, y
- c) Que las explosiones con fines pacíficos sean compatibles con las disposiciones contenidas en el artículo 18 del presente Tratado.

...

Uso pacífico de la energía nuclear

Artículo 17

Ninguna de las disposiciones contenidas en el presente Tratado menoscaba los derechos de las Partes Contratantes para usar, en conformidad con este instrumento, la energía nuclear con fines pacíficos, de modo particular en su desarrollo económico y progreso social.

Explosiones con fines pacíficos

Artículo 18

1. Las Partes Contratantes podrán realizar explosiones de dispositivos nucleares con fines pacíficos - inclusive explosiones que presupongan artefactos similares a los empleados en el armamento nuclear - o prestar su colaboración a terceros para los mismos fines, siempre que no contravengan las disposiciones del presente artículo y las demás del Tratado, en especial las de los artículos 1 y 5.

2. Las Partes Contratantes que tengan la intención de llevar a cabo una de tales explosiones, o colaborar para ello, deberán notificar al Organismo y al Organismo Internacional de Energía Atómica, con la antelación que las circunstancias lo exijan, la fecha de la explosión y presentar simultáneamente las siguientes informaciones:

- a) El carácter del dispositivo nuclear y el origen del mismo;
- b) El sitio y la finalidad de la explosión en proyecto;

/...

- c) Los procedimientos que se seguirán para dar cumplimiento al párrafo 3 de este artículo;
- d) La potencia que se espera tenga el dispositivo, y
- e) Los datos más completos sobre la posible precipitación radiactiva que sea consecuencia de la explosión o explosiones, y las medidas que se tomarán para evitar riesgos a la población, flora, fauna y territorio de otra u otras Partes.

3. El Secretario General y el personal técnico designado por el Consejo, así como el del Organismo Internacional de Energía Atómica, podrán observar todos los preparativos, inclusive la explosión del dispositivo, y tendrán acceso irrestricto a toda área vecina del sitio de la explosión para asegurarse de que el dispositivo, así como los procedimientos seguidos en la explosión, se ajustan a la información presentada de acuerdo con el párrafo 2 de este artículo y a las disposiciones del presente Tratado.

4. Las Partes Contratantes podrán recibir la colaboración de terceros para el objeto señalado en el párrafo 1 de este artículo, de acuerdo con las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del mismo.

Relaciones con otros organismos internacionales

Artículo 19

1. El Organismo podrá concertar con el Organismo Internacional de Energía Atómica los acuerdos que autorice la Conferencia General y que considere apropiados para facilitar el eficaz funcionamiento del Sistema de Control establecido en el presente Tratado.

2. El Organismo podrá también entrar en relación con cualquier organización u organismo internacional, especialmente con los que lleguen a crearse en el futuro para supervisar el desarme o las medidas de control de armamentos en cualquier parte del mundo.

3. Las Partes Contratantes, cuando lo estimen conveniente, podrán solicitar el asesoramiento de la Comisión Interamericana de Energía Nuclear, en todas las cuestiones de carácter técnico relacionadas con la aplicación del presente Tratado, siempre que así lo permitan las facultades conferidas a dicha Comisión por su Estatuto.

Medidas en caso de violación del Tratado

Artículo 20

1. La Conferencia General tomará conocimiento de todos aquellos casos en que, a su juicio, cualquiera de las Partes Contratantes no esté cumpliendo

con las obligaciones derivadas del presente Tratado y llamará la atención de la Parte de que se trate, haciéndole las recomendaciones que juzgue adecuadas.

2. En caso de que, a su juicio, el incumplimiento en cuestión constituya una violación del presente Tratado que pudiera llegar a poner en peligro la paz y la seguridad, la propia Conferencia General informará sobre ello simultáneamente al Consejo de Seguridad y a la Asamblea General de las Naciones Unidas, por conducto del Secretario General de dicha Organización, así como al Consejo de la Organización de los Estados Americanos. La Conferencia General informará asimismo al Organismo Internacional de Energía Atómica a los efectos que resulten pertinentes de acuerdo con el Estatuto de éste.

Organización de las Naciones Unidas y Organización
de los Estados Americanos

Artículo 21

Ninguna de las estipulaciones del presente Tratado se interpretará en el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de las Partes, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, ni, en el caso de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos, de acuerdo con los Tratados regionales existentes.

...

Reservas

Artículo 27

El presente Tratado no podrá ser objeto de reservas.

Entrada en vigor

Artículo 28

1. Salvo lo previsto en el párrafo 2 de este artículo, el presente Tratado entrará en vigor entre los Estados que lo hubieren ratificado tan pronto como se hayan cumplido los siguientes requisitos:

- a) Entrega al Gobierno Depositario de los instrumentos de ratificación del presente Tratado por parte de los Gobiernos de los Estados mencionados en el artículo 25 que existan en la fecha en que se abra a firma el presente Tratado y que no se vean afectados por lo dispuesto en el párrafo 2 del propio artículo 25;
- b) Firma y ratificación del Protocolo Adicional I anexo al presente Tratado, por parte de todos los Estados extracontinentales o continentales que tengan, de jure o de facto, responsabilidad internacional sobre territorios situados en la zona de aplicación del presente Tratado;

/...

- c) Firma y ratificación del Protocolo Adicional II anexo al presente Tratado, por parte de todas las Potencias que posean armas nucleares;
- d) Celebración de acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la aplicación del Sistema de Salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, de conformidad con el artículo 13 del presente Tratado.

2. Será facultad imprescriptible de todo Estado signatario la dispensa, en todo o en parte, de los requisitos establecidos en el párrafo anterior, mediante declaración que figurará como anexo al instrumento de ratificación respectivo y que podrá formularse en el momento de hacer el depósito de éste o con posterioridad. Para los Estados que hagan uso de esa facultad, el presente Tratado entrará en vigor con el depósito de la declaración, o tan pronto como se hayan cumplido los requisitos cuya dispensa no haya sido expresamente declarada.

3. Tan luego como el presente Tratado haya entrado en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2, entre once Estados, el Gobierno Depositario convocará a una reunión preliminar de dichos Estados para que se constituya y entre en funciones el Organismo.

4. Después de la entrada en vigor del presente Tratado para todos los países del área, el surgimiento de una nueva Potencia poseedora de armas nucleares suspenderá la ejecución del presente Tratado para los países que lo ratificaron sin dispensar el párrafo 1, inciso c, de este artículo que así lo soliciten, hasta que la nueva Potencia, por sí misma o a petición de la Conferencia General, ratifique el Protocolo Adicional II anexo.

...

Vigencia y denuncia

Artículo 30

1. El presente Tratado tiene carácter permanente y regirá por tiempo indefinido, pero podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación entregada al Secretario General del Organismo, si a juicio del Estado denunciante han ocurrido o pueden ocurrir circunstancias relacionadas con el contenido del presente Tratado o de los Protocolos Adicionales I y II anexos que afecten a sus intereses supremos, o a la paz y la seguridad de una o más Partes Contratantes.

2. La denuncia surtirá efecto tres meses después de la entrega de la notificación por parte del Gobierno del Estado signatario interesado al Secretario General del Organismo. Este, a su vez, comunicará inmediatamente dicha notificación a las demás Partes Contratantes, así como al Secretario General de las Naciones Unidas para que lo haga del conocimiento del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Igualmente la comunicará al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos.

...

/...

PROTOCOLO ADICIONAL I

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenos Poderes de sus respectivos Gobiernos,

Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, negociado y firmado en cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenidas en la resolución 1911 (XVIII) de 27 de noviembre de 1963, representa un importante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares;

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no constituye un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar, en una etapa ulterior, el desarme general y completo, y

Deseosos de contribuir en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente en el campo de las armas nucleares, y a favorecer la consolidación de la paz en el mundo, fundada en el respeto mutuo y en la igualdad soberana de los Estados.

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

Comprometerse a aplicar en los territorios que de jure o de facto estén bajo su responsabilidad internacional, comprendidos dentro de los límites de la zona geográfica establecida en el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, el estatuto de desnuclearización para fines bélicos que se halla definido en los artículos 1, 3, 5 y 13 de dicho Tratado.

Artículo 2

El presente Protocolo tendrá la misma duración que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina del cual es Anexo, aplicándose a él las cláusulas referentes a la ratificación y denuncia que figuran en el cuerpo del Tratado.

Artículo 3

El presente Protocolo entrará en vigor, para los Estados que lo hubieren ratificado, en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

...

/...

PROTOCOLO ADICIONAL II

Los Plenipotenciarios infrascritos, provistos de Plenos Poderes de sus respectivos gobiernos,

Convencidos de que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, negociado y firmado en cumplimiento de las recomendaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, contenidas en la resolución 1911 (XVIII) de 27 de noviembre de 1963, representa un importante paso para asegurar la no proliferación de las armas nucleares;

Conscientes de que la no proliferación de las armas nucleares no constituye un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar, en una etapa ulterior, el desarme general y completo, y

Deseosos de contribuir en la medida de sus posibilidades, a poner fin a la carrera de armamentos, especialmente en el campo de las armas nucleares, y favorecer y consolidar la paz del mundo, fundada en el respeto mutuo y en la igualdad soberana de los Estados,

Han convenido en lo siguiente:

Artículo 1

El estatuto de desnuclearización para fines bélicos de la América Latina, tal como está definido, delimitado y enunciado en las disposiciones del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina, del cual este instrumento es Anexo, será plenamente respetado por las Partes en el presente Protocolo en todos sus objetivos y disposiciones expresas.

Artículo 2

Los gobiernos representados por los Plenipotenciarios infrascritos se comprometen, por consiguiente, a no contribuir en forma alguna a que, en los territorios a los que se aplique el Tratado de conformidad con el artículo 4 sean practicados actos que entrañen una violación de las obligaciones enunciadas en el artículo 1 del Tratado.

Artículo 3

Los gobiernos representados por los Plenipotenciarios infrascritos se comprometen, además, a no emplear armas nucleares y a no amenazar con su empleo contra las Partes Contratantes del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina.

Artículo 4

El presente Protocolo tendrá la misma duración que el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina del cual es Anexo, y a él se aplican las definiciones del territorio y de las armas nucleares

contenidas en los artículos 3 y 5 del Tratado, así como las disposiciones relativas a ratificación, reservas y denuncia, textos auténticos y registro que figuran en los artículos 26, 27, 30 y 31 del propio Tratado.

Artículo 5

El presente Protocolo entrará en vigor, para los Estados que lo hubieren ratificado, en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

...^{36/}

^{36/} Ibid., vol. 634, pág. 282.

25. En el "Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares", firmado en Washington, Londres y Moscú, el 1.^o de julio de 1968, se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

"Los Estados que conciertan este Tratado, denominados en adelante las "Partes en el Tratado",

Considerando las devastaciones que una guerra nuclear infligiría a la humanidad entera y la consiguiente necesidad de hacer todo lo posible por evitar el peligro de semejante guerra y de adoptar medidas para salvaguardar la seguridad de los pueblos,

Estimando que la proliferación de las armas nucleares agravaría considerablemente el peligro de guerra nuclear,

De conformidad con las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas que piden que se concierte un acuerdo sobre la prevención de una mayor diseminación de las armas nucleares,

Comprometiéndose a cooperar para facilitar la aplicación de las salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica a las actividades nucleares de carácter pacífico,

Expresando su apoyo a los esfuerzos de investigación y desarrollo y demás esfuerzos por promover la aplicación, dentro del marco del sistema de salvaguardias del Organismo Internacional de Energía Atómica, del principio de la salvaguardia eficaz de la corriente de materiales básicos y de materiales fisiónables especiales mediante el empleo de instrumentos y otros medios técnicos en ciertos puntos estratégicos,

Afirmando el principio de que los beneficios de las aplicaciones pacíficas de la tecnología nuclear, incluidos cualesquiera subproductos tecnológicos que los Estados poseedores de armas nucleares puedan obtener del desarrollo de dispositivos nucleares explosivos, deberán ser asequibles para fines pacíficos a todas las Partes en el Tratado, sean estas Partes Estados poseedores o no poseedores de armas nucleares,

Convencidos de que, en aplicación de este principio, todas las Partes en el Tratado tienen derecho a participar en el más amplio intercambio posible de información científica para el mayor desarrollo de las aplicaciones de la energía atómica con fines pacíficos y a contribuir a dicho desarrollo por sí solas o en colaboración con otros Estados,

Declarando su intención de lograr lo antes posible la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de emprender medidas eficaces encaminadas al desarme nuclear,

Pidiendo encarecidamente la cooperación de todos los Estados para el logro de este objetivo,

Recordando que las Partes en el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del agua, de 1963, expresaron en el Preámbulo de ese Tratado su determinación de procurar alcanzar la suspensión permanente de todas las explosiones de ensayo de armas nucleares y de proseguir negociaciones con ese fin,

Deseando promover la disminución de la tirantez internacional y el fortalecimiento de la confianza entre los Estados con objeto de facilitar la cesación de la fabricación de armas nucleares, la liquidación de todas las reservas existentes de tales armas y la eliminación de las armas nucleares y de sus vectores en los arsenales nacionales en virtud de un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional,

Recordando que, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, los Estados deben abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas, y que han de promoverse el establecimiento y mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales con la menor desviación posible de los recursos humanos y económicos del mundo hacia los armamentos,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

Cada Estado poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a no traspasar a nadie armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado no poseedor de armas nucleares a fabricar o adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos, ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos.

ARTICULO II

Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a no recibir de nadie ningún traspaso de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos ni el control sobre tales armas o dispositivos explosivos, sea directa o indirectamente; a no fabricar ni adquirir de otra manera armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos; y a no recabar ni recibir ayuda alguna para la fabricación de armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos.

ARTICULO III

1. Cada Estado no poseedor de armas nucleares que sea Parte en el Tratado se compromete a aceptar las salvaguardias estipuladas en un acuerdo que ha de negociarse y concertarse con el Organismo Internacional de Energía Atómica, de conformidad con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica y el sistema de salvaguardias del Organismo, a efectos únicamente

de verificar el cumplimiento de las obligaciones asumidas por ese Estado en virtud de este Tratado con miras a impedir que la energía nuclear se desvíe de usos pacíficos hacia armas nucleares u otros dispositivos nucleares explosivos. Los procedimientos de salvaguardia exigidos por el presente artículo se aplicarán a los materiales básicos y a los materiales fisiónables especiales, tanto si se producen, tratan o utilizan en cualquier planta nuclear principal como si se encuentran fuera de cualquier instalación de ese tipo. Las salvaguardias exigidas por el presente artículo se aplicarán a todos los materiales básicos o materiales fisiónables especiales en todas las actividades nucleares con fines pacíficos realizadas en el territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción, o efectuadas bajo su control en cualquier lugar.

2. Cada Estado Parte en el Tratado se compromete a no proporcionar:
a) materiales básicos o materiales fisiónables especiales, ni b) equipo o materiales especialmente concebidos o preparados para el tratamiento, utilización o producción de materiales fisiónables especiales, a ningún Estado no poseedor de armas nucleares, para fines pacíficos, a menos que esos materiales básicos o materiales fisiónables especiales sean sometidos a las salvaguardias exigidas por el presente artículo.

3. Las salvaguardias exigidas por el presente artículo se aplicarán de modo que se cumplan las disposiciones del artículo IV de este Tratado y que no obstaculicen el desarrollo económico o tecnológico de las Partes o la cooperación internacional en la esfera de las actividades nucleares con fines pacíficos, incluido el intercambio internacional de materiales y equipo nucleares para el tratamiento, utilización o producción de materiales nucleares con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones del presente artículo y con el principio de la salvaguardia enunciado en el Preámbulo del Tratado.

4. Los Estados no poseedores de armas nucleares que sean Partes en el Tratado, individualmente o junto con otros Estados, de conformidad con el Estatuto del Organismo Internacional de Energía Atómica, concertarán acuerdos con el Organismo Internacional de Energía Atómica a fin de satisfacer las exigencias del presente artículo. La negociación de esos acuerdos comenzará dentro de los ciento ochenta días siguientes a la entrada en vigor inicial de este Tratado. Para los Estados que depositen sus instrumentos de ratificación o de adhesión después de ese plazo de ciento ochenta días, la negociación de esos acuerdos comenzará a más tardar en la fecha de dicho depósito. Tales acuerdos deberán entrar en vigor, a más tardar, en el término de dieciocho meses a contar de la fecha de iniciación de las negociaciones.

ARTICULO IV

1. Nada de lo dispuesto en este Tratado se interpretará en el sentido de afectar el derecho inalienable de todas las Partes en el Tratado de desarrollar la investigación, la producción y la utilización de la energía nuclear con fines pacíficos sin discriminación y de conformidad con los artículos I y II de este Tratado.

2. Todas las Partes en el Tratado se comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e información científica y tecnológica para los usos pacíficos de la energía nuclear y tienen el derecho de participar en ese intercambio. Las Partes en el Tratado que estén en situación de hacerlo deberán asimismo cooperar para contribuir, por sí solas o junto con otros Estados u organizaciones internacionales, al mayor desarrollo de las aplicaciones de la energía nuclear con fines pacíficos, especialmente en los territorios de los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado, teniendo debidamente en cuenta las necesidades de las regiones en desarrollo del mundo.

ARTICULO V

Cada Parte en el Tratado se compromete a adoptar las medidas apropiadas para asegurar que, de conformidad con este Tratado, bajo observación internacional apropiada y por los procedimientos internacionales apropiados, los beneficios potenciales de toda aplicación pacífica de las explosiones nucleares sean asequibles sobre bases no discriminatorias a los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado y que el costo para dichas Partes de los dispositivos explosivos que se empleen sea lo más bajo posible y excluya todo gasto por concepto de investigación y desarrollo. Los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado deberán estar en posición de obtener tales beneficios, en virtud de uno o más acuerdos internacionales especiales, por conducto de un organismo internacional apropiado en el que estén adecuadamente representados los Estados no poseedores de armas nucleares. Las negociaciones sobre esta cuestión deberán comenzar lo antes posible, una vez que el Tratado haya entrado en vigor. Los Estados no poseedores de armas nucleares Partes en el Tratado que así lo deseen podrán asimismo obtener tales beneficios en virtud de acuerdos bilaterales.

ARTICULO VI

Cada Parte en el Tratado se compromete a celebrar negociaciones de buena fe sobre medidas eficaces relativas a la cesación de la carrera de armamentos nucleares en fecha cercana y al desarme nuclear, y sobre un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional.

ARTICULO VII

Ninguna disposición de este Tratado menoscabará el derecho de cualquier grupo de Estados a concertar tratados regionales a fin de asegurar la ausencia total de armas nucleares en sus respectivos territorios.

...

ARTICULO X

1. Cada Parte tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de este Tratado, han comprometido los intereses supremos de su país. De esa retirada deberá notificar a todas las demás

/...

Partes en el Tratado y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que esa Parte considere que han comprometido sus intereses supremos.

2. Veinticinco años después de la entrada en vigor del Tratado se convocará a una conferencia para decidir si el Tratado permanecerá en vigor indefinidamente o si se prorrogará por uno o más períodos suplementarios de duración determinada. Esta decisión será adoptada por la mayoría de las Partes en el Tratado.

...^{37/}

^{37/} United States Treaties and other International Agreements, vol. 21, pág. 483.

26. El 30 de septiembre de 1971, se firmó en Washington un acuerdo titulado "Medidas para disminuir el peligro de que estalle una guerra nuclear". Entre otras cosas, en ese acuerdo se dice lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominados en adelante las Partes,

Tomando en cuenta las devastadoras consecuencias que una guerra nuclear tendría para la humanidad entera, y reconociendo la necesidad de hacer todo lo posible para evitar el peligro de que se produzca una guerra semejante, incluso adoptar medidas para precaverse contra la utilización de armas nucleares en forma accidental o sin autorización,

Estimando que un acuerdo sobre las medidas tendientes a disminuir el peligro de que estalle una guerra nuclear contribuye a la causa de fortalecer la paz y la seguridad internacionales, y no se opone en modo alguno a los intereses de ningún otro país,

Teniendo presente que también en lo futuro será menester proseguir desplegando esfuerzos para procurar medios de disminuir el peligro de que estalle una guerra nuclear,

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Cada Parte se compromete a mantener y mejorar, según juzgue necesario, las disposiciones organizacionales y técnicas que ya haya adoptado para precaverse contra la utilización accidental o no autorizada de las armas nucleares que están bajo su control.

Artículo 2

Las Partes se comprometen a notificarse mutuamente en forma inmediata en caso de que un hecho accidental, no autorizado, o que carezca de explicación, entrañe la posible explosión de un arma nuclear que pueda ocasionar el peligro de que estalle una guerra nuclear. En caso de que ocurra un incidente semejante, la Parte poseedora del arma nuclear hará inmediatamente todo lo posible por adoptar las medidas que sean menester para inutilizarla o destruirla sin que cause daño.

Artículo 3

Las Partes se comprometen a notificarse mutuamente en forma inmediata en caso de que los sistemas de alarma contra misiles detecten objetos no identificados, o en caso de que haya indicios de interferencia de esos sistemas o de los servicios de comunicación conexos, si es que esos hechos pueden originar el peligro de que estalle una guerra nuclear entre los dos países.

Artículo 4

Cada Parte se compromete a informar por adelantado a la otra Parte acerca de todo lanzamiento previsto de misiles en caso de que tales lanzamientos vayan a las fronteras del territorio nacional en dirección de la otra Parte.

Artículo 5

Cada Parte, en otras situaciones que entrañen incidentes nucleares sin explicación, se compromete a actuar de modo de reducir la posibilidad de que sus acciones sean interpretadas erróneamente por la otra Parte. En toda situación semejante, cada una de las Partes puede informar a la otra o pedirle información cuando, a su entender, ello esté justificado por el interés de evitar el peligro de que estalle una guerra nuclear.

Artículo 6

Para transmitir información, notificaciones y pedidos de información urgentes en situaciones que requieran una rápida aclaración, las Partes usarán primordialmente la línea de comunicación directa entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.

Para transmitir otro tipo de información, notificaciones y pedidos de información, las Partes, a su propio arbitrio, podrán utilizar cualquier sistema de comunicación, incluso las vías diplomáticas, según sea el grado de urgencia.

Artículo 7

Las Partes se comprometen a celebrar consultas, según convengan mutuamente, para examinar cuestiones relativas al cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo, así como para discutir posibles enmiendas a él que tiendan a un mejor cumplimiento de los propósitos del presente Acuerdo.

Artículo 8

La duración de este Acuerdo será ilimitada.

Artículo 9

El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma.

..." 38/

27. El 11 de febrero de 1971 se firmó en Washington, Londres y Moscú el "Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo". A continuación se citan las partes pertinentes de ese Tratado:

"Los Estados Partes en el presente Tratado,

Reconociendo el interés común de la humanidad en el progreso de la exploración y utilización de los fondos marinos y oceánicos con fines pacíficos,

Considerando que la prevención de la carrera de armamentos nucleares en los fondos marinos y oceánicos favorece la causa del mantenimiento de la paz mundial, reduce las tensiones internacionales y refuerza las relaciones amistosas entre los Estados,

Convencidos de que el presente Tratado constituye un paso hacia la exclusión de los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo de la carrera de armamentos,

Convencidos de que el presente Tratado constituye un paso hacia un tratado de desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional, y resueltos a proseguir las negociaciones con este fin,

Convencidos de que el presente Tratado promoverá los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas en forma compatible con los principios del derecho internacional y sin menoscabar la libertad de la alta mar,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

1. Los Estados Partes en el presente Tratado se comprometen a no instalar ni emplazar en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, más allá del límite exterior de una zona de los fondos marinos definida en el artículo II, armas nucleares ni ningún otro tipo de armas de destrucción en masa, así como tampoco estructuras, instalaciones de lanzamiento ni otras instalaciones destinadas expresamente a almacenar, ensayar o utilizar dichas armas.

2. Las obligaciones contraídas con arreglo al párrafo 1 de este artículo serán aplicables también a la zona de los fondos marinos mencionada en el mismo párrafo, con la salvedad de que, dentro de esa zona de los fondos marinos, no se aplicarán al Estado ribereño ni a los fondos marinos de sus aguas territoriales.

3. Los Estados Partes en el presente Tratado se comprometen a no asistir, alentar ni inducir a ningún Estado a realizar las actividades mencionadas en el párrafo 1 de este artículo y a no participar de ningún otro modo en tales actos.

...

/...

ARTICULO III

1. A fin de promover los objetivos del presente Tratado y asegurar el cumplimiento de sus disposiciones, todo Estado Parte en el Tratado tendrá derecho a verificar mediante observación las actividades de otros Estados Partes en el Tratado en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo más allá de la zona a que se refiere el artículo I, siempre que esa observación no perturbe tales actividades.

2. Si, una vez efectuada esa observación, subsisten dudas razonables en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Tratado, el Estado Parte que tenga tales dudas y el Estado Parte responsable de las actividades que las susciten celebrarán consultas con miras a resolverlas. Si las dudas persisten, el Estado Parte que tenga tales dudas las notificará a los otros Estados Partes y las Partes interesadas cooperarán en la aplicación de los demás procedimientos de verificación que se convengan, incluida la inspección pertinente de objetos, estructuras, instalaciones u otras obras cuando haya motivos razonables para creer que son del tipo descrito en el artículo I. Las Partes situadas en la región en que se realicen las actividades, incluido cualquier Estado ribereño y cualquier otra Parte que así lo solicite, tendrán derecho a participar en tales consultas y medidas de cooperación. Después de concluidos esos otros procedimientos de verificación, la Parte que los haya iniciado remitirá a las demás Partes el informe pertinente.

3. Si el Estado responsable de las actividades que susciten las dudas razonables no puede ser identificado mediante la observación del objeto, estructura, instalación u otra obra, el Estado Parte que tenga las dudas las notificará a los Estados Partes de la región en que se realicen las actividades y a cualquier otro Estado Parte y efectuará las indagaciones pertinentes ante ellos. Si se averigua mediante estas indagaciones que determinado Estado Parte es responsable de las actividades, ese Estado Parte celebrará consultas y cooperará con otras Partes según lo dispuesto en el párrafo 2 de este artículo. En caso de que la identidad del Estado responsable de las actividades no se pueda determinar mediante esas indagaciones, el Estado Parte que realice tales indagaciones podrá iniciar otros procedimientos de verificación, incluida la inspección, y solicitará la participación de las Partes de la región en que se realicen las actividades, incluido cualquier Estado ribereño, y de cualquier otra Parte que desee cooperar.

4. Si las consultas y las medidas de cooperación previstas en los párrafos 2 y 3 de este artículo no han resuelto las dudas acerca de tales actividades y subsiste alguna duda grave en relación con el cumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud del presente Tratado, todo Estado Parte podrá, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, remitir la cuestión al Consejo de Seguridad, el cual podrá actuar de conformidad con la Carta.

5. Todo Estado Parte podrá emprender la verificación en virtud de este artículo recurriendo a medios propios o con la ayuda plena o parcial de cualquier otro Estado Parte o mediante los procedimientos internacionales apropiados, dentro del marco de las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta.

6. Las actividades de verificación que se efectúen de conformidad con el presente Tratado no deberán perturbar las actividades de otros Estados Partes y se llevarán a cabo con el debido respeto a los derechos reconocidos en derecho internacional, incluyendo la libertad de la alta mar y los derechos de los Estados ribereños en lo que se refiere a la exploración de sus plataformas continentales.

...

ARTICULO V

Las Partes en el presente Tratado se comprometen a proseguir de buena fe negociaciones relativas a nuevas medidas en la esfera del desarme para la prevención de la carrera de armamentos en los fondos marinos y oceánicos y en su subsuelo.

...

ARTICULO VII

Cinco años después de la entrada en vigor del presente Tratado, se celebrará en Ginebra, Suiza, una conferencia de las Partes en el Tratado a fin de revisar la aplicación de este Tratado para asegurarse de que se cumplen los propósitos enunciados en el preámbulo y las disposiciones del Tratado. En esta revisión se tendrá en cuenta todo avance tecnológico pertinente. La conferencia de revisión determinará, de conformidad con el parecer de la mayoría de las Partes que asistan a ella, si se ha de convocar una nueva conferencia de revisión y la fecha de ésta.

ARTICULO VIII

Cada Estado Parte en el presente Tratado tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse del Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto del presente Tratado, han comprometido los intereses supremos de su país. Deberá notificar de este retiro a todos los demás Estados Partes en el Tratado y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que, según considera ese Estado Parte, han comprometido sus intereses supremos.

/...

ARTICULO IX

Las disposiciones del presente Tratado no afectan en forma alguna las obligaciones asumidas por los Estados Partes en el Tratado en virtud de instrumentos internacionales que establezcan zonas libres de armas nucleares.

..." 39/

39/ United States Treaties and Other International Acts Series, No. 7337.
Véase el anexo a la resolución 2660 (XXV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 7 de diciembre de 1970.

28. El 22 de junio de 1973 se firmó en Washington el "Acuerdo entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la prevención de la guerra nuclear". Entre otras cosas, en ese Acuerdo se dice lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominados en adelante las Partes,

Guiadas por el objetivo de fortalecer la paz mundial y la seguridad internacional,

Conscientes de que una guerra nuclear tendría consecuencias devastadoras para la humanidad,

Inspiradas en el deseo de crear condiciones en las que se reduzca y finalmente se elimine el peligro de que estalle una guerra nuclear en cualquier lugar del mundo,

Inspiradas en las obligaciones que, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, han asumido en cuanto al mantenimiento de la paz, la abstención de la amenaza o el uso de la fuerza, y la prevención de la guerra, y de conformidad con los acuerdos que cada Parte ha suscrito,

Inspiradas en los Principios básicos de las relaciones mutuas entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Moscú el 29 de mayo de 1972,

Reafirmando que la evolución de las relaciones entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas no se dirige contra otros países ni contra sus intereses,

Han convenido en lo siguiente:

ARTICULO I

Los Estados Unidos y la Unión Soviética convienen en que el objetivo de sus respectivas políticas es eliminar el peligro de la guerra nuclear y del uso de las armas nucleares.

En consecuencia, las Partes convienen en que actuarán de modo de impedir que se produzcan situaciones que puedan causar una exacerbación peligrosa en sus relaciones y de modo de evitar enfrentamientos militares y excluir la posibilidad de que se produzca una guerra nuclear entre ellas o entre cualquiera de las Partes y otros países.

ARTICULO II

Las Partes convienen, de conformidad con el artículo I y para alcanzar el objetivo que en él se enuncia, en partir de la premisa de que cada Parte se abstendrá de amenazar con el uso de la fuerza o de utilizar la fuerza contra la otra Parte, contra los aliados de la otra Parte y contra otros países, en

circunstancias que puedan poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Las Partes convienen en que se guiarán por estas consideraciones en la formulación de sus respectivas políticas exteriores y en sus actividades en la esfera de las relaciones internacionales.

ARTICULO III

Las Partes se comprometen a dar a sus relaciones mutuas y con otros países un rumbo compatible con los propósitos del presente Acuerdo.

ARTICULO IV

Si en algún momento las relaciones entre las Partes o entre una de ellas y otros países parecieren entrañar el peligro de un conflicto nuclear, o si las relaciones entre países que no son Partes del presente acuerdo parecieren entrañar el peligro de una guerra nuclear entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o entre una de las Partes y otros países, los Estados Unidos y la Unión Soviética, actuando de conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo, entablarán inmediatamente consultas urgentes entre sí y harán todo lo posible por evitar ese peligro.

ARTICULO V

Cada una de las Partes estará facultada para informar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Gobiernos de los países aliados o de otros países acerca de los progresos y resultados de las consultas que se hayan entablado de conformidad con el artículo IV del presente Acuerdo.

ARTICULO VI

Ninguna disposición de este Acuerdo afectará o menoscabará:

- a) el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, tal como se prevé en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
- b) las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, incluso las que se refieren al mantenimiento o restauración de la paz y la seguridad internacionales, y
- c) las obligaciones contraídas por cada una de las Partes hacia sus aliados u otros países en tratados, acuerdos y otros documentos apropiados.

ARTICULO VII

La duración del presente Acuerdo será ilimitada.

ARTICULO VIII

El presente Acuerdo entrará en vigor en el momento de su firma.

..." 40/

29. En el artículo 2 del Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en Varsovia el 14 de mayo de 1955, se declara, entre otras cosas, que "... las Partes Contratantes tratarán de lograr, de común acuerdo con otros Estados que deseen cooperar en esta labor, la adopción de medidas efectivas para la reducción general de armamentos y la prohibición de las armas atómicas, de hidrógeno y otras de destrucción en masa" 41/.

30. En el artículo 13 del Tratado de Paz con Bulgaria, firmado en París el 10 de febrero de 1947, se declara, entre otras cosas, que "Bulgaria no poseerá, construirá ni experimentará ningún arma atómica ..." 42/. Una expresión semejante con respecto a Finlandia, Hungría y Rumania figura en los tratados de paz respectivos, firmados en París el 10 de febrero de 1947 43/. En el artículo 51 del Tratado de Paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947, se declara, entre otras cosas, que "Italia no poseerá, construirá ni ensayará i) ningún arma atómica ..." 44/.

31. El 23 de octubre de 1954, se firmó en París el Protocolo III (y anexos) sobre el control de armamentos, que es parte integrante del Protocolo que modifica y completa el Tratado de Bruselas de 1948, que regula la colaboración en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva. En el Protocolo III se dice, entre otras cosas, lo siguiente:

"Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República Francesa, Presidente de la Unión Francesa, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República Italiana, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commonwealth, signatarios del Protocolo 45/ que modifica y completa el Tratado de Bruselas /Tratado que regula la cooperación en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948/" 46/

40/ United States Treaties and Other International Acts Series, No. 7654.
Véase también U.S. Department of State Bulletin, vol. 69, 23 julio 1973, pág. 160.

41/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 219, págs. 3, 28.

42/ Ibid., vol. 41, pág. 21.

43/ Tratado de Paz con Finlandia, Ibid., vol. 48, pág. 203 (artículo 17), Tratado de Paz con Hungría, ibid., vol. 41, pág. 135 (artículo 15) y Tratado de Paz con Rumania, ibid., vol. 42, pág. 3 (artículo 14).

44/ Ibid., vols. 49 y 50.

45/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 211, pág. 342.

46/ Ibid., vol. 19, pág. 51.

/...

...

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I - Armamentos que no han de fabricarse

Artículo 1

Las Altas partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, toman nota y dejan constancia de su acuerdo con la Declaración del Canciller de la República Federal de Alemania (hecha en Londres el 3 de octubre de 1954 y que se adjunta como Anexo I), en la que la República Federal de Alemania se comprometió a no fabricar en su territorio armas atómicas, biológicas o químicas. Los tipos de armamentos a que se hace referencia en este artículo se definen en el Anexo II. El Consejo de la Unión Europea Occidental definirá con mayor precisión estos armamentos y actualizará las definiciones

...

ANEXO I

El Canciller Federal declara:

que la República Federal se compromete a no fabricar en su territorio ninguna de las armas atómicas, químicas o biológicas que se enumeran en los párrafos I, II y III de la lista adjunta /véase el anexo II infra/.

...

que la República Federal conviene en que la autoridad competente de la Organización del Tratado de Bruselas supervise el cumplimiento de estas obligaciones.

ANEXO II

Esta lista abarca las armas que se definen en los párrafos I a III y las fábricas que se dedican exclusivamente a su producción. Quedan excluidos de esta definición todos los aparatos, piezas, equipos, instalaciones, sustancias u organismos que se usen para fines civiles o para la investigación científica, médica e industrial en el ámbito de la ciencia pura y aplicada.

I. Armas atómicas

- a) Un arma atómica se define como un arma que contiene, o está destinada a contener o utilizar, combustible nuclear o isótopos radiactivos y que, por explosión u otra transformación nuclear no controlada del

/...

combustible nuclear, o por radiactividad del combustible nuclear o los isótopos radiactivos, es capaz de destruir, herir o envenenar en forma masiva.

- b) Además, será considerado arma atómica todo elemento, artefacto, montaje o material especialmente destinado a cualquier arma de las definidas en el párrafo a), o que se utilice principalmente en cualquiera de ellas.
- c) La expresión "combustible nuclear", en el sentido en que se utiliza en la definición precedente, abarca las siguientes sustancias: plutonio, uranio 223, uranio 235 (incluido el uranio 235 contenido en el uranio enriquecido cuando el porcentaje en peso de aquél es superior al 2,1%) y toda otra sustancia capaz de liberar cantidades importantes de energía atómica como resultado de la fisión o fusión nuclear u otra reacción nuclear de dicha sustancia. Las sustancias mencionadas serán consideradas combustibles nucleares con prescindencia del estado químico o físico en que se presenten.

..." 47/

32. En el artículo 13 del Tratado de Estado sobre el restablecimiento de una Austria independiente y democrática, firmado en Viena el 15 de mayo de 1955, figura la siguiente disposición: "Austria no poseerá, fabricará ni experimentará: a) ningún arma atómica; b) ninguna otra arma adaptable actualmente o en el futuro al exterminio en masa y definida como tal por los organismos competentes de las Naciones Unidas ..." 48/.

47/ Ibid., vol. 211, pág. 364.

48/ Ibid., vol. 217, ppág. 223.

SECCION 6. GLOBOS

33. La Declaración (IV,1) en la que se prohibía, durante un período de cinco años, el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde lo alto de globos o por otros métodos nuevos análogos, fue firmada en La Haya el 29 de julio de 1899 y, entre otras cosas, en ella se decía lo siguiente:

"Los abajos firmados, plenipotenciarios de las Potencias representadas en la Conferencia Internacional de la Paz en La Haya, debidamente autorizados a este efecto por sus Gobiernos, inspirándose en los sentimientos expresados en la Declaración de San Petersburgo de 29 de Noviembre, 11 de Diciembre, de 1968,

Declaran:

Las Potencias contratantes consienten durante cinco años la prohibición de lanzar proyectiles y explosivos desde lo alto de globos o por otros medios análogos nuevos.

La presente Declaración no es obligatoria más que para las Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o más de ellas.

Dejará de ser obligatoria desde el instante en que en una guerra entre Potencias contratantes una Potencia no contratante se uniese a uno de los beligerantes.

..." 49/

34. El 18 de octubre de 1907, en la Segunda Conferencia Internacional de la Paz, celebrada en La Haya, se firmó la Declaración (XIV) por la que se prohibía el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde lo alto de globos, con miras a renovar la Declaración de 1899 relativa al mismo tema. Entre otras cosas, en la Declaración (XIV) se decía lo siguiente:

"Los infrascritos Plenipotenciarios de las Potencias convocadas para la Segunda Conferencia de la Paz, en La Haya, debidamente autorizados al efecto por sus respectivos Gobiernos; inspirándose en los sentimientos cuya expresión se manifiesta en la Declaración de St. Petersburgo de 29 de Noviembre, 11 de Diciembre de 1868, y deseando renovar la declaración de La Haya de fecha 29 de julio de 1899, que ha expirado ya,

Declaran:

Las Potencias contratantes convienen, durante un período que se prolongará hasta la fecha en que finalice la Tercera Conferencia de la Paz 50/, en la prohibición de lanzar proyectiles o explosivos desde lo alto de globos aereos-táticos, o por otros medios modernos análogos.

49/ De Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, 2éme série, 26, pág. 994 /texto francés auténtico/; traducción al español: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, op. cit., pág. 220.

50/ Nunca se celebró una "Tercera Conferencia de la Paz".

La presente declaración no es obligatoria sino entre las Potencias contratantes en caso de guerra entre dos o entre varias de ellas.

Dejará de ser obligatoria desde el momento en que, en caso de guerra entre Potencias contratantes, una Potencia no contratante se alíe a una de las beligerantes.

..." 51/

51/ De Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, 3ème série, t.3, pág. 745 /texto francés auténtico/; traducción al español. Dotación Carnegie para la Paz Internacional, op. cit., pág. 220.

SECCION 7. PROYECTILES

35. El 26 de mayo de 1972 se firmó en Moscú el Tratado concertado entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre la limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos. Entre otras cosas, el Tratado dice lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominados en adelante las Partes,

Partiendo de la premisa de que una guerra nuclear tendría devastadoras consecuencias para toda la humanidad,

Considerando que la adopción de medidas eficaces para limitar los sistemas de proyectiles antibalísticos sería un factor importante para refrenar la carrera de armamentos ofensivos estratégicos y reduciría el riesgo de una guerra con armas nucleares,

Considerando que la limitación de los sistemas de proyectiles antibalísticos y la adopción de medidas acordadas respecto de la limitación de las armas ofensivas estratégicas contribuiría a crear condiciones más favorables para celebrar nuevas negociaciones sobre la limitación de las armas estratégicas,

Teniendo presentes las obligaciones que les impone el artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,

Declarando su intención de conseguir lo antes posible la cesación de la carrera de armamentos nucleares y de adoptar medidas eficaces encaminadas a la reducción de las armas estratégicas, al desarme nuclear y al desarme general y completo,

Deseando contribuir a mitigar la tirantez internacional y a fortalecer la confianza entre los Estados,

Han acordado lo siguiente:

Artículo I

1. Ambas Partes se comprometen a limitar los sistemas de proyectiles antibalísticos (PAB) y a adoptar otras medidas de conformidad con las disposiciones del presente Tratado.

2. Ambas Partes se comprometen a no desplegar sistemas PAB para defender el territorio de su país, a no proporcionar la base de tal defensa y a no desplegar dichos sistemas para defender una región determinada con excepción de lo dispuesto en el artículo III del presente Tratado.

/...

Artículo II

1. A los efectos del presente Tratado, un sistema PAB es un sistema destinado a contrarrestar los proyectiles balísticos estratégicos o sus elementos en trayectoria de vuelo y actualmente comprende:

a) Los proyectiles interceptores PAB, que son proyectiles contruidos y desplegados para cumplir una misión PAB o que son de un tipo ensayado con fines PAB;

b) Lanzadores PAB, que son lanzadores contruidos y desplegados para lanzar proyectiles interceptores PAB; y

c) Radares PAB, que son radares contruidos y desplegados para cumplir una misión PAB o que son de un tipo ensayado con fines PAB.

2. Entre los componentes del sistema PAB enumerados en el párrafo 1 del presente artículo se incluyen los siguientes:

- a) los operacionales;
- b) los que están en construcción;
- c) los que están en ensayo;
- d) los sometidos a revisión, reparación o conversión; o
- e) los que están en reserva.

Artículo III

Ambas Partes se comprometen a no desplegar sistemas PAB o sus componentes, con las excepciones siguientes:

a) En una zona de despliegue de un sistema PAB de ciento cincuenta kilómetros de radio que tenga por centro la capital del país, cada Parte podrá desplegar: 1) cien lanzadores PAB y cien proyectiles interceptores PAB como máximo en los lugares de lanzamiento y 2) radares PAB con seis complejos de radar PAB como máximo, teniendo presente que la zona de cada complejo será circular y tendrá un diámetro máximo de tres kilómetros;

b) En una zona de despliegue de un sistema PAB de ciento cincuenta kilómetros de radio dotada de lanzadores en silos de proyectiles balísticos intercontinentales, cada Parte podrá desplegar: 1) cien lanzadores PAB y cien proyectiles interceptores PAB como máximo en los lugares de lanzamiento, 2) dos grandes radares PAB de elementos múltiples en fase de potencial comparable al de los radares PAB operacionales o que estén en construcción en una zona de despliegue de sistema PAB dotada de lanzadores en silos de proyectiles balísticos intercontinentales en la fecha de la firma del Tratado y 3) dieciocho radares PAB como máximo, cada uno con un potencial inferior al del menor de los dos grandes radares PAB de elementos múltiples en fase antes mencionados.

Artículo IV

Las limitaciones previstas en el artículo III no se aplicarán a los sistemas PAB ni a sus componentes que se utilicen con fines de desarrollo y ensayo y que estén situados en los actuales polígonos de prueba o en otros que se convengan. Cada Parte sólo podrá tener como máximo un total de quince lanzadores PAB en los polígonos de prueba.

Artículo V

1. Cada Parte se compromete a no crear, ensayar ni desplegar sistemas PAB o sus componentes con base en el mar, en la atmósfera, en el espacio o en tierra con plataforma móvil.

2. Cada Parte se compromete a no crear, ensayar ni desplegar lanzadores PAB capaces de lanzar simultáneamente más de un proyectil interceptor PAB desde cada lanzador y a no modificar los lanzadores ya desplegados para dotarlos de tal capacidad, y a no crear, ensayar ni desplegar sistemas automáticos o semiautomáticos u otros sistemas similares que permitan volver a cargar rápidamente los lanzadores PAB.

Artículo VI

A fin de contribuir a garantizar la eficacia de las limitaciones impuestas a los sistemas PAB y sus componentes por el presente Tratado, ambas Partes se comprometen a:

a) no dotar a los proyectiles, lanzadores o radares que no sean proyectiles interceptores PAB, lanzadores PAB o radares PAB, de la capacidad de contrarrestar proyectiles balísticos estratégicos o sus elementos en trayectoria de vuelo y a no ensayarlos con fines PAB; y

b) a no desplegar en el futuro radares destinados a dar el alerta anticipado contra ataques de proyectiles balísticos estratégicos, excepto en lugares situados a lo largo de la periferia del territorio nacional y orientados hacia el exterior.

Artículo VII

Los sistemas PAB o sus componentes podrán modernizarse y reemplazarse con sujeción a lo dispuesto en el presente Tratado.

Artículo VIII

Tanto los sistemas PAB o sus componentes que excedan del número fijado en el presente Tratado, o que estén situados fuera de las zonas en él determinadas, como los sistemas PAB y sus componentes prohibidos por el presente Tratado serán destruidos o desmantelados de conformidad con un procedimiento convenido y en el plazo más corto posible, fijado de común acuerdo.

Artículo IX

Para garantizar la viabilidad y eficacia del presente Tratado, ambas Partes se comprometen a no traspasar a otros Estados y a no desplegar fuera de su territorio nacional los sistemas PAB o sus componentes limitados por el presente Tratado.

Artículo X

Ambas Partes se comprometen a no asumir ninguna obligación internacional que esté en conflicto con el presente Tratado.

Artículo XI

Las Partes se comprometen a continuar celebrando negociaciones activas para limitar las armas ofensivas estratégicas.

Artículo XII

1. A los efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Tratado, cada Parte utilizará los medios técnicos nacionales de verificación de que disponga, en forma compatible con los principios generalmente aceptados de derecho internacional.

2. Cada Parte se compromete a no entorpecer el funcionamiento de los medios técnicos nacionales de verificación que utilice la otra Parte de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Parte se compromete a no recurrir a medidas de encubrimiento deliberado que entorpezcan la verificación por medios técnicos nacionales del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Tratado. Esta disposición no impone la obligación de efectuar cambios en las actuales prácticas de construcción, montaje, conversión o reparación.

Artículo XIII

1. Para promover los objetivos y la aplicación de las disposiciones del presente Tratado, las Partes crearán en breve una Comisión Consultiva Permanente, dentro de cuyo marco podrán:

a) examinar las cuestiones relativas al cumplimiento de las obligaciones asumidas y las situaciones conexas que puedan considerarse ambiguas;

b) proporcionar a título voluntario la información que cada Parte considere necesaria para asegurar la confianza en el cumplimiento de las obligaciones asumidas;

c) examinar las cuestiones relativas al entorpecimiento involuntario de los medios técnicos nacionales de verificación;

d) examinar los cambios posibles de la situación estratégica que guarden relación con las disposiciones del presente Tratado;

e) acordar procedimientos y fechas para la destrucción o desmantelamiento de los sistemas PAB o de sus componentes en los casos previstos por las disposiciones del presente Tratado;

f) examinar, cuando proceda, posibles propuestas para aumentar la viabilidad del presente Tratado, incluidas las propuestas para enmendarlo de conformidad con las disposiciones del mismo;

g) examinar, cuando proceda, las propuestas de nuevas medidas destinadas a limitar las armas estratégicas.

2. Mediante consultas, las Partes establecerán y podrán enmendar, cuando proceda, el Reglamento de la Comisión Consultiva Permanente, en el que se regularán los procedimientos y la composición de la misma, así como otras cuestiones pertinentes.

Artículo XIV

1. Ambas Partes podrán proponer enmiendas al presente Tratado. Las enmiendas que se acuerden entrarán en vigor de conformidad con el procedimiento que rige la entrada en vigor del presente Tratado.

2. Las Partes volverán a examinar conjuntamente el presente Tratado a los cinco años de la entrada en vigor del mismo y, posteriormente, cada cinco años.

Artículo XV

1. La duración de este Tratado será ilimitada.

2. Cada Parte, en ejercicio de su soberanía nacional, tendrá derecho a retirarse del presente Tratado si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la materia que es objeto del mismo han comprometido sus intereses supremos. En tal caso, deberá notificar su decisión a la otra Parte seis meses antes de retirarse del Tratado. Esta notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que, a juicio de la Parte notificadora, han comprometido sus intereses supremos.

Artículo XVI

1. El presente Tratado estará sujeto a ratificación de conformidad con los procedimientos constitucionales de cada Parte. El Tratado entrará en vigor el día de canje de los instrumentos de ratificación.

2. El presente Tratado será registrado de conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

...^{52/}

36. En la misma fecha, el 26 de mayo de 1972, se firmó en Moscú el Acuerdo Provisional entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre ciertas Medidas relativas a la Limitación de las Armas Ofensivas Estratégicas y el Protocolo al mismo. Entre otras cosas, el Acuerdo Provisional dice lo siguiente:

"Los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, denominados en adelante las Partes,

En la convicción de que el Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de proyectiles antibalísticos y el presente Acuerdo Provisional sobre ciertas Medidas relativas a la Limitación de las Armas Ofensivas Estratégicas contribuirán a la creación de condiciones más favorables para celebrar negociaciones activas sobre la limitación de las armas estratégicas y a la disminución de la tirantez internacional y el fortalecimiento de la confianza entre los Estados,

Teniendo en cuenta la relación entre las armas estratégicas ofensivas y las defensivas,

Conscientes de las obligaciones que les impone el artículo VI del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares,

Han acordado lo siguiente:

Artículo I

Las Partes se comprometen a no iniciar la construcción de lanzadores terrestres fijos de proyectiles balísticos intercontinentales (PBIC) después del 1º de julio de 1972.

Artículo II

Las Partes se comprometen a no convertir los lanzadores terrestres para PBIC ligeros, o para PBIC de tipos anticuados desplegados antes de 1964, en lanzadores terrestres para PBIC pesados de tipos desplegados después de dicha fecha.

^{52/} United States Treaties and Other International Acts Series, No. 7503.
Véase también United States Department of State Bulletin, vol. 66, pág. 918.

Artículo III

Las partes se comprometen a limitar los lanzadores de proyectiles balísticos instalados en submarinos y los submarinos para proyectiles balísticos modernos al número que esté en la etapa operacional y en construcción en la fecha de la firma del presente Acuerdo Provisional y, además a los lanzadores y submarinos construidos, según los procedimientos establecidos por las Partes, para reemplazar a un número igual de lanzadores de PBIC de tipos anticuados desplegados antes de 1964 o a lanzadores instalados en submarinos anticuados.

Artículo IV

Con sujeción a las disposiciones del presente Acuerdo Provisional, podrá procederse a la modernización y reposición de los proyectiles balísticos ofensivos estratégicos y de los lanzadores comprendidos en el presente Acuerdo Provisional.

Artículo V

1. A los efectos de garantizar el cumplimiento de las disposiciones del presente Acuerdo Provisional, cada Parte utilizará los medios técnicos nacionales de verificación de que disponga, en forma compatible con los principios generalmente aceptados de derecho internacional.

2. Cada Parte se compromete a no entorpecer el funcionamiento de los medios técnicos nacionales de verificación que utilice la otra Parte de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo.

3. Cada Parte se compromete a no recurrir a medidas de encubrimiento deliberado que entorpezcan la verificación por medios técnicos nacionales del cumplimiento de lo dispuesto en el presente Acuerdo Provisional. Esta disposición no impone la obligación de efectuar cambios en las actuales prácticas de construcción, montaje, conversión o reparación.

Artículo VI

Para promover los objetivos y la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo Provisional, las Partes se servirán de la Comisión Consultiva Permanente establecida en virtud del artículo XIII del Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de Proyectiles Antibalísticos de conformidad con las disposiciones de ese artículo.

Artículo VII

Las Partes se comprometen a continuar celebrando negociaciones activas para limitar las armas ofensivas estratégicas. Las obligaciones establecidas en el presente Acuerdo Provisional no prejuzgarán del alcance ni de los términos de las limitaciones de las armas ofensivas estratégicas que se elaboren en el curso de negociaciones ulteriores.

Artículo VIII

1. El presente Acuerdo Provisional entrará en vigor cuando se produzca el canje de notificaciones escritas de aceptación entre las Partes, canje que se hará al mismo tiempo que el de los instrumentos de ratificación del Tratado sobre la Limitación de los Sistemas de proyectiles antibalísticos.

2. El presente Acuerdo Provisional permanecerá en vigor durante cinco años a menos que sea reemplazado antes por un acuerdo sobre medidas más completas de limitación de las armas ofensivas estratégicas. Las Partes tienen la intención de celebrar activas negociaciones complementarias con el objeto de concertar tal acuerdo lo antes posible.

3. Cada Parte, en ejercicio de su soberanía nacional, tendrá derecho a retirarse del presente Acuerdo Provisional si decide que acontecimientos extraordinarios relacionados con la materia que es objeto del presente Acuerdo Provisional han comprometido sus intereses supremos. En tal caso deberá notificar su decisión a la otra Parte seis meses antes de retirarse del presente Acuerdo Provisional. Esta notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que, a juicio de la Parte notificadora, han comprometido sus intereses supremos.

...^{53/}

37. El artículo 13 del Tratado de Paz con Bulgaria, firmado en París el 10 de febrero de 1947, incluye la siguiente disposición:

"Bulgaria no poseerá, no fabricará ni experimentará ninguna arma atómica, ningún proyectil automotor o dirigido, ni ningún dispositivo empleado para el lanzamiento de dichos proyectiles (fuera de los torpedos y dispositivos de lanzamiento de torpedos que forman parte del armamento normal de los buques autorizados por el presente Tratado) ...".^{54/}

Disposiciones similares con respecto a Finlandia, Hungría y Rumania se encuentran en los tratados de paz respectivos, firmados en París el 10 de febrero de 1947 ^{55/}. En el artículo 51 del Tratado de Paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947, figura la siguiente disposición: "Italia no poseerá, no fabricará o no experimentará: ... ii) ningún proyectil automotor o dirigido, ni ningún dispositivo

^{53/} United States Treaties and Other International Acts Series, No. 7504. Véase también United Department of State Bulletin, vol. 66, pág. 920.

^{54/} Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 41, pág. 21.

^{55/} Tratado de Paz con Finlandia, ibid., vol. 48, pág. 203 (artículo 17), Tratado de Paz con Hungría, ibid., vol. 41, pág. 135 (artículo 15) y Tratado de Paz con Rumania, ibid., vol. 42, pág. 3 (artículo 14).

empleado para el lanzamiento de estos proyectiles (salvo los torpedos o dispositivos de lanzamiento de torpedos que formen parte del armamento normal de buques autorizados por el presente Tratado) ..." 56/.

38. El 23 de octubre de 1954 se firmó en París el Protocolo III (y anexos) sobre el control de armamentos, que es parte integrante del Protocolo que modifica y completa el Tratado de Bruselas de 1948, que regula la colaboración en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva. Entre otras cosas, dice lo siguiente:

"Su Majestad el Rey de los belgas, el Presidente de la República Francesa, Presidente de la Unión Francesa, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República Italiana, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de Sus otros Reinos y Territorios, Jefe del Commonwealth, signatarios del Protocolo 57/ que modifica y completa el Tratado de Bruselas /Tratado que regula la colaboración en materia económica, social y cultural y la legítima defensa colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 58/ /.

...

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I - Armamentos que no han de fabricarse

Artículo 1

Las Altas Partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, toman nota y dejan constancia de su acuerdo con la declaración del Canciller de la República Federal de Alemania (hecha en Londres el 3 de octubre de 1954 y que se adjunta como anexo I) en la que la República Federal de Alemania se comprometió a no fabricar en su territorio armas atómicas, biológicas o químicas. Los tipos de armamentos a que se hace referencia en este artículo se definen en el anexo II. El Consejo de la Unión Europea Occidental definirá con mayor precisión estos armamentos y actualizará las definiciones.

56/ Ibid., vols. 49 y 50.

57/ Ibid., vol. 211, pág. 341.

58/ Ibid., vol. 19, pág. 51.

Artículo 2

Las Altas Partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, también toman nota de la promesa hecha por el Canciller de la República Federal de Alemania en la misma declaración y dejan constancia de su acuerdo con ella, según la cual en el territorio de la República Federal de Alemania no se fabricarán otros tipos de armamentos, excepto en el caso de que, si lo justifican las necesidades de las fuerzas armadas y el Comandante Supremo competente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte recomienda una enmienda o cancelación del contenido de la lista de estos armamentos, y si el Gobierno de la República Federal de Alemania presenta el pedido correspondiente, esa enmienda o cancelación podrá realizarse mediante una resolución del Consejo de la Unión Europea Occidental aprobada por una mayoría de dos tercios. Los tipos de armamentos a que se hace referencia en este artículo se enumeran en el anexo III.

...

ANEXO I

El Canciller Federal declara:

"que la República Federal de Alemania se compromete también a no fabricar en su territorio las armas detalladas en los párrafos IV, V, y VI de la lista adjunta /véase el anexo III infra/. Toda enmienda o cancelación de fondo en los párrafos IV, V y VI deberá efectuarse, previo pedido de la República Federal, mediante una resolución del Consejo de Ministros de Bruselas aprobada por una mayoría de dos tercios, siempre que de acuerdo con las necesidades de las fuerzas armadas, el Comandante Supremo competente de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte presente un pedido en ese sentido;

que la República Federal conviene en que la autoridad competente de la Organización del Tratado de Bruselas supervise el cumplimiento de estas obligaciones.

...

ANEXO III

Esta lista abarca las que se definen en los párrafos IV, V y VI y las fábricas que se dedican exclusivamente a su producción. Quedan excluidos de esta definición todos los aparatos, piezas, equipos, instalaciones, sustancias y organismos que se usen para fines civiles o para la investigación científica, médica e industrial en el ámbito de la ciencia pura y aplicada.

/...

IV. Proyectiles de largo alcance, proyectiles guiados y minas de influencia

- a) Con sujeción a las disposiciones del párrafo d), los proyectiles de largo alcance y los proyectiles guiados se definen como proyectiles cuya velocidad o dirección se puede modificar después del momento del lanzamiento mediante un dispositivo o mecanismo dentro o fuera del proyectil, incluidas las armas de tipo V desarrolladas en la reciente guerra y sus modificaciones ulteriores. Se considera que la combustión es un mecanismo que puede modificar la velocidad.
- b) Con sujeción a las disposiciones del párrafo d), las minas de influencia se definen como minas navales que pueden explotar automáticamente por influencias que emanan únicamente de fuentes externas, incluidas las minas de influencia desarrolladas en la guerra reciente y sus modificaciones ulteriores.
- c) Se considerará incluido en esta definición todo elemento, artefacto o montaje especialmente destinado a cualquier arma de las mencionadas en los párrafos a) y b) o que se utilice principalmente en cualquiera de ellas.
- d) Se consideran excluidos de esta definición las espoletas de proximidad y los proyectiles guiados de corto alcance para la defensa antiaérea con las siguientes características máximas:

Longitud, 2 metros;
Diámetro, 30 centímetros;
Velocidad, 660 metros por segundo;
Alcance, 32 kilómetros;
Peso de la cabeza de guerra, 22,5 kilogramos.

...^{59/}

39. En el artículo 13 del Tratado de Estado sobre el restablecimiento de una Austria independiente y democrática, firmado en Viena el 15 de mayo de 1955, figura la siguiente disposición: "Austria no poseerá, no fabricará, no experimentará ...
c) ningún proyectil autopropulsado o dirigido, ningún torpedo, ningún dispositivo destinado a lanzarlo o a controlarlo ..." ^{60/}.

^{59/} Ibid., vol. 211, pág. 364.

^{60/} Ibid., vol. 217, pág. 223.

SECCION 8. ARMAMENTOS NAVALES^{61/}

40. En la Convención (VIII) relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto, firmada en La Haya el 18 de octubre de 1907, se lee, entre otras cosas, lo siguiente:

"... Las Potencias contratantes

"Inspiradas en el principio de libertad de las vías marítimas, abiertas a todas las naciones;

Considerando que, si en el estado actual de las cosas, no se puede prohibir el empleo de minas submarinas automáticas de contacto, conviene limitar y reglamentar su uso, a fin de restringir los rigores de la guerra, y dar, lo más posible a la navegación pacífica, la seguridad que tiene derecho de pretender a pesar de la existencia de una guerra;

Esperando que sea posible arreglar la materia de un modo que dé a los intereses comprometidos, todas las garantías deseables;

Han resuelto concluir una convención, y para tal efecto han nombrado sus Plenipotenciarios, a saber:

...

Quienes, después de haber depositado sus plenos poderes, encontrados en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:

Artículo 1

Queda prohibido:

1. Colocar minas automáticas de contacto no sujetas, a menos que estén construidas de tal manera que puedan hacerse inofensivas una hora a lo más, después de que, aquel que las ha colocado, haya perdido la vigilancia de ellas;

2. Colocar minas automáticas de contacto sujetas, que no queden inofensivas una vez que hayan roto sus amarres;

3. Emplear torpedos, que no queden inofensivos cuando una vez lanzados hayan dejado de tocar el blanco.

^{61/} La Convención (IX) de La Haya de 1907 relativa al bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra, figura más adelante, en la sección 2 de la Parte III de este capítulo, titulada "Prohibiciones o restricciones del empleo de armamentos, resultantes de la protección concedida a ciertas personas, lugares u objetos: ciudades, aldeas, puertos, viviendas y edificios indefensos". En el Acuerdo Provisional de 1972 entre los Estados Unidos de América y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas relativo a la limitación de las armas ofensivas estratégicas y en el Protocolo correspondiente se hace referencia a los submarinos dotados de proyectiles balísticos. El Acuerdo Provisional figura en la sección 7 de esta parte, titulada "Proyectiles", supra.

/...

Artículo 2

Queda prohibido colocar minas automáticas de contacto frente a las costas y puertos del adversario con el solo objeto de interceptar la navegación comercial.

Artículo 3

Todas las precauciones posibles deberán ser tomadas para la seguridad de la navegación pacífica cuando sean empleadas las minas automáticas de contacto sujetas.

Los beligerantes se obligan a proveer, en lo posible, que las minas queden inofensivas después de un lapso de tiempo limitado, y en el caso de que dejen de ser vigiladas, a señalar las regiones peligrosas, tan pronto como las exigencias militares lo permitan, por medio de un aviso a la navegación, que deberá ser también comunicado a los Gobiernos por la vía diplomática.

Artículo 4

Toda Potencia neutral que coloque minas automáticas y de contacto frente a sus costas, debe observar las mismas reglas y tomar las mismas precauciones que las impuestas a los beligerantes.

La Potencia neutral debe hacer conocer a la navegación por medio de un aviso previo, las regiones donde sean colocadas las minas automáticas de contacto. Este aviso deberá ser comunicado, de una manera urgente a los Gobiernos por la vía diplomática.

Artículo 5

Al final de la guerra, las Potencias contratantes se obligan a hacer todo lo que de ellas dependa, para quitar, cada una por su parte, las minas que haya colocado.

En cuanto a las minas automáticas de contacto sujetas, que uno de los beligerantes haya puesto a lo largo de las costas del otro, deberá notificar a la otra Parte el lugar en que las haya colocado y cada Potencia deberá proceder en el más corto espacio de tiempo posible a quitar las minas que se encuentren en sus aguas.

Artículo 6

Las Potencias contratantes que no dispongan aún de minas perfeccionadas como las previstas en la presente Convención y que, por consecuencia, no puedan actualmente conformarse a las reglas establecidas en los artículos 1 y 3, se obligan a transformar, lo más pronto posible, su material de minas, a fin de que responda a las prescripciones arriba mencionadas.

Artículo 7

Las disposiciones de la presente Convención no son aplicables sino entre las Potencias contratantes, y solamente si todos los beligerantes forman parte de la Convención.

...

Artículo 11

La presente Convención tendrá una duración de siete años a partir desde los sesenta días después de la fecha del primer depósito de ratificaciones.

Salvo denuncia, continuará en vigor después de la expiración de este plazo.

La denuncia será notificada por escrito al Gobierno de los Países Bajos, quien remitirá inmediatamente copia certificada de la notificación a todas las Potencias, haciéndoles saber la fecha en que la recibió.

La denuncia no producirá sus efectos sino respecto de la Potencia que la haya notificado, y seis meses después de que la notificación haya llegado al Gobierno de los Países Bajos.

Artículo 12

Las Potencias contratantes se obligan a considerar nuevamente la cuestión del empleo de minas automáticas de contacto, seis meses antes de la expiración del término previsto en el párrafo primero del artículo precedente, en el caso en que no haya sido considerada de nuevo y resuelta en una fecha anterior por la Tercera Conferencia de la Paz.

Si las Potencias contratantes celebraren una nueva Convención relativa al empleo de minas, desde que entre en vigor, la presente Convención dejará de ser aplicable.

...^{62/}

41. En la Conferencia sobre la Limitación de Armamentos, celebrada en Washington en 1922, se firmó el 6 de febrero de ese año un proyecto relativo al empleo de submarinos y de gases nocivos en tiempo de guerra. El tratado, que nunca entró en vigor, contenía las siguientes disposiciones:

^{62/} De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 3ème série, t.3, pág. 580 /texto francés auténtico/. Traducción al español: Dotación Carnegie para la Paz Internacional, op. cit., pág. 151.

"Artículo 1

Las Potencias signatarias declaran que entre las normas adoptadas por las naciones civilizadas para la protección de la vida de las personas neutrales y no combatientes en el mar en tiempo de guerra, las siguientes deben considerarse y quedar reconocidas como parte del derecho internacional:

1) Antes de proceder a capturar un barco mercante, deberá ordenársele que se someta a visita e inspección con el fin de determinar su carácter.

Un barco mercante no deberá ser atacado, a menos que se niegue a someterse a visita e inspección después de ser apercebido, o a proceder como se le indicare después de la captura.

Un barco mercante no deberá ser destruido a menos que previamente se hubiere puesto a salvo a la tripulación y a los pasajeros.

2) En ningún caso los submarinos beligerantes estarán exentos de las normas universales enunciadas más arriba; y si un submarino no puede capturar a un barco mercante de conformidad con dichas normas, el derecho internacional vigente requiere que desista de atacarlo y capturarlo y que permita a dicho barco que continúe su viaje sin ser molestado.

Artículo 2

Las Potencias signatarias invitan a todas las demás Potencias civilizadas a expresar su asentimiento a la anterior declaración de derecho positivo, de modo que pueda haber en todo el mundo un claro entendimiento público de las normas de conducta según las cuales la opinión pública mundial ha de juzgar a los beligerantes en el futuro.

Artículo 3

Las Potencias signatarias, en el deseo de garantizar el cumplimiento de las normas humanitarias del derecho existente enunciadas por ellas con respecto a los ataques a barcos mercantes y a su captura, declaran además que se considerará que toda persona al servicio de cualquier Potencia que violare cualquiera de estas normas, ya sea que esté o no bajo órdenes de un funcionario oficial, ha violado las leyes de guerra, podrá ser procesada y castigada como si hubiera cometido un acto de piratería y podrá ser sometida a juicio ante las autoridades civiles o militares de cualquier Potencia dentro de cuya jurisdicción se encontrare.

Artículo 4

Las Potencias signatarias reconocen la imposibilidad práctica de utilizar submarinos como destructores del comercio sin que se violen, como ocurrió en la reciente guerra de 1914 a 1918, los requisitos universalmente aceptados por las

naciones civilizadas para la protección de la vida de las personas neutrales y de los no combatientes, y, con el fin de que la prohibición de emplear submarinos como destructores del comercio sea universalmente aceptada como parte del derecho internacional, reconocen en efecto dicha prohibición como obligatoria entre ellas de aquí en adelante e invitan a todas las demás naciones a adherirse a ella.

..."63/

42. El 22 de abril de 1930 se firmó en Londres el Tratado Internacional sobre la limitación y reducción de armamentos navales. A continuación se citan algunas partes pertinentes de dicho Tratado:

"Deseando evitar los peligros y reducir las cargas inherentes a la competencia en materia de armamentos y,

Deseando llevar adelante la labor iniciada por la Conferencia Naval de Washington, así como facilitar la realización progresiva de la limitación y reducción general de armamentos,

Han resuelto concertar un Tratado sobre la limitación y reducción de armamentos navales y para tal efecto han nombrado como sus plenipotenciarios a los siguientes:

...

Quienes, después de haberse comunicado mutuamente sus plenos poderes y haberlos encontrado en buena y debida forma, han convenido en las siguientes disposiciones:

...

PARTE IV

Artículo 22

Se aceptan como normas reconocidas de derecho internacional las siguientes:

1. En su actuación con respecto a los barcos mercantes, los submarinos deberán acatar las normas del derecho internacional a las que están sujetos los buques de superficie.

63/ Conference on the Limitation of Armaments (Conferencia sobre la Limitación de Armamentos) (Washington, U.S. Government Printing Office, 1922), pág. 1605.

2. En particular, y salvo en caso de persistente negativa a detenerse al ser debidamente apercibido, o de resistencia activa a la visita o inspección, un buque de guerra, ya sea de superficie o submarino, no podrá hundir ni inutilizar para la navegación a un barco mercante sin haber puesto previamente a los pasajeros y a la tripulación, así como los documentos del navío, en lugar seguro. A este fin los botes del barco no se considerarán lugar seguro a menos que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación esté garantizada en las condiciones meteorológicas y del mar reinantes en el momento, por la proximidad de la tierra o por la presencia de otro barco que se encuentre en situación de recibirlos a bordo.

Las Altas Partes Contratantes invitan a todas las demás Potencias a expresar su asentimiento a las normas que anteceden.

PARTE V

Artículo 23

El presente Tratado permanecerá en vigor hasta el 31 de diciembre de 1936, a reserva de las siguientes excepciones:

1. La Parte IV permanecerá en vigor sin límite de tiempo;

2. Las disposiciones de los artículos 3, 4, 5 y 11, así como las del anexo II de la Parte II, en cuanto se refieren a barcos portaaviones, estarán en vigor mientras lo esté el Tratado de Washington.

A menos que las Altas Partes Contratantes acuerden otra cosa en razón de un acuerdo de carácter más general para limitar los armamentos navales y del cual todas se hagan parte, se reunirán en conferencia en 1935 para formular un nuevo tratado que reemplace al presente y realice sus propósitos, en el entendimiento de que ninguna de las disposiciones del presente tratado prejuzgará la actitud de ninguna de las Altas Partes Contratantes en la conferencia convenida.

...^{64/}

43. Las normas relativas a la guerra submarina que se establecen en la Parte IV del Tratado que antecede fueron objeto de un Protocolo firmado en Londres el 6 de noviembre de 1936, en el que se declara lo siguiente:

"Considerando que el Tratado sobre la limitación y reducción de armamentos navales firmado en Londres el 22 de abril de 1930 no ha sido ratificado por todos los signatarios;

^{64/} Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. 112, pág. 65.

Considerando que dicho Tratado caducará después del 31 de diciembre de 1936, salvo en su Parte IV, que establece normas relativas a la actuación de los submarinos con respecto a los barcos mercantes que se consideran como normas reconocidas de derecho internacional, y que permanecerá en vigor sin límite de tiempo;

Considerando que en el último párrafo del artículo 22 de la mencionada Parte IV se declara que las Altas Partes Contratantes invitan a todas las Potencias a expresar su asentimiento a las mencionadas normas;

Considerando que los Gobiernos de la República Francesa y del Reino de Italia han confirmado su aceptación de las referidas normas mediante la firma de dicho Tratado;

Considerando que todos los signatarios del mencionado Tratado desean que el mayor número posible de Potencias acepten las normas contenidas en la Parte IV como normas reconocidas de derecho internacional;

Los infrascritos representantes de sus respectivos Gobiernos, teniendo presente el citado artículo 22 del Tratado, solicitan por el presente instrumento al Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte que comunique inmediatamente dichas normas, tal como se transcriben a continuación, a los Gobiernos de todas las Potencias que no son signatarias del mencionado Tratado y los invite a adherirse a ellas en forma inequívoca y sin límite de tiempo.

NORMAS

1) En su actuación con respecto a los barcos mercantes, los submarinos deberán acatar las normas del derecho internacional a las que están sujetos los buques de superficie.

2) En particular, y salvo en caso de persistente negativa a detenerse al ser debidamente apercibido, o de resistencia activa a la visita o inspección, un buque de guerra, ya sea de superficie o submarino, no podrá hundir o inutilizar para la navegación a un barco mercante sin haber puesto previamente a los pasajeros y a la tripulación, así como los documentos del navío, en lugar seguro. A este fin los botes del barco no se considerarán lugar seguro a menos que la seguridad de los pasajeros y de la tripulación esté garantizada en las condiciones meteorológicas y del mar reinantes en el momento, por la proximidad de la tierra o por la presencia de otro barco que se encuentre en situación de recibirlos a bordo.

...^{65/}

^{65/} Ibid., vol. 173, pág. 353.

44. En el Convenio de Nyon, firmado en Nyon el 14 de septiembre de 1937, entre otras cosas, se lee lo siguiente:

"Por cuanto a raíz del conflicto español se han producido reiteradamente en el Mediterráneo ataques de submarinos contra barcos mercantes no pertenecientes a ninguna de las partes españolas en conflicto; y

Por cuanto dichos ataques constituyen violaciones de las normas de derecho internacional mencionadas en la Parte IV del Tratado de Londres del 22 de abril de 1930, relativo al hundimiento de barcos mercantes, y constituyen actos incompatibles con los más elementales dictados de humanidad y deben ser tratados a justo título como actos de piratería; y

Por cuanto, sin admitir en modo alguno el derecho de ninguna de las partes contendientes en España a ejercitar derechos de parte beligerante o a interceptar barcos mercantes en alta mar, aun cuando se observen las leyes de la guerra naval, y sin perjuicio del derecho que asiste a cualquier Potencia participante de adoptar las medidas que considere adecuadas para proteger sus barcos mercantes de cualquier tipo de intervención en alta mar, ni de la posibilidad de que ulteriormente se llegue a acuerdos respecto de nuevas medidas colectivas, es necesario en primer lugar convenir ciertas medidas colectivas especiales contra los actos de piratería perpetrados por los submarinos,

Los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos gobiernos, y reunidos en conferencia en Nyon del 9 al 14 de septiembre de 1937, han convenido en las siguientes disposiciones que entrarán inmediatamente en vigor:

I. Las Potencias participantes darán instrucciones a sus fuerzas navales de que adopten las medidas que se indican en los párrafos II y III infra, con miras en la protección de todos los barcos mercantes no pertenecientes a ninguna de las partes españolas en conflicto.

II. Todo submarino que ataque a un barco mercante en violación de las normas de derecho internacional mencionadas en el Tratado internacional sobre la limitación y reducción de los armamentos navales firmado en Londres el 22 de abril de 1930 y confirmado en el Protocolo firmado en Londres el 6 de noviembre de 1936, será contraatacado y, de ser posible, destruido.

III. Las instrucciones mencionadas en el párrafo anterior serán aplicables a todo submarino que sea encontrado en las proximidades de una posición en que un barco no perteneciente a ninguna de las partes españolas en conflicto haya sido atacado en el momento inmediatamente anterior, en violación de las normas mencionadas en el párrafo precedente y en circunstancias que den motivos válidos para presumir que el submarino fue culpable del ataque.

IV. Para facilitar la puesta en vigor en forma práctica de las disposiciones que anteceden, las Potencias participantes han convenido en lo siguiente:

1. En el Mediterráneo oriental y en el Canal de Malta, excepto el Mar Tirreno, que pueden ser objeto de acuerdos especiales, las flotas británica y francesa operarán, tanto en alta mar como en las aguas territoriales de las Potencias participantes, de conformidad con la división de la zona convenida entre los dos Gobiernos.

2. En el Mediterráneo oriental:

a) Cada una de las Potencias participantes operará en sus propias aguas territoriales;

b) En alta mar, excepto en el Mar Adriático, las flotas británica y francesa operarán hasta la entrada de los Dardanelos, en aquellas zonas en que haya razón para temer que exista peligro para la navegación, de conformidad con la división de la zona convenida entre los dos Gobiernos. Los otros gobiernos participantes que tengan fronteras marítimas en el Mediterráneo se comprometen a proporcionar a dichas flotas, dentro del límite de sus recursos, cualquier tipo de ayuda que puedan solicitar; en particular les permitirán realizar acciones en sus aguas territoriales y utilizar los puertos que indiquen.

3. Queda entendido además que los límites de las zonas mencionadas en los incisos 1 y 2 supra, así como su asignación, podrán ser revisadas en cualquier momento por las Potencias participantes a fin de tomar en cuenta cualquier modificación de la situación.

V. Las Potencias participantes convienen en que, con el propósito de simplificar la aplicación de las medidas antes mencionadas, restringirán por su parte el empleo de sus submarinos en el Mediterráneo de la manera siguiente:

a) Salvo en los casos previstos en los incisos b) y c) infra, no se enviará ningún submarino a alta mar dentro del Mediterráneo.

b) Los submarinos podrán pasar en tránsito previa notificación a las otras Potencias participantes, siempre que naveguen en la superficie y vayan acompañados por un barco de superficie.

c) Cada una de las Potencias participantes se reserva para hacer maniobras ciertas zonas descritas en el anexo I de este documento, en las que sus submarinos estarán exentos de las restricciones mencionadas en los incisos a) y b).

Las Potencias participantes se comprometen también a no permitir la presencia en sus respectivas aguas territoriales de ningún submarino extranjero, excepto en caso de que se halle en grave peligro, o cuando se cumplan las condiciones previstas en el inciso b).

VI. Las Potencias participantes convienen también en que, a fin de simplificar el problema que entraña la aplicación de las medidas enunciadas más arriba, pueden aconsejar a sus respectivos barcos mercantes que al navegar en el Mediterráneo sigan ciertas rutas principales que ellas han acordado y que se describen en el anexo II de ese convenio.

VII. Ninguna disposición del presente Convenio limita el derecho de cualquiera de las Potencias participantes a enviar sus barcos de superficie a cualquier parte del Mediterráneo.

VIII. Ninguna disposición del presente Convenio prejuzga en modo alguno los compromisos internacionales existentes que han sido registrados en la Secretaría de la Sociedad de las Naciones.

...^{66/}

45. El 17 de septiembre de 1937 se firmó en Ginebra un Acuerdo Complementario del Convenio de Nyon, en el cual se lee lo siguiente:

"Por cuanto en virtud del Convenio firmado en Nyon el 14 de septiembre de 1937, en virtud del cual se acordaron ciertas medidas colectivas relativas a los actos de piratería cometidos por submarinos en el Mediterráneo, y las Potencias participantes se reservaron el derecho de adoptar posibles nuevas medidas colectivas; y

"Por cuanto ahora se considera oportuno que dichas medidas se adopten contra actos semejantes perpetrados por barcos de superficie o por aviones;

"Los infrascritos, debidamente autorizados a este efecto por sus respectivos Gobiernos, se han reunido en conferencia en Ginebra el décimo séptimo día de septiembre y han llegado a un acuerdo sobre las siguientes disposiciones que entrarán en vigor inmediatamente:

I. El presente Acuerdo es complementario del Convenio de Nyon y será considerado como parte integrante de él;

II El presente Acuerdo es aplicable a cualquier ataque cometido en el Mediterráneo por un barco de superficie o por un avión contra un barco mercante no perteneciente a ninguna de las partes españolas en conflicto, cuando dicho ataque vaya acompañado por una violación de los principios humanitarios incorporados en las normas de derecho internacional con respecto a la guerra en el mar a que hace referencia la Parte IV del Tratado de Londres del 22 de abril de 1930, y confirmado en el Protocolo firmado en Londres el 6 de noviembre de 1936.

III. Todo barco de guerra de superficie encargado de la protección de barcos mercantes de conformidad con el Convenio de Nyon, que sea testigo de un ataque del tipo mencionado en el párrafo anterior, procederá de la siguiente manera:

^{66/} Ibid., vol. 181, pág. 135.

a) Si el ataque es cometido por un avión, abrirá fuego contra dicho avión;

b) Si el ataque es cometido por un barco de superficie, intervendrá para resistir al ataque en la medida de sus posibilidades, pidiendo ayuda si ella es posible y necesaria.

En las aguas territoriales, cada Potencia participante interesada dará instrucciones acerca de las medidas que habrán de adoptar sus propios barcos de guerra dentro del espíritu del presente Acuerdo.

...^{67/}

46. El Tratado de Paz con Bulgaria, firmado el 10 de febrero de 1947, contenía el siguiente artículo 13:

"Bulgaria no poseerá, ni fabricará, ni experimentará con ... proyectiles autopropulsados o dirigidos, ni dispositivos empleados en su lanzamiento (distintos de los torpedos o equipos de lanzamiento de torpedos que forman parte del armamento normal de los buques autorizados por el presente Tratado), ni minas marinas o torpedos detonables con mecanismos de influencia, ni torpedos tripulables, ni submarinos u otras embarcaciones sumergibles, ni lanchas torpederas, ni ningún tipo especializado de naves de asalto." ^{68/}

En los tratados de paz respectivos, firmados en París el 10 de febrero de 1947, se encuentran disposiciones semejantes con respecto a Finlandia, Hungría y Rumania ^{69/}. El Tratado de Paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947, incluye el siguiente artículo 51:

"Italia no poseerá, ni fabricará ni experimentará con ... proyectiles autopropulsados o dirigidos, ni dispositivos empleados para su lanzamiento (distintos de los torpedos o equipos de lanzamiento de torpedos que forman parte del armamento normal de los buques autorizados por el presente Tratado); ... iv) minas marinas o torpedos detonables con mecanismos de influencia; v) torpedos tripulables." ^{70/}

47. El Protocolo III (con sus anexos) sobre el control de armamentos, que forma parte del Protocolo que modifica y complementa el Tratado de Bruselas de 1948 sobre colaboración en cuestiones económicas, sociales y culturales y sobre defensa propia colectiva, se firmó en París el 23 de octubre de 1954. Entre otras cosas, en él se lee lo siguiente:

^{67/} Ibid., vol. 181, pág. 149.

^{68/} Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 41, pág. 21.

^{69/} Tratado de Paz con Finlandia, ibid., vol. 48, pág. 203 (artículo 17), Tratado de Paz con Hungría, ibid., vol. 41, pág. 135 (artículo 15) y Tratado de Paz con Rumania, ibid., vol. 42, pág. 3 (artículo 14).

^{70/} Ibid., vols. 49 y 50.

"Su Majestad el Rey de los Belgas, el Presidente de la República Francesa, Presidente de la Unión Francesa, el Presidente de la República Federal de Alemania, el Presidente de la República Italiana, Su Alteza Real la Gran Duquesa de Luxemburgo, Su Majestad la Reina de los Países Bajos, Su Majestad la Reina del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y de sus otros Dominios y Territorios y Jefe del Commonwealth, signatarios del Protocolo 71/ que modifica y complementa el Tratado de Bruselas. /Tratado sobre colaboración en cuestiones económicas, sociales y culturales y sobre defensa propia colectiva, firmado en Bruselas el 17 de marzo de 1948 72//

...

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I - Armamentos que no deberán fabricarse

Artículo 1

Las Altas Partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, toman nota y dejan constancia de su conformidad con la Declaración del Canciller de la República Federal de Alemania (formulada en Londres el 3 de octubre de 1954, que figura como anexo I al presente protocolo) según la cual la República Federal de Alemania se compromete a no fabricar en su territorio armas atómicas, biológicas ni químicas. Los tipos de armamentos a que se refiere en este artículo se describen en el anexo II. El Consejo de la Unión Europea Occidental describirá con mayor precisión dichos armamentos y actualizará las definiciones.

Artículo 2

Las Altas Partes Contratantes, miembros de la Unión Europea Occidental, toman nota y dejan constancia también de su conformidad con el compromiso formulado por el Canciller de la República Federal de Alemania en la misma Declaración, de que no se fabricarán otros tipos determinados de armamentos en el territorio de la República Federal de Alemania, salvo que, de conformidad con las necesidades de las fuerzas armadas, el Comandante Supremo competente de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte recomiende que se enmiende el contenido de la lista de dichos armamentos o que dicha lista sea cancelada, y si el Gobierno de la República Federal de Alemania presenta una solicitud en tal sentido, esa enmienda o cancelación podrá hacerse mediante una resolución del Consejo de la Unión Europea Occidental aprobada por mayoría de dos tercios. Los tipos de armamentos a que se alude en este artículo se enumeran en el anexo III.

...

71/ Ibid., vol. 211, pág. 341.

72/ Ibid., vol. 19, pág. 51.

ANEXO I

El Canciller Federal declara:

que la República Federal de Alemania se compromete también a no fabricar en su territorio armas como las que se detallan en los párrafos IV, V y VI de la lista adjunta [véase el anexo III, infra]. Toda enmienda sustancial de los párrafos IV, V y VI, o su cancelación, se efectuará mediante resolución del Consejo de Ministros de Bruselas aprobada por mayoría de dos tercios, si, de conformidad con las necesidades de las fuerzas armadas, así lo solicita el Comandante Supremo competente de la Organización del Atlántico del Norte;

que la República Federal acepta la supervisión por la autoridad competente de la Organización del Tratado de Bruselas para garantizar la observancia del presente compromiso.

...

ANEXO III

La lista comprende las armas descritas en los párrafos IV a VI y las fábricas destinadas exclusivamente a su producción. Todos los aparatos, repuestos, equipos, instalaciones, sustancias y organismos que se destinen a fines civiles o de investigación científica, médica e industrial en las esferas de la ciencia pura y aplicada, quedarán excluidos de esta definición.

IV. Misiles de largo alcance y minas de influencia

...

b) A reserva de las disposiciones del párrafo d), las minas de influencia se definen como minas navales que pueden detonarse automáticamente por influencias que provienen exclusivamente de agentes externos, incluidas las minas de influencia que fueron perfeccionadas en la reciente guerra y las ulteriores modificaciones a las mismas.

c) Los repuestos, dispositivos o montajes especialmente diseñados para su empleo en las armas mencionadas en los párrafos a) y b), o con ellas, deberán considerarse incluidas en esta definición.

...

V. Buques de guerra, excepto barcos pequeños de defensa

"Buques de guerra, excepto barcos más pequeños con fines de defensa, son los siguientes:

a) Buques de guerra de más de 3.000 toneladas de desplazamiento;

/...

- b) Submarinos de más de 350 toneladas de desplazamiento,
- c) Todos los buques de guerra que no sean propulsados por máquinas de vapor, Diesel o de petróleo, o por turbinas de gas o máquinas de retropropulsión."

...^{73/}

48. El artículo 13 del Tratado de Estado sobre el reestablecimiento de una Austria independiente y democrática, firmado en Viena el 15 de mayo de 1955, establece entre otras cosas: "Austria no poseerá, ni fabricará ni experimentará con ... c) proyectiles autopropulsados o dirigidos, ni torpedos o dispositivos destinados a lanzarlos o a controlarlos; d) minas marinas, e) torpedos tripulables; f) submarinos u otras embarcaciones sumergibles; g) lanchas torpederas, h) tipos especializados de naves de asalto ..." ^{74/}

^{73/} Ibid., vol. 211, pág. 364.

^{74/} Ibid., vol. 217, pág. 223.

PARTE III. PROHIBICIONES O RESTRICCIONES DEL EMPLEO DE ARMAMENTOS, RESULTANTES DE
LA PROTECCION CONCEDIDA A CIERTAS PERSONAS, ZONAS, LUGARES U OBJETOS

49. No todos los tratados ni disposiciones de tratados incluidos en la parte precedente del presente capítulo se ocupan directamente de las cuestiones relacionadas con la prohibición o restricción del uso de armas determinadas en los conflictos armados. Algunos de esos tratados o disposiciones regulan, respecto de un arma o tipo de arma concreto, actividades distintas del uso, en forma que podría restringir indirectamente los usos en conflictos armados. Sin embargo, todos los tratados y las disposiciones de los tratados incluidas en la parte precedente son de un carácter que se podría llamar "orientado hacia las armas". El objeto y propósito principal de cualquiera de esos tratados o disposiciones es regular determinadas actividades relacionadas con un arma o tipo de arma concreto, y la prohibición o restricción ulterior de su uso en conflictos armados se deriva directa o indirectamente de dichos tratados o disposiciones. La presente parte se refiere a otra clase de restricciones del uso de armas, concretamente, las que se derivan de la protección concedida en diversos tratados a determinadas personas, zonas, lugares u objetos. La regulación de las actividades relacionadas con armas concretas no es el principal objeto y propósito de estos tratados, aunque la aplicación de sus disposiciones implica, sin duda, restricciones en el uso de armas contra personas, zonas, lugares u objetos protegidos. Estas clases de restricciones son sumamente pertinentes para evaluar la legalidad o ilegalidad del uso de un arma o tipo de arma concreto en virtud de la norma de los efectos indiscriminados mencionada en la parte I del presente capítulo. Sin tratar en modo alguno de agotar la materia, a continuación se citan, a manera de ejemplo, varias disposiciones particulares de los tratados a que se hace referencia.

SECCION 1. PERSONAS CIVILES

50. Como se indicó anteriormente 75/, la norma de que las partes en un conflicto armado han de respetar y proteger a las personas civiles está bien establecida en el derecho internacional y se ha incorporado en varios instrumentos internacionales, en particular en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949 76/.

51. El Convenio dice, entre otras cosas, lo siguiente:

...

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Las Altas Partes contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas circunstancias.

75/ Véase el párrafo 5 del presente capítulo.

76/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, pág. 161.

Artículo 2

Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o varias de las Altas Partes contratantes, aunque el estado de guerra no haya sido reconocido por cualquiera de ellas.

El Convenio se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte contratante, aunque esta ocupación no encuentre resistencia militar.

Si una de las Potencias contendientes no fuese parte en el presente Convenio, las Potencias que en él lo sean continuarán estando obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Estarán obligadas además por el Convenio respecto a la dicha Potencia, siempre que ésta acepte y aplique sus disposiciones.

Artículo 3

En caso de conflicto armado sin carácter internacional y que surja en el territorio de una de las Partes contratantes, cada una de las Partes contendientes tendrá obligación de aplicar por lo menos las disposiciones siguientes:

- 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, heridas, detención, o por cualquiera otra causa, serán tratadas, en todas circunstancias, con humanidad, sin distinción alguno de carácter desfavorable basado en la raza, el color, la religión o las creencias, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo.

A tal efecto, están y quedan prohibidos, en todo tiempo y lugar, respecto a las personas arriba aludidas:

- a) los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios;
- b) la toma de rehenes;
- c) los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes;
- d) las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio por un tribunal regularmente constituido y dotado de las garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados.

2) Los heridos y enfermos serán recogidos y cuidados.

Podrá ofrecer sus servicios a las Partes contendientes cualquier organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja.

Las Partes contendientes se esforzarán, por otra parte, por poner en vigor mediante acuerdos especiales algunas o todas las demás disposiciones del presente Convenio.

La aplicación de las disposiciones precedentes no producirá efecto sobre el estatuto jurídico de las Partes contendientes.

Artículo 4

Quedan protegidas por el Convenio las personas que, en un momento cualquiera y de cualquier manera que sea, se encontraren, en caso de conflicto u ocupación, en poder de una Parte contendiente o de una Potencia ocupante de la cual no sean súbditas.

No están protegidos por el Convenio los súbditos de un Estado que no sea parte en él. Los ciudadanos de un Estado neutral que se encuentren en el territorio de un Estado beligerante y los ciudadanos de un Estado cobeligerante no estarán considerados como personas protegidas, mientras el Estado de que sean súbditos mantenga representación diplomática normal ante el Estado en cuyo poder se encuentren.

Las disposiciones del Título II tienen sin embargo un campo de aplicación más extenso, definido en el artículo 13.

Las personas protegidas por el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña, o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar, o por el de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo al trato de prisioneros de guerra, no serán consideradas como personas protegidas en el sentido del presente Convenio.

...

TITULO II

PROTECCION GENERAL DE LAS POBLACIONES CONTRA CIERTOS EFECTOS DE LA GUERRA

Artículo 13

Las disposiciones del presente título se refieren al conjunto de las poblaciones de los países contendientes sin distinción alguno desfavorable, especialmente en cuanto a la raza, la nacionalidad, la religión o la opinión política, y tienen por objetivo aliviar los sufrimientos engendrados por la guerra.

/...

Artículo 14

En tiempo de paz, las Altas Partes contratantes y, después de la ruptura de hostilidades, las Partes contendientes, podrán crear en su propio territorio y, si necesario fuese, en los territorios ocupados, zonas y localidades sanitarias y de seguridad organizadas de modo que queden al abrigo de los efectos de la guerra, los heridos y enfermos, los inválidos, las personas de edad, los niños menores de quince años, las mujeres encintas y las madres de criaturas de menos de siete años.

Desde el comienzo de un conflicto y en el curso de éste, las Partes interesadas tendrán facultad para concertar entre ellas acuerdos respecto al reconocimiento de las zonas y localidades que hayan establecido. Podrán a tal efecto poner en vigor las disposiciones previstas en el proyecto de acuerdo que figura en anejo al presente Convenio, aportándole eventualmente las modificaciones que estimen necesarias.

Las Potencias protectoras y el Comité Internacional de la Cruz Roja quedan requeridos a prestar sus buenos oficios para facilitar el establecimiento y el reconocimiento de las dichas zonas y localidades sanitarias y de seguridad.

Artículo 15

Toda Parte contendiente podrá, ya sea directamente o por intermedio de un Estado neutral o de un organismo humanitario, proponer a la Parte adversaria la creación, en las regiones donde tengan lugar los combates, de zonas neutralizadas destinadas a poner al abrigo de los peligros de los combates, sin distinción alguna, a las personas siguientes:

- a) heridos y enfermos, combatientes o no combatientes;
- b) personas civiles que no participen en las hostilidades y que no ejecuten ningún trabajo de carácter militar durante su estancia en dichas zonas.

En cuanto las Partes contendientes se hayan puesto de acuerdo sobre la situación geográfica, la administración, el aprovisionamiento y el control de la zona neutralizada prevista, se redactará un acuerdo que habrá de ser firmado por los representantes de las Partes contendientes. Este acuerdo fijará el comienzo y la duración de la neutralización de la zona.

Artículo 16

Los heridos y enfermos, así como los inválidos y mujeres encintas, serán objeto de particular protección y respeto.

En la medida que las exigencias militares lo permitan, cada una de las Partes contendientes favorecerá las gestiones emprendidas para la búsqueda

de muertos y heridos, para acudir en ayuda de los náufragos y otras personas expuestas a graves peligros, y para ampararlas contra saqueos y malos tratos.

Artículo 17

Las Partes contendientes se esforzarán por concertar arreglos locales para la evacuación de una zona sitiada o acorralada, de heridos, enfermos, inválidos, ancianos, niños y parturientas, así como para el paso de ministros de todas las religiones, del personal y del material sanitarios destinados a dicha zona.

Artículo 18

En ninguna circunstancia podrán ser objeto de ataques los heridos, enfermos, inválidos y mujeres de parto; estas personas serán, en todo momento, respetadas y protegidas por las Partes contendientes.

Los Estados partícipes en un conflicto deberán entregar a todos los hospitales civiles un documento en que se testimonie su carácter de hospital civil y certificando que los edificios por ellos ocupados no son utilizados a fines que, a tenor del artículo 19, pudieran privarlos de protección.

Los hospitales civiles estarán señalados, si a ello los autoriza el Estado, por medio del emblema prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 77/, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

En tanto que las exigencias militares lo permitan, las Partes contendientes tomarán todas las medidas necesarias para hacer claramente visibles a las fuerzas enemigas, terrestres, aéreas y marítimas, los emblemas distintivos que señalen los hospitales civiles, a fin de descartar toda posibilidad de acto agresivo.

En razón de los peligros que pueda presentar para los hospitales la proximidad de objetivos militares, convendrá cuidar de que se hallen lo más lejanos posible.

Artículo 19

La protección debida a los hospitales civiles no podrá cesar más que si de ella se hace uso para cometer, aparte de los deberes humanitarios, actos dañosos para el enemigo. Sin embargo, la protección sólo cesará después de aviso en que se fije, en todos los casos oportunos, un plazo razonable y que éste quede sin efecto.

No será considerado como acto dañoso el hecho de que se esté asistiendo a militares enfermos y heridos en dichos hospitales o que en ellos se encuentren armas portátiles y municiones retiradas a esos militares y que todavía no hayan sido remitidas al servicio competente.

Artículo 20

Será respetado y protegido el personal regular y únicamente afectado al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, incluso el que esté encargado de la búsqueda, de la recogida, del transporte y de la asistencia de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas.

En los territorios ocupados y las zonas de operaciones militares, este personal se dará a conocer por medio de una tarjeta de identidad que testifique la calidad del titular, esté provista de su fotografía y ostente el sello en seco de la autoridad responsable, e igualmente, mientras esté montando servicio, por un brazal timbrado resistente a la humedad y colocado en el brazo izquierdo. Este brazal lo entregará el Estado y estará dotado del emblema prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Cualquier otro personal, afecto al funcionamiento o a la administración de los hospitales civiles, será respetado y protegido, teniendo derecho a llevar el brazal como arriba se dispone y bajo las condiciones prescritas en el presente artículo, durante el desempeño de sus funciones. Su tarjeta de identidad especificará las tareas de su incumbencia.

La dirección de cada hospital civil tendrá en todo tiempo a disposición de las autoridades competentes, nacionales u ocupantes, la lista al día de su personal.

Artículo 21

Los transportes de heridos y enfermos civiles, de inválidos y de parturientas, efectuados por tierra en convoyes de vehículos y trenes-hospitales, o por mar, en barcos afectos a tales transportes, habrán de ser respetados y protegidos a igual título que los hospitales de que habla el artículo 18, y se darán a conocer enarbolando, con autorización del Estado, el emblema distintivo prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Artículo 22

Las aeronaves exclusivamente empleadas para el transporte de heridos y enfermos civiles, de inválidos y parturientas, o para el transporte de personal y material sanitario, no serán atacadas, sino que habrán de ser respetadas cuando vayan volando a alturas, horas y por rutas específicamente convenidas, de consuno, entre todas las Partes contendientes interesadas en el conflicto.

Podrán ir señaladas con el emblema distintivo prescrito en el artículo 38 del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña.

Salvo acuerdo en contrario, queda prohibido volar sobre territorio enemigo o territorios ocupados por éste.

Dichas aeronaves habrán de obedecer a cualquier intimación de aterrizaje. En caso de aterrizaje así impuesto, la aeronave y sus ocupantes podrán continuar el vuelo, previo eventual examen.

...

TITULO III

ESTATUTO Y TRATO DE LAS PERSONAS PROTEGIDAS^{78/}

...

TITULO IV

EJECUCION DEL CONVENIO

...

Artículo 147

Las infracciones graves a que alude el artículo anterior son las que implican cualquiera de los actos siguientes, si se cometieren contra personas o bienes protegidos por el Convenio: homicidio adrede, tortura o tratos inhumanos, incluso experiencias biológicas, causar intencionalmente grandes sufrimientos o atentar gravemente a la integridad física o a la salud, las deportaciones y traslados ilegales, la detención ilegítima, coaccionar a una persona protegida a servir en las fuerzas armadas de la Potencia enemiga, o privarla de su derecho a ser juzgada normal e imparcialmente según las estipulaciones del presente Convenio, la toma de rehenes, la destrucción y apropiación de bienes no justificadas por necesidades militares y ejecutadas en gran escala de modo ilícito y arbitrario.

...

Artículo 154

En las relaciones entre las Potencias obligadas por el Convenio de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra en tierra, trátase del de 29 de julio de 1899 o del de 18 de octubre de 1907, y que tomen parte en el presente Convenio, este último completará las secciones II y III del Reglamento que figura en anejo a los dichos Convenios de La Haya.

^{78/} Según la definición contenida en el artículo 4 del Convenio, citado anteriormente.

...

Artículo 158

Cada una de las Altas Partes contratantes tendrá la facultad de denunciar el presente Convenio.

La denuncia se notificará por escrito al Consejo federal suizo, el cual comunicará la notificación a los gobiernos de todas las Altas Partes contratantes.

La denuncia producirá sus efectos un año después de la notificación al Consejo federal suizo. Sin embargo, la denuncia notificada cuando la Potencia denunciante esté ya envuelta en un conflicto no producirá efecto alguno hasta que la paz se haya concertado y, en todo caso, mientras las operaciones de liberación, de repatriación y de establecimiento de las personas protegidas por el presente Convenio no se hayan terminado.

La denuncia sólo será válida respecto a la Potencia denunciante. No producirá efecto alguno sobre las obligaciones que las Partes contendientes tengan que cumplir en virtud de los principios del derecho de gentes tales y como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública.

...

52. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1948 ^{79/}, dice en su artículo I "que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional" que las Partes contratantes "se comprometen a prevenir y sancionar" /subrayado añadido/. Como se recordará, según el artículo II de la Convención "se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial, o religioso, como tal: a) matanza de miembros del grupo; b) lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear a su destrucción física, total o parcial; d) medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo".

SECCION 2. CIUDADES, ALDEAS, PUERTOS, VIVIENDAS Y EDIFICIOS INDEFENSOS

53. Varios instrumentos contienen disposiciones que protegen a las ciudades, aldeas, viviendas, edificios y puertos indefensos contra el bombardeo. El artículo 25 del reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre anexo a la Convención de La Haya de 1899 (II) dispone que "queda prohibido atacar o bombardear

^{79/} Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 78, pág. 298.

/...

ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no están defendidos". El reglamento anexo a la Convención de La Haya de 1907 (IV) reproduce el mismo texto con la adición de las palabras "de cualquier modo" después de las palabras "atacar o bombardear". El artículo 26 del reglamento anexo a ambas Convenciones declara que el comandante de las tropas asaltantes, antes de emprender el bombardeo, y salvo el caso de ataque a viva fuerza, "deberá hacer todo lo que de él dependa para dar el correspondiente aviso a las autoridades".

54. Además, el artículo 27 del reglamento sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre anexo a la Convención de La Haya de 1899 (II) dispone lo siguiente:

"En los sitios y bombardeos deberán tomarse todas las medidas necesarias para respetar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados al culto, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y los centros de reunión de enfermos y heridos, siempre que no se utilicen dichos edificios con un fin militar.

Es deber de los sitiados señalar estos edificios o sitios de reunión con signos visibles y especiales, que serán notificados de antemano al sitiador."

En el reglamento anexo a la Convención de La Haya de 1907 (IV) se agregó "monumentos históricos" a la enumeración de edificios hecha en el artículo.

55. La Segunda Conferencia de la Paz celebrada en La Haya en 1907 aprobó también una Convención (IX) relativa al bombardeo por fuerzas navales de puertos, ciudades, aldeas, viviendas y edificios indefensos. La Convención dice lo siguiente 80/:

"[Las Potencias contratantes]

Animadas del deseo de realizar el voto expresado por la Primera [1899] Conferencia de la Paz, acerca del bombardeo, por fuerzas navales, de puertos, ciudades y aldeas indefensas:

Considerando que conviene someter los bombardeos por fuerzas navales a disposiciones generales que salvaguardan los derechos de los habitantes y aseguren la conservación de los edificios más importantes, aplicando a esta operación de guerra, en la medida de lo posible, los principios del Reglamento de 1889 sobre las leyes y costumbres de la guerra terrestre;

Inspirándose, en consecuencia, en el deseo de servir los intereses de la humanidad y disminuir los rigores y los desastres de la guerra;

Han resuelto celebrar un Convenio, y a este efecto han nombrado como sus Plenipotenciarios, a los siguientes:

...

Los cuales, después de haberse comunicado sus Plenipotencias y hallándolas en buena y debida forma, han acordado las siguientes disposiciones:

80/ Para el texto original francés, véase De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 3ème série, t. 3, pág. 604.

Capítulo I. Del bombardeo de los puertos, ciudades, aldeas, viviendas y edificios indefensos

Artículo 1

Se prohíbe bombardear, por fuerzas navales, puertos, ciudades, aldeas, viviendas o edificios que no estén defendidos.

Una localidad no puede ser bombardeada por el solo hecho de que delante de su puerto se hallen colocadas minas submarinas automáticas de contacto.

Artículo 2

Sin embargo, no están comprendidas en esta prohibición las obras militares, establecimientos militares o navales, depósitos de armas o material de guerra, talleres e instalaciones que puedan ser utilizados para las necesidades de la marina o del ejército enemigos, y los buques de guerra que se encuentren en el puerto. El Comandante de una fuerza naval podrá, después de una intimación con plazo razonable, destruirlos con su artillería, si es imposible todo otro medio y en el caso de que las propias autoridades locales no hayan procedido a esta destrucción en el plazo fijado.

En este caso, no incurre en responsabilidad alguna por los daños involuntarios que pudiera ocasionar el bombardeo.

Si las necesidades militares exigen una acción inmediata y no permiten conceder un plazo, queda entendido que la prohibición de bombardear la ciudad indefensa subsiste como en el caso enunciado en el primer párrafo y que el comandante tomará todas las disposiciones necesarias para que la ciudad sufra los menores daños que sea posible.

Artículo 3

Después de notificación expresa, se podrá proceder al bombardeo de los puertos, ciudades, aldeas, viviendas o edificios indefensos, si las autoridades locales, requeridas por una intimación formal, rehusan acceder a las requisiciones de víveres o de aprovisionamientos necesarios para uso inmediato de la fuerza naval que se encuentra frente a la localidad.

Estas requisiciones guardarán relación con los recursos de la localidad. Sólo serán exigidas en nombre del comandante de dicha fuerza naval, y, en lo posible, serán pagadas al contado; de lo contrario, se dejará constancia por medio de recibos.

Artículo 4

Se prohíbe el bombardeo de los puertos, ciudades, aldeas, viviendas o edificios indefensos, por razón de la falta de pago de contribuciones de dinero.

Capítulo II. Disposiciones generales

Artículo 5

En el bombardeo por fuerzas navales, el comandante debe tomar las medidas necesarias para salvar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los monumentos históricos, los hospitales y los lugares de reunión de enfermos o de heridos, a condición de que no estén empleados al mismo tiempo con fines militares.

Es deber de los habitantes señalar estos monumentos, edificios o lugares de reunión, con signos visibles, que consistirán en grandes paneles rectangulares, rígidos, divididos diagonalmente en dos triángulos de colores negro en la parte superior y blanco en la parte inferior.

Artículo 6

En cuanto las exigencias militares lo permitieran, el comandante de la fuerza naval atacante, antes de emprender el bombardeo, debe hacer cuanto depende de él para advertir a las autoridades.

Artículo 7

Está prohibido entregar al saqueo una población o localidad, aun en el caso de que se tome por asalto.

...

56. Con respecto al bombardeo aéreo, ya se hizo referencia, en la sección 6 de la parte II supra, a la Declaración de La Haya de 1899 (IV,1) y a la Declaración de La Haya de 1907 (XIV), por las que se prohíbe el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde globos. Para las disposiciones sobre el bombardeo aéreo que figuran en las reglas sobre la guerra aérea preparadas en 1922 y 1923 por una comisión intergubernamental, véase la sección 6 del capítulo II, infra.

SECCION 3. BIENES CULTURALES

57. Como ya se ha indicado, las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 contenían disposiciones encaminadas a proteger los edificios dedicados al culto, las artes y la ciencia, y los monumentos históricos. En 1954 una conferencia intergubernamental, convocada bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para

/...

la Educación, la Ciencia y la Cultura, aprobó la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado 81/. La Convención, firmada en La Haya el 14 de mayo de 1954, dice entre otras cosas lo siguiente:

Las Altas Partes Contratantes,

Reconociendo que los bienes culturales han sufrido graves daños en el curso de los últimos conflictos armados y que, como consecuencia del desarrollo de la técnica de la guerra, están cada vez más amenazados de destrucción;

Convencidas de que los daños ocasionados a los bienes culturales pertenecientes a cualquier pueblo constituyen un menoscabo al patrimonio cultural de toda la humanidad, puesto que cada pueblo aporta su contribución a la cultura mundial;

Considerando que la conservación del patrimonio cultural presenta una gran importancia para todos los pueblos del mundo y que conviene que ese patrimonio tenga una protección internacional;

Inspirándose en los principios relativos a la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, proclamados en las Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 y en el Pacto de Washington del 25 de abril de 1935;

Considerando que esta protección no puede ser eficaz a menos que se organice en tiempo de paz, adoptando medidas tanto en la esfera nacional como en la internacional;

Resueltas a adoptar todas las disposiciones posibles para proteger los bienes culturales;

Han convenido en las disposiciones siguientes:

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LA PROTECCION

Artículo 1

DEFINICION DE LOS BIENES CULTURALES

Para los fines de la presente Convención, se considerarán bienes culturales, cualquiera que sea su origen y propietario:

81/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 249, pág. 293.

a) los bienes, muebles o inmuebles, que tengan una gran importancia para el patrimonio cultural de los pueblos, tales como los monumentos de arquitectura, de arte o de historia, religiosos o seculares, los campos arqueológicos, los grupos de construcciones que por su conjunto ofrezcan un gran interés histórico o artístico, las obras de arte, manuscritos, libros y otros objetos de interés histórico, artístico o arqueológico, así como las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, de archivos o de reproducciones de los bienes antes definidos;

b) los edificios cuyo destino principal y efectivo sea conservar o exponer los bienes culturales muebles definidos en el apartado a), tales como los museos, las grandes bibliotecas, los depósitos de archivos, así como los refugios destinados a proteger en caso de conflicto armado los bienes culturales muebles definidos en el apartado a);

c) los centros que comprendan un número considerable de bienes culturales definidos en los apartados a) y b), que se denominarán "centros monumentales".

Artículo 2

PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES

La protección de los bienes culturales, a los efectos de la presente Convención, entraña la salvaguardia y el respeto de dichos bienes.

Artículo 3

SALVAGUARDIA DE LOS BIENES CULTURALES

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a preparar en tiempo de paz, la salvaguardia de los bienes culturales situados en su propio territorio contra los efectos previsibles de un conflicto armado, adoptando las medidas que consideren apropiadas.

Artículo 4

RESPETO A LOS BIENES CULTURALES

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar los bienes culturales situados tanto en su propio territorio como en el de las otras Altas Partes Contratantes, absteniéndose de utilizar esos bienes, sus sistemas de protección y sus proximidades inmediatas para fines que pudieran exponer dichos bienes a destrucción o deterioro en caso de conflicto armado, y absteniéndose de todo acto de hostilidad respecto de tales bienes.

2. Las obligaciones definidas en el párrafo primero del presente artículo no podrán dejar de cumplirse más que en el caso de que una necesidad militar impida de manera imperativa su cumplimiento.

3. Las Altas Partes Contratantes se comprometen además a prohibir, a impedir y a hacer cesar, en caso necesario, cualquier acto de robo, de pillaje, de ocultación o apropiación de bienes culturales, bajo cualquier forma que se practique, así como todos los actos de vandalismo respecto de dichos bienes. Se comprometen también a no requisar bienes culturales muebles situados en el territorio de otra Alta Parte Contratante.

4. Aceptan el compromiso de no tomar medidas de represalia contra los bienes culturales.

5. Ninguna de las Altas Partes Contratantes puede desligarse de las obligaciones estipuladas en el presente artículo, con respecto a otra Alta Parte Contratante, pretextando que esta última no hubiera aplicado las medidas de salvaguardia establecidas en el artículo 3.

...

Artículo 6

IDENTIFICACION DE LOS BIENES CULTURALES

De acuerdo con lo que establece el artículo 16, los bienes culturales podrán ostentar un emblema que facilite su identificación.

Artículo 7

DEBERES DE CARACTER MILITAR

1. Las Altas Partes Contratantes se comprometen a introducir en tiempo de paz en los reglamentos y ordenanzas para uso de sus tropas, disposiciones encaminadas a asegurar la observancia de la presente Convención y a inculcar en el personal de sus fuerzas armadas un espíritu de respeto a la cultura y a los bienes culturales de todos los pueblos.

2. Se comprometen asimismo a preparar o establecer en tiempo de paz y en el seno de sus unidades militares, servicios o personal especializado cuya misión consista en velar por el respeto a los bienes culturales y colaborar con las autoridades civiles encargadas de la salvaguardia de dichos bienes.

CAPITULO II

DE LA PROTECCION ESPECIAL

Artículo 8

CONCESION DE LA PROTECCION ESPECIAL

1. Podrán colocarse bajo protección especial un número restringido de refugios destinados a preservar los bienes culturales muebles en caso de conflicto armado, de centros monumentales y otros bienes culturales inmuebles de importancia muy grande, a condición de que:

/...

a) se encuentren a suficiente distancia de un gran centro industrial o de cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una gran estación ferroviaria de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones;

b) no sean utilizados para fines militar.

2. Puede asimismo colocarse bajo protección especial todo refugio para bienes culturales muebles, cualquiera que sea su situación, siempre que esté construido de tal manera que según todas las probabilidades no haya de sufrir daños como consecuencia de bombardeos.

3. Se considerará que un centro monumental está siendo utilizado para fines militares cuando se emplee para el transporte de personal o material militares, aunque sólo se trate de simple tránsito, así como cuando se realicen dentro de dicho centro actividades directamente relacionadas con las operaciones militares, el acantonamiento de tropas o la producción de material de guerra.

4. No se considerará como utilización para fines militares la custodia de uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero por guardas armados, especialmente habilitados para dicho fin, ni la presencia cerca de ese bien cultural de fuerzas de policía normalmente encargadas de asegurar el orden público.

5. Si uno de los bienes culturales enumerados en el párrafo primero del presente artículo está situado cerca de un objetivo militar importante en el sentido de ese párrafo, se le podrá colocar bajo protección especial siempre que la Alta Parte Contratante que lo pida se comprometa a no hacer uso ninguno en caso de conflicto armado del objetivo en cuestión, y, especialmente, si se tratase de un puerto, de una estación ferroviaria o de un aeródromo, a desviar del mismo todo tráfico. En tal caso, la desviación debe prepararse en tiempo de paz.

6. La protección especial se concederá a los bienes culturales mediante su inscripción en el "Registro Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Especial". Esta inscripción no podrá efectuarse más que conforme a las disposiciones de la presente Convención y en las condiciones previstas en el Reglamento para su aplicación.

Artículo 9

INMUNIDAD DE LOS BIENES CULTURALES BAJO PROTECCION ESPECIAL

Las Altas Partes Contratantes se comprometen a garantizar la inmunidad de los bienes culturales bajo protección especial absteniéndose, desde el momento de la inscripción en el Registro Internacional, de cualquier acto de hostilidad respecto de ellos salvo lo establecido en el párrafo 5 del artículo 8 y de toda utilización de dichos bienes o de sus proximidades inmediatas con fines militares.

Artículo 10

SEÑALAMIENTO Y VIGILANCIA

En el curso de un conflicto armado, los bienes culturales bajo protección especial deberán ostentar el emblema descrito en el artículo 16 y podrán ser objeto de inspección y vigilancia internacional, del modo previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

Artículo 11

SUSPENSION DE LA INMUNIDAD

1. Si una de las Altas Partes Contratantes cometiere, con relación a un bien cultural bajo protección especial, una violación del compromiso adquirido en virtud del artículo 9, la Parte adversa queda desligada, mientras la violación subsista, de su obligación de asegurar la inmunidad de dicho bien. Sin embargo, siempre que le sea posible pedirá previamente que cese dicha violación dentro de un plazo razonable.

2. A reserva de lo establecido en el párrafo primero del presente artículo, sólo podrá suspenderse la inmunidad de un bien cultural bajo protección especial en casos excepcionales de necesidad militar ineludible y mientras subsista dicha necesidad. La necesidad no podrá ser determinada más que por el jefe de una formación igual o superior en importancia a una división. Siempre que las circunstancias lo permitan, la decisión de suspender la inmunidad se notificará a la Parte adversaria con una antelación razonable.

3. La Parte que suspenda la inmunidad deberá, en el plazo más breve posible, notificarlo por escrito, especificando las razones, al Comisario General de Bienes Culturales previsto en el Reglamento para la aplicación de la Convención.

CAPITULO III

DEL TRANSPORTE DE BIENES CULTURALES

Artículo 12

TRANSPORTE BAJO PROTECCION ESPECIAL

1. A petición de la Alta Parte Contratante interesada, podrá efectuarse bajo protección especial el transporte exclusivamente destinado al traslado de bienes culturales, tanto en el interior de un territorio como en dirección a otro, en las condiciones previstas por el Reglamento para la aplicación de la presente Convención.

2. El transporte que sea objeto de protección especial se efectuará bajo la inspección internacional prevista en el Reglamento para la aplicación de la presente Convención, y los convoyes ostentarán el emblema descrito en el artículo 16.

3. Las Altas Partes Contratantes se abstendrán de todo acto de hostilidad contra un transporte efectuado bajo protección especial.

Artículo 13

TRANSPORTE EN CASOS DE URGENCIA

1. Si una de las Altas Partes Contratantes considerase que la seguridad de determinados bienes culturales exige su traslado y que no puede aplicarse el procedimiento establecido en el artículo 12 por existir una situación de urgencia, especialmente al estallar un conflicto armado, se podrá utilizar en el transporte el emblema descrito en el artículo 16, a menos que previamente se haya formulado la petición de inmunidad prevista en el artículo 12 y haya sido rechazada. Dentro de lo posible, el traslado deberá ser notificado a las Partes adversarias. Sin embargo, en el transporte al territorio de otro país no se podrá en ningún caso utilizar el emblema a menos que se haya concedido expresamente la inmunidad.

2. Las Altas Partes Contratantes tomarán, en la medida de sus posibilidades, las precauciones necesarias para que los transportes amparados por el emblema a que se refiere el párrafo primero del presente artículo sean protegidos contra actos hostiles.

Artículo 14

INMUNIDAD DE EMBARGO, DE CAPTURA Y DE PRESA

1. Se otorgará la inmunidad de embargo, de captura y de presa a:

a) los bienes culturales que gocen de la protección prevista en el artículo 12 o de la que prevé el artículo 13;

b) los medios de transporte dedicados exclusivamente al traslado de dichos bienes.

2. En el presente artículo no hay limitación alguna al derecho de visita y de vigilancia.

CAPITULO IV

DEL PERSONAL

Artículo 15

PERSONAL

En interés de los bienes culturales, se respetará, en la medida en que sea compatible con las exigencias de la seguridad, al personal encargado de la protección de aquéllos; si ese personal cayere en manos de la Parte adversaria se le permitirá que continúe ejerciendo sus funciones, siempre que los bienes culturales a su cargo hubieren caído también en manos de la Parte adversaria.

CAPITULO V

DEL EMBLEMA

...

CAPITULO VI

CAMPO DE APLICACION DE LA CONVENCION

Artículo 18

APLICACION DE LA CONVENCION

1. Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor en tiempo de paz, la presente Convención se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que pueda surgir entre dos o más de las Altas Partes Contratantes, aun cuando alguna de Ellas no reconozca el estado de guerra.

2. La Convención se aplicará igualmente en todos los casos de ocupación de todo o parte del territorio de una Alta Parte Contratante, aun cuando esa ocupación no encuentre ninguna resistencia militar.

3. Las Potencias Partes en la presente Convención quedarán obligadas por la misma, aun cuando una de las Potencias que intervengan en el conflicto no sea Parte en la Convención. Estarán además obligadas por la Convención con respecto a tal Potencia, siempre que ésta haya declarado que acepta los principios de la Convención y en tanto los aplique.

/...

Artículo 19

CONFLICTOS DE CARACTER NO INTERNACIONAL

1. En caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que haya surgido en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las partes en conflicto estará obligada a aplicar, como mínimo, las disposiciones de esta Convención, relativas al respeto de los bienes culturales.

2. Las partes en conflicto procurarán poner en vigor, mediante acuerdos especiales, todas las demás disposiciones de la presente Convención o parte de ellas.

3. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto.

4. La aplicación de las precedentes disposiciones no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto.

CAPITULO VII

DE LA APLICACION DE LA CONVENCION

...

DISPOSICIONES FINALES

...

Artículo 36

RELACION CON LAS CONVENCIONES ANTERIORES

1. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por las Convenciones de La Haya relativas a las leyes y usos de la guerra terrestre (IV) y a los bombardeos por fuerzas navales en tiempo de guerra (IX), ya se trate de las del 29 de julio de 1899 o de las del 18 de octubre de 1907, y que sean Partes de la presente Convención, esta última completará la anterior Convención (IX) y el Reglamento anexo a la Convención (IV) y se reemplazará el emblema descrito en el artículo 5 de la Convención (IX) por el descrito en el artículo 16 de la presente Convención en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación, prevén el empleo de dicho emblema.

2. En las relaciones entre las Potencias que estén obligadas por el Pacto de Washington del 15 de abril de 1935 para la protección de Instituciones Artísticas y Científicas y los Monumentos Históricos (Pacto Roerich) y que sean también Partes en la presente Convención, esta última completará el Pacto Roerich, y se reemplazará la bandera distintiva descrita en el artículo III del Pacto por el emblema descrito en el artículo 16 de la presente Convención, en los casos en que ésta y el Reglamento para su aplicación prevén el empleo de dicho emblema.

/...

...

REGLAMENTO PARA LA APLICACION DE LA CONVENCION PARA
LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE
CONFLICTO ARMADO

..."

SECCION 4. ZONAS PROTEGIDAS

58. Algunos de los tratados "orientados hacia las armas" citados en la parte II supra, como el Tratado para la proscripción de las armas nucleares en la América Latina, el Tratado por el que se prohíben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, en el espacio ultraterrestre y debajo del agua y el Tratado sobre prohibición de emplazar armas nucleares y otras armas de destrucción en masa en los fondos marinos y oceánicos y su subsuelo, se refieren, como lo indican sus títulos, a ciertas zonas bien determinadas. Las prohibiciones o restricciones que afectan de alguna manera el uso de armas en zonas determinadas a veces se incorporan también en tratados del tipo de los comprendidos en la presente sección. Un ejemplo importante es el Tratado Antártico, firmado en Washington el 1.º de diciembre de 1959 82/, que, entre otras cosas, dice lo siguiente:

"Los Gobiernos de Argentina, Australia, Bélgica, Chile, la República Francesa, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la Unión del Africa del Sur, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Estados Unidos de América;

Reconociendo que es en interés de toda la humanidad que la Antártida continúe utilizándose siempre exclusivamente para fines pacíficos y que no llegue a ser escenario u objeto de discordia internacional;

Reconociendo la importancia de las contribuciones aportadas al conocimiento científico como resultado de la cooperación internacional en la investigación científica en la Antártida;

Convencidos de que el establecimiento de una base sólida para la continuación y el desarrollo de dicha cooperación, fundada en la libertad de investigación científica en la Antártida, como fuera aplicada durante el Año Geofísico Internacional, concuerda con los intereses de la ciencia y el progreso de toda la humanidad;

Convencidos también de que un Tratado que asegure el uso de la Antártida exclusivamente para fines pacíficos y la continuación de la armonía internacional en la Antártida promoverá los propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas;

Han acordado lo siguiente:

82/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 402, pág. 87.

Artículo I

1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos. Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar, tal como el establecimiento de bases y fortificaciones militares, la realización de maniobras militares, así como los ensayos de toda clase de armas.

2. El presente Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico.

...

Artículo V

1. Toda explosión nuclear en la Antártida y la eliminación de desechos radiactivos en dicha región quedan prohibidas.

2. En caso de que se concluyan acuerdos internacionales relativos al uso de la energía nuclear, comprendidas las explosiones nucleares y la eliminación de desechos radiactivos, en los que sean Partes todas las Partes Contratantes cuyos representantes estén facultados a participar en las reuniones previstas en el Artículo IX, las normas establecidas en tales acuerdos se aplicarán en la Antártida."

59. Las disposiciones de los tratados relativas a zonas neutralizadas, desmilitarizadas o de seguridad constituyen ejemplos que también se podrían mencionar en el presente contexto 83/. Los canales de interés para la navegación internacional a veces también están protegidos contra actos de guerra mediante tratados 84/.

83/ Por ejemplo, las zonas de seguridad a que se hace referencia en el artículo 14 del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra de 1949 (véase supra, párr. 51).

84/ Por ejemplo, el Convenio de Constantinopla de 1888 acerca de la libre navegación del Canal Marítimo de Suez dice, en su artículo 1, que "Las Altas Partes Contratantes convienen en que ningún derecho de guerra, ningún acto de hostilidad o ningún acto que tenga por objeto entrabar la libre navegación del Canal podrá ser ejercido en el Canal ni en sus puertos de acceso, ni en un radio de tres millas marinas desde esos puertos, aun cuando el Imperio Otomano sea una de las Potencias beligerantes" (véase American Journal of International Law, vol. 3 (1909), Suppl., pág. 123. Para el texto francés, véase De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, 2ème série, t. 15, pág. 557).

CAPITULO II. PRACTICA Y DOCTRINA DE LOS ESTADOS

PARTE I. LAS ARMAS CLASIFICADAS SEGUN SU NATURALEZA

SECCION 1. VENENO Y ARMAS ENVENENADAS

A. Práctica de los Estados

1. Los manuales militares de Austria 1/, Ecuador 2/, la República Federal de Alemania 3/, los Países Bajos 4/, Suecia 5/, Suiza 6/, el Reino Unido 7/ y los Estados Unidos 8/ contienen la prohibición del uso de veneno o de armas envenenadas. Estos manuales no especifican si la prohibición, derivada del inciso a) del artículo 23 del reglamento concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 9/, es una norma de derecho internacional consuetudinario o convencional, pero los términos generales en que está redactada la prohibición pueden mover a pensar lo primero. Por su parte, el manual "Reglas de la guerra de conformidad con el derecho internacional", que se distribuye a los miembros de las fuerzas armadas de la República Democrática Alemana 10/, señala que el uso de veneno o de armas envenenadas está prohibido de conformidad con el artículo 23 del Reglamento de La Haya.

1/ Krivinyi, "Kriegsvölkerrecht für die Truppe", 2a. edición, 1968, páginas 10 y 45. El manual deja en claro que la prohibición se extiende a la guerra aérea.

2/ Estado Mayor del Ejército, "Manual de derecho de gentes y leyes de la guerra", 1955, pág. 39.

3/ ZDv 15-1, "Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung", 1956, reimpresión de 1960 con enmiendas 1 a 5, págs. 10 y 30. El manual deja en claro que la prohibición se extiende a la guerra aérea.

4/ Manual VS 2 - 1350, "Manual for the Soldier", cap. 7, párr. 10; Manual VR 2 - 1120-11, "Rules of the Law of War", cap. III, párr. 14.

5/ Jagerskiöld y Wulff, "Handbok i folkrätt under neutralitet och krig", 1971, pág. 72.

6/ Armée Suisse, "Manuel des lois et coutumes de la guerre", 1963, pág. 5.

7/ War Office, "The Law of War on Land", parte III del "Manual of Military Law of the United Kingdom", 1958, pág. 41.

8/ United States Department of the Army, "U.S. Army Field Manual 27-10", The Law of Land Warfare, 1956, pág. 37.

9/ J.B. Scott, editor, "Texts of the Peace Conferences at the Hague, 1899 and 1907", 1908, págs. 51 y 209. Véase el cap. I supra.

10/ Véase "Die Völkerrechtlichen Regeln der Kriegsführung", 1968, pág. 138.

2. El veneno y las armas envenenadas son también considerados ilegítimos por el derecho interno de varios Estados en cumplimiento de sus obligaciones internacionales 11/.

3. Hay relativamente pocas referencias en la práctica de los Estados a las prácticas y armas específicas excluidas por el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya, ya sea como derecho internacional convencional o como derecho internacional consuetudinario. Los manuales de Gran Bretaña y de Suecia disponen que el envenenamiento de pozos y manantiales queda comprendido dentro de la prohibición, aunque se notifique que el pozo está envenenado 12/. Sin embargo, cegar manantiales y desviar ríos y acueductos, según varios manuales, no es infracción de la ley 13/.

4. El Gobierno de los Estados Unidos ha afirmado lo siguiente:

"El uso de herbicidas químicos, inocuos para el hombre, con el objeto de destruir cosechas destinadas exclusivamente al consumo de las fuerzas armadas del enemigo (si puede determinarse ese hecho) no está prohibido por el inciso a) del artículo 23 ni por ninguna otra norma de derecho internacional. Implica un ataque por medios no prohibidos contra objetivos militares legítimos." 14/

La misma opinión en que aparece esta aseveración explica que el inciso a) del artículo 23 es un "caso especial" de la prohibición más general del empleo de armas "destinadas a ocasionar sufrimientos innecesarios" ("maux superflus" en el texto francés auténtico) del inciso e) del artículo 23.

11/ Argentina, Decreto No. 3.189, 28 de marzo de 1960, "Boletín Oficial de la República Argentina", volumen 68, 5 de abril de 1960, pág. 1; Italia, Leggi di Guerra, artículo 35, párr. 1, anexo al Decreto Real No. 1.415, 8 de julio de 1938, "Raccolta Ufficiale delle Leggi et dei Decreti del Regno d'Italia", vol. 1938-XVI, pág. 4307.

12/ Respecto del Reino Unido, véase "The Law of War on Land", op. cit., pág. 42, y respecto de Suecia, véanse Jagerskiöld y Wulff, op. cit., pág. 72.

13/ Por ejemplo, el Manual del Reino Unido, op. cit., pág. 42, y el United States Army Field Manual, op. cit., pág. 37.

14/ Carta dirigida por el Asesor Jurídico del Departamento de Defensa al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 5 de abril de 1971, en "International Legal Materials", volumen 10, 1971, pág. 1300. A continuación de la carta hay una opinión jurídica del Fiscal General del Ejército, de marzo de 1945, que sostiene la legalidad de la destrucción de cosechas mediante productos químicos esparcidos desde el aire. Ibid., pág. 1304.

5. Muchos Estados, respecto de conflictos armados recientes, han hecho declaraciones en las que han condenado el uso de sustancias venenosas en general 15/.

B. Doctrina

6. El considerar no permisible el uso del veneno en la guerra tiene origen antiguo. "Cuando Ulises fue a Efira a procurarse una droga mortal para untar sus flechas, Ilo se la negó porque los dioses no lo aprobarían" 16/. Una de las normas elaboradas por las sociedades primitivas para los conflictos armados consiste en que no deben usarse las armas envenenadas 17/. Grocio se ocupa del asunto con cierta latitud, afirmando que el veneno, las armas envenenadas y el envenenamiento de aguas están prohibidos, no así la contaminación de aguas mediante la desviación de cursos 18/.

7. En estas condiciones, no puede sorprender que muchos especialistas afirmen que el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya incorpora y declara una norma preexistente de derecho internacional consuetudinario 19/. Otros dejan en claro que, al menos el inciso a) del artículo 23, ha pasado a formar parte del derecho internacional general, obligando por igual a todos los Estados partes y no partes 20/. Sin embargo, una tercera categoría de autores se contenta con

15/ Por ejemplo, una declaración formulada el 9 de diciembre de 1965 por el Soviet Supremo de la URSS (Izvestiya, 10 de diciembre de 1965); una declaración formulada el 4 de enero de 1966 por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Viet-Nam ("Novoe vremya", 1966, No. 4), y una declaración de los Estados partes en el Tratado de Varsovia - Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la URSS - en una exposición formulada en una reunión del Comité Político Consultivo en Bucarest el 6 de julio de 1966 ("Pravda", 6 de julio de 1966).

16/ Coleman Phillipson, "The International Law and Custom of Ancient Greece and Rome" (1911), vol. 2, pág. 209, citando "La Odissea", i. 261-3.

17/ Quincy Wright, "A Study of War", 2da. ed. 1965, pág. 97.

18/ Hugo Grocio, "De Jure Belli ac Pacis", 1646, Libro III, cap. IV, xv-xvii.

19/ James M. Spaight, "Air Powers and War Rights", 3a. ed., 1947, pág. 188; Julius Stone, "Legal Controls of International Conflict", 2a. impresión revisada con un suplemento, 1959, págs. 553 y 554; L.F.L. Oppenheim, "International Law", 7a. ed., Lauterpacht, ed., 1952, vol. 2, pág. 342; G. Balladore Pallieri, "Diritto bellico", 2a. ed., 1954, pág. 168 y 170; Quadri, "Diritto internazionale pubblico", 5a. ed., 1968, pág. 305; Fleck, "Völkerrechtliche Gesichtspunkte für ein Verbot der Anwendung bestimmter Kriegswaffen", reproducido de Institut für Internationales Recht an der Universität Kiel, "Beiträge zur Weiterentwicklung des Humanitären Völkerrechts für Bewaffnete Konflikte", 1972, pág. 5.

20/ Accioly, "Manual de direito internacional publico", 9a. ed., 1970, pág. 310; pág. 310; Morris Greenpan, "The Modern Law of Land Warfare", 1959, pág. 359; Djatiko esoemo, "Hukum Internasional Bagian Perang", 1956, pág. 44; Kleen, "Kodificerad Handbok i Krigets Lagar till Lands och till Sjös", 1909, pág. 361; Berber, "Lehrbuch des Völkerrechts", 1962, vol. 2, pág. 170.

/...

mentonar el inciso a) del artículo 23 o la norma que incorpora sin dejar en claro si la norma es obligatoria sólo para las partes en el Reglamento de La Haya o para todos los Estados en calidad de derecho internacional consuetudinario 21/. Puede ser apropiado leer este último grupo de obras a la luz de la declaración hecha en el fallo del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de que el Reglamento de La Haya forma parte del derecho internacional consuetudinario 22/.

8. Varios juristas internacionales se apartan de esta línea general de la doctrina. Sereni estima que la prohibición del inciso a) del artículo 23 es obligatoria sólo para las partes 23/, en tanto que McDougal y Feliciano consideran que la prohibición ha sido superada por los acontecimientos y está caduca 24/.

9. Von der Heydte, uno de los pocos juristas internacionales con experiencia militar de combate en un alto grado jerárquico, señala que la prohibición de armas envenenadas, que considera parte del derecho internacional consuetudinario, se limita a aquellas armas cuya naturaleza intrínseca y esencial es envenenar y que causan un daño que es insignificante en comparación con el efecto químico producido por las armas. Así, afirma, las armas que tienen efectos secundarios venenosos no están prohibidas, según la práctica difundida y predominante de los Estados 25/.

21/ Erik J.S. Castrén, "The Present Law of War and Neutrality", 1954, pág. 192; François, "Grondkijnen van het Volkenrecht", 3a. ed., 1967, pág. 672; Cansacchi, "Nozioni di diritto internazionale bellico", 5a. ed., 1968, pág. 78; Delbez, "Les principes généraux du droit international public", 3a. ed., 1964, pág. 532; Paul Guggenheim, "Traité de droit international public", 1954, vol. 2, pág. 390; Josef L. Kunz, "Kriegsrecht und Neutralitätsrecht" 1935, pág. 81; Roger Pinto, "Le droit des relations internationales", 1972, pág. 308; Ghanim, "Mabadi Al-Qa'num Al-Dawli Al'Amm", 1967, pág. 742; Abu-Hayf, "Al Qa'num Al-Dawli Al'Amm", 6a. ed., 1962, pág. 773, nota 4.

22/ Véase el cap. III, infra.

23/ Angelo P. Sereni, "Diritto internazionale", 1965, vol. 4, pág. 1983.

24/ Myres S. McDougal y Florentino P. Feliciano, "Law and Minimun World Public Order", 1961, pág. 619, que dicen que "no se ha registrado ningún ejemplo de uso de armas, proyectiles o balas envenenadas por ejércitos modernos en guerra". Pero véase la nota 34 infra.

25/ Von der Heydte, Atomare Kriegsführung und Völkerrecht, "Archiv des Völkerrechts", vol. 9, 1961, pág. 162. Se refiere al uso de granadas de humo y de municiones de fósforo en la Segunda Guerra Mundial, que causaban síntomas de envenenamiento si se usaban en forma intensa; los principales contendientes no consideraban que se tratase de armas venenosas prohibidas. A.V.W. Thomas y A.J. Thomas llegan a la misma conclusión respecto de la práctica de los Estados en cuanto a la legalidad del uso de humo en forma general. "Legal Limits on the Use of Chemical and Biological Weapons", 1970, pág. 185.

10. Obras publicadas en muchos países socialistas revelan que se considera que el uso de herbicidas y otras sustancias venenosas constituye uso ilegal de armas en conflicto armado, por razones semejantes a las esgrimidas en apoyo de la ilegitimidad del uso de armas químicas y bacteriológicas en general 26/.

11. La cuestión del envenenamiento de fuentes de agua, a la que se refería Grocio ha sido tratada de manera conflictiva. Fauchille se remite a la práctica de la Primera Guerra Mundial, en que se intercambiaron acusaciones y contraacusaciones respecto del envenenamiento y de la desviación del suministro de agua, y parece llegar a la conclusión de que pueden envenenarse los suministros de agua para impedir su uso si se hace abiertamente y dando aviso al beligerante 27/. Barber afirma que la prohibición del uso del veneno se extiende al envenenamiento desleal de fuentes y canalizaciones 28/. El manual de los Estados Unidos sobre las leyes de la guerra ya no se ocupa de esta cuestión. Se ha explicado que la anterior disposición sostenía la legitimidad de la contaminación de suministros de agua arrojando en ellos animales muertos o mediante prácticas semejantes, siempre que se diera aviso al enemigo. Se suprimió esta declaración porque se contradecía con otras normas y se relacionaba con una situación que se creía de importancia marginal 29/. McDougal y Feliciano preguntan por qué, si se puede desviar el curso de las aguas o destruir los suministros de agua, no puede tomarse esta acción mediante el envenenamiento o contaminación de estas aguas 30/. El Coronel Djatikoesoemo se refiere expresamente a la ilegalidad del envenenamiento de pozos 31/.

12. Aparte del origen antiguo de la norma contra el uso del veneno, se ha explicado que la prohibición deriva de la prohibición jurídica de la perfidia y la subrepción en la guerra 32/. La ilegitimidad de este método de guerra se relaciona también con la prohibición de infligir sufrimiento innecesario 33/. Si un soldado

26/ Véase la Sección 2B, nota 66, infra.

27/ Paul Fauchille, "Traité de droit international public", 1921, vol. 2, pág. 124.

28/ Así como el envenenamiento de tanques de agua dulce en navíos en la guerra naval, el envenenamiento de alimentos y el uso de herbicidas esparcidos desde aeronaves. Barber, op. cit., pág. 171.

29/ United States Department of the Army Pamphlet 27-161-2, "International Law", 1962, vol. 2, pág. 41.

30/ Op. cit., pág. 620.

31/ Op. cit., pág. 44.

32/ Kunz, op. cit., pág. 81; Stone, op. cit., pág. 553. Sin embargo, Spetzler estima que hay dificultades teóricas para esta opinión en el sentido de que el uso de gas venenoso que el enemigo puede detectar fácilmente no podría caracterizarse, por este motivo, como clandestino o perverso, en "Luftkrieg und Menschlichkeit", 1956, pág. 95.

33/ Stone, op. cit., pág. 553.

queda fuera de acción a causa de una bala, no hay ninguna razón por la que deba agravarse su sufrimiento mediante la acción de un veneno que no sirve militarmente para nada.

13. En los conflictos contemporáneos siguen usándose el veneno y las armas envenenadas. Meyrowitz habla del uso de "chausse-trapes dont le fond est garni de pointes de bambou or de fer infectées; flèches empoisonnées", diciendo que infringen el artículo 23 del Reglamento de La Haya 34/. Otros autores contemporáneos no dicen qué tipos específicos de armas o métodos de guerra están excluidos por la prohibición del uso de veneno y de armas envenenadas.

SECCION 2. ARMAS QUIMICAS Y BACTERIOLOGICAS

A. Práctica de los Estados

- a) Las normas del derecho internacional consuetudinario relacionadas con el derecho convencional, especialmente el Protocolo de Ginebra de 1925

14. Como el número de partes en el Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos 35/ ha aumentado hasta el punto de abarcar a la gran mayoría de los Estados, la cuestión de si las disposiciones del Protocolo resultan obligatorias para aquellos que no son partes en virtud del derecho internacional consuetudinario, atañe a un número de Estados cada vez menor.

15. En 1938, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones aprobó una resolución que afirmaba que "el uso de los métodos químicos y bacterianos en la guerra es contrario al derecho internacional" 36/.

16. En relación con conflictos armados recientes, varios Estados han hecho declaraciones para condenar el uso de sustancias tóxicas en general 37/. También se han formulado declaraciones de política que condenan concretamente el uso de armas químicas y bacterianas. Por ejemplo, un comunicado conjunto soviético-vietnamita

34/ Henri Meyrowitz, "Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien", en "Annuaire Francais de Droit International", vol. 13 (1967), pág. 186, nota 77.

35/ Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCIV, pág. 65. Véase cap. I supra. Para casos concretos de empleo por los Estados o alegaciones de empleo por los Estados en la guerra de medios químicos y bacteriológicos, véase Instituto de Estocolmo de Investigaciones para la Paz, The Problem of Chemical and Biological Warfare (1971), vol. 1 (The Rise of CB Weapons), págs. 125-320.

36/ Sociedad de las Naciones, Official Journal, Special Supplement No. 182, pág. 15.

37/ Véase la nota 15 supra.

publicado en abril de 1965 condenó "el uso en la guerra de métodos bárbaros de exterminio, incluidos ... los gases tóxicos contra la población pacífica" 38/. Y en un mensaje de 24 de enero de 1966 el Presidente de la República Democrática de Viet-Nam condenó el uso de gases venenosos y sustancias químicas tóxicas para destruir el campo y exterminar a la población civil 39/.

17. El representante de Rumania en el Comité de Desarme declaró el 3 de abril de 1969, con respecto a la prohibición del empleo de armas químicas y bacteriológicas, que "la delegación rumana estima que su verdadera solución debe basarse en la consolidación del Protocolo de Ginebra de 1925, mediante el respeto riguroso de sus disposiciones y la adhesión de todos los Estados a este Protocolo" 40/.

18. La Asamblea General, en la resolución 2162 (XXI), aprobada el 5 de diciembre de 1966, pidió:

"El estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos y condena todos los actos contrarios a dichos objetivos,"

e invitó a todos los Estados a adherirse al Protocolo. La Asamblea General reafirmó su petición de "estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo" en la resolución 2454 (XXIII), de 20 de diciembre de 1968, y la resolución 2827 (XXVI), de 16 de diciembre de 1971. En la resolución 2853 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971, y la resolución 3032 (XXVII), de 18 de diciembre de 1972, exhortó a "todas las partes en conflictos armados" a acatar las normas establecidas en el Protocolo. Cualquiera que sea el efecto de las resoluciones de la Asamblea General en el derecho internacional consuetudinario, los votos afirmativos de una mayoría de las partes en el Protocolo de Ginebra puede considerarse que reflejan la interpretación dada al Tratado por los Estados Partes en el instrumento.

19. En los debates en la Primera Comisión y en el plenario de la Asamblea General varias delegaciones 41/ expresaron de distintos modos la opinión de que el uso en la guerra de gases y de medios bacteriológicos ya había sido prohibido en el derecho internacional general en virtud de la declaración de Bruselas de 1874 42/,

38/ Véase Novoe Vremya, 1965, No. 17; Pravda, 20 de abril de 1965.

39/ Véase Pravda, 30 de enero de 1966.

40/ Conferencia del Comité de Desarme de Dieciocho Naciones, acta taquigráfica definitiva de la 400a. sesión (ENDC/PV.400), párr. 61.

41/ Por ejemplo, las delegaciones de México (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo séptimo período de sesiones, Primera Comisión, 1888a. sesión), Chad (Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1707a. sesión) y Suecia (Ibid., 1695a. sesión, párrs. 159 a 161).

42/ Martens, Nouveau Recueil Général de Traités, 2a. ser. (1879-1880), vol. 4, pág. 219.

la prohibición del uso de veneno y armas envenenadas contenida en el Reglamento de las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre anexo a los Convenios de La Haya de 1899 y 1907 43/ y el mismo Protocolo de Ginebra. No se trataba en absoluto de un nuevo tema. En 1936, el Gobierno francés había expresado la opinión de que, independientemente de cualquier restricción especial, la prohibición del empleo en la guerra de medios químicos dimanaba de los principios más generales incorporados en el artículo 23 del Reglamento de La Haya que prohibía la utilización del veneno y las armas envenenadas que causan sufrimientos innecesarios 44/.

20. También durante los debates se manifestaron ciertos reparos acerca de que la Asamblea General se pronunciara sobre "la existencia y el alcance de las normas consuetudinarias y su relación con las normas contractuales del derecho internacional" 45/. Los Estados Unidos, aunque no son parte en el Protocolo de Ginebra, votaron a favor de la resolución 2162 (XXI), de 3 de diciembre de 1966, con una expresión de apoyo a los "dignos objetivos" del Protocolo 46/.

21. Las instrucciones transmitidas al Ejército de los Estados Unidos diez años antes habían sido que

"Los Estados Unidos no son parte en ningún tratado, actualmente en vigor, que prohíba o limite el uso en la guerra de gases tóxicos o no tóxicos ... o de medios bacteriológicos."

y que el Protocolo de Ginebra no obligaba a los Estados Unidos 47/.

b) Los tipos prohibidos de armas químicas y bacteriológicas

22. Los Estados han manifestado cierta divergencia de opiniones respecto del alcance de los términos del preámbulo del Protocolo de Ginebra relativos a la publicación del empleo en la guerra de "gases asfixiantes, tóxicos o similares y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos", así como de la extensión de esta prohibición "al empleo de métodos de guerra bacteriológicos". El uso en conflictos recientes de herbicidas químicos y de agentes lacrimógenos o irritantes (denominados distintamente "gases lacrimógenos" o "medios para reprimir disturbios") ha hecho que esta cuestión de interpretación sea de gran importancia.

43/ Scott, op. cit., págs. 51 y 209. Véase cap. I, supra.

44/ Ministerio de Relaciones Exteriores, Nota del Servicio Jurídico, 6 de abril de 1973, en Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de droit international public (1969, vol. 6, pág. 105).

45/ Por ejemplo, la delegación de los Países Bajos (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1699a. sesión, párr. 59).

46/ Ibid., vigésimo primer período de sesiones, Sesiones Plenarias, 1484a. sesión, párr. 43.

47/ United States Army Field Manual, op. cit., págs. 18 y 19.

23. La Asamblea General, en la resolución 2603 A (XXIV), de 16 de diciembre de 1969, declaró "contraria a las normas de derecho internacional generalmente reconocidas" incorporadas en el Protocolo de Ginebra el empleo, en conflictos armados internacionales, de

"a) Todo elemento químico de guerra - sustancias químicas, sean gaseosas, líquidas o sólidas - que puedan utilizarse por sus efectos tóxicos directos en el hombre, los animales o las plantas;

"b) Todo elemento biológico de guerra - organismos vivos de cualquier naturaleza o material infeccioso derivado de ellos - que tenga por objeto causar enfermedades o muerte del hombre, los animales o las plantas, y que para sus efectos dependa de sus posibilidades de multiplicación en la persona, animal o planta atacados."

La definición adoptada es la que había encarecido el Secretario General en el preámbulo del informe sobre las armas químicas y bacteriológicas y su uso preparado por un grupo de expertos en cumplimiento de la resolución 2454 A (XXIII) 48/.

24. La resolución fue aprobada por 80 votos contra 3 y 36 abstenciones. En las declaraciones a favor de la resolución hechas antes de su adopción y en otros debates de la Asamblea General no sólo se trató de los efectos de las armas químicas y bacteriológicas sino que también se citó la opinión de que la prohibición del empleo de estas armas ya había pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario y no había que derivarla necesariamente del Protocolo de Ginebra de 1925 49/. Algunos de los Estados disidentes o que se abstuvieron, expresaron la opinión de que era inadecuado que la Asamblea General, que comprendía tanto a los Estados que eran partes en el Protocolo de Ginebra como a los que no lo eran,

48/ "Informe del Secretario General sobre las armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y los efectos de su posible uso" (A/7575/Rev.1; S/9292/Rev.1) p. xii. (Véase el texto impreso en la publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.69.I.24).

49/ Por ejemplo, las delegaciones de la India (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1706a. sesión, párr. 22) y de Suecia (ibid. 1695a. sesión, párrs. 159 a 161 y A/C.1/PV.1882, pág. 37). La delegación de Suecia explicó lo siguiente:

"el proyecto de resolución no interpreta el Protocolo intrínsecamente, sino que más bien anuncia las normas de derecho internacional generalmente aceptadas que han surgido al respecto. En gran parte, se han establecido por influencia del Protocolo y puede considerarse incluso que tienen el mismo alcance que éste, pero no se derivan exclusivamente del Protocolo, sino también de otras fuentes de derecho internacional, por ejemplo, los acuerdos, la práctica de los Estados y el peso de la doctrina." (Ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1716a. sesión, párr. 188).

se pronunciara sobre la correcta interpretación del instrumento 50/. Varios Estados, tanto en el curso del debate sobre esta resolución como en otros contextos, opinaron que el Protocolo no excluía el empleo de agentes lacrimógenos 51/ y de herbicidas químicos 52/. Cuando el Presidente de los Estados Unidos presentó el Protocolo de Ginebra al Senado para su asesoramiento y consentimiento previos a la ratificación, el Secretario de Estado manifestó que el Gobierno entendía respecto del Protocolo lo siguiente: "no prohíbe el empleo en la guerra de medios para controlar los tumultos ni de herbicidas químicos" 53/. Hasta la fecha, el Senado de los Estados Unidos no ha dado su aprobación para que ratifique el Protocolo. En el debate que precedió a la adopción de la resolución 2603 A (XXIV), el delegado de los Estados Unidos expresó la misma opinión, que, según dijo, estaba respaldada por los trabajos preparatorios y la historia subsiguiente del Protocolo de Ginebra 54/. El Reino Unido, aunque considerando que los gases lacrimógenos entran en la prohibición del Protocolo, ha adoptado el punto de vista de que

50/ Por ejemplo, las delegaciones de los Países Bajos (ibid., 1717a. sesión, párr. 12) los Estados Unidos (ibid., párr. 37 y 39) y Canadá (ibid., 1716a. sesión, párr. 147).

51/ Por ejemplo, las delegaciones de Australia (ibid., 1704a. sesión, párr. 69) y los Estados Unidos (ibid., 1717a. sesión, párr. 41). Con respecto al Japón, el Director General de la Oficina de las Naciones Unidas, Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó la opinión ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la Dieta, el 6 de mayo de 1970, de que la prohibición en virtud del Protocolo de Ginebra no se extendía al empleo de gases como los gases lacrimógenos, utilizados para controlar los disturbios o la violencia de la muchedumbre, que correspondía a las partes en el Protocolo dan una interpretación autorizada del Protocolo y que no existía una opinión establecida entre las partes de que los gases lacrimógenos estuvieran prohibidos en virtud del Protocolo. Véase Fujita, "Ratificación por el Japón del Protocolo de Ginebra de 1925," Anuario Japonés de Derecho Internacional, vol. 17 (1971), pág. 81. El Canadá declaró que no poseía armas químicas salvo "los artefactos del tipo utilizado para controlar a las muchedumbres y los tumultos en muchos países". (A/C.1/PV.1829, pág. 32).

52/ Por ejemplo, las delegaciones de Australia (ibid., vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1704a. sesión, párr. 69) y el Reino Unido (ibid., 1717a. sesión, párr. 51).

53/ Department of State Bulletin, vol. 63, 1970, pág. 274; y véase la carta del Asesor Jurídico del Departamento de Defensa al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 5 de abril de 1971, que afirma que el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya y el Protocolo de Ginebra de 1925 no prohíben el uso de herbicidas químicos inofensivos para el hombre a fin de destruir las cosechas destinadas solamente al consumo de las fuerzas armadas del enemigo. International Legal Materials, vol. 10 (1971), pág. 1302.

54/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1717a. sesión, párr. 43.

"La tecnología moderna ha desarrollado el humo CS que, a diferencia de los gases lacrimógenos disponibles en 1930, no se considera especialmente nocivo para el hombre, a no ser en circunstancias completamente excepcionales; y consideramos, por lo tanto, que el CS y otros gases similares quedan fuera del ámbito del Protocolo de Ginebra. En realidad, el CS es menos tóxico que la sustancia de las cortinas de humo que la declaración de 1930 / Hecha en el Parlamento con respecto a las cortinas de humo/ excluyó concretamente." 55/.

25. No parece que existan opiniones disidentes en cuanto a que el Protocolo de Ginebra prohíbe el empleo de toxinas, bien se consideren medios químicos o bacteriológicos. El Gobierno de los Estados Unidos, al renunciar unilateralmente al uso de armas biológicas, expresó claramente que esta renuncia incluía el empleo de toxinas, incluso en respuesta a un primer uso por otro Estado 56/.

c) La cuestión de si las armas químicas y bacteriológicas pueden utilizarse en respuesta o represalia

26. Al adherirse al Protocolo de Ginebra varios Estados han formulado reservas, de las cuales las de Francia, que es el Estado depositario, son típicas:

"1. El mencionado Protocolo no obliga al Gobierno de la República Francesa sino con respecto a los Estados que lo han firmado y ratificado o que se han adherido a él;

"2. El mencionado Protocolo cesará de pleno derecho en su obligatoriedad para el Gobierno de la República francesa en relación con cualquier Estado enemigo cuyas fuerzas armadas o cuyos aliados no respetasen las prohibiciones objeto de este Protocolo." 57/.

Las reservas tienen por efecto exigir que sea mutua la obligación contraída en virtud del Protocolo y convertir al Protocolo en una prohibición de usar el primero de los medios de guerra proscritos. El Reino Unido y la Unión Soviética han formulado reservas similares. Los Estados Unidos, cuando el Protocolo fue presentado al Senado para su aprobación, declararon su intención de reservarse el derecho a utilizar armas químicas en represalia contra cualquier Estado que violara el Protocolo 58/.

55/ Parliamentary Debates (Commons), vol. 795 (1970), vol. 18 (respuestas escritas a las preguntas).

56/ Declaración del Presidente Nixon, del 25 de noviembre de 1969, Department of State Bulletin, vol. 61 (1969), pág. 541, y anuncio de la Casa Blanca, 14 de febrero de 1970, ibid., vol. 62 (1970), pág. 226.

57/ Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCIV, pág. 66, nota 1.

58/ Department of State Bulletin, vol. 63 (1970), pág. 274.

27. La posible incompatibilidad entre los términos de las distintas resoluciones de la Asamblea General que piden "el estricto cumplimiento por todos los Estados de los principios y objetivos del Protocolo" y las anteriores reservas se mencionó en el curso de los debates anteriores a la aprobación de dichas resoluciones 59/. Se suscitó implícitamente la cuestión de si los términos de la resolución, o lo que se calificó como una norma de derecho internacional consuetudinario, iban a prevalecer sobre las limitaciones introducidas por los Estados en sus obligaciones convencionales.

28. Los Estados también han manifestado la opinión de que las armas químicas y bacteriológicas pueden utilizarse como represalia contra un adversario que las haya utilizado primero 60/ o que, independientemente de las obligaciones del tratado, un Estado se abstenga de emplear armas químicas y bacteriológicas contra un adversario que haya declarado su intención de renunciar al empleo de tales armas y efectivamente cumpla su promesa 61/. Estas afirmaciones, que son anteriores a las resoluciones de la Asamblea General mencionadas anteriormente, insinúan ciertas limitaciones a una prohibición global del empleo de tales armas.

d) La cuestión de los tipos de conflicto en los que se prohíben las armas químicas y bacteriológicas

29. Las prohibiciones del Protocolo se extienden al empleo de medios químicos y bacteriológicos en la "guerra". La resolución 2603 A (XXIV) se refiere al empleo de tales armas en "conflictos armados internacionales". Algunas delegaciones consideran que la resolución estaba destinada a introducir ciertos cambios en las obligaciones de los Estados partes respecto del Protocolo 62/.

59/ Por ejemplo, las delegaciones de los Estados Unidos (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo cuarto período de sesiones, Primera Comisión, 1717a. sesión, párr. 45), Canadá (ibid., 1716a. sesión, párr. 147) y Australia (ibid., párrs. 178 y 179).

60/ Véase Armée Suisse, op. cit., págs. 5 y 42, República Federal de Alemania Kriegsvölkerrecht, Leitfaden für den Unterricht (Teil 7), Allgemeine Bestimmungen des Kriegsführungsrechts und Landkriegsrecht, ZDv 15/10 (1961), págs. 51 y 52; y Manual de los Países Bajos, op. cit. cap. 7, párr. 11, (pero sólo en cuanto al uso de armas químicas como represalia).

61/ Italia, Legge di Guerra, loc. cit., pág. 4311.

62/ Por ejemplo, Australia (Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo tercer período de sesiones, Primera Comisión, 1716a. sesión, párr. 176), Canadá (ibid., párrs. 148), Países Bajos (ibid., 1717a. sesión, párrs. 16 y 17) y Malta (ibid., párr. 85).

e) Incorporación de las normas al derecho interno

30. Varios Estados han incorporado la prohibición del empleo de armas químicas y bacteriológicas a su derecho interno 63/. Aquellos Estados que consideran que bien sea el tratado o el derecho consuetudinario prohíben el empleo de armas químicas y bacteriológicas incorporan también a veces este principio a sus manuales militares 64/. El manual sueco tiene en cuenta la resolución 2603 A (XXIV) de la Asamblea General, de 1969, y resoluciones anteriores sobre lo mismo 65/.

63/ Por ejemplo, Argentina, Decreto No. 3189, 28 de marzo de 1960, art. 3, loc. cit., pág. 1; Turquía, Ley No. 2399, 7 de abril de 1934; Resmî Gazete, No. 2676, 15 de abril de 1934, Düster, vol. 15 (1934), pág. 319.

64/ Por ejemplo, República Federal de Alemania, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, Sonderdruck des Anhangs Teil III zu HDv 100/2 (1961), pág. 17, y Kriegsvölkerrecht, op. cit., págs. 51 y 52, en que se prohíbe el uso de medios de guerra químicos y bacteriológicos contra seres humanos, animales y plantas; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 41; Ecuador, Estado Mayor del Ejército, op. cit., pág. 39, citando el Código Penal Militar, art. 99 (6). Austria, Bundesministerium für Landesverteidigung, Truppenführung (1965), pág. 253, y Krivinyi, op. cit., págs. 7 y 45 y 46; Países Bajos, Manual del Soldado, op. cit., cap. 7, párr. 11. El lenguaje de los manuales recoge a menudo el del Protocolo de Ginebra de 1925, pero los manuales no estipulan necesariamente si lo que se aplica es al Protocolo o una norma universal de derecho internacional. Por su parte, el folleto explicativo "Normas de Guerra en virtud del Derecho Internacional", que se distribuye a los miembros de las fuerzas armadas de la República Democrática Alemana, indica que el Protocolo de Ginebra de 1925, relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos es de aplicación obligatoria. Die Völkerrechtlichen Regeln der Kriegsführung (1968), pág. 40.

65/ Japerskiöld and Wulff, op. cit., pág. 73.

B. Doctrinaa) Las Normas del Derecho Consuetudinario Internacional en Relación con el Derecho Convencional, Particularmente el Protocolo de Ginebra de 1925

31. En obras publicadas en muchos países socialistas, los autores han venido considerando el uso de gases lacrimógenos y tóxicos, herbicidas, desfoliantes y otros productos químicos y de armas bacteriológicas (biológicas) como un uso ilegal de armas en los conflictos armados 66/. En general, esos autores consideran que las armas químicas y bacteriológicas están interrelacionadas y, por lo tanto,

66/ Véase F.I. Kozhevnikov, Velikaya otechestvennaya voina Sovetskogo Soyuza i nekotorye voprosy mezhdunarodnogo prava (1954), pág. 136; F.I. Kozhevaikov, Uchebnoe posobie po mezhdunarodnomu publichnomu pravu (1947), págs. 259 a 261; O.V. Bogdanov, Razoruzhenie - garantiya mira (1972), págs. 61 a 89; A.M. Ladyzhensky y V.N. Durdenevsky, "Primenenie bakteriologicheskogo oruzhiya - prestuplenie po mezhdunarodnomu pravu". Vestnik Moskovskogo universiteta, 1952, No. 11, pág. 40; A.I. Trainin, Zashchita mira i ugovolny zakon (1969), pág. 403; A.I. Poltorak y L.I. Savinsky, Prestupnaya voina, Agressiya SShA protiv Vyetnama (1968), págs. 201 a 229; Kurs mezhdunarodnogo prava (1969), vol. V, págs. 321 a 323; F.I. Kozhevnikov, ed., Kurs mezhdunarodnogo prava (1972), págs. 367 a 386; V. Shestov, "Realny shag na puti razoruzheniya", Mezhdunarodnaya zhizn, 1972, No. 2; Y. Tomilin, "Khimicheskoe oruzhie - vne zakona", ibid., 1972, No. 5; S. Penkov, Mezhdunarodnopravni problemi po razor'zhavaneto (1966), págs. 5 a 14; S. Stefanova, Nyakoi pravni aspekti na problema za razor'zhavaneto (1961); J. Gilas, Zagadnienie rozbroyenia (1966); K. Slezak, "Zásada Vseobecnébo a plného ozbrojeni", Časopis pro mezinárodní právo, 1961, No. 2; D. Gierycz, "Aktualne problemy Zakazu broni biologicznej i chemicznej", Państwo i Prawo, 1971, No. 6; A. Gorbiel, Bojowe Środka chemiczne jako zagadnienie iuris in bello (Prace naukowe Uniwersytetu Śląskiego Katowice, 1971, No. 21); A. Karkoszka, "Konwencja o Zakazie broni B i toksyn". Sprawy Międzynarodowe, 1972, No. 7; T. Zesko, "Istota konwencji o zakazie posiadania i przechowywania broni biologicznej toksyn oraz o ich zniszczenia". Wojskowy Przegląd Prawniczy, 1972, No. 2; R. Bierzanek, Prawa człowieka w konfliktach Zbrojnych (1972), pág. 95; M. Genovski, Osnovi na mezhdunarodnoto pravo (1969), pág. 330; D.M. Krno, "Zločinnost bakteriologickej vojny", Pravny obzor, 1952, No. 6; B. Donner, "Valka ABC ve světle mezinárodního zákazu používání plynu y ozbrojených konfliktech", Časopis pro mezinárodní právo, 2/1966; J. More Benitez D'estefano, Vietnam, Violaciones de acuerdos internacionales y crímenes de guerra (1968); Benitez D'estefano, Derecho internacional público (1965). Gozze-Gučetic Vuko, "Hemijško i biološko oružje u pregovorinju o razoružanju". Medjunarodni problemi, 1970, No. 2; G. Perazić, Medjunarodnopravna zabrana upotrebe u ratu sredstava za masovno uništavanje (1968).

deben reglamentarse de la misma manera en condiciones de conflictos armados 67/. Su enfoque se basa principalmente en la Declaración de La Haya del 29 de julio de 1899 (Haya, IV, 3) en virtud de la cual las Potencias contratantes convienen en abstenerse de usar proyectiles cuyo objeto sea difundir gases asfixiantes o deletéreos, el Convenio de La Haya (IV) del 18 de octubre de 1907, concerniente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre y el Protocolo de Ginebra de 1925 relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. A su juicio, un argumento adicional a favor de la prohibición existente del empleo de esas armas es el hecho de que pueden dirigirse contra la población civil, los no combatientes y el medio humano en violación de otros instrumentos jurídicos internacionales, en particular el Convenio de Ginebra de 1949 relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra.

32. La generalidad de los escritos eruditos publicados en otras partes sobre la guerra química y bacteriológica prevén el reciente aumento substancial del número de partes en el Protocolo de Ginebra y las resoluciones de la Asamblea General que instan a los Estados a observar estrictamente los "principios y objetivos" del Protocolo de Ginebra y, luego, las reglas del Protocolo mismo. Pueden basarse así en una situación jurídica en cierto modo diferente de la de hoy.

33. Varios tratados normales se refieren simplemente a la existencia del Protocolo de Ginebra y no indican si las normas del Protocolo han pasado a formar parte del derecho internacional general 68/. En otros casos, escritores eruditos aluden a una norma general de derecho internacional que prohíbe la guerra química y bacteriológica 69/.

i) Guerra química

34. Las autoridades exploran varias fuentes posibles para determinar la existencia de una regla de derecho internacional consuetudinario que prohíba el uso de la

67/ Escritos contemporáneos hacen referencia, en apoyo a esta posición, a la investigación emprendida por las Naciones Unidas. En sus obras recientes sobre la formulación de normas jurídicas internacionales para la abolición de las armas químicas y bacteriológicas, los autores socialistas atribuyen gran importancia al informe del Secretario General sobre "Armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y los efectos de su posible uso", véase nota 48 supra.

68/ Delbez, op. cit., pág. 532; Podestá Costa, Derecho internacional público, 3d ed. (1955), vol. 2, pág. 88; Paul Reuter, Droit international public, 3d ed. (1968), pág. 316; Charles Rousseau, Droit international public, 4th ed. (1968), pág. 348; Ruiz Moreno, Tratado de derecho internacional (1963), vol. 2, págs. 649-650; Salonga y Yap, Public International Law, 3d ed. (1966), págs. 413-414; Guerrero Burgos, Nociones de derecho de guerra (1955), pág. 63; Shabat, Al-Huquq Al-Dawliya Al'Ammah, 2d ed. (1959), pág. 574; Abu-Hayf, op. cit., pág. 773; Ghanim, op. cit., pág. 741.

69/ Por ejemplo, Accioly, op. cit., pág. 310.

guerra química. Algunos 70/ lo encuentran en la Declaración de La Haya (IV, 3) de 1899, relativa a los gases asfixiantes 71/. A veces se hace referencia a la limitación de la prohibición al uso de proyectiles 72/.

35. Una segunda fuente de derecho se encuentra en el Reglamento anexo al Convenio No. IV de La Haya concerniente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre del 18 de octubre de 1907 73/, que el Tribunal de Nuremberg sostuvo estaba incorporado al derecho internacional general 74/. Se considera que tres disposiciones del artículo 23 son afines. Algunas autoridades creen que la prohibición de usar veneno o armas envenenadas, establecida en el párrafo a, se extiende a la guerra química 75/ pero ha habido quien ha disentido 76/. La estipulación del párrafo b que prohíbe matar o herir a individuos "traicioneramente" puede tener cierta relación, pero se ha señalado que las armas químicas que puedan detectarse no pueden ser abarcadas por una prohibición basada en nociones de subrepción y perfidia. Solamente un arma que pudiera herir o matar sin que la víctima supiera lo que estaba sucediendo, podría considerarse como un arma que matara "traicioneramente" 77/. La tercera disposición aplicable es la del párrafo b, que prohíbe el empleo de "armas, proyectiles o materiales que se calcula van a causar un sufrimiento innecesario" 78/ ("maux superflus", en el texto francés original). La aplicabilidad de esa disposición puede depender de si la guerra química se hace contra civiles o contra personal militar 79/.

36. No hay claro predominio de opiniones sobre la legalidad o la ilegalidad de la guerra química en virtud del derecho internacional consuetudinario resultante de la Declaración de La Haya de 1899, el Reglamento de La Haya de 1907 y el Protocolo de Ginebra de 1925. Algunas autoridades hablan de que los acuerdos han creado una

70/ Por ejemplo, Berber, op. cit., pág. 170; Oppenheim, op. cit., pág. 342; Spaight, op. cit., págs. 188-189.

71/ Scott, op. cit., pág. 81. Véase capítulo I, supra.

72/ Spaight, op. cit., pág. 188.

73/ Scott, op. cit., pág. 209. Véase capítulo I, supra.

74/ Véase capítulo III, infra.

75/ Berber, op. cit., pág. 170; Greenspan, op. cit., pág. 359; H. Meyrowitz, Les armes biologiques et le droit international (1968), págs. 88 a 91; Oppenheim, op. cit., pág. 342; Spaight, op. cit., pág. 188.

76/ Kruse, "Gaskreig" en Strupp-Schlochauer, Wörterbuch des Völkerrechts, (1960), vol. 1, pág. 615 ff.; Castrén, op. cit., pág. 194.

77/ Castrén, ibid., Spetzler, op. cit., págs. 95-96 (disagreeing with Randermann, Das Verbot technischer Waffen (1954), pág. 92).

78/ Oppenheim, op. cit., pág. 342.

79/ Kruse, "Gaskreig", loc. cit., pág. 615; Castrén, op. cit., págs. 194-195.

norma general de derecho internacional ^{80/}. Meyrowitz^{81/} y Berber^{82/}, por ejemplo, consideran que esa norma se desarrolló incluso antes de la celebración del Protocolo de Ginebra de 1925. Para otros, una nueva norma de derecho consuetudinario parece ser obligatoria para casi todos los Estados ^{83/}. Meyrowitz, escribiendo después de la aprobación de la resolución 2162 B (XXI), de 1966, puede afirmar que ésta "prueba, de manera particularmente explícita, el componente psicológico de la costumbre relativa a la prohibición de las armas C y B" ^{84/}.

37. Las opiniones de las autoridades en la materia parecen no haber sido influenciadas por la posición tomada por su país acerca de los tratados relativos a la guerra química. Autores italianos ^{85/} se sienten inquietos por el hecho de que el Artículo 52 de la Legge di Guerra ^{86/} sólo exige que Italia se abstenga de la guerra química con respecto a las demás partes en un tratado y a los Estados que han declarado que no van a recurrir a la guerra química y que de hecho no recurren a ella. Consideran difícil conciliar la existencia de una norma general de derecho internacional consuetudinario con esa estipulación.

38. Los Estados Unidos de América no son parte en el Protocolo de Ginebra de 1925 ni en la Declaración de La Haya de 1899; son parte en el Convenio No. IV de La Haya. Por lo tanto, en ese país hay una fuerte ^{87/}, pero de ningún modo unánime,

^{80/} E.g., Ian Brownlie, "Legal Aspects", en Rose, ed., CBW; Chemical and Biological Warfare (1969), pág. 151; Fujita, loc. cit., pág. 86.

Pero, véase Kunz, op. cit., pág. 86 a 88; Castrén, op. cit., págs. 190 a 193; y Thomas y Thomas, op. cit., quienes consideran que los principios convencionales de antes de la primera guerra mundial "tienen una utilidad sumamente limitada para obligar jurídicamente respecto del uso de agentes químico-biológicos en la guerra" y no están dispuestos a decir que el Protocolo de Ginebra haya pasado a formar parte del derecho internacional general.

^{81/} Op. cit., págs. 91 a 92.

^{82/} Op. cit., pág. 170.

^{83/} Lauterpacht presenta el argumento reservado de que el efecto de tratados anteriores "probablemente haga a esa prohibición jurídicamente efectiva para prácticamente todos los Estados" /el subrayado es nuestro/ (Oppenheim, op. cit., pág. 344; y para lo mismo, Stone, op. cit., pág. 556.

^{84/} Op. cit., pág. 101.

^{85/} Quadri, op. cit., pág. 306; Sereni, op. cit., pág. 1983; Xx Balladore Pallieri, op. cit., págs. 173 y 174.

^{86/} Véase nota 11 supra.

^{87/} Tucker, The Law of War and Neutrality at Sea, en United States Naval War College. International Law Studies, vol. 50 (1955), págs. 50-53; Kelli, "Gas Warfare in International Law Today", Military Law Review, vol. 9 (1960), pág. 1; Thomas and Thomas, op. cit., págs. 57 y 102.

corriente de opinión 88/, de que no hay ninguna norma de derecho internacional consuetudinario que prohíba la guerra química y de que los Estados Unidos no están, pues, bajo ninguna obligación jurídica con respecto a esta arma como tal.

ii) Guerra bacteriológica

39. La Declaración de La Haya de 1899 parecería no guardar relación directa con la guerra bacteriológica, pero debe preguntarse qué influencia han tenido el artículo 23 del Reglamento de La Haya y el Protocolo de Ginebra de 1925 sobre el derecho internacional consuetudinario con respecto a esa forma de guerra. Las opiniones de algunos especialistas son a menudo semejantes a sus opiniones sobre la incorporación de las normas de los tratados al derecho internacional consuetudinario respecto de la guerra química. En los Estados Unidos, la tendencia de las autoridades en la materia es también la de evitar cualquier prohibición, en el derecho internacional consuetudinario, aunque admiten la ineficacia militar del arma y el grave peligro que supone a la población civil 89/. Fuera de los Estados Unidos, las opiniones varían, pues algunos sostienen que la prohibición que establece el Protocolo es parte del derecho internacional consuetudinario 90/ y otros niegan que el Protocolo refleje o haya creado algo en derecho internacional general 91/.

b) Aplicabilidad del derecho convencional y consuetudinario a tipos particulares de armas

i) Agentes lacrimógenos

40. En relación con la iniciativa tomada por los Estados Unidos de adherirse al Protocolo de Ginebra de 1925, pero con sujeción a un entendimiento respecto a

88/ Greenspan, op. cit., pág. 358; O'Brien, "Biological/Chemical Warfare and the International Law of War", Georgetown Law Review, vol. 51 (1962), pág. 59; Mallison. "The Laws of War and the Juridical Control of Weapons of Mass Destruction in General and Limited Wars", George Washington Law Review, vol. 36 (1969), pág. 328 / "possibly" /.

89/ Neinast, "United States Use of Biological Weapons", Military Law Review, vol. 24 (1964), pág. 40; McDougal and Feliciano, op. cit., pág. 637; Brungs, "The Status of Biological Warfare in International Law", Military Law Review, vol. 24 (1964), pág. 83; Tucker, loc. cit., párrs. 52-53, n. 16; O'Brien, loc. cit., pág. 56; Mallison, loc. cit., pág. 328; pero véase Greenspan, op. cit., pág. 358.

90/ Berber, op. cit., pág. 171; Meyrowitz, op. cit., pág. 101; G. Schwarzenberger, The Legality of Nuclear Weapons (1958) pág. 38; Fujita, loc. cit., pág. 86.

91/ Stone, op. cit., págs. 86-88; Moritz, "The Common Application of the Laws of War Within the NATO Forces", Military Law Review, vol. 13 (1961), págs. 21-22.

los "agentes de control de desórdenes" (es decir, agentes lacrimógenos, gases lacrimógenos, agentes de hostigamiento) y herbicidas, ha habido ciertos debates en los Estados Unidos sobre si el Protocolo prohíbe el uso de gases lacrimógenos. Este análisis ha abarcado tanto los trabajos preparatorios, la práctica posterior y las resoluciones aprobadas por la Asamblea General. Las conclusiones a las que llegaron Moore, Baxter y Buergenthal es que el Protocolo abarca los gases lacrimógenos 92/. Bunn ha puesto de relieve la falta de acuerdo sobre esta cuestión 93/.

41. En otras partes, los que han estudiado cuidadosamente la cuestión se inclinan a opinar que los gases lacrimógenos están prohibidos por el Protocolo 94/. Se ha señalado que se corre un grave peligro de que se produzca la escalada de los gases lacrimógenos a formas más peligrosas de guerra química, que en ciertas concentraciones puede ser letal y que la intención de los que redactaron el Protocolo de Ginebra era establecer una prohibición global.

ii) Herbicidas

42. Una discusión paralela acerca de los herbicidas ha llevado a algunos autores en los Estados Unidos a una conclusión algo más reservada de que estos agentes

92/ Moore, "Ratification of the Geneva Protocol on Gas and Bacteriological Warfare: A legal and Political Analysis". Virginia Law Review, vol. 58 (1972) pág. 465 (con la conclusión de que "existe un apoyo mucho mayor para una interpretación amplia que prohíba esos agentes que para una interpretación restrictiva que los permita"); Richard R. Baxter y Thomas Buergenthal, "Legal Aspects of the Geneva Protocol of 1925", American Journal of International Law, vol. 64, 1970, pág. 866; McDougal y Feliciano indican que el Protocolo está trazado de manera tan amplia que "futuros intérpretes" pueden explicar que los agentes químicos no letales con efectos sólo temporalmente incapacitantes están abarcados por el instrumento. Op. cit., pág. 636.

93/ "Banning Poison Gas and Germ Warfare: Should the United States Agree?" Wisconsin Law Review, 1969, págs. 294 a 406.

94/ Por ejemplo, Spaigh, op. cit., pág. 199; Meyrowitz, "Le droit de la guerre ...", loc. cit., pág. 189. Pinto juzga que aunque "los Gobiernos estiman generalmente estar autorizados a emplear gases considerados como no tóxicos, simplemente "incapacitantes" o "irritantes", la opinión pública, como se manifiesta en la resolución de la Asamblea General 2162 B (XXI), de 1966, condena el empleo de esos gases. Op. cit., págs. 310 a 311. Khan admite que "la prohibición tal vez pueda aplicarse discriminadamente de modo que excluya los irritantes no letales", "Chemical and Bacteriological Weapons and International Law", Indian Journal of International Law, vol. 9 (1969), pág. 510.

son abarcados por la prohibición del Protocolo 95/. En otras partes, la cuestión no ha sido ampliamente considerada y no hay una línea clara de opinión sobre la cuestión 96/.

iii) Armas psicoquímicas

43. El estudio a fondo de esta cuestión dirigido por Meyrowitz ha llevado a la conclusión de que esas armas son de las prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925, pero no están prohibidas por el derecho internacional consuetudinario que prohíbe el uso de la guerra química, debido a que no son "letales o dañinas a la salud" 97/

c) Otras circunstancias en las que el uso de armas químicas y bacteriológicas es o no es permitido

44. Algunas autoridades en la materia se refieren al hecho de que, en virtud del derecho internacional consuetudinario, las armas químicas y bacteriológicas pueden ser utilizadas como desquite o en represalia 98/. Esta opinión está ligada a las reservas sobre una primera utilización que han hecho varias de las grandes Potencias militares 99/. Se ha insinuado que las reservas hechas por

95/ Moore, loc. cit., págs. 467-468; Baxter y Buergenthal, op. cit., págs. 853 y 867.

96/ Berver, op. cit., pág. 170, condena el lanzamiento de herbicidas desde aviones; Meyrowitz, "Le droit de la guerre ..." loc. cit., págs. 189 a 190, no considera que haya violación de la ley en el empleo de desfoliantes, pero que el uso de herbicidas contra las cosechas es ilegal, debido al efecto de esas medidas en la población civil; Meyrowitz, Les Armes Biologiques et le Droit International (1968), págs. 32 a 33, se inclina por la opinión de que debe interpretarse que el Protocolo de Ginebra es aplicable al empleo de herbicidas químicos y bacteriológicos, pero admite la existencia de dos opiniones opuestas sobre esta cuestión. Pinto considera que la prohibición del Protocolo abarca tanto a la desfoliación como a la destrucción de cosechas. Op. cit., pág. 311.

97/ "Les armes psychochimiques et le droit international", Annuaire Français de Droit International, vol. 10 (1964), pág. 111.

98/ Oppenheim, op. cit., pág. 344; Stone, op. cit., pág. 556; Khan, loc. cit., pág. 510; O'Brien, loc. cit., págs. 59 y 60.

99/ Véase sección 2.A c) supra.

estos Estados, aclarando que aceptan la obligación de abstenerse solamente de ser los primeros en emplear las armas químicas y bacteriológicas, son una aclaración conveniente del poder de las partes para tomar medidas de represalia contra violaciones del Protocolo 100/. Kalshoven concluye que el gran número de reservas de este carácter ha reducido virtualmente "la prohibición absoluta establecida en el Protocolo a una prohibición en condiciones de reciprocidad" 101/.

45. Las referencias a "war" y "warfare" en el derecho convencional aparentemente se ha considerado que hace al derecho consuetudinario aplicable sólo en el caso de conflictos armados internacionales, pero Meyrowitz ha sugerido que el Protocolo de Ginebra rija también los conflictos armados internos 102/.

100/ Moore, loc. cit., pág. 483.

101/ F. Kalshoven, Belligerent Reprisals (1971), págs. 347 y 348.

102/ Op. cit., pág. 104.

SECCION 3. PROYECTILES DE DIVERSOS TIPOS

A. Práctica de los Estados

46. Las prohibiciones contra el empleo de tipos especiales de proyectiles se derivan de los incisos a) y e) del artículo 23 del Reglamento concerniente a las Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre, anexo a los convenios de La Haya de 1899 y 1907 103/, de la Declaración (IV.2) de La Haya de 1899 con respecto a las balas explosivas 104/ y de la Declaración de San Petersburgo de 1868 105/. En la Sección 1 supra se trata del empleo de veneno y de armas envenenadas proscrito por el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya. La Sección 4, "Armas incendiarias" infra, trata del veneno y las armas envenenadas y sobre proyectiles cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que estén cargados con materias explosivas o inflamables.

47. Las partes en la Declaración de 1899 con respecto a las balas que se expanden acordaron inter se y con sujeción a la cláusula si omnes abstenerse del "empleo de balas que se expanden o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, tales como las balas de envoltura dura que no cubre enteramente el núcleo o está provista de incisiones" - o sea las que se llaman generalmente "balas dum-dum" 106/. El inciso e) del Artículo 23 del Reglamento de La Haya, en el que figura la prohibición de armas "que causen daños superfluos" ("maux superflus" en el texto francés original) puede considerarse que incorpora a un nivel más alto de abstracción, entre otras cosas, la prohibición de la Declaración de 1899. Los Estados Unidos, que no son parte en la Declaración de 1899, ordenan sin embargo a su ejército que no emplee cierto tipo de proyectiles prohibidos por otros Estados en virtud de la Declaración de La Haya; los Estados Unidos consideran que esas órdenes constituyen una aplicación del inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya 107/. En lo que respecta a la Unión Soviética, cabe señalar la nota de 7 de marzo de 1955 enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética al Gobierno de los Países Bajos, que declaraba, entre otras cosas: "El Gobierno de la URSS reconoce los Convenios y Declaraciones de La Haya de 1899 y 1907, que fueron ratificados por Rusia, y lo hace, por supuesto, en el grado en que esos Convenios y Declaraciones no contradigan a la Carta de las Naciones Unidas y siempre que no hayan sido enmendados o reemplazados por acuerdos internacionales posteriores en los que la URSS sea parte, tales como el Protocolo de Ginebra de 1925, relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares

103/ Scott, op. cit., págs. 51 y 209. Véase el capítulo I supra.

104/ Ibid., pág. 83. Véase el capítulo I supra.

105/ British and Foreign State Papers, vol. 58, 1867-68, pág. 16. Véase el capítulo I supra.

106/ Se ha señalado que la bala dum-dum, que se aplasta al contacto con el cuerpo humano y crea por lo tanto una herida mucho mayor, era ya "obsoleta e ineficaz" en 1899. McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 620.

107/ United States Army Field Manual, op. cit.

y de medios bacteriológicos y los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protección de las víctimas de la guerra" 108/.

48. Los manuales militares y las leyes de varios Estados, la mayor parte de los cuales habían firmado la Declaración de 1899, prohíben el empleo de balas dum-dum tal como se definen en la Declaración 109/. Rara vez van más allá de esta definición para concretar qué tipos especiales de armas están prohibidos. El Manual Británico 110/ y la Law of Land Warfare 111/ de los Estados Unidos prohíben las incisiones en las balas y el limado del extremo de su envoltura dura. Prohíben también el empleo de proyectiles de cualquier sustancia que tenga por objeto inflamar una herida, obligación que cabe considerar se deriva de la prohibición de emplear armas envenenadas en virtud del inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya.

49. Los manuales del Reino Unido y de los Estados Unidos prohíben también el empleo de lanzas de cabeza arponada, de balas de forma irregular y de proyectiles rellenos de vidrio partido por considerarlas armas que causan daños innecesarios. El Manual del Reino Unido observa que el inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya no se aplica al "empleo de explosivos contenidos en minas, torpedos aéreos o granadas de mano".

50. La cuestión del empleo de escopetas se ha planteado periódicamente. Durante la Primera Guerra Mundial, Alemania protestó, basándose en el inciso e) del artículo 23 ("daños superfluos"), contra la posesión de escopetas por los soldados estadounidenses. Los Estados Unidos afirmaron que el empleo de esa arma no estaba prohibida por el Reglamento de La Haya 112/. La cuestión se suscitó nuevamente en 1960 y en 1961, y el Auditor General del Ejército opinó que:

"El empleo de una bala de plomo sin envoltura se considera ahora como una violación de las leyes de la guerra. El empleo de proyectiles de escopeta con envoltura suficiente que impida la explosión o la expansión después de

108/ Véase Pravda, 9 de marzo de 1955.

109/ Argentina, Decreto No. 3.189, 28 de marzo de 1960, art. 3, loc. cit.; Austria, Krivinyi, op. cit., pág. 10 (nótese que se permiten granadas de artillería); Ecuador, Estado Mayor del Ejército, op. cit., pág. 40; República Federal de Alemania, Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, pág. 10 y Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegsführung, op. cit., pág. 17; Italia, Legge di Guerra, loc. cit., art. 35, párr. 6; Países Bajos, Manual for the Soldier, op. cit., cap. 7, párr. 10, y Rules of the Law of War, op. cit., cap. III, párr. 14; Suecia, Jägerskiöld y Wulff, op. cit., pág. 72; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 41; United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18.

110/ The Law of War on Land, op. cit., pág. 41.

111/ Op. cit., pág. 18.

112/ Hackworth, Digest of International Law, (1943), vol. 6, págs. 271 y 272.

penetrar en el cuerpo humano y de cartuchos de escopeta con granalla de acero templado de forma regular no constituirán violaciones de las leyes de la guerra" 113/.

51. En la Asamblea General se ha expresado repetidas veces preocupación por las armas que se afirma "provocan sufrimientos humanos, como el napalm, flechettes, bombas de fragmentación y otras utilizadas como armas antipersonal" 114/.

B. Doctrina

52. En los trabajos publicados en varios países 115/ se expresa la opinión general de que es ilegal emplear armas que causan daños innecesarios. Los autores basan esa resolución en referencias a "las normas existentes del derecho internacional" y, en especial, a la Declaración de San Petersburgo de 29 de noviembre de 1868 por la que se renuncia al empleo en la guerra de determinados proyectiles explosivos, la Declaración (IV.2), de La Haya de 1899 que prohíbe el empleo de balas que se expanden o aplastan en el cuerpo humano y la "Cláusula Martens". Los autores se refieren concretamente a la disposición de la Declaración de San Petersburgo de 1868, que destaca la inadmisibilidad del "empleo de armas que agravarían inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien harían que su muerte fuese inevitable".

53. Entre los autores de otros países, sólo la minoría de los que aluden a la prohibición de emplear balas dum-dum, incorporada en la Declaración de La Haya de 1899, expresan en realidad que el arma está prohibida a todos los Estados en virtud del derecho internacional consuetudinario 116/. El mayor número de autores

113/ JAGW 1960/1305, 4 de enero de 1961, citado en el Department of the Army Pamphlet, 27-161-2. International Law, vol. 2 (1962), pág. 45. En 1942, el Auditor General del Ejército opinó que armar a las tropas con "proyectiles de armas cortas de lados estriados con un sólo núcleo de plomo y sin envoltura dura", que "se ensanchan materialmente al contacto" constituiría una violación de la Declaración de La Haya de 1899 y del artículo 23 del Reglamento de La Haya. Bulletin of the Judge Advocate General of the Army, vol. (1942), pág. 207.

114/ Observaciones del representante de Suecia, A/C.1/FV.1882, pág. 32.

115/ Véase Kurs mezhdunarodnovo prava (1969) vol. V, págs. 314 y 320; A.I. Poltorak, Nyurnbergsky protsess (osnovnye pravovye problemy) (1969); E.P. Meleshko, "K istorii voprosa ob otvetstvennosti za narushenie zakonov i obycheev voyny", Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1960, No. 6; M. Genovski, Osnovi na mezhdunarodnovo pravo (1969), pág. 230; S. Penkov, op. cit.; R. Bierzanek, op. cit., pág. 93; S. Nahlik, "Dorobek wielkiej kodyfikacji W 60-lecie konferencji haskiej 1907", Państwo i Prawo, 1961, No. 12; A. Klafkowski, Prawo międzynarodowe publiczne (1962); J. Mrázek, "Zenevské úmluvy z r. 1949 na ochranu obětí války a jejich tzestupravní Zajistění", Casopis pro mezinárodní právo, 3/1957; A. Hobza, Průhled mezinárodního práva válečného (1946); G. Perazie, Mezjunarodno ratno pravo (1972).

116/ Balladore Pallieri op. cit., págs. 168 y 170; C.C. Hyde, International Law. Chiefly as Interpreted and Applied by the United States of America, segunda ed. (1945), vol. 2, págs. 1817 y 1818; Spetzler, pág. 92 (sostiene que la prohibición es aplicable a la guerra aérea); Quadri, op. cit., pág. 305; y véase Meyrowitz, "Le Droit de la Guerre dans le Conflit Vietnamien," loc. cit., pág. 186 y la nota 76 (que alude a las disposiciones del United States Army Field Manual 27-10) que el autor interpreta como una aceptación de la obligación de no emplear balas dum-dum.

simplemente aluden a la Declaración o a la prohibición de balas que se expanden, y dejan que el lector determine si la prohibición es una norma obligatoria de carácter universal 117/. Varias autoridades en la materia declaran o parecen declarar que la prohibición se aplica sólo a los Estados partes en la Declaración 118/.

54. Las autoridades que se ocupan de la cuestión de la legalidad de las balas dum-dum indican que en la primera guerra mundial 119/, en la guerra italoetíope 120/ y en la segunda guerra mundial 121/ se hicieron denuncias de que se habían empleado proyectiles de ese tipo.

55. Varios escritores militares estadounidenses aluden al parecer de su Gobierno con respecto a la compatibilidad del empleo de escopetas con el derecho internacional consuetudinario de la guerra y no disienten de ese parecer 122/.

56. El asunto de las balas explosivas se considera en relación con la prohibición de balas incendiarias en virtud de la Declaración de San Petersburgo de 1868. Sin embargo, puede mencionarse que por lo menos una autoridad en la materia estima que la prohibición, que considera ha pasado al derecho internacional consuetudinario, se aplica a proyectiles que estallan sólo después de haber entrado en el cuerpo humano; tal arma causa sufrimientos innecesarios y es ilegal 123/. Stone estima que la Declaración, en lo que se refiere a las balas explosivas "guarda muy poca relación con la guerra moderna" y que "la evolución técnica ha excedido al ámbito del problema" 124/. Observa que las Potencias que decidieron la Declaración de San Petersburgo desistieron de una propuesta encaminada a prohibir "las balas que infligiesen heridas innecesariamente crueles, tales como las balas explosivas y, en general, todo tipo de bala que excediese el límite necesario para poner a un hombre inmediatamente fuera de combate" 125/.

117/ Oppenheim, op. cit., pág. 341; Fauchille, op. cit., pág. 119; Reuter, op. cit., pág. 316; Shabat, op. cit., pág. 574; Podestá Costa, op. cit., pág. 87; Delbez, op. cit., pág. 532; Pinto, op. cit., pág. 308; Cansacchi, op. cit., pág. 78; Guerrero Burgos, op. cit., pág. 62.

118/ Sereni, op. cit., pág. 1983; Castrén, op. cit., pág. 189; Stone, op. cit., pág. 552; Djatikoesoemo, op. cit., pág. 44.

119/ Garner, International Law and the World War (1921), vol. 2, págs. 262 a 271.

120/ L.N. Doc. C.242. M.140. 1936. VII.

121/ Balladore Pallieri, op. cit., pág. 169.

122/ Kelly, "Legal Aspects of Military Operations in Counterinsurgency", Military Law Review, vol. 21 (1963) pág. 207; United States Department of the Army Pamphlet 27-161-2, op. cit., págs. 45 y 46.

123/ Knackstedt, "Kampfmittel, verbotene" en Strupp-Schlochauer, op. cit., vol. 2, pág. 187.

124/ Stone, op. cit., pág. 552.

125/ Ibid., pág. 552, nota 31.

57. Algunos consideraron que el empleo de "fléchettes" - pequeños dardos o flechas que se emplearon en la guerra aérea y de aire a tierra durante la primera guerra mundial - no constituía una violación del derecho internacional consuetudinario 126/.

58. Varios tipos de armas que se han empleado en conflictos armados recientes han sido vinculados en sus efectos con las balas dum-dum, prohibidas por la Declaración de La Haya de 1899, y se ha afirmado también que causan sufrimientos innecesarios en violación del inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya. Se ha dicho que los proyectiles del rifle AR-15 o M-16, que van dando vueltas en una parte de su trayectoria y, así, desgarran la carne al penetrar; y las bombas de fragmentación, que producen gran cantidad de metralla de pequeño calibre, tienen efectos similares a los de las balas dum-dum y que, por eso mismo, son de legalidad dudosa 127/. Sin embargo, estas armas son bastante nuevas y no ha habido oportunidad de que un número importante de publicistas se pronuncie sobre estos asuntos.

126/ Spaight, op. cit., pág. 202.

127/ Meyrowitz, "Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien", loc. cit., pág. 186; Petroski, "Law and the Conduct of the Vietnam War" R. Falk, ed., The Vietnam War and International Law (1969), vol. 2, págs. 504 y 505; pero véase Fleck, quien opina que el uso de bombas de fragmentación contra personal militar es permisible. Op. cit., pág. 19.

SECCION 4. ARMAS INCENDIARIAS

A. Práctica de los Estados

- a) Proyectiles de menos de 400 gramos que sean explosivos, o estén cargados con sustancias fulminantes o inflamables

59. En varios manuales militares se ha transcrito la prohibición impuesta por la Declaración de San Petersburgo, de 11 de diciembre de 1868, al "empleo por sus tropas /es decir, las tropas de las partes/ de tierra o mar de cualquier proyectil cuyo peso sea inferior a 400 gramos y que sea explosivo, o que esté cargado con materias explosivas o inflamables" 128/. Sin embargo, como se destaca algunas veces, la falta de documentación, bien sea en forma de manuales militares o pruebas de otra índole sobre la práctica de los Estados, hace difícil determinar si la obligación convencional ha recibido la aprobación de un número suficiente de Estados que permita hacer la generalización de que la norma del tratado ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario. Es significativo el hecho de que se haga referencia a la obligación en forma tal que su aplicabilidad no se limita necesariamente a las demás partes en la Declaración de San Petersburgo y sin la cláusula si omnes que la acompaña.

60. El British Manual of Military Law cita la disposición del tratado y la amplifica a continuación de la siguiente manera:

"El uso de municiones de rastreo e incendiarias por las fuerzas armadas de los beligerantes fue práctica general durante la segunda guerra mundial y debe considerarse como legal a condición de que se dirija solamente contra objetivos militares inanimados (incluso aeronaves). El empleo de este tipo de municiones es ilegal si va dirigido exclusivamente contra el personal combatiente. Y ello por dos razones, en primer lugar, la renuncia que figura en la Declaración de San Petersburgo de 1868 a que se ha hecho referencia y, en segundo lugar, la prohibición del inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya." 129/

El manual de la República Federal de Alemania cita la Declaración pero específica a continuación que, con arreglo al derecho consuetudinario internacional, está permitido utilizar proyectiles de menos de 400 gramos si se disparan con

128/ British and Foreign State Papers, vol. 58, 1867-68, pág. 16.

129/ Op. cit., págs. 40-41. La disposición del Reglamento de la Haya a que se hace referencia es la que prohíbe "armas, proyectiles o materiales destinados a causar males innecesarios" ("maux superflus", en el texto auténtico francés). Un manual de los Países Bajos prohíbe "ciertos tipos de munición de rastreo" entre las armas y proyectiles que pueden causar daños innecesarios. Rules of the Law of War. Op. cit., cap. III, párr. 14.

armas distintas de las armas portátiles. Por ejemplo, las granadas de 20 mm. de alto poder explosivo 130/. El manual sueco 131/ menciona la prohibición de la Declaración de San Petersburgo. Las Leggi di Guerra 132/ italianas incorporan la prohibición de proyectiles explosivos e incendiarios de menos de 400 gramos, pero exceptúan el caso del fuego hecho desde aviones o dirigido contra aviones. El manual del Ecuador se refiere simplemente a los proyectiles explosivos de pequeño calibre 133/.

61. Cabe observar que la Comisión de Juristas que redactó las Reglas de La Haya sobre la guerra aérea, de 1923, estipulaba en el artículo 18 de este código, que nunca ha entrado en vigor, que "no está prohibido el empleo de proyectiles de rastreo, incendiarios o explosivos por aeronaves o contra aeronaves" 134/. Esta disposición se cita en las anotaciones al manual británico 135/.

62. En otros manuales militares como el de los Estados Unidos, país que no fue parte en la Declaración de San Petersburgo, y el de Suiza, no se menciona dicha Declaración.

b) Lanzallamas y otras armas incendiarias

63. Aunque el empleo de modalidades incendiarias de guerra se inició en tiempos antiguos, el lanzallamas ha sido, al parecer, una invención de la primera guerra mundial. En un memorando de fecha 24 de abril de 1915, el Gobierno francés calificó su uso de "método abominable, contrario a todas las seguridades solemnemente dadas por el Gobierno Imperial Alemán a las demás Potencias, y que menosprecia todos los sentimientos de humanidad" 136/.

130/ Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 17.

131/ Jagerskiöld y Wulff, op. cit., pág. 78.

132/ Art. 24, párr. 5, que figura como anexo al Real Decreto No. 1415, de 8 de julio de 1938, loc. cit., pág. 4307.

133/ Op. cit., pág. 39.

Otras compilaciones oficiales de los acuerdos internacionales de las leyes de la guerra incluyen el texto de la Declaración de San Petersburgo. Véase, por ejemplo, Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino de Noruega, Krigens Rett: Overenskomster som Norge Står Tilsluttet (1962), pág. 6 (Noruega fue uno de los signatarios originales).

134/ Reglas sobre la guerra aérea, en General Report of the Commissions of Jurists to Consider and Report upon the Revision of the Rules of Warfare, Cmd. 2201 (1924), pág. 24; American Journal of International Law, vol. 17, Suplemento (1923), pág. 249.

El informe explica que "el empleo de proyectiles de rastreo contra aeronaves fue una práctica general entre todos los ejércitos contendientes" durante la primera guerra mundial, y que no podía esperarse que los pilotos emplearan "un tipo de munición contra las aeronaves y otro tipo contra las fuerzas terrestres que pudieran atacarlos".

135/ Op. cit.

136/ Garner, op. cit., vol. 1, pág. 288.

64. Al parecer, esta opinión no ha sido aceptada en la práctica general de los Estados. Un manual de la República Federal de Alemania considera que el empleo de lanzallamas y otros medios incendiarios es legal 137/. Sin embargo, en otras partes se especifica que las descargas de armas incendiarias sobre las viviendas viola los incisos e) y g) del artículo 23 del Reglamento de La Haya 138/. En el Manual británico se sostiene también la legalidad de los lanzallamas y el napalm "cuando se dirigen contra objetivos militares" 139/. La Law of Land Warfare de los Estados Unidos estipula que las armas que emplean el fuego, las municiones de rastreo y los lanzallamas inclusive, no violan el derecho internacional si se utilizan "contra objetivos que demanden su uso" y si no "se emplean en tal forma que causen daños innecesarios a los individuos" 140/. El Gobierno de los Estados Unidos ha declarado también que no considera que el Protocolo de Ginebra de 1925 haga ilegal el empleo de humo y llamas 141/.

65. En la medida en que pueden deducirse algunas conclusiones de esta documentación fragmentaria, parecería que la legalidad del empleo del lanzallamas y otras armas incendiarias dependiera de si el arma se utiliza contra un objetivo militar apropiado.

c) Napalm

66. En la resolución 2932 A (XXVII), de 29 de noviembre de 1972, la Asamblea General manifestó lo siguiente: "Deplora el uso del napalm y de otras armas incendiarias en todos los conflictos armados". En la resolución, que tomaba nota del informe presentado por el Secretario General 142/, se observaba que la propagación masiva del fuego provocado por armas incendiarias era prácticamente indiscriminada en sus efectos sobre objetivos militares y civiles; que las quemaduras eran sumamente dolorosas y requerían para su tratamiento médico recursos excepcionales que estaban muy fuera del alcance de la mayoría de los países; y que tales armas constituían una amenaza al principio largamente defendido de la inmunidad de los no combatientes.

137/ Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegsführung, op. cit., pág. 18.

138/ Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 32.

139/ Op. cit., pág. 41.

140/ Op. cit., pág. 18. El manual correspondiente de la armada de los Estados Unidos expresa que "las armas de tipo químico que en ocasiones tienen carácter asfixiante, tales como el fósforo blanco, el humo y los lanzallamas", son legales. The Law of Naval Warfare (1955), págs. 6-3.

141/ Carta del Secretario de Estado al Presidente, 11 de agosto de 1970, Department of State Bulletin, vol. 63 (1970), pág. 274.

142/ "El napalm y otras armas incendiarias y todos los aspectos de su eventual empleo" (A/8803/Rev.1) (Véase el texto impreso en la publicación de las Naciones Unidas, No. de venta S.73.I.3.) De conformidad con la resolución 2932 A (XXVII), veintiún Estados Miembros presentaron por escrito sus observaciones sobre el informe del Secretario General. Dichas observaciones se distribuyeron el 11 de octubre de 1973 como documento (A/9207) del actual período de sesiones de la Asamblea General (A/9207 y Corr.1).

67. Las delegaciones que hablaron para expresar su apoyo a la resolución lo hicieron en términos que indicaban que el uso del napalm - ya que ésta fue el arma a la que se prestó principalmente atención - debiera prohibirse pero que no estaba prohibido todavía por el derecho internacional general 143/.

68. La propuesta presentada en 1972 por los expertos gubernamentales de Egipto, Finlandia, México, Noruega, Suecia, Suiza y Yugoslavia a la Conferencia de Expertos Gubernamentales sobre la reafirmación y el desarrollo del derecho internacional humanitario aplicable en los conflictos armados, en la que se pedía la prohibición de armas incendiarias que contuvieran napalm o fósforo 144/, insinuaba igualmente que estas armas no están prohibidas en la actualidad por norma alguna del derecho internacional consuetudinario que sea de aceptación general.

69. El Manual británico afirma que el empleo del napalm contra objetivos militares es legal 145/. En el manual de los Estados Unidos se adopta una posición análoga y se agrega, como se observó en relación con los lanzallamas, que el arma no debe utilizarse en tal forma que cause daños innecesarios a los individuos 146/.

70. El Gobierno japonés ha indicado que posee bombas de napalm para su posible utilización contra fuerzas invasoras pero que no tiene el propósito de utilizarlas con fines ofensivos contra otro país 147/.

143/ Por ejemplo, las delegaciones de Chipre (A/C.1/PV.1882, pág. 77); Irlanda (A/C.1/PV.1883, págs. 44-45); República Árabe Siria (A/C.1/PV.1887, págs. 8-10); Chile (A/C.1/PV.1888, págs. 87-90); Sierra Leona (A/C.1/PV.1889, pág. 16); véase, sin embargo la opinión de la delegación de Egipto de que "su uso es indiscriminado dado que se dirige contra los militares y los civiles, contra el ser humano y su medio" (A/C.1/PV.1885, pág. 27).

El informe del Secretario General sobre el respeto de los derechos humanos en los conflictos armados, presentado a la Asamblea General en su vigésimo quinto período de sesiones recordaba que "la legalidad o ilegalidad del empleo del napalm parecía ser una cuestión que requería estudio y que podría ser resuelta en definitiva con un documento internacional en el que se aclarara la situación" (A/8052, párr. 125).

144/ Doc. CE/COM III/C.33, segundo período de sesiones, Informe sobre la labor de la Conferencia (1972), vol. 2, pág. 57.

145/ The Law of War on Land, op. cit., pág. 41.

146/ United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18.

147/ Declaración hecha por el Ministro de Comercio Internacional e Industrias en el Comité de Presupuesto, Cámara de Representantes, 1º de marzo de 1971.

71. Durante el conflicto de Corea, en el Parlamento se formularon preguntas sobre la posición del Gobierno Británico en lo tocante a las bombas de napalm, cuyos efectos fueron calificados por los interpelantes de inhumanos, indiscriminados y perturbadores para la conciencia. El Gobierno respondió que ésta era un arma de efectos más diferenciados que los explosivos de alta potencia, y que casi todas las armas ocasionaban terribles sufrimientos 148/. Meyrowitz informa que "durante la guerra de Corea, el Consejo de Seguridad y la Asamblea General permitieron que las fuerzas de las Naciones Unidas utilizaran estas municiones" 149/.

72. En relación con el reciente conflicto armado, varios Estados hicieron declaraciones en las que se condenaba el uso del napalm. Por ejemplo, en un comunicado conjunto de la URSS y el Viet-Nam, expedido en abril de 1965, las dos partes condenaron "el uso de armas bárbaras de aniquilación, incluso las bombas de napalm, contra la población pacífica" 150/. En un mensaje de fecha 24 de enero de 1966, el Presidente de la República Democrática de Viet-Nam condenó el empleo del napalm para destruir las zonas rurales y aniquilar a la población civil 151/. Los Estados partes en el Tratado de Varsovia - Rumania, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, la República Democrática Alemana, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas - expresaron, en una declaración expedida en una reunión del Comité Político Consultivo, celebrada en Bucarest el 6 de julio de 1966, su condenación del uso del napalm 152/.

B. Doctrina

73. En el transcurso de un siglo, la preocupación central en lo que respecta a las armas incendiarias ha pasado de los proyectiles explosivos e inflamables prohibidos por la Declaración de San Petersburgo a los lanzallamas y, luego, al napalm 153/, que es un invento de la segunda guerra mundial.

148/ Parliamentary Debates (Commons), 54. ser. vol. 500 (1951-1952), cols. 848-850, 1425-1426. En 1967, el Secretario de Estado de Relaciones Exteriores declaró que el napalm iba a ser objeto de un acuerdo general de desarme. Ibid., vol. 751 (1966-1967), col. 31 (respuesta por escrito a una pregunta).

149/ "The Law of War in the Vietnamese Conflict". en Falk, op. cit., vol. 2, pág. 554.

150/ Véase Novoye Vremya, 1965, No. 17: Pravda, 20 de abril de 1965.

151/ Véase Pravda, 30 de enero de 1966.

152/ Véase Ibid., 6 de julio de 1966.

153/ Para los aspectos generales, véase Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz: Napalm and Incendiary Weapons: Legal and Humanitarian Aspects; SIPRI Interim Report (1972), y World Armaments and Disarmament: SIPRI Yearbook 1973, págs. 132 a 163.

a) Proyectiles de menos de 400 gramos que son explosivos o están cargados con sustancias fulminantes o inflamables

74. Varias autoridades clásicas en derecho internacional y en leyes de la guerra se refieren simplemente a la Declaración de San Petersburgo de 1868 o a la prohibición de los proyectiles explosivos y los incendiarios impuesta mediante dicho instrumento, sin señalar su posición actual en el derecho internacional 154/. Al referirse a la Declaración algunas autoridades en la materia indican que obliga tan sólo a las partes en ella 155/.

75. Varios publicistas afirman que la prohibición impuesta por la Declaración es una aplicación concreta en el derecho convencional de una norma preexistente del derecho internacional consuetudinario que prohíbe las armas inhumanas, tales como las que causan daños innecesarios 156/.

76. Diversas consideraciones han llevado a algunos autores a descartar la Declaración sosteniendo que es de escasa importancia contemporánea 157/. Sereni llegó a la conclusión de que el instrumento, que consideraba obligatorio solamente para las partes, había sido superado por el curso de los acontecimientos 158/. McDougal y Feliciano llegaron a la conclusión de que "el empleo universal de esos proyectiles /explosivos o incendiarios/ en la última guerra, y la ausencia de protesta alguna indica firmemente su legitimación, y el carácter obsoleto de la prohibición al menos en la guerra aérea" 159/. La producción de nuevos sistemas de armas, conduce a Fleck a concluir que la prohibición puede aplicarse solamente a proyectiles de un peso considerablemente inferior a 400 gramos, capaces de poner fuera de combate tan sólo al individuo directamente afectado, y que causan daños innecesarios 160/.

77. Algunos niegan expresamente que el principio de la Declaración de San Petersburgo haya pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario 161/. Se ha señalado que la difundida aceptación por los Estados de la opinión de que

154/ Cansacchi, op. cit., págs. 78 y 79; Guerrero Burgos, op. cit., págs. 62 y 63; Rousseau, op. cit., pág. 348; Podestá Costa, op. cit., pág. 87; Reuter, op. cit., pág. 316; Accioly, op. cit., pág. 310; Delbez, op. cit., pág. 532; Salonga y Yap, op. cit., pág. 413; Ghanim, op. cit., pág. 741; Shabat, op. cit., pág. 574; Abu-Hayf, op. cit., pág. 773.

155/ Kunz, op. cit., pág. 80; Djatikoesoemo, op. cit., pág. 44.

156/ Por ejemplo, Balladore Pallieri, op. cit., pág. 170; Quadri, op. cit., pág. 305.

157/ Por ejemplo, Guggenheim, op. cit., pág. 390.

158/ Op. cit., vol. 6, pág. 390.

159/ Op. cit., pág. 621.

160/ Fleck, op. cit., págs. 2 a 4.

161/ Kunz, op. cit., pág. 80; Tucker, loc. cit., pág. 50; United States Department of the Army Pamphlet 27-161-2, op. cit., pág. 42.

los proyectiles incendiarios puede utilizarlos la aviación o pueden ser utilizados contra ella, ha creado en todo caso una excepción a la prohibición 162/.

b) Lanzallamas y otras armas incendiarias

78. Un número importante de versados autores defienden la legalidad de los lanzallamas 163/. Sus afirmaciones están con frecuencia atemperadas por la condición de que deben emplearse contra objetivos militares 164/. El arma se considera como un valioso instrumento para atacar tropas fuertemente atrincheradas o tropas que se encuentren en fortificaciones. Su empleo contra civiles sería ilegal. Así, pues, el arma no se considera como ilegal per se.

79. Algunos expertos en derecho internacional consideran que los lanzallamas son ilegales porque, al igual que otras armas incendiarias, causan daños innecesarios, bien sea que se utilicen contra no combatientes o contra combatientes 165/.

80. Se han opuesto objeciones al lanzamiento de bombas incendiarias alegando que pueden destruir indistintamente objetivos civiles y militares. Castrén afirma que debe considerarse seriamente la limitación de su empleo en el campo de batalla y, en este caso, solamente para la destrucción de objetivos militares que sean tan importantes que no puedan destruirse mediante explosivos ordinarios de alta potencia 166/. Se ha señalado igualmente que los efectos venenosos y asfixiantes de tales armas son tales que se asemejan a las armas químicas prohibidas por el Protocolo de Ginebra de 1925, y que ha habido una mayor proporción de bajas entre los afectados por armas incendiarias que entre los expuestos al gas 167/.

162/ Tucker, loc. cit., pág. 51; Greenspan, op. cit., pág. 360. Spaight asume una posición opuesta pero acepta que la norma fue violada en gran medida durante las dos guerras mundiales. Op. cit., págs. 198-199.

163/ Knackstedt, "Kampfmittel, verbotene," loc. cit., pág. 187 (no son ilegales en virtud del inciso a) del Art. 23 del Reglamento de La Haya); Tucker, loc. cit., pág. 51; Brownlie, "Legal Aspects", loc. cit., pág. 150 (no están comprendidos en el Protocolo de Ginebra de 1925); Kunz, op. cit., pág. 80; Singh, Nuclear Weapons and International Law (1959); pág. 151; Schwarzenberger, op. cit., pág. 44; Thomas and Thomas, op. cit., pág. 155; Stone, op. cit., pág. 550; McDougal and Feliciano, op. cit., pág. 622; Castrén, op. cit., pág. 42; Philip C. Jessup, A Modern Law of Nations (1948), pág. 216 (se permite su uso a las fuerzas internacionales).

164/ Oppenheim, op. cit., pág. 340, n. 2; Greenspan, op. cit., págs. 360 y 361.

165/ Brownlie, loc. cit., pág. 150; McDougal and Feliciano, op. cit., pág. 622; Knackstedt, loc. cit., pág. 187.

166/ Castrén, "La protection juridique de la population civile dans la guerre moderne: remarques et suggestions", Revue Générale de Droit International Public, vol. 59 (1955), pág. 134.

167/ Czesany, Nie Wieder Krieg gegen die Zivilbevölkerung, 2a. ed. (1964), págs. 118 y 119.

c) Napalm

81. En vista de que el napalm es un arma bastante nueva y ha sido objeto de la atención pública a consecuencia principalmente de su empleo en los conflictos de Corea y Viet-Nam, las referencias a ella de manera expresa en obras publicadas son relativamente pocas y proceden sobre todo de Gran Bretaña y los Estados Unidos. Varias autoridades en la materia lo agrupan con otras armas incendiarias, los lanzallamas inclusive, y concluyen que, por esta razón es, de maiore ad minorem, un arma permisible 168/. Como en el caso de los lanzallamas, se observa con frecuencia que el napalm y las bombas de napalm deben emplearse tan sólo contra objetivos legítimos en el sentido de objetivos militares 169/.

82. A consecuencia del uso del napalm en la guerra de Viet-Nam, varios autores al escribir sobre el tema han manifestado que el arma ha sido utilizada en forma tan indiscriminada y causa sufrimientos tales que pertenece a la categoría de armas prohibidas por esas razones 170/. Se ha sugerido que el hecho de que del napalm se desprenden grandes cantidades de monóxido de carbono hace que el arma quede incluida en la prohibición de la guerra de gases contenida en el Protocolo de Ginebra 171/.

83. Una posición similar se encuentra entre los autores de los países socialistas, para quienes el napalm en particular, es objeto de un entendimiento especial acerca de su prohibición. Dichos autores reconocen las consecuencias peligrosas del empleo del napalm y otras armas de carácter similar y consideran en el contexto de los acuerdos internacionales vigentes, que el uso de tales armas está restringido dado

168/ Tucker, loc. cit., pág. 51; Brownlie, loc. cit., pág. 150; Department of Army Pamphlet 27-161-2, op. cit., pág. 42; Thomas and Thomas, op. cit., pág. 154; McDougal and Feliciano, op. cit., pág. 622; Schwarzenberger, op. cit., pág. 44; Castrén, op. cit., pág. 190; Knackstedt, loc. cit., pág. 187; Kalshoven, "Incendiary Weapons: Legal and Humanitarian Aspects" (ms.), pág. 16; véase también, Greenspan, op. cit., pág. 361.

169/ Meyrowitz, "Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien", loc. cit., pág. 186; Tucker, loc. cit., pág. 51; Brownlie, loc. cit., pág. 150; McDougal and Feliciano, op. cit., pág. 622; Knackstedt, loc. cit., pág. 187.

170/ Petrowski, "Law and the Conduct of the Vietnam War", en Falk, op. cit., vol. 2. pág. 504 ("Aunque no viola específicamente el derecho internacional ... puede considerarse una violación por analogía"); D'Amato, Gould and Woods, "War Crimes and Vietnam: The 'Nuremberg Defense' and the Military Service Register", ibid., vol. 3, págs. 448 y 449.

171/ D'Amato, Gould and Woods, ibid., y véase Pinto, para quien, aunque el napalm no está comprendido en prohibición alguna, el arma puede asimilarse al gas. Op. cit., pág. 312.

que el napalm, por ejemplo, despidе grandes cantidades de monóxido de carbono, que puede ocasionar el envenenamiento y la muerte. En otras palabras, el uso del napalm para fines militares se considera particularmente cruel, ya que sus víctimas, a más de ser quemadas vivas, son asfixiadas y envenenadas. Tal uso se considera, pues, como una violación del Convenio de La Haya de 1907 y del Protocolo de Ginebra de 1925, ambos referentes a la prohibición del empleo de armas químicas y bacteriológicas (biológicas). Entre los autores socialistas se sostiene también la opinión de que el napalm y otras armas incendiarias no discriminan entre combatientes y civiles o entre objetivos militares y no militares, y que son armas que causan daños innecesarios. A este respecto, se refieren en particular a la disposición de la Declaración de San Petersburgo de 1868, en la que se dice que "la única finalidad legítima que los Estados deben proponerse durante la guerra es el debilitamiento de las fuerzas militares del enemigo". En opinión de los autores socialistas, debe reconocerse que el empleo de armas que agravan inútilmente los sufrimientos de hombres incapacitados, o hacen inevitable su muerte, no se ajusta a esta finalidad. Utilizando las palabras de la Declaración, "el empleo de tales armas sería, por tanto, contrario a las leyes de humanidad". Los autores se refieren también al artículo XXII del anexo al Cuarto Convenio de La Haya de 1907, que afirma que "el derecho de los beligerantes a adoptar medidas para lesionar al enemigo no es ilimitado"; a la resolución XXIII de la Conferencia Internacional de Derechos Humanos, celebrada en Teherán en 1968, que condena el empleo del napalm, y a la resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General, que reafirma dicha resolución 172/.

84. En un anuario reciente del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz 173/, se adopta la posición de que las armas incendiarias no están inequívocamente prohibidas con arreglo al derecho convencional, que están comprendidas en el principio contra el empleo en la guerra de armas que causan daños innecesarios o cuyos efectos son indiscriminados y que sería conveniente "tratar de prohibir el empleo de armas incendiarias que suscitan amplios sentimientos de horror y repugnancia asociados frecuentemente en la mentalidad popular con las armas químicas" 174/.

172/ Véase F.I. Kozhevnikov, ed. Kurs mezhdunarodnovo prava (1972); A.I. Poltorak, y L.I. Sovinsky, op. cit., H. Ganelin, "K istorii voprosa o zapreshchenii varvarskikh sposobov vedeniya voyny", Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1953, No. 1; M. Genovski, Osnovi na mezhdunarodnovo pravo, 1969, pág. 330; R. Bierzanek, op. cit., pág. 93.

173/ Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, World Armaments and Disarmament: SIPRI Yearbook 1973, pág. 149 a 151.

174/ Véase párr. 61 supra.

C. Consideraciones pertinentes sobre la prohibición del empleo de tales armas que se deriva de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales

85. Se ha hecho referencia al artículo 18 de las Reglas de La Haya sobre la guerra aérea, que se refieren a la permisibilidad de la utilización de explosivos y proyectiles incendiarios por la aviación o contra ella, a pesar de la Declaración de San Petersburgo. Las Reglas nunca han entrado en vigor.

86. En 1956, cuando el Comité Internacional de la Cruz Roja redactó su "Proyecto de Reglamento para la limitación de los peligros a que se expone a la población civil en tiempo de guerra", en el artículo 14 dispuso que estaba prohibido usar armas cuyos efectos nocivos - que resultaban en particular de la diseminación de agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radioactivos o de otro tipo - pudieran extenderse en un grado imprevisto o escapar, bien fuera en el espacio o en el tiempo, al control de quienes los utilizaban, poniendo así en peligro a la población civil 175/. En el comentario se indica que las armas incendiarias "tienen algunas veces efectos limitados, por ejemplo, el lanzallamas o el napalm cuando se utilizan contra un tanque, pero a veces tienen consecuencias incontrollables como en el caso de ciertas bombas que esparcen materiales inflamables hasta distancias considerables 176/. Parecería que la Conferencia Internacional de la Cruz Roja hubiera tratado en el artículo 14 de referirse a las armas incendiarias distintas del napalm y los lanzallamas, que se consideraban entonces como armas de efecto limitado.

175/ XIXa. Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Draft Rules for the Limitation of the Dangers Incurred by the Civilian Population in Time of War (1956), pág. 101.

176/ Ibid., pág. 104.

SECCION 5. ARMAS NUCLEARES

A. Práctica de los Estados

87. La cuestión de la prohibición del uso de las armas nucleares ha surgido principalmente en el contexto del desarme, cuya historia se ha descrito en otras partes 177/.

88. Las opiniones contradictorias de los Estados sobre la legalidad o ilegalidad del arma probablemente quedaron demostradas más claramente en la votación efectuada en la Asamblea General sobre la resolución 1653 (XVI), Declaración sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares, aprobada el 24 de noviembre de 1961. En la resolución se disponía lo siguiente:

"La Asamblea General,

...

Recordando que el uso de armas de destrucción en masa, causantes de sufrimientos humanos innecesarios, fue prohibido en el pasado, por ser contrario a las leyes de la humanidad y a los principios del derecho internacional, mediante declaraciones internacionales y acuerdos obligatorios, tales como la Declaración de San Petersburgo de 1868, la Declaración de la Conferencia de Bruselas de 1874, los Convenios de las Conferencias de la Paz de La Haya de 1899 y 1907 y el Protocolo de Ginebra de 1925, en los que todavía son partes la mayoría de las naciones,

Considerando que el uso de armas nucleares y termonucleares causaría a la humanidad y a la civilización sufrimientos y estragos sin distinciones, incluso de mayores proporciones que el uso de las armas previstas en los mencionados acuerdos y declaraciones internacionales, uso que en ellos se declaró ser contrario a las leyes de la humanidad y constituir un delito definido en el derecho internacional,

Estimando que el uso de armas de destrucción en masa, como son las armas nucleares y termonucleares, constituye una negación rotunda de los altos ideales y objetivos para cuyo logro fueron creadas las Naciones Unidas, que al efecto deben proteger a las generaciones venideras del flagelo de la guerra y preservar y promover su cultura,

1. Declara que:

a) El uso de armas nucleares y termonucleares es contrario al espíritu, a la letra y a los objetivos de la Carta de las Naciones Unidas y, por tanto, constituye una violación directa de la misma;

177/ Las Naciones Unidas y el Desarme 1945-1970 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: 70.IX.1).

b) El uso de armas nucleares y termonucleares excedería aun los fines mismos de la guerra y causaría a la humanidad y a la civilización sufrimientos y estragos sin distinciones y, por tanto, es contrario a las normas del derecho internacional y a las leyes de la humanidad;

c) El uso de armas nucleares y termonucleares significa una guerra dirigida no sólo contra uno o varios enemigos, sino contra la humanidad en general, ya que los pueblos del mundo que no participen en tal guerra se verán sometidos a todos los males resultantes del uso de esas armas;

d) Se considerará que todo Estado que utilice armas nucleares y termonucleares viola la Carta de las Naciones Unidas, obra en contra de las leyes de la humanidad y comete un crimen contra la humanidad y la civilización.

...

La resolución, que originalmente había sido presentada por Ceilán, Etiopía, Ghana, Guinea, Indonesia, Liberia, Libia, Nigeria, Somalia, el Sudán, el Togo y Túnez, (A/C.1/L.292 y Add.1-3) 178/, fue aprobada por 55 votos contra 20 y 26 abstenciones 179/. Entre los Estados que votaron contra la resolución estaban tres de las Potencias nucleares, Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos.

89. La resolución, al igual que resoluciones posteriores 180/, aludía también a 181/ la conclusión de un convenio sobre la prohibición del uso de las armas nucleares y termonucleares con fines bélicos, pero hasta ahora no se ha celebrado ese convenio. Los patrocinadores de este convenio no aclararon si éste sería declaratorio del derecho internacional consuetudinario o si crearía nuevas obligaciones legales para las partes. Declaraciones tales como la de que el convenio no tendría fuerza legal obligatoria sobre los Estados que no son partes en él 182/ y de que el convenio "oportunamente formará parte del derecho internacional" 183/ sugieren que por lo menos varios Estados consideraban que todavía no se había establecido en el derecho positivo la obligación legal de no usar armas nucleares o termonucleares.

178/ En el décimo quinto período de sesiones de la Asamblea General se había presentado un proyecto de resolución análogo (A/C.1/L.254 y Add.1-3) pero no se llegó a una decisión, a ese respecto.

179/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Sesiones Plenarias, volumen II, 1063a. sesión, párrs. 122 a 126.

180/ Por ejemplo, las resoluciones 1801 (XVII) de 14 de diciembre de 1962; 1909 (XVIII) de 27 de noviembre de 1963; 2164 (XXI) de 5 de diciembre de 1966 y 2289 (XXII) de 8 de diciembre de 1967.

181/ Párrafo 2.

182/ Ceilán (Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoséptimo período de sesiones, Primera Comisión, 1288a. sesión, párr. 8).

183/ Etiopía (Ibid., vigésimo primer período de sesiones, Primera Comisión, 1463a. sesión, párr. 23).

/...

90. Los patrocinadores de la resolución 1653 (XVI) de 1961 y de un tratado por el que se prohíbe el uso de las armas nucleares expresaron la opinión de que la igualdad de las armas surgía de que éstas se emplean contra civiles 184/, de que la Carta no permite la guerra, "mucho menos la guerra nuclear" 185/, y de que ésta es un arma de destrucción masiva 186/. Además de votar en favor de la Declaración, en el intercambio de opiniones sobre la Declaración y el convenio propuesto, varios Estados mencionaron a las armas nucleares como una violación del derecho internacional consuetudinario vigente y de la Carta 187/.

91. Quienes se oponían a la Declaración y al convenio propuesto objetaron que aquellos Estados que son víctimas de un acto de agresión tendrían derecho a usar armas nucleares en ejercicio del derecho de legítima defensa, reconocido en el Artículo 51 de la Carta 188', que las armas nucleares podrían tener importancia crítica al determinar si una nación habría de sobrevivir 189/, que una prohibición en forma de tratado induciría a un falso sentimiento de seguridad 190/ y que la cuestión debería tratarse en el marco del desarme 191/. Se señaló además que el uso de las armas nucleares o de todo otro tipo de armas no está prohibido por la Carta y que el derecho internacional consuetudinario no prohíbe el uso de armas nucleares 192/.

92. En el vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General se aprobó la resolución 2936 (XXVII) de 29 de noviembre de 1972. En esta resolución, la Asamblea General declaró solemnemente

"en nombre de los Estados Miembros de la Organización, su renuncia a la amenaza o al uso de la fuerza, bajo todas sus formas y manifestaciones, en las relaciones internacionales, de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, y la prohibición permanente del uso de las armas nucleares;"

184/ Irak (Ibid., decimosexto período de sesiones, Primera Comisión, 1190a. sesión, párr. 27).

185/ Etiopía (Ibid., 1191a. sesión, párr. 8).

186/ Venezuela (Ibid., 1193a. sesión, párr. 56).

187/ Por ejemplo, India (Ibid., vigésimo segundo período de sesiones, Primera Comisión, 1539a. sesión, párr. 8), Nigeria (Ibid., decimoséptimo período de sesiones, Anexos, tema 26 del programa, documento A/5174/Add.2).

188/ Reino Unido (Ibid., decimosexto período de sesiones, Primera Comisión, 1190a. sesión, párr. 7); Estados Unidos (Ibid., 1190a. sesión, párr. 16); España (Ibid., 1193a. sesión, párr. 44); Perú (Ibid., decimoséptimo período de sesiones, Anexos, tema 26 del programa, documento A/5174 y Add.1 y 2).

189/ Irlanda (Ibid.).

190/ Países Bajos (Ibid.) y Turquía (Ibid.).

191/ La generalidad de los Estados que expresaron opiniones negativas o algunas dudas sobre la convocación de una conferencia especial con el propósito de concluir un tratado de ese carácter hicieron hincapié en los debates sobre el desarme que se llevaban a cabo en la Conferencia del Comité de Desarme compuesto de 18 naciones (Ibid.).

192/ Estados Unidos (Ibid., decimosexto período de sesiones, Primera Comisión, 1192a. sesión, párr. 6; Ibid., Sesiones Plenarias, volumen II, 1063a. sesión, párr. 18).

La resolución fue aprobada por 73 votos contra 4 y 46 abstenciones. Las delegaciones que apoyaron la resolución mencionaron la necesidad de prohibir el uso de tales armas "en forma permanente, en todas las circunstancias y por parte de todos los Estados" 193/, y aseveraron que "la prohibición de la utilización de la fuerza a fortiori supondría la prohibición del uso de armas nucleares" 194/.

93. La resolución 2936 (XXVII) de 29 de noviembre de 1972 fue aprobada por la Asamblea General en relación con la cuestión titulada "No utilización de la fuerza en las relaciones internacionales y prohibición permanente del uso de las armas nucleares" que había sido incluida en el programa del vigésimo séptimo período de sesiones a solicitud de la Unión Soviética. En el examen de este tema las delegaciones de la Unión Soviética - como patrocinadora del tema y del proyecto de resolución correspondiente (A/L.676) - y de varios otros Estados socialistas formularon declaraciones. A continuación se reproducen in extenso extractos de algunas de estas declaraciones y en ellos se reflejan las políticas nacionales de esos Estados en lo tocante a la prohibición del uso de las armas nucleares 195/.

94. El Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas declaró, entre otras cosas, lo siguiente 196/:

"La esencia de nuestra propuesta es que dispone la renunciación de los Estados a todo uso de la fuerza para la solución de disputas internacionales, incluido el uso de armas nucleares y de los tipos de armas que se denominan comúnmente convencionales. Se propone que esta renunciación sea de un carácter tal que nadie pueda eludir su aplicación estricta, y esto es posible si las Naciones Unidas demuestran la comprensión precisa de su responsabilidad por el destino del mundo,

193/ Egipto (A/PV.2080, pág. 21).

194/ Chipre (A/PV.2084, pág. 32).

195/ La política de esos Estados en lo tocante a la prohibición del uso de las armas nucleares se refleja también en declaraciones relativas al establecimiento de zonas libres de armas nucleares en diversas regiones del mundo. A este respecto, también se puede mencionar, por ejemplo, la respuesta del Gobierno de la Unión Soviética enviada el 22 de febrero de 1964 a una comunicación de fecha 23 de enero de 1964 del Gobierno de Ceilán, (Pravda, 25 de febrero de 1964) y el comunicado conjunto de la Unión Soviética y el Irán de fecha 31 de marzo de 1970, (Ibid., 1.º de abril de 1970). Además cabe señalar el memorando presentado el 28 de marzo de 1962 por el Gobierno de Polonia al Comité de Desarme compuesto de 18 naciones sobre el establecimiento de una zona desnuclearizada y de armamentos limitados en Europa (ENDC/C.1/1), y a la declaración y a un proyecto de tratado sobre la renuncia total a las armas nucleares entre ambos Estados alemanes presentada al Comité de Desarme compuesto de 18 naciones el 3 de febrero de 1964 por el Gobierno de la República Democrática Alemana (ENDC/124 de 3 de febrero de 1964).

196/ A/PV.2040.

"Ese enfoque coincide plenamente con el principio fundamental que se proclama en la Carta de las Naciones Unidas según el cual los Miembros de las Naciones Unidas "en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas" ...

"Hace más de diez años, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una Declaración en la que se proclamaba que el uso de las armas nucleares era un crimen contra la humanidad y la civilización. Desde entonces, las Naciones Unidas han abogado reiteradamente porque todos los Estados firmen un convenio internacional apropiado. No obstante, la Declaración sobre la prohibición de las armas nucleares no ha recibido el apoyo de todas las Potencias nucleares y hasta ahora no ha sido posible iniciar negociaciones productivas sobre la conclusión de un convenio internacional relativo a la cuestión.

"Pueden encontrarse muchos motivos para la falta de efectividad de la decisión adoptada por las Naciones Unidas respecto de estas cuestiones, pero uno de los más importantes es indiscutiblemente que se examinaron y decidieron en las Naciones Unidas sin conexión entre unas y otras.

"Cuando se planteó la cuestión de la prohibición de uso de las armas nucleares, varios Estados tenían dudas en cuanto a la posibilidad de adoptar tal medida si en las relaciones entre los Estados no se excluía el uso de la fuerza. No entraremos ahora a debatir hasta qué punto se justificaban esas dudas, pero, como quiera que sea, se convirtieron en un obstáculo para el acuerdo.

"Al mismo tiempo, cuando se examinó la cuestión de la prohibición del uso de la fuerza, el significado de toda decisión adoptada resultó limitado en ausencia de un acuerdo relativo a las armas nucleares, es decir las armas más poderosas de destrucción en masa. La separación entre una y otra cuestión introdujo cierta falta de comprensión y suspicacia y debilitó la efectividad de las mejores decisiones de las Naciones Unidas. Más aún, su efectividad fue aún más limitada debido a que todas tenían la forma de recomendaciones o, en el mejor de los casos, de declaraciones de intención. No se les dio fuerza de ley.

...

"El proyecto propuesto [por la Unión Soviética] es sumamente claro. Entraña un importante paso de parte de la Asamblea General, una decisión en nombre de los Estados Miembros de las Naciones Unidas sobre su renuncia al uso o a la amenaza de usar la fuerza de las relaciones internacionales y la prohibición permanente del uso de las armas nucleares. Contiene un llamamiento al Consejo de Seguridad para que adopte medidas destinadas a que

esta declaración sea obligatoria para todos los Estados. Con este propósito, y de conformidad con bien conocidas disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, se debe convocar a una reunión del Consejo de Seguridad en el nivel de miembros de gobiernos u otros representantes especialmente designados.

"La delegación soviética está autorizada a declarar que la Unión Soviética se mantendrá dispuesta a participar en la convocación a esa reunión del Consejo de Seguridad y en la labor que se cumpla en ella. Estaremos dispuestos a unirnos con todos los otros Estados que son miembros permanentes del Consejo en esta sección política. Estamos convencidos de que no puede haber un deber más elevado para aquellos Estados a los cuales la Carta de las Naciones Unidas asigna una responsabilidad especial por el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales."

95. Los representantes de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Mongolia y Polonia ^{197/} apoyaron, en términos generales, la idea de que la cuestión de la prohibición del uso de las armas nucleares debía resolverse junto con la de la prohibición del uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la prohibición permanente de las armas nucleares como las armas más destructivas de todas.

96. El representante de Rumania declaró, en otras cosas lo siguiente:

"El Tratado de No Proliferación no dispone ninguna medida para poner fin a la producción de armas nucleares ni para eliminar los arsenales de dichas armas. Tampoco ofrece ninguna garantía de que no se emplearán armas nucleares en guerras futuras ni presta ninguna seguridad en absoluto en cuanto a la no utilización de dichas armas. Hasta el momento en que exista un acuerdo general sobre la prohibición y destrucción de las armas nucleares, los países que han renunciado al derecho a adquirir esas armas, así como todos los otros pueblos, tienen derecho, política, jurídica y moralmente a solicitar y obtener sin mayor demora garantías en firme de que jamás, en ninguna circunstancia, se verán sometidos al ataque o a la amenaza de ataque con armas nucleares.

"Aquellos Estados que poseen armas nucleares tendrán que asumir la responsabilidad de la obligación de no recurrir, bajo ningún pretexto ni en ninguna circunstancia, al uso de armas nucleares, o a la amenaza de su uso, contra ningún otro Estado, independientemente de si ese Estado posee o no esas armas. Creemos que todo Gobierno y todo dirigente político tiene un deber y una enorme responsabilidad respecto de su propio pueblo y, en último análisis, respecto del destino de la humanidad entera de actuar en la forma más enérgica posible para imponer, sin mayor demora, la prohibición del uso de las armas nucleares.

"En nuestra opinión una forma eficaz de lograrlo sería, según se indica en la resolución de la Conferencia Nacional del Partido Comunista de Rumania.

^{197/} A/PV.2085, A/PV.2079.

distribuida a la Asamblea General como documento A/8749, el logro de un acuerdo universal en el que se podrían consagrar las normas más elevadas de conducta y acción de los Estados en sus relaciones internacionales. A nuestro modo de ver, un elemento importante de tal acuerdo debería ser la solemne reafirmación del compromiso de todos los Estados a renunciar a la fuerza y a la amenaza de la fuerza contra otros Estados y la obligación que asumen aquellos países que poseen armas nucleares de que jamás utilizarán esas armas o amenazarán usarlas contra nadie y en ninguna circunstancia." 198/

97. El representante de Yugoslavia, entre otras cosas, hizo la siguiente declaración:

"Yugoslavia siempre ha intercedido porque no se recurra al uso de la fuerza en las relaciones entre los Estados y a favor de la prohibición de todas las armas de destrucción en masa, armas nucleares y termonucleares en particular ... La renunciación al uso de la fuerza es un requisito previo para la realización de la coexistencia y la cooperación pacífica entre los Estados y los pueblos, en tanto que la prohibición del uso de las armas nucleares es una de las condiciones básicas de la paz y la seguridad internacionales ...

"La prohibición de todos los ensayos nucleares, el retiro de las armas y fuerzas nucleares dentro de las fronteras nacionales, el establecimiento de zonas desnuclearizadas, la cesación de la fabricación de materiales fisionables con fines militares, el congelamiento de los armamentos nucleares y la interrupción de los trabajos de investigación y del perfeccionamiento de las armas nucleares podrían ser las primeras medidas concretas destinadas a eliminar las armas nucleares de los arsenales de todos los Estados.

"A fin de preservar el equilibrio necesario en este proceso es imprescindible que las medidas adoptadas en la esfera del desarme nuclear estén acompañadas de medidas convenientes por las que se limiten y reduzcan del mismo modo las armas convencionales. Hablando en términos prácticos, esto quiere decir que la cuestión de los armamentos ha de ser considerada en su totalidad, debido a que es sólo dentro de este contexto más amplio que se pueden tener en cuenta todas las realidades y se puede encontrar un denominador común de los intereses de todos los países. Aparentemente la constelación internacional actual y el grado de desarrollo logrado en la esfera de los armamentos, particularmente los armamentos nucleares, hacen imperativo y posible incluir en el programa el complejo global de los problemas del desarme y, a partir de esta amplia base, encontrar soluciones parciales adecuadas con mayor facilidad.

"El mundo jamás ha enfrentado peligros de devastación tales como los de hoy. Solamente mediante los esfuerzos comunes y la voluntad política de todos los países se podrán crear condiciones en las que estos peligros cedan al paso de la cooperación, la paz y la seguridad de todos los países." 199/

198/ A/PV.2081.

199/ A/PV.2080.

98. En su declaración, el jefe de la delegación de la China recordó la propuesta de su Gobierno de que "como primer paso hacia la prohibición completa y la destrucción total de las armas nucleares, que todas las Potencias nucleares se comprometan a no ser las primeras en utilizar las armas nucleares, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, especialmente en contra de los países que no poseen armas nucleares ... La propuesta de la República Popular de China relativa a la obligación de no ser los primeros en utilizar las armas nucleares es incondicional" 200/

99. En los manuales militares de los Estados de Europa occidental se expone normalmente que el uso de las armas nucleares no está prohibido por el derecho internacional consuetudinario 201/. No obstante, frecuentemente se estipula que el uso de tales armas está sujeto a las limitaciones generales impuestas por el derecho internacional sobre el uso de armas 202/ particularmente en lo que se refiere a los bombardeos aéreos. Así pues, el uso de armas nucleares explosivas contra tropas enemigas u otros objetivos militares no constituye per se una violación del derecho internacional 203/. En un manual de la República Federal de Alemania se dispone que el uso de armas nucleares en un caso que de otra manera quedaría prohibido por el derecho internacional se permite como represalia por una violación particularmente grave del derecho internacional por un enemigo. En un manual sueco se declara que se ha intentado vincular el uso de las armas nucleares con el Protocolo concerniente a la prohibición de emplear en la guerra gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos firmado en Ginebra en 1925, y se describen los diversos esfuerzos que se han efectuado por controlar los ensayos, la posesión y el uso de armas nucleares 204/. El único manual de una república latinoamericana examinado señala que el uso de armas nucleares todavía no ha sido regulado por el derecho internacional 205/.

200/ A/PV.2083.

201/ Austria, Bundesministerium für Landesverteidigung, Truppenführung (1965), pág. ; Krivinyi, op. cit., págs. 10 a 11; República Federal de Alemania, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 18; Países Bajos, Manual for the Soldier, cap. 7, párr. 11; Armée Suisse, op. cit., pág. 5; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 42; Estados Unidos Army Field Manual, pág. 18, y The Law of Naval Warfare, op. cit., págs. 6 y 4.

202/ Todos los manuales citados en la nota precedente con excepción del manual del Ejército de los Estados Unidos.

203/ Véase, por ejemplo, el manual de la República Federal de Alemania citado supra en la nota 201.

204/ Jagerskiöld y Wulff, op. cit., págs. 73 a 74.

205/ Ecuador, Estado Mayor del Ejército, op. cit., pág. 40.

100. Al responder a una interpelación parlamentaria en la Cámara de Representantes del Japón sobre la posición del Gobierno respecto del caso Shimoda que trataba del bombardeo atómico de Hiroshima y Nagasaki 206/, el Ministro de Relaciones Exteriores respondió que

"el bombardeo atómico indudablemente fue un incidente trágico y lamentable, pero que no podía manifestar en forma concluyente, como materia de derecho estricto, que el bombardeo hubiera sido una violación del derecho internacional, puesto que no parece haber existido una disposición del derecho internacional positivo a este respecto." 207/

El Director de la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó esta posición y aludió al hecho de que "la opinión mayoritaria entre los abogados internacionales del Japón era que el bombardeo atómico contra Hiroshima y Nagasaki debía condenarse como una violación del derecho internacional", pero que ninguno de ellos deseaba confirmar la existencia de una disposición de derecho positivo que fuese directamente aplicable 208/.

206/ Véase el Capítulo III infra.

207/ Cámara de Representantes, 46o. período de sesiones de la Dieta, Minutas del Comité Permanente de Presupuesto, 16a. sesión (28 de febrero de 1964), pág. 29, citado en Japanese Practice in International Law, The Japanese Annual of International Law, vol. 10 (1966), pág. 91.

208/ Ibid.

B. Doctrina

101. Los escritores de muchos países socialistas 209/ enfocan de un modo más o menos uniforme el problema de la prohibición del uso de las armas nucleares. En general, afirman que no hay reglas especiales que prohíban el uso de las armas nucleares. Algunos autores opinan que las prohibiciones que figuran en la Declaración de San Petersburgo de 1868, las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 y el Protocolo de Ginebra de 1925 deben hacerse extensivos a las armas nucleares. Consideran que el propósito de tales prohibiciones es abarcar las nuevas variedades destructivas de armamentos que no se habían inventado cuando se concertaron los instrumentos supradichos. Reconocen la existencia en el derecho internacional contemporáneo de una norma consuetudinaria que prescribe que los Estados adopten

209/ Véase F.I. Kozhevnikov, ed., Kurs mezhdunarodnogo prava, (1972), pág. 368; Kurs mezhdunarodnogo prava (1969), vol. V, pág. 324; E. Korovin, "Atomnoe oruzhie i mezhdunarodnoe pravo", Mezhdunarodnaya zhizn, 1955, No. 5; V.N. Durdenevsky, A.N. Shevchenko, "Nesovmestimost ispolzovaniya atomnogo oruzhiya s normami mezhdunarodnogo prava", Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1955, No. 5; P.S. Romashkin, Prestupleniya protiv mira i chelovechestva (1967); A.M. Trainin, Zashchita mira i ugolovny zakon (1969), pág. 403; I. Cheprov, Novye problemy mezhdunarodnogo prava (1969), págs. 14-35; G.F. Kalinkin, "Dogovor o nerastrostraneni yadernogo oruzhiya - effektivny instrument mira i bezopasnosti narodov", Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1968, No. 10; O.V. Bogdanov, Dogovor, kotory nuzhen lyudyam (1968); O.V. Bogdanov, Vseobshchee i polnoe razrushenie (1964), pág. 201; Problemy kolektivnoi bezopasnosti v Evrope, materiales del período de sesiones científico de la Academia de Ciencias de Polonia, Varsovia, 3 a 6 de abril de 1955 (Profesores T. Cyprjan, I. Laks, C. Brzezowski, República Popular Polaca; Profesor R. Reintanz, República Democrática Alemana); M. Radojković, "Les armes nucléaires et le droit international", Year Book of World Affairs, vol. 16 (1962); S. Hahlik, "Bron atomowa a prawo miedzynarodowe", Sprawy Miedzynarodowe, 1961, No. 5; R. Bierzanek, op. cit., pág. 95.

Ecobesco, Unlawful Weapons, en The law of armed conflicts (1971), págs. 75-76; K.J. Skubiszewski, en The law of armed conflicts (1971), pág. 74; S. Penkov, "Dogovor't za Antarktika - programma za razor'zhavana i mezhdunarodno s'trudnichestvo", Pravna mis'l, 1960, No.2; S. Penkov, "Problemi na nerastrostranyavaneto na yadreniete or'zhiya", Izvestiya na Instituta za pravni nauki, 1973; M. Genovski, Osnovi na mezhdunarodnoto pravo (1969), págs. 301, 402-404; B. Donner, "Válka atomová, biologické a chemická ve světle mezinárodního práva", Právník, 1950 No. 9; B. Donner Válka ABC ve světle mezinárodního práva (1952); A. Echim, "Interzicerea folosiri armelor nucleare, problema a dreptului international", Justitia naua, 1966, No.4; E. Glaser, "Problema de drept international ale dezarmarii nucleare (Probleme curente ale dreptului international si activitatea organizatii los internationale)", Studii si cercetasi juridice, 1969, No. 3; K. Ernst, "Fin michtiger Schristt zur Verminierung der Atomkriegsgefahr", UNC-Bilaun, 67/68, 1968; L. Reintanz, "Der Kernwaffensperrvertrag und die Haltung der beiden deutschen Staaten", Deutsche Aussenpolitik, 1968, No. 7; V. Shitov, Mezhdunarodnaya zhizn, 1973, No. 2.

medidas para prohibir, en virtud del derecho internacional, nuevas armas, cuyo uso implique una violación de los principios generalmente reconocidos de derecho internacional. Por consiguiente, en su opinión, es necesario elaborar y concluir un tratado específico por el que se prohíba el uso de las armas nucleares, que refleje exactamente los principios de derecho internacional generalmente reconocidos. Ponen de relieve que no han tenido éxito los intentos de conseguir la prohibición del uso de las armas nucleares fuera del contexto de los principios de derecho internacional generalmente reconocidos y, en particular, independientemente del principio de la prohibición de la amenaza o de la utilización de la fuerza. Han manifestado la opinión de que la prohibición del uso de las armas nucleares se puede conseguir en el contexto específico de la realización del principio de la prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, y algunos subrayan la importancia del acuerdo con este enfoque, que comprueban que fue expresado en el vigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. En obras recientes, algunos han hecho resaltar como de la mayor importancia los informes del Secretario General sobre las consecuencias económicas y sociales de la carrera de armamentos y de los gastos militares (A/8469 y Add.1) y, en particular, sobre los Efectos de la posible utilización de las armas nucleares y sobre las consecuencias que para la seguridad y la economía de los Estados tienen la adquisición y ulterior desarrollo de esas armas (A/6858). Sobre la cuestión del uso de las armas nucleares, los escritores yugoslavos en general son de opinión de que su utilización es contraria a los tratados y acuerdos internacionales existentes relativos a las leyes y costumbres de guerra 210/.

102. Entre las autoridades de otros varios países, existe una divergencia de opiniones sobre la legalidad del empleo de las armas nucleares.

a) Las armas nucleares consideradas como no violatorias del derecho internacional

103. Algunos sostienen que, en ausencia de toda norma específica de prohibición de derecho consuetudinario o tradicional aplicable a las armas nucleares, debe presumirse la utilización de tales armas como legítima. Se niega que una norma de prohibición así se pueda establecer mediante "procesos de derivación y "analogía" de normas convencionales y principios heredados." 211/ Según palabras del difunto Juez Lauterpacht:

210/ M. Radojkovic, "Nukleorno oruzje i medjunarodno pravo", Arhiv za pravne i drusvne nauke, 1962, No. 1-2; M. Sahović, "Nuklearna energija i medjunarodno pravo" (1964); G. Jerazić, Medjunarodno-pravna zabrana upotrebe u ratu sredstava za masovno unustavanje (1968); G. Perazić, "Medjunarodno ratno pravo i upotreba nuklearnog oružja", Pregled, No. 10/1962.

211/ McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 667.

"De este modo, resultaría que la eliminación total o limitación, como materia jurídica, de la utilización de las armas atómicas no puede realizarse por medio de una reafirmación de una norma existente de derecho. Una tal reafirmación, que niegue la legalidad del uso de las armas nucleares debe basarse necesariamente en deducciones controversiales de principios supuestamente fundamentales, establecidos en condiciones muy diferentes de las que tienen lugar en la realización de la guerra moderna - total y científica -." 212/

Así, pues, no sólo en los Estados Unidos 213/, Gran Bretaña 214/, y Francia 215/ - tres de las Potencias nucleares, - sino en otros lugares también 216/, se ha hecho la afirmación de que es prematuro sentar cualquier regla de prohibición completa de derecho internacional consuetudinario contra la utilización de las armas nucleares como tales. Esa prohibición tendría que dimanar ya sea de un tratado por el que se prohíba el uso de tales armas o de medidas efectivas de control de armamentos y de desarme.

212/ "The Problem of the Revision of the Law of War", British Year Book of International Law, vol. 29 (1952), pág. 370.

213/ McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 659-668; Brittin y Watson, International Law for Seagoing Officers, tercera ed. (1972), pág. 220; O'Brien "Legitimate Military Necessity in Nuclear War", Yearbook of World Polity, vol. 2 (1960), págs. 116-117, citado en Whiteman, Digest of International Law (1968), vol. 10, págs. 498-499. O'Brien, "Some Problems of the Law of War in Limited Nuclear Warfare", Military Law Review, vol. 14 (1961), pág. 7; Tucker, loc. cit., pág. 55; United States Department of the Army Pamphlet 27-161-2, op. cit., pág. 43 (pero en que se advierte que el uso de un arma atómica, cuyo efecto se limitara a la radiación, puede constituir una violación de la prohibición de la utilización de veneno y de armas venenosas); Mallison, loc. cit., págs. 328-333.

Falk distingue dos escuelas de pensamiento, una que trata del "carácter legal intrínseco del arma" y la otra que aprecia la legalidad con referencia al "contexto en que el arma es utilizada". Concluye su examen del caso Shimoda (véase capítulo III infra) declarando que "la condición jurídica de las armas nucleares, entonces, dista de ser concluyente. Depende en gran parte de la perspectiva que se seleccione como predominante". No obstante, hace el distinguo de un "consenso concurrente" en una "propuesta de no ser el primero en utilizarlas". "The Shimoda Case: A Legal Appraisal of the Atomic Attacks upon Hiroshima and Nagasaki", American Journal of International Law, vol. 59 (1965), págs. 787 y 793.

214/ Oppenheim, op. cit., pág. 351; Lauterpacht, loc. cit., pág. 370.

215/ Rousseau, op. cit., pág. 348.

216/ Stone, op. cit., págs. 550-551; Guggenheim, op. cit., págs. 390-391; Sereni, op. cit., pág. 1983; Balladore Pallieri, op. cit., pág. 634; Quadri, op. cit., pág. 306.

Algunos autores hacen referencia simplemente al problema de tratar de poner las armas nucleares bajo control internacional. Véase, p.ej., Podestá Costa, op. cit., pág. 88; Monaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico (1960), pág. 446.

b) Las armas nucleares consideradas como violatorias del derecho internacional

104. Los tratadistas especializados que consideran que las armas nucleares constituyen una violación del derecho internacional, con frecuencia encuentran la fuente de esa norma en disposiciones de tratados que, en su mayor parte, han pasado reconocidamente a formar parte del derecho internacional consuetudinario. Las disposiciones de tratados invocadas comprenden las siguientes:

1) El Preámbulo de la Declaración de San Petersburgo de 1868 217/ es violado por estas armas por cuanto agravan inútilmente los sufrimientos de los hombres puestos fuera de combate, o bien hacen que su muerte sea inevitable 218/.

2) Por lo menos una autoridad opina que la Declaración de La Haya de 1899 con respecto a los gases asfixiantes 219/ es una de las normas de derecho positivo que contribuyen a la prohibición de las armas nucleares 220/.

3) El artículo 22 de las Reglamentaciones anexas a la Convención de La Haya en 1907, en lo que respecta a las leyes y costumbres de la guerra terrestre 221/ que establece: "Los beligerantes no gozan del derecho ilimitado de elegir los medios de perjudicar al enemigo." 222/

217/ British and Foreign State Papers, vol. 58, 1867-68, pág. 18.

218/ Greenspan, op. cit., pág. 372; Spaight, op. cit., pág. 275; Menzel, "Atomwaffen", Strupp-Schlochauer, op. cit., vol. 1, pág. 105; Shabat, op. cit., pág. 579. Spetzler rechaza esta opinión, con el argumento de que el Preámbulo no tiene fuerza obligatoria. Op. cit., pág. 91.

219/ Scott, op. cit., pág. 81.

220/ Charlier, "Questions juridiques soulevées par l'évolution de la science atomique", Academia de derecho internacional de La Haya, Recueil des Cours, vol. 91 (1957), pág. 354. Meyrowitz niega que las armas nucleares estén comprendidas dentro de la definición de la Declaración de La Haya de 1899. "Les juristes devant l'arme nucléaire", Revue Générale de Droit International Public, vol. 67 (1963), págs. 841-842.

221/ Scott, op. cit., pág. 218.

222/ Charlier, loc. cit.

4) La radiactividad y la lluvia radiactiva generadas por la explosión de armas nucleares entraña el empleo de veneno o armas envenenadas, en violación del inciso a) del artículo 23 de las Reglamentaciones de La Haya 223/.

5) Las armas nucleares causan "males superfluos" ("maux superflus" en el auténtico texto francés) en violación del inciso e) del artículo 23 de las Reglamentaciones de La Haya, debido a la considerable mortandad que producen, a sus efectos extensivos en el tiempo y en el espacio, a que los daños que causan no guardan proporción con la ventaja militar que se obtenga, o a las lesiones producidas por el fuego, la radiación y la lluvia radiactiva 224/.

223/ Schwarzenberger, op. cit., págs. 26-36; Singh, op. cit., pág. 155; Greenspan, op. cit., pág. 372; Setalvad, "Nuclear Weapons and International Law", Indian Journal of International Law, vol. 3 (1963), pág. 387; Menzel, Legalität oder Illegalität von Atomwaffen (1960), págs. 35 sig. (que se apoya en la definición de los Acuerdos de París de 23 de octubre de 1954); R.L. Bindschedler, "Das Völkerrecht und die Nuklearwaffen", Mélanges Fragistas (1968), pág. 499; D. Bindschedler-Robert, "A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts", Report of the Conference on Contemporary Problems of the Law of Armed Conflicts, Ginebra: 15-20 septiembre 1969 (1971), pág. 31; Berber, op. cit., pág. 172; Czesany, Nie wieder Krieg gegen die Zivilbevölkerung, 2a. ed. (1964), pág. 169; Schwarzenberger, Report on Self-Defence under the Charter of the United Nations and the Use of Prohibited Weapons, submitted by the Committee on the Charter of the United Nations, International Law Association, Report of the Fiftieth Conference Held at Brussels, 1962 (1963), pág. 219 (En la resolución aprobada por la Conferencia no se aludía a este tema).

Esta opinión es rebatida por Euler, Die Atomwaffe im Luftkriegsrecht (1960), pág. 128; Spetzler, op. cit., pág. 96; Wengler, Völkerrecht (1964), vol. 2, pág. 1396.

224/ Menzel, op. cit., pág. 47; Menzel, Völkerrecht (1962), págs. 372-373; Meyrowitz, "Les juristes devant l'arme nucléaire", loc. cit., págs. 844-848; Schwarzenberger, op. cit., págs. 43-44; von der Heydte, loc. cit., pág. 171; Berber, op. cit., pág. 173; Brownlie, "Some Legal Aspects of the Use of Nuclear Weapons", International and Comparative Law Quarterly, vol. 14 (1965), pág. 450; Shabat, op. cit., pág. 579; Ghanim, op. cit., pág. 742; Pessoa, Leis da guerra e armas nucleares (1969), pág. 176. Wengler es de la opinión de que el arma, por cuanto causa la muerte instantánea, no se puede considerar como causante de un mal superfluo. Op. cit., pág. 1397, n.1. Otros, que han escrito sobre la materia, adoptan la opinión de que la prohibición del inciso e) del artículo 23 de la Reglamentación de La Haya, no se puede aplicar en absoluto a las armas nucleares, porque la utilización táctica de tales armas contra objetivos militares es legítima. Véase Euler, op. cit., pág. 146; Randermann, op. cit., pág. 139; Spetzler, op. cit., pág. 99.

6) Las armas nucleares no se pueden utilizar de tal modo que quepa "respetar, en cuanto sea posible, los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia; los monumentos históricos, los hospitales y los lugares donde se hallen reunidos los heridos y enfermos", según se previene en el artículo 27 de las Reglamentaciones de La Haya 225/.

7) Son muchos los tratadistas que 226/ - no sin que haya quien disienta con ellos 227/ - opinan que la utilización de las armas nucleares constituye una violación del Protocolo de Ginebra de 1925, Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos 228/. La radiactividad y la lluvia radiactiva ocasionadas por la explosión de las armas nucleares entran dentro de la categoría de "todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos" prohibidos por el tratado.

8) Varios juristas internacionales 229/ han afirmado que, si las armas nucleares se dirigieran deliberadamente contra la población civil, tal conducta

225/ Czesany, op. cit., pág. 163.

226/ Berber, op. cit., pág. 172; Czesany, op. cit., pág. 169; Spetzler, op. cit., pág. 109; Stone, op. cit., pág. 343; Seidl-Hohenveldern, Völkerrecht (1965), pág. 288; Charlier, loc. cit., pág. 354; Greenspan, op. cit., pág. 372; Schwarzenberger, op. cit., págs. 37-38; Singh, op. cit., págs. 163-194; Djatikoeseomo, op. cit., págs. 46-47; Menzel, Völkerrecht (1962), págs. 372-373; Menzel, Legalität oder Illegalität von Atomwaffen (1960), págs. 39 sig.; Menzel, "Atomwaffen", loc. cit., pág. 104; Scheuner, "Die Stellung der Streitkräfte im modernen Völkerrecht", en Bundeswehr und Recht (1965), pág. 52; Shabat, op. cit., pág. 579. La radiactividad causada por las armas nucleares hace su uso "cuestionable", según Castrén. Op. cit., pág. 207; "La protection juridique de la population civile ...", loc. cit., pág. 136.

227/ Meyrowitz, en sus escritos de 1963, aludió a la controversia relativa a si el Protocolo de Ginebra de 1925 había pasado a ser derecho internacional consuetudinario y llegó a la conclusión de que esta controversia "suffit pour rendre impossible de fonder l'illégalité de l'arme nucléaire sur l'interdiction des armes chimiques" (basta para hacer imposible el fundar la ilegalidad de las armas nucleares en la prohibición de las armas químicas) en el Protocolo. "Les juristes devant l'arme nucléaire", loc. cit., pág. 843. Euler encuentra ilegítimo per se el empleo de las armas estratégicas nucleares, pero no por razón de la prohibición en el Protocolo de Ginebra. Op. cit., pág. 134.

228/ Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCIC, pág. 65.

229/ Berber, op. cit., pág. 173; Menzel, Völkerrecht (1962), págs. 372-373; Schwarzenberger, op. cit., págs. 45-46; Shabat, op. cit., pág. 579.

pudiera constituir una violación de la Convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, de 1948 230/, en la que cabe considerar que se contiene una norma de derecho internacional general 231/.

105. Entre los que sostienen que el empleo de las armas nucleares es una contravención del derecho internacional, está ampliamente difundida la opinión de que una razón básica para la ilegalidad de estas armas es que son armas de destrucción en masa y no se pueden utilizar de modo que se mantenga la distinción entre objetivos civiles y objetivos militares 232/. Por esta razón, a menudo se alude a ellas como armas "indiscriminadas" o "ciegas" o "armas de destrucción en masa". La explosión de tales armas es inmensamente mayor que la de las armas corrientes; los fuegos originados por el arma pueden escapar a todo control; la radiación puede envenenar y causar males superfluos a las personas civiles; y la lluvia radiactiva puede tener efecto a distancias considerables, hasta el punto de causar daños en territorio neutral. Únicamente las armas nucleares estratégicas, en opinión de algunos 233/, pueden prohibirse por estas razones. Y Bindschedler, que ha llegado a la conclusión de que la lógica obliga a caracterizar las armas como ilegales, no obstante, afirma que la prohibición carece de realismo en vista de que el mantenimiento de la paz actualmente tiene lugar por el poder de disuasión de tales armas 234/.

230/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 78, pág. 277.

231/ Schwarzenberger señala que, a causa de la definición restrictiva de "personas protegidas" en virtud del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 75, pág. 287), las restricciones impuestas por el tratado sobre la utilización de armas nucleares son de menos consecuencias de lo que pudiera parecer superficialmente. Op. cit., pág. 21.

232/ Singh, op. cit., págs. 190-196; Spaight, op. cit., pág. 276; Brownlie, "Some Legal Aspects of the Use of Nuclear Weapons", loc. cit., pág. 450; Greenspan, op. cit., pág. 371; Setalvad, loc. cit., pág. 388; von der Heydte, "Luftbombardment", en Strupp-Schlochauer, op. cit., pág. 437; von der Heydte, "Atomare Kriegsführung und Völkerrecht", loc. cit., pág. 171; Haug, "Ansätze zur Weiterbildung des Kriegsrecht", Festschrift für Walther Hug (1968), págs. 430-431; Menzel, Völkerrecht (1962), págs. 372-373; Sloutzky, "La population civile devant la menace de destruction massive", Revue Générale de Droit International Public, vol. 59 (1955), págs. 227-228; Septzler, op. cit., págs. 370 y 381 (si se utiliza con el objeto de aterrorizar o diezmar a la población civil mediante el bombardeo de una región con objetivos militares insignificantes); D. Bindschedler-Robert, loc. cit., pág. 31; Pinto, op. cit., pág. 314; Abu-Hayf, op. cit., pág. 840; Ghanim, op. cit., pág. 742; de Visscher, Théories et réalités en droit international public, 4a. ed. (1970), pág. 338; Meyrowitz, "Les juristes devant l'arme nucléaire", loc. cit., pág. 850.

233/ Berber, op. cit., pág. 172; Euler, op. cit., págs. 151 sig.; Schwarzenberger, op. cit., pág. 48; Seidl-Hohenveldern, op. cit., pág. 288.

234/ "Die Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und bewaffneten Kräften - Ein Grundproblem des Kriegsrecht in der heutigen Zeit", Internationale Festschrift für Alfred Verdross (1971), pág. 65.

c) Armas nucleares estratégicas y tácticas

106. El que algunas autoridades consideren que únicamente las armas nucleares "estratégicas" son ilegales por el motivo de que hacen imposible la protección de la población civil es la consecuencia de una distinción establecida por éstos y otros autores entre armas nucleares "estratégicas" y "tácticas" 235/. Aunque a veces se reconoce que es difícil trazar una línea entre ambos tipos de armas 236/, la opinión prevaleciente parece ser la de que las armas nucleares tácticas ocupan el extremo inferior de la categoría del poder destructor y se utilizan contra personal militar u otros objetivos militares. Los que hacen una distinción de este carácter, definen las armas estratégicas como armas de elevado rendimiento, utilizadas contra la población civil o contra objetivos civiles y militares indiscriminadamente. Algunos, aunque no todos, de los autores que sostienen la legalidad de la utilización de las armas nucleares "tácticas" o la utilización de las armas nucleares contra objetivos militares a fin de evitar un gran perjuicio a la población civil, se basan en una distinción de tal carácter 237/. Los que encuentran legal la utilización de armas nucleares contra tropas están persuadidos de que tales armas no son venenosas, no causan males superfluos y no caen bajo ninguna otra prohibición de derecho internacional consuetudinario. No siempre está claro si un arma se considera como táctica con motivo de su naturaleza inherente de arma nuclear más pequeña, o con motivo del hecho de que se utilice únicamente contra objetivos militares. Si algunas armas nucleares se pueden emplear legalmente, se sigue entonces que las armas nucleares no son per se ilegales. Sin embargo, si hay algo inherente a la naturaleza de las armas nucleares más pequeñas y "más puras", llamadas "tácticas", que las sitúa aparte de las "armas estratégicas", entonces cabría decir que las armas "estratégicas" como categoría son ilegales per se.

235/ Wengler, op. cit., pág. 1396; Pinto, op. cit., págs. 314-315 (pero inclinándose a la opinión de que las armas nucleares tácticas se pueden considerar como ilegales); Scheuner, "Krieg und Kriegswaffen im heutigen Völkerrecht", Atomzeitalter (1959), pág. 90; Euler, op. cit., págs. 151 y sig.; Menzel, Legalität oder Illegalität von Atomwaffen (1960), págs. 17-18 (que encuentra ilegales ambos tipos, por razón de su radiactividad y del peligro resultante para las personas civiles); Spetzler, op. cit., pág. 99; von der Heydte, Völkerrecht (1960), pág. 254.

236/ Charlier, loc. cit., págs. 355-356; Scheuner, loc. cit.

237/ Turker, loc. cit., págs. 54-55; Moreno Quintana, Tratado de derecho internacional (1963), vol. 2, pág. 650 (que se refiere a la artillería atómica); Spetzler, op. cit.; Euler, op. cit.; Verdross, Völkerrecht 5a. ed. (1964), pág. 479; Bindschedler, "Die Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und bewaffneten Kräften ...", loc. cit., pág. 65; Castrén, op. cit., pág. 206.

d) Utilización de las armas nucleares como represalia o en legítima defensa

107. La cuestión de si todas o algunas armas nucleares son ilegales per se o son ilegales según la escala de su uso y sus objetivos, guarda relación con la cuestión de si las armas nucleares se pueden utilizar como represalia. Algunos de los que sostienen que las armas nucleares son ilegales per se, niegan que se puedan utilizar como represalia 238/. Los que consideran que la utilización como represalia es legal - opinión que parece ser más ampliamente sustentada - basan cualitativamente en general esta conclusión en el aserto de que tal utilización es legal únicamente por vía de represalia contra el enemigo que sea el primero en utilizar las armas nucleares no contra otras violaciones del derecho de guerra 239/. Guarda relación con este problema la cuestión de si las armas nucleares pueden ser utilizadas en el ejercicio del derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en virtud del Artículo 51 de la Carta. Son relativamente pocas las autoridades que se han ocupado en esta cuestión, pero la opinión prevaleciente parece ser que una violación del párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta no permite por sí misma a la víctima de un uso ilegal de la fuerza emplear armas nucleares 240/.

238/ Brownlie, "Some Legal Aspects of the Use of Nuclear Weapons", loc. cit., pág. 445; Setalvad, loc. cit., pág. 388; Charlier, loc. cit., pág. 357 (que alude al peligro de permitir el uso como represalia).

239/ Berber, op. cit., pág. 166; Menzel, Legalität oder Illegalität der Anwendung von Atomwaffen (1960), págs. 56 y sig.; Schwarzenberger, op. cit., pág. 48; Singh, op. cit., págs. 222-223; Euler, op. cit., pág. 166; Bindshedler, "Die Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und bewaffneten Kräften ...", loc. cit., pág. 65; Meyrowitz, "Les juristes devant l'arme nucléaire", loc. cit., págs. 858-859; Schwarzenberger, Report on Self-Defence under the Charter of the United Nations and the Use of Prohibited Weapons, loc. cit., pág. 221 (La resolución aprobada por la Conferencia no aludía a la utilización de armas nucleares como represalia). Menzel considera como una cuestión abierta si las armas nucleares "estratégicas" se pueden utilizar como represalia contra el empleo de armas nucleares "tácticas". La opinión de Lauterpacht de que el "recorrir a las armas atómicas puede estar justificado contra un enemigo que viola las normas del derecho de guerra a una escala tan vasta, que se pone a sí mismo fuera de la órbita de la consideración de la humanidad y la compasión" no parece haber sido ampliamente aceptada. Oppenheim, op. cit., pág. 351.

240/ Draper, The Red Cross Conventions (1958), págs. 98-99; Menzel, Legalität oder Illegalität der Anwendung von Atomwaffen (1960); Brownlie, "Some Legal Aspects of the Use of Nuclear Weapons", loc. cit., págs. 446-447; Singh, op. cit., pág. 211.

e) Examen de la cuestión por el Instituto de Derecho Internacional

108. En su Conferencia de Edimburgo de 1969, el Instituto de Derecho Internacional aprobó una resolución sobre "La distinción entre objetivos militares y objetos no militares en general y en particular los problemas asociados con las armas de destrucción en masa" 241/ por 57 votos a favor y ninguno en contra, y dos abstenciones 242/. Los últimos tres párrafos de la resolución establecen:

"6. El derecho internacional vigente prohíbe, independientemente del tipo de arma utilizado, cualquier acción destinada a aterrorizar a la población civil.

"7. El derecho internacional vigente prohíbe la utilización de todas las armas que, por su naturaleza, afecten indiscriminadamente tanto a objetivos militares como a objetos no militares, o tanto a fuerzas armadas como a poblaciones civiles. En particular, prohíbe la utilización de armas cuyo efecto destructor sea tan grande, que no pueda limitarse a objetivos militares específicos o bien sea incontrolable (armas autogeneradoras), así como el uso de armas "ciegas".

"8. El derecho internacional vigente prohíbe todo ataque, por cualquier motivo que fuere, o por cualesquiera medios, encaminado a la aniquilación de cualquier grupo, región o centro urbano sin distinción posible entre fuerzas armadas y poblaciones civiles o entre objetivos militares y objetos no militares."

Se observará que la resolución no hace referencia expressis verbis a las armas nucleares, pero von der Heydte, Relator sobre el tema de armas de destrucción en masa, hizo notar claramente que las armas de destrucción en masa se limitan en gran medida a las armas atómicas, bacteriológicas y químicas y que las armas nucleares constituyen "le type même des armes de destruction massive" 243/ (el tipo mismo de las armas de destrucción en masa). Si un arma "puramente" nuclear pudiera limitarse a objetivos militares, entonces el arma no sería de destrucción en masa 244/. La ilegalidad de tal arma de destrucción en masa reside en el hecho de que, aun cuando se dirija contra un objetivo militar, existe el peligro de que destruya a la población civil en masa 245/. Varios miembros de la Comisión

241/ Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 53 (1969-II), pág. 377.

242/ Ibid., págs. 124-125.

243/ Exposé préliminaire, 13 de marzo de 1961, ibid., vol. 52 (1967-II), págs. 82-83.

244/ Ibid., pág. 85.

245/ Ibid., págs. 86-87.

refutaron la formulación del Relator fundándose en que las armas nucleares no producen necesariamente destrucción en masa 246/ y que el derecho internacional positivo no prohibía la utilización de todas las armas de destrucción en masa 247/.

109. El Relator era de la opinión de que la mayoría de las armas nucleares son venenosas y, a estos efectos, violan el inciso a) del artículo 23 de las Reglamentaciones de La Haya y el Protocolo de Ginebra de 1925 248/; son también armas que causan males superfluos en el sentido del inciso e) del artículo 23 de las Reglamentaciones de La Haya 249/. El Relator rechazaba cualquier distinción entre armas nucleares estratégicas y tácticas 250/. La opinión de von der Heydte, de que las armas de destrucción en masa no pueden ser utilizadas como represalia 251/ no fue aceptada por varios miembros de la Comisión 252/.

C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales

110. El Comité Internacional de la Cruz Roja presentó un "Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra" en la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, celebrada en Nueva Delhi, en 1957 253/. Mientras que varias de las reglas del Proyecto afectaban al bombardeo aéreo con armas nucleares, el artículo en que se trata de las armas nucleares (así como de las armas químicas y bacteriológicas) era el artículo 14, cuyo párrafo primero establecía:

246/ Kunz, ibid., pág. 124.

247/ Giraud, ibid., págs. 114-115; Chaumont, ibid., pág. 229. Varios miembros también disintieron de las opiniones del Relator relativas a las armas "ciegas" e "indiscriminadas". Por ejemplo, Kunz sostuvo que armas "ciegas" son aquellas que no se pueden dirigir con precisión contra un objetivo (y, por consiguiente, podían comprender las armas corrientes), y que las armas nucleares pueden acarrear la destrucción indiscriminada sin ser "ciegas". Ibid., pág. 126.

248/ Exposé préliminaire, 13 de marzo de 1961, ibid., pág. 87.

249/ Ibid., pág. 88.

250/ Sesión plenaria de 8 de septiembre de 1969, ibid., vol. 53 (1969-II), pág. 99.

251/ Exposé préliminaire, 13 de marzo de 1961, ibid., pág. 90.

252/ Kunz, ibid., vol. 52 (1967-II), pág. 131; Castrén, ibid., pág. 108 (pero con la advertencia de que "les conséquences peuvent être désastreuses" las consecuencias pueden ser desastrosas); Bindschedler, ibid., vol. 53 (1969-II), pág. 105 (que hace notar que la comisión no había deseado tratar de este problema).

253/ XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra (1956).

"Sin perjuicio de la presente o futura prohibición de ciertas armas determinadas, se prohíbe el uso de armas cuyos efectos dañinos - causados en particular por la diseminación de agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radiactivos o de otra índole - puedan propagarse en grado imprevisto, o puedan escapar, en función del espacio o del tiempo, al control de quienes las emplean, poniendo así en peligro a la población civil." 254/

El comentario de este artículo explicaba:

"Por consiguiente, el CICR decidió que la naturaleza misma del Proyecto de reglas no permitía introducir una nueva regla que impusiera una prohibición absoluta sobre las armas nucleares. Además ..., en su deseo de salvaguardar la naturaleza general de la regla del Artículo 14, el CICR consideró preferible no insertar una disposición especial que comprendiera estas armas además de la referencia en la lista de casos. Pero es fácil ver que la aplicación del Artículo 14 y también de las reglas en su conjunto regirían en la práctica la utilización de las armas nucleares de la manera que todos pueden recordar." 255/

En la Conferencia de Nueva Delhi se aprobó una resolución, según la cual, los fines del Proyecto de reglas estaban conformes "aux aspirations de la Croix-Rouge et aux exigences de l'humanité" (con las aspiraciones de la Cruz Roja y las exigencias de la humanidad) y se remitió el Proyecto de reglas a los gobiernos 256/. El Proyecto de reglas nunca fue aprobado.

254/ Ibid., pág. 12.

255/ Ibid., pág. 108.

256/ Resolución XIII, Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 39 (1957), pág. 684.

SECCION 6. BOMBARDEO DESDE EL AIRE, LA TIERRA Y EL MAR

A. Práctica de los Estados

111. Puede decirse que el bombardeo desde el aire, el mar o la tierra no es un arma sino una forma de guerra. Sin embargo, el bombardeo en todas sus formas implica el uso de granadas, bombas, cohetes, misiles y otros proyectiles de gran calibre y es imposible separar la cuestión de si las armas son o no legales de la cuestión de la legalidad o ilegalidad del modo en que se emplean.

112. En general el bombardeo terrestre y naval en gran escala ha sido condenado por varios Estados en las declaraciones efectuadas con motivo del reciente conflicto armado 257/.

a) La prohibición de atacar a la población civil como tal

113. La Asamblea General, por resolución 2444 (XXIII), aprobada por unanimidad el 19 de diciembre de 1968, afirmó la resolución aprobada en la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja 258/ en la que se establecían los siguientes principios "para su observancia por todas las autoridades, tanto gubernamentales como de otro carácter, responsables de las operaciones en los conflictos armados":

"b) Que está prohibido lanzar ataques contra la población civil como tal;

"c) Que en todo momento ha de distinguirse entre las personas que participan en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se respete a estos últimos lo más posible;" 259/

257/ Véanse, por ejemplo, la respuesta dada por el Presidente del Consejo de Ministros de la URSS a una carta sobre la necesidad de una cesación del fuego en Viet-Nam enviada por un grupo de personas distinguidas con el Premio Nobel (Pravda, 14 de septiembre de 1965); las declaraciones del Gobierno soviético en 1966 (Pravda, 16 de diciembre de 1966) y en 1968, ésta última en relación con el entendimiento alcanzado en París entre los representantes de los Estados Unidos de América y la República Democrática de Viet-Nam (Pravda, 3 de octubre de 1968); la declaración aprobada en la reunión del Comité Político Consultivo de los Estados Partes en el Tratado de Varsovia, celebrada el 26 de enero de 1972 (Pravda, 27 de enero de 1972); la declaración del 17 de febrero de 1972 de la República Popular de Bulgaria (Comunicado de Prensa del 17 de febrero de 1972 de la Misión Permanente de la República Popular de Bulgaria ante las Naciones Unidas); y la declaración del 6 de abril de 1972 del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática de Viet-Nam.

258/ Resolución XXVIII de la Conferencia, celebrada en Viena en 1965.

259/ Véase una afirmación de estos principios por los Estados Unidos de América, como trasuntos del derecho internacional consuetudinario, en la carta del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa, de fecha 22 de septiembre de 1972, dirigida al Senador Kennedy y publicada en el American Journal of International Law, vol. 67 (1973), pág. 122.

114. Estos principios se han visto reflejados durante los últimos decenios, en pronunciamientos de los Estados. En conexión con los recientes conflictos armados varios Estados han hecho declaraciones condenando, por ilegal, el bombardeo de la población civil pacífica, de las zonas pobladas y de los objetivos civiles 260/. En vísperas del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Asamblea de la Sociedad de las Naciones aprobó una resolución en la que se reconoce que "El bombardeo intencional de poblaciones civiles es ilegal" 261/. En 1939, el Presidente de los Estados Unidos lanzó un llamamiento a los Estados en ese entonces beligerantes en la Segunda Guerra Mundial para que "afirmaran públicamente su decisión de que sus fuerzas armadas en ningún caso, y en ninguna circunstancia, bombardearían desde el aire las poblaciones civiles o las ciudades no fortificadas, en el entendimiento de que las mismas reglas de guerra serían observadas escrupulosamente por todos sus oponentes" 262/. Todos los destinatarios del mensaje enviaron respuestas afirmativas 263/. El hecho de que desde 1939 los principios hayan sido gravemente violados en numerosas ocasiones no ha alterado su validez.

115. El Ministro de Relaciones Exteriores de Japón afirmó en 1964, al referirse al asunto Shimoda, que "no podía afirmar en forma concluyente que, como cuestión de estricto derecho, el bombardeo [de Hiroshima y Nagasaki] haya violado el derecho internacional, puesto que no parece haber existido una regla de derecho internacional positivo sobre esta cuestión". El Director de la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que el hecho de que los Estados no hubieran aprobado las reglas sobre la guerra aérea de La Haya significaba que "hasta el momento no ha existido un conjunto de normas directamente aplicables a la guerra aérea" 264/.

260/ Véase, por ejemplo, en relación con la situación en el Oriente Medio, el acta taquigráfica provisional de la 1744a. sesión del Consejo de Seguridad (S/PV.1744).

261/ Resolución sobre la protección de las poblaciones civiles contra el bombardeo desde el aire en caso de guerra, de 30 de septiembre de 1938, Sociedad de las Naciones, Official Journal, Special Supplement, No. 183 (1938), pág. 135.

262/ 1.º de septiembre de 1939. Cita tomada de Hackworth, Digest of International Law, (1943), vol. 6, pág. 267.

263/ Véase Foreign Relations of the United States, vol. 1939-I, págs. 542 a 546. El 3 de septiembre de 1939, los Gobiernos de Gran Bretaña y de Francia hicieron una declaración conjunta en la que afirmaban haber dado instrucciones "que prohíben el bombardeo por la artillería, ya sea desde el aire, el mar, o la tierra, de todo objetivo que no sea rigurosamente militar en el sentido más estricto de la palabra".

264/ Asamblea Legislativa, 46.º período de sesiones de la Dieta, Minutas del Comité Permanente del Presupuesto, 16a. sesión (28 de febrero de 1964), págs. 29 a 32. Cita tomada de Japanese Practice in International Law, Japanese Annual of International Law, vol. 10 (1966), págs. 90 a 92.

116. Varios manuales militares establecen claramente la necesidad de distinguir entre la población civil y los objetivos militares y de salvaguardar a la primera en la medida de lo posible 265/. Otros manuales especifican al mismo efecto cuáles son los objetivos legítimos de bombardeo y cuáles no lo son. Las observaciones de los Estados a veces se limitan al bombardeo aéreo, naval o terrestre; otras, se refieren a las tres formas de bombardeo en forma idéntica.

b) Objetivos de bombardeo permisibles y prohibidos

117. Los pronunciamientos de los Estados con frecuencia trasuntan el art. 25 del reglamento de la Convención de La Haya de 1907 concerniente a las leyes y costumbres de la guerra terrestre, que dispone que "está prohibido atacar o bombardear, de cualquier modo, ciudades, aldeas, habitaciones o edificios que no estén defendidos" 266/. Al igual que otras disposiciones del Reglamento de La Haya, este artículo, de acuerdo con un fallo del Tribunal Militar Internacional de Nürenberg 267/, ya pertenece al derecho internacional consuetudinario. Una prohibición similar figura en el Convenio No. 9 de La Haya, de 1907, relativo al bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra 268/.

118. Algunos Estados, en declaraciones formuladas con relación al reciente conflicto armado, han condenado por ilegal el bombardeo de ciudades y otros lugares poblados, el ametrallamiento desde el aire de casas y hospitales y la destrucción de diques y represas 269/.

119. Los manuales se refieren en ocasiones en términos generales a la prohibición del bombardeo de "lugares que no estén defendidos" 270/ y parecen así hacer aplicable la ley a: a) las relaciones con los Estados que no son parte del Convenio No. 9 de La Haya (sugiriendo así que la norma pertenece al derecho internacional consuetudinario); y b) el bombardeo aéreo, que no ha sido objeto de ningún tratado multilateral. Otros manuales limitan la prohibición al bombardeo terrestre y

265/ Armée suisse, op. cit., pág. 5; Suecia, en Jagerskiöld and Wulff, op. cit., pág. 95; Italia, Legge di Guerra, art. 42, loc. cit., pág. 4309.

266/ Scott, op. cit., pág. 220.

267/ Véase Capítulo III, infra.

268/ Art. 1, Scott, op. cit., pág. 260. Véase el Capítulo I, supra.

269/ Véase, por ejemplo, las declaraciones del Gobierno de la Unión Soviética de febrero de 1965 (Pravda, 9 de febrero de 1965) y de junio de 1966 (Pravda, 1.º de julio de 1966); y la declaración del 3 de agosto de 1966 del Soviet Supremo de la URSS (Pravda, 4 de agosto de 1966).

270/ Armée suisse, op. cit., pág. 6; Ecuador, Estado Mayor del Ejército, op. cit., pág. 40; República Federal de Alemania, Kriegsvölkerrecht: Leitzätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 31 (en el que se establece expresamente que el artículo 25 del Reglamento de La Haya es aplicable al bombardeo aéreo).

naval 271/. El Gobierno de Austria opina que el carácter de "defendido" de un lugar no es pertinente en el caso del bombardeo aéreo; en este caso, el criterio es determinar si el objetivo es bombardeable por tratarse de un legítimo objetivo militar 272/.

120. Varios Estados identifican los objetivos que pueden atacarse legalmente. Por ejemplo el "Manual del Ejército Suizo" dispone que:

"Únicamente pueden atacarse mediante bombardeos, o proyectiles disparados desde gran distancia o de extensos efectos destructores, los objetivos militares bien determinados y debidamente identificados. Por objetivos militares debe entenderse especialmente a las propias fuerzas armadas, a su material, a los lugares y edificios que ocupan (cuarteles, fortalezas, arsenales, etc.), a los medios y las líneas de comunicación y de transporte de importancia militar, como también a los talleres, fábricas y establecimientos directamente vinculados a la actividad de las fuerzas armadas" 273/.

Un manual de la República Federal de Alemania 274/ enumera también las concentraciones de tropas, las obras de defensa, las plantas de municipios, los depósitos de armas y municiones, los centros y rutas de transporte y, en general, utilizando las mismas palabras de las reglas sobre la guerra aérea de La Haya, todo objetivo cuya destrucción total o parcial "podría constituir una ventaja militar directa para el beligerante". Los lugares defendidos que pueden bombardearse desde tierra incluyen, en opinión de los Estados Unidos, "los fuertes o lugares fortificados", "las ciudades rodeadas por posiciones de defensa destacadas /que forman/ un todo indivisible", y los lugares que ocupan, o por donde pasan tropas. Son objetivos legítimos de bombardeo terrestre las fábricas que producen suministros militares, los campamentos militares, los almacenes de municiones y suministros militares, los puertos y ferrocarriles empleados para el transporte de esas municiones y suministros y "otros lugares utilizados para apoyar operaciones militares o alojar tropas" 275/. La posición de los Estados Unidos con respecto a la guerra

271/ Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 96 (tierra); United States Army Field Manual, op. cit., pág. 19; United States Department of the Navy, Law of Naval Warfare, pág. 6-4.

272/ Bundesministerium für Landesverteidigung, Truppenführung (1965), pág. 185; Krivinyi, op. cit., págs. 46 y 47.

273/ Armée suisse, op. cit., pág. 6.

274/ República Federal de Alemania, Kriegsvölkerrecht: Leitzätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 32. Véase también en relación con este punto, a Krivinyi, op. cit., págs. 46 y 47.

275/ United States Army Field Manual, op. cit., pág. 19. El Jefe del Estado Mayor General enumeró recientemente entre los objetivos militares que pueden bombardearse a "las líneas de suministro logístico, los almacenes, las estaciones de reparación, las plantas generadoras de energía y las instalaciones de comunicaciones". Hearings before subcommittee of the House Committee on Appropriations on Department of Defense Appropriations (Briefings on Bombings of North Vietnam), 93º Congreso, primer período de sesiones (1973), pág. 44.

aérea 276/ parece ser la de que el derecho internacional consuetudinario puede derivarse de los artículo 1 y 2 del Convenio No. 9 de La Haya y de la Convención para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecha en La Haya, el 14 de mayo de 1954. En el artículo 8 de la Convención se reconoce que los siguientes puntos son puntos sensibles para un ataque armado: "un gran centro industrial o ... cualquier objetivo militar importante considerado como punto sensible, como por ejemplo un aeródromo, una estación de radio, un establecimiento destinado a trabajos de defensa nacional, un puerto o una gran estación ferroviaria de cierta importancia o una gran línea de comunicaciones" 277/. La Convención rechazó específicamente la tesis del Institut de Droit International que, en una resolución aprobada en 1969, expresó que sólo podrían considerarse objetivos militares aquellos cuya destrucción diera "una ventaja militar sustancial, concreta e inmediata" 278/.

121. Varios Estados 279/ han incorporado a las instrucciones destinadas a sus fuerzas armadas la prohibición expresa de atacar (prohibición que, presumiblemente alcanza a los ataques mediante bombardeos) algunos tipos de instalaciones protegidos en virtud del derecho internacional convencional. Las instrucciones para el ejército francés son un ejemplo típico:

"1. Los militares combatientes deben respetar los hospitales y los lugares donde se hallen reunidos los enfermos o los heridos, civiles o militares, el personal, las formaciones, los edificios, los materiales y los transportes sanitarios, al igual que los edificios dedicados a los cultos, a las artes, a la ciencia y a la beneficencia, y los monumentos históricos, con la condición de que no se empleen con fines militares" 280/.

276/ Carta del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa, dirigida al Senador Kennedy, el 22 de septiembre de 1972. Cita tomada del American Journal of International Law, vol. 67 (1973), págs. 122 a 125.

277/ Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 249, pág. 246.

278/ Véase párr. 139 infra.

279/ Por ejemplo, Gran Bretaña, The Law of War on Land, op. cit., pág. 99; United States Army Field Manual, op. cit., pág. 21 (donde se incorporan las disposiciones del artículo 27 del Reglamento de La Haya).

280/ Artículo 34 del decreto de 1^o de octubre de 1966, que reglamenta la disciplina general en los ejércitos, Journal Officiel de la République Française, vol. 98 (1966), págs. 8859-9860, Kiss, op. cit., vol. 6, pág. 401.

c) Heridas causadas a la población civil como consecuencia del bombardeo de objetivos militares

122. En varios manuales militares 281/ pueden encontrarse aclaraciones similares a la que figura en el British Manual of Military Law:

"En las ciudades y localidades defendidas los métodos de bombardeo modernos destruirán inevitablemente muchos edificios y lugares que no son objetivos militares. Esta destrucción, si es consecuencia incidental del bombardeo de los objetivos militares, no es ilegal" 282/.

Sin embargo, la legalidad de los daños incidentales está condicionada porque el daño causado a objetivos y a personas civiles no sea desproporcionado en relación con las ventajas militares que puedan alcanzarse 283/.

d) Bombardeo del área general del objetivo

123. Aunque la mayor parte de los manuales militares no mencionan la cuestión, algunos afirman que el bombardeo del área general del objetivo es ilegal 284/. Un manual de la República Federal de Alemania afirma que es ilegal tratar varios objetivos militares y las zonas residenciales situadas entre ellos como un solo blanco y bombardear o disparar indiscriminadamente sobre toda la zona 285/.

281/ Armée suisse, op. cit., pág. 6; República Federal de Alemania, Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 32.

282/ The Law of War on Land, op. cit., págs. 96 y 97.

283/ Armée suisse, op. cit., pág. 6; República Federal de Alemania, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 22. El manual alemán estipula que, al escoger objetivos, deben tenerse en cuenta los efectos sobre la población civil. Si, para alcanzar un objetivo militar, es posible elegir entre varios blancos militares, debe escogerse el que cause el menor peligro a la población civil; y si existen varios medios para alcanzar un objetivo militar, debe elegirse el que plausiblemente tenga el menor efecto sobre la población civil. Ibid. La opinión de los Estados Unidos parece ser que "la regla correcta de derecho internacional aplicada en el pasado que aún se aplica en las operaciones militares en el sudeste de Asia es la que establece que "las pérdidas de vidas y los daños materiales no deben ser desproporcionados con la ventaja militar que se obtenga"". Carta del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa, dirigida al Senador Kennedy el 22 de septiembre de 1972 y citada en el American Journal of International Law, vol. 67 (1973), págs. 124 y 125.

284/ Austria, Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 278, Krivinyi, op. cit., págs. 46 a 47.

285/ Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 22.

e) Bombardeo con intención de aterrorizar a la población civil

124. Varios manuales militares afirman que los bombardeos realizados con el propósito de aterrorizar a la población civil son ilegales 286/.

B. Doctrina

125. En general, ya sea desde el punto de vista del derecho contractual o del consuetudinario, no se considera que la situación jurídica en relación con el bombardeo aéreo, al igual que en relación con el bombardeo por fuerzas terrestres o navales, sea satisfactoria. Las autoridades en la materia dicen que la ley es "fragmentaria" 287/, o que es arcaica 288/, o que no es realista 289/. Un estudio de la bibliografía revela que las reglas de La Haya sobre la guerra aérea, de 1922 290/ se describen con frecuencia pero se citan sólo selectivamente como prueba de que existe actualmente un reglamento legal 291/. Algunos autores afirman expresamente que las Reglas no son, ni han sido, fuente de jurisprudencia que obligue a los beligerantes 292/. En toda la bibliografía se expresa la preocupación de que los bombardeos en gran escala en la Segunda Guerra Mundial, el desarrollo tecnológico, en especial la invención de las armas nucleares, y la movilización de toda la economía de un país en apoyo de su esfuerzo bélico hayan hecho problemáticas aun

286/ República Federal de Alemania, ibid., pág. 19; Kriegsvölkerrecht; Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op.cit., pág. 32; Krivinyi, op.cit., págs. 46 y 47; Estados Unidos, Department of Navy, Law of Naval Warfare, págs. 6-4.

287/ Silbert, "Remarques et suggestions sur la protection des populations civiles contre les bombardements aériens", Revue Générale de Droit International Public, vol. 59 (1955), pág. 183. Esta situación mueve al autor a sugerir que deben prohibirse totalmente los bombardeos aéreos, tanto de combatientes como de no combatientes. Ibid., pág. 188. Esta sugerencia calca otra anterior sobre la prohibición completa del bombardeo desde el aire, formulada por Strupp en Schranken eines Verbots des Luftwaffe und die Möglichkeit ihrer Beseitigung, Zeitschrift für Völkerrechts, vol. 16 (1932), pág. 574.

288/ Rousseau, op.cit., pág. 349; Lubrano-Lavadera, Les lois de la guerre et de l'occupation militaire (1956), pág. 29.

289/ Kunz, "The Laws of War", American Journal of International Law, vol. 50 (1956), pág. 316.

290/ Gran Bretaña, General Report of the Commission of Jurists to Consider and Report upon the Revision of the Rules of Warfare, Cmd. 2201 (1924), pág. 15, American Journal of International Law, vol. 17, Supplement (1923), pág. 245. Véase también párr. 141 infra.

291/ Por ejemplo, Delbez, op.cit., pág. 563; Guggenheim, op.cit., pág. 430.

292/ Por ejemplo, Verdoss, op.cit., págs. 477 a 479, que sin embargo afirma que, no obstante ello, pueden ser aplicaciones de principios generales de la ley de la guerra; Spaight, op.cit., págs. 42 y 43.

las endebles limitaciones legales existentes 293/. Sin embargo el tono de algunas autoridades, como von der Heydte 294 y Verdross 295/, que mantienen que los principios legales generales que rigen el bombardeo, en especial desde el aire, no han quedado invalidados en el curso de las hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, es más optimista.

a) La prohibición de atacar a la población civil como tal

126. Los escritores de muchos países socialistas 296/ opinan que, en virtud de los tratados y acuerdos internacionales existentes, en particular de la Convención de La Haya de 1907 y el Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949, relativo a la protección de civiles en tiempo de guerra, el derecho internacional contemporáneo prohíbe el bombardeo de la población civil pacífica. Estos autores sostienen que el derecho internacional protege a toda la población civil contra los bombardeos aéreos, no sólo en la zona del combate sino en todo el territorio de los beligerantes. Apoya también esta conclusión el artículo 25 del Reglamento de La Haya de 1907, que prohíbe infligir daños a la población civil y a sus bienes "de cualquier modo", asegurando así su protección contra las operaciones de aeronaves militares. Los autores mencionados citan también la resolución 2444 (XXIII) de la Asamblea General, aprobada en 1968, que se refiere concretamente a la protección de la población civil "como tal". Los escritores de Yugoslavia, en general, sostienen la ilegalidad de los bombardeos en masa contra la población civil 297/.

293/ Mónaco, Manuale di Diritto Internazionale Pubblico (1960), págs. 444 y 445; Oppenheim, op.cit., pág. 527 a 530; Balladore Pallieri, op.cit., pág. 241; Tucker, loc.cit., págs. 146 a 149; D. Bindschedler-Robert, "A reconsideration of the Law of Armed Conflict", loc.cit., págs. 16 a 18.

294/ Völkerrecht (1960), págs. 249 y 250.

295/ Op.cit., págs. 478 y 479.

296/ Véase Kurs mezhdunarodnogo prava (1969), vol. V, págs. 317 y 318; Kozhevnikov, ed., Kurs mezhdunarodnogo prava (1972), pág. 367; E.A. Korovin, Voprosy mezhdunarodnogo vozdušnogo publicnogo prava (1932); I.P. Blishchenko, Vooruzhenny konflikt i sovremennoe mezhdunarodnoe pravo, Sovetskoe gosudarstvo i pravo, 1971, No. 9; V.V. Egoryev, Pravo vozdušnoi voyny, Vestnik vozdušnogo flota, 1920, Nos. 2 a 4; Rostocki, Polskie Wytyczne 1939: dot. bombardowania powietrznego na tle rozwoju prawa wojny lotniczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, vol. 57 (1968), pág. 51; M. D'Estefano, op.cit.

297/ Véase Gozze-CucetivVuko, Bombardovanje po Medjunarodnom ratnom pravu, Vojno delo, 1959, No. 6; M. Jovanovic, Regulisanje vazdušnog rata u medjunarodnom ratnom pravu, Vazduhoplovni glasnik, 1956, No. 4; M. Jovanovic, Vazdušno bombardovanje i medjunarodno ratno pravo, Yugoslovenska revija za medjunarodno pravo, 1958, No. 2.

127. Las autoridades en la materia de otros países comienzan el análisis de la legalidad del bombardeo aéreo sentando la premisa general de que la población civil no puede ser el objeto directo del bombardeo aéreo 298/. Relacionado con este principio está el de la ilegalidad del bombardeo realizado con el propósito de aterrorizar a la población civil 299/. La regla de que los civiles no puedan ser objeto directo de ataques es una regla calificada para quienes sostienen la legalidad de bombardear el área del objetivo con el fin primario de destruir objetivos militares 300/. Hay quien sostiene que aunque el bombardeo indiscriminado de la población civil y los ataques contra los civiles que no toman parte en el esfuerzo bélico están prohibidos, el derecho internacional no excluye la posibilidad de ataques contra los civiles que trabajan en fábricas de municiones o realizan otras tareas de apoyo directo a las actividades militares 301/. Esta posibilidad implica necesariamente la legitimidad de los ataques contra los lugares donde viven obreros y empleados de las fábricas de municiones, puesto que, de cualquier modo, se encontrarían expuestos a ataques por estar dentro de objetivos militares legítimos como lo son estas fábricas.

128. En general se reconoce que es cada vez más difícil poder distinguir entre las personas y los lugares involucrados en el esfuerzo bélico de un beligerante, y los civiles que, por su índole pacífica y por no realizar tareas relacionadas con la guerra, tienen derecho a la inmunidad 302/. Algunos jurisconsultos internacionales sostienen que la distinción se ha hecho solamente teórica y nominal 303/ o que la simple prohibición de atacar a la población civil no puede prácticamente hacerse cumplir 304/.

298/ Sloutzky, La population civile devant la menace de destruction massive, Revue Générale de Droit International Public, vol. 59 (1955), págs. 227 y 228; Sloutzky, Le bombardement aérien des objectifs militaires, idem., vol. 61 (1957), pág. 366; Czesany, op.cit., pág. 145; Verdross, op.cit., pág. 479. Reuter, op.cit., pág. 316; Guggenheim, op.cit., pág. 70; Meyrowitz, Les juristes devant l'arme nucléaire, loc.cit., pág. 851; Castrén, op.cit., pág. 404; D. Bindschedler-Robert, A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts, loc.cit., págs. 18 y 19; Abu-Hayf, op.cit., pág. 838.

299/ Véase párr. 137 infra.

300/ Véase párr. 136 infra.

301/ Spaight, op.cit., pág. 277 (el autor, sin embargo, condena el bombardeo indiscriminado de la población civil en general); Oppenheim, op.cit., pág. 525 (el texto no aclara, sin embargo, si Lauterpacht, editor del tratado, se refiere sólo a los trabajadores que se encuentran en las fábricas de municiones o incluye también a los que se encuentran en sus domicilios); Stone, op.cit., pág. 629; McDougal y Feliciano, op.cit., pág. 647; Schwarzenberger, The Law of Air Warfare and the Trend Towards Total War, American University Law Review, vol. 8 (1959), pág. 17. En Balladore Pallieri, op.cit., págs. 241 y 242, figura una extensa interpretación de los objetivos que son legales.

302/ Véanse, al respecto, a los autores mencionados en la nota 301 supra.

303/ Tucker, loc.cit., págs. 147 y 149.

304/ Adler, Targets in War: Legal Considerations, Houston Law Review, vol. 8 (1970), pág. 23.

b) Objetivos de bombardeo permisibles y no permisibles

129. Los autores de varios países consideran en general que el bombardeo de objetivos no militares está prohibido por razones similares a las aducidas con respecto al bombardeo de la población civil 305/. En particular se menciona el artículo 25 del Reglamento de La Haya de 1907, que prohíbe el bombardeo de ciudades, aldeas, habitaciones o edificios que no estén defendidos.

130. Las autoridades de otros países también aplican, por analogía, la ley que se refiere al bombardeo terrestre y condenan, por ilegal, todo bombardeo de un lugar no defendido, pues lo prohíbe el artículo 25 del Reglamento de La Haya 306/. Por lo común se señala 307/ que en el caso del bombardeo naval, que está regido por los artículos 1 y 2 de la Convención de La Haya de 1907, relativa al bombardeo por fuerzas navales en tiempo de guerra 308/, pueden verse sometidos al bombardeo por barcos de guerra ciertos objetivos militares, además de los lugares defendidos. La opinión preponderante parece ser que las reglas del derecho internacional consuetudinario emergentes del artículo 25 y que reglamentan la guerra terrestre, no pueden aplicarse por analogía a la guerra aérea 309/. En este caso, dicen los tratadistas, la regla preceptiva es la que establece que sólo pueden atacarse objetivos militares

305/ Véase párr. 126, nota 296 supra.

306/ Por ejemplo, Accioly, op.cit., pág. 311; Delbez, op.cit., pág. 532; Greenspan, op.cit., pág. 332; Pinto, op.cit., págs. 320 y 321; Shabat, op.cit., pág. 574. Sin embargo, Castrén, por el contrario, sostiene que "Aunque el artículo 25 del reglamento sobre las leyes de la guerra terrestre sigue formalmente en vigencia, parece haber sido derogado de facto por la práctica opuesta". Op.cit., pág. 199. Lauterpacht señala que el artículo 25 es "un decidido progreso en el punto de vista adoptado por el derecho internacional" y que "es cuestionable hasta qué punto la práctica se compadece con esta nueva norma". Oppenheim, op.cit., pág. 418. El docto editor de Oppenheim sugiere también que la misma ley que se aplica al bombardeo aéreo debe regir el bombardeo a gran distancia por la artillería, ibid., pág. 420.

307/ Por ejemplo, véase Tucker, loc. cit., pág. 143; Stone, op.cit., pág. 588; Colombos, The International Law of the Sea, sexta edición, págs. 542 a 545; Reuter, op.cit., pág. 323.

308/ Scott, op.cit., págs. 260 y 261. Véase también el capítulo I supra.

309/ Czesazy, op.cit., pág. 22, Guggenheim, op.cit., pág. 430; Menzel, Völkerrecht (1963), pág. 368; McDougal y Feliciano, op.cit., pág. 643; Adler, loc.cit., págs. 26 y 27; Stone, op.cit., pág. 621; Spetzler, op.cit., pág. 32; Abu-Hayf, op.cit., pág. 838; Accioly, op.cit., pág. 341. Verdross opina que el artículo 25 del Reglamento de La Haya se aplica al bombardeo aéreo táctico de lugares abiertos a la ocupación, y que no tiene pertinencia con el bombardeo estratégico aéreo cuyo objeto es destruir instalaciones de importancia militar. Véase Völkerrecht, quinta edición, (1964), pág. 478.

legítimos, defendidos o no defendidos, y que otros lugares no deben bombardearse. Se hace hincapié en que esta distinción entre objetivos militares y civiles sigue siendo válida 310/.

131. La cuestión consiste pues en saber qué es lo que constituye un objetivo militar. Los objetivos generalmente aceptados son aquellos que identifica el artículo 24 de las reglas sobre la guerra aérea, es decir, "las fuerzas militares, las obras militares, los establecimientos o depósitos militares, las fábricas que constituyen centros importantes y bien conocidos que se ocupan de la manufactura de armas, municiones o suministros que son claramente militares, y las líneas de comunicación o transporte utilizadas con fines militares" 311/. Con las excepciones expuestas, no existen opiniones coincidentes y aún se ha llegado a cuestionar en parte varias de las categorías que enumera el Reglamento de La Haya. Varios expertos han expresado su apoyo al criterio restrictivo que requiere que el objetivo sea de "importancia militar fundamental", criterio que introdujo el Comité Internacional de la Cruz Roja en el proyecto de reglamento que preparó sobre la cuestión 312/. Estos expertos parecen aprobar también que se agreguen estos reglamentos a objetivos como las estaciones de radiodifusión y televisión, las instalaciones generadoras de energía destinada principalmente a la defensa nacional y los centros de investigación experimental para el desarrollo de armas y material de guerra 313/.

132. Ya se han mencionado opiniones de autoridades en esta materia que sostienen que la población civil que se ocupa de la manufactura de bienes en apoyo del esfuerzo militar beligerante es un legítimo objetivo de ataque, se encuentre ya en las fábricas ya en sus casas 314/.

133. El artículo 27 del Reglamento de La Haya requiere que se tomen medidas para que los bombardeos respeten los edificios consagrados a los cultos, a las artes, a las ciencias y a la beneficencia, los hospitales y los centros de reunión de enfermos

310/ Von der Haydte, "Luftbombardment", Strupp-Schlochauer, op.cit., vol. 2, pág. 436; Meyrowitz, "Les juristes devant l'arme nucléaire", loc.cit., pág. 851.

311/ Tal como se establece en el párr. 141 infra. Entre las autoridades en la materia que están a favor de la lista de objetivos permisibles de este reglamento se encuentran Accidi, op.cit., pág. 341; Delbez, op.cit., págs. 562 y 563; Menzel, por implicación, en op.cit., pág. 368 y Guggenheim, op.cit., pág. 430.

312/ Véase párr. 144 infra.

313/ Bindschedler, Die Unterscheidung zwischen Zivilbevölkerung und bewaffneten Kräften ..., loc.cit., págs. 60 y 67; Bindschedler-Robert, A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts, loc.cit., pág. 25.

314/ Véanse los autores citados en la nota 301 supra; véase también a Desaussure, "The Laws of Air Warfare: Are There Any?", The International Lawyer, vol. 5 (1971), pág. 534.

y heridos y los edificios que tengan importancia histórica. Pero, además de estos lugares, algunos letrados internacionales mencionan como objetivos prohibidos los diques 315/, las plantas nucleares 316/, y los suministros y las vituallas para la población civil 317/.

134. La idea de crear una lista enumerativa de objetivos permisibles o prohibidos ha sido rechazada por varias autoridades 318/. En los Estados Unidos en particular existe una escuela que considera que la cuestión es relativa 319/. Para citar a McDougal y Feliciano: "... La apreciación del valor militar que posee intrínsecamente un objetivo concreto depende, por supuesto, de la magnitud y las características particulares de cada conflicto y de la naturaleza de los conceptos prevalecientes sobre qué es lo que constituye la estrategia y la táctica militares 320/. En un "conflicto integral" los objetivos que no son de utilidad militar se definen en forma mucho más restringida que en el caso de una guerra limitada 321/.

c) Daños a la población civil como consecuencia de bombardeos de objetivos militares

135. Las autoridades en la materia afirman por lo común que los daños a las instalaciones civiles causados como consecuencia incidental del bombardeo de objetivos militares legítimos no están prohibidos por el derecho internacional consuetudinario 322/. Sin embargo, dice Tucker, "el problema de determinar los límites de los daños "incidentales" ... resulta crucial", y agrega que "La falta de solución concreta de ese problema puede muy bien significar que desde el punto de vista pragmático la prohibición general de atacar como objetivos directos a los no combatientes llegue a ser tan sólo una prohibición nominal" 323/.

315/ Adler, loc.cit., pág. 39; D'Amato, Gould y Woods, War Crimes and Vietnam: The "Nüremberg Defense" and the Military Service Resister, citado en Falk, op.cit., vol. 3, págs. 434 y 435.

316/ Von der Heydte, Militärische Objekte, citado en Strupp-Schlochauer, op.cit., vol. 2, pág. 525.

317/ Adler, loc.cit., págs. 37 y 39; Bindschedler-Robert, A Reconsideration of the Laws of Armed Conflicts, loc.cit., pág. 25; Wengler, op.cit., pág. 1400.

318/ Czesany, por ejemplo, favorece que se den simultáneamente definiciones generales y ejemplos. Op.cit., pág. 49.

319/ Adler, loc.cit., págs. 25 y 32 a 36; Falk, The Shimoda Case: A Legal Appraisal of the Atomic Attacks upon Hiroshima and Nagasaki, American Journal of International Law, vol. 59 (1965), pág. 792.

320/ Op.cit., pág. 644.

321/ Ibid. Véase también la distinción que hace Taylor respecto al uso dado al bombardeo aéreo en la Segunda Guerra Mundial y en el conflicto de Viet-Nam, en Nüremberg and Vietnam: An American Tragedy (1970), pág. 142 y 143.

322/ Menzel, op.cit., pág. 368; Reuter, op.cit., pág. 316; Guggenheim, op.cit., pág. 430; Stone, op.cit., págs. 629 y 630; Spaight, op.cit., pág. 47; Singh, op.cit., pág. 193; y Adler, loc.cit., págs. 29 y 30.

323/ Tucker, loc.cit., pág. 149.

d) Bombardeo de zonas-objetivo

136. Hay un conflicto de opiniones sobre la permisibilidad del bombardeo en zonas-objetivo. Una parte importante de la opinión considera que ese bombardeo viola la prohibición del bombardeo de la población civil como tal, la limitación del bombardeo aéreo a objetivos militares, la norma contra los ataques indiscriminados sobre civiles, y la norma de proporcionalidad 324/. Varios escritores defienden la legalidad del bombardeo de zonas-objetivo, como se practicó durante la segunda guerra mundial, en vista de la necesidad de bombardear zonas en las que hay civiles con el objeto de lograr la destrucción de objetivos militares que están dispersos entre la población civil 325/. Se ha sugerido que la legalidad de esta práctica debe variar de acuerdo con las circunstancias 326/ y que ese bombardeo "es admisible solamente en zonas de operaciones militares ... y zonas donde los objetivos militares están próximos y cubren una parte considerable del territorio correspondiente" 327/.

e) Bombardeo con intención de aterrorizar a la población civil

137. Las autoridades declaran con frecuencia que el bombardeo aéreo realizado con la intención de aterrorizar a la población civil constituye violación del derecho internacional 328/. Se ha señalado que ese bombardeo no es militarmente ventajoso porque sólo fortalece la voluntad de resistir de la población civil 329/.

324/ Castrén, páginas 403 a 404; von der Heydte, "Luftbombardment", loc. cit., pág. 437; Berber, op. cit., pág. 182; Spetzler, op. cit., pág. 290, n. 413; Sibert, loc. cit., págs. 186 a 187; Bindschedler, loc. cit., pág. 62; Cansacchi, op. cit., págs. 136 a 137.

325/ Spaight, op. cit., pág. 271; Stone, op. cit., pág. 627; Schwarzenberger, "The Law of Air Warfare and the Trend Towards Total War", Mélanges en l'honneur de Gilbert Gidel (1961), pág. 541.

326/ Lauterpacht toma una posición en cierto modo equívoca sobre esta cuestión, pero parece llegar a la conclusión de que el bombardeo de zonas-objetivo no es ilegal a menos que se utilice indiscriminadamente o se lleve a cabo para aterrorizar a la población civil. Oppenheim, op. cit., págs. 528 a 530; y véase Desaussure, loc. cit., pág. 537; y Taylor, op. cit., págs. 142 a 143.

327/ Bindschedler-Robert, "A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts", loc. cit., pág. 26. Greenspan parece haber adoptado un punto de vista análogo. op. cit., págs. 336 a 338.

328/ Sibert, loc. cit., pág. 185; Cansacchi, op. cit., pág. 136; Pinto, op. cit., págs. 325 a 326 (se incluye dentro de la prohibición la creación de "zonas de fuego libre"); Greenspan, op. cit., pág. 337; Guggenheim, op. cit., pág. 431; Singh, op. cit., pág. 195; Abu-Hayf, op. cit., págs. 838 a 840; Haug, "Ansätze der Weiterbildung der Kriessrecht", Festschrift für Walther Hug (1968); pág. 437. Sin embargo, Stone considera que el bombardeo con este propósito no viola el derecho internacional. Op. cit., págs. 629 a 630.

329/ Adler, loc. cit., pág. 41.

f) Proporcionalidad entre los daños a la población civil y las ventajas militares obtenidas

138. Como un corolario a las otras normas que limitan el bombardeo aéreo, con cierta frecuencia se cita en los libros un requisito de proporcionalidad, es decir, que la ventaja militar que ha de obtenerse no debe ser desproporcionada en relación con la destrucción causada entre la población civil 330/. No se determinan los medios por los que ha de realizarse esta evaluación, aunque se hace referencia a los casos relativamente simples en los que la presencia de algunos pocos soldados o una pequeña fábrica de armamentos no justifica el bombardeo de zonas-objetivo 331/. La norma de proporcionalidad es vista de diferente manera por las autoridades, algunas de las cuales la ven como una limitación adicional a otras normas de bombardeo aéreo, mientras que otras simplemente establecen un equilibrio entre las necesidades militares y el grado de destrucción infligido a la población civil, para determinar si los objetivos pueden ser atacados legalmente 332/.

g) Examen de la cuestión por el Instituto de Derecho Internacional

139. La resolución aprobada por el Instituto de Derecho Internacional en su Conferencia de 1969 celebrada en Edinburgo sobre "La distinción entre objetivos militares y objetivos no militares en general y particularmente los problemas asociados con armas de destrucción masiva" 333/ trata en detalle de la distinción entre bombardeo legal e ilegal. La resolución tomó nota de que "los principios generales de derecho internacional, las normas comunes y las convenciones y acuerdos que limitan claramente la medida en que las partes en un conflicto pueden dañar al adversario ... han conservado su plena validez no obstante las infracciones sufridas" y de que las normas enunciadas en la resolución "forman parte de los principios que han de observarse en los conflictos armados" 334/. Los párrafos de la parte dispositiva de la resolución disponían:

1. La obligación de respetar la distinción entre objetivos militares y objetivos no militares, así como entre personas que participan en las actividades y miembros de la población civil, sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional en vigor.

330/ Sloutzky, loc. cit., pág. 375; Pinto, op. cit., pág. 323; Singh, op. cit., pág. 193; Bindschedler-Robert, "A Reconsideration of the Law of Armed Conflicts", loc. cit., págs. 26 a 27; Greenspan, op. cit., pág. 335.

331/ Wengler, op. cit., págs. 1399 a 1400.

332/ McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 528, 616, 650 y 652; Alder, loc. cit., pág. 46.

333/ Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 53, (1969-II), pág. 375.

334/ Preámbulo de la resolución.

2. Pueden considerarse como objetivos militares solamente aquéllos que, por su mismo carácter o propósito, o utilización, hacen una contribución efectiva a la acción militar, o tienen un significado militar generalmente reconocido tal, que su destrucción total o parcial en las circunstancias reales da una ventaja militar sustancial, concreta e inmediata a los que están en condiciones de destruirlo.

3. No pueden considerarse como objetivos militares ni la población civil ni ninguno de los objetivos expresamente protegidos por convenciones o acuerdos, ni tampoco

a) en ninguna circunstancia, los medios indispensables para la supervivencia de la población civil;

b) los objetos que, por su naturaleza o utilización, sirven fines esencialmente humanitarios y pacíficos, como necesidades religiosas o culturales;

4. El derecho internacional existente prohíbe todos los ataques armados contra la población civil como tal, así como contra objetivos no militares, principalmente viviendas u otros edificios que protegen a la población civil, en tanto que éstos no se utilicen con propósito militar en una medida tal que se justifique la acción contra ellos en virtud de las normas relativas a los objetivos militares establecidas en el segundo párrafo de esta resolución.

5. Las disposiciones de los párrafos anteriores no afectan la aplicación de las normas de derecho internacional existentes que prohíben la exposición de poblaciones civiles y objetos no militares a los efectos destructivos de medios militares.

6. El derecho internacional existente prohíbe, independientemente del tipo de arma utilizada, cualquier acción que tenga por objeto aterrorizar a la población civil.

La resolución fue aprobada por una votación de 57 a favor, 1 en contra y 2 abstenciones 335/.

140. Durante el examen del proyecto de resolución por la comisión que trataba el tema y por el Instituto mismo, se manifestó cierto escepticismo acerca de la practicabilidad de que los juristas llegaran a alguna solución del problema del bombardeo, particularmente desde el aire. Señaló que cualquier definición de un objetivo no militar era más o menos "arbitraria e ilusoria, ya que la guerra es por naturaleza inhumana" 336/, de que no es posible utilizar bombas de gran

335/ Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 53 (1969-II), págs. 124-125.

336/ Giraud, ibid., vol. 52 (1967-II), pág. 26, y para lo mismo, Brünel, ibid., pág. 6.

poder explosivo o sin ningún daño a la población civil y de que todo lo que puede pedirse del derecho de guerra es que mantenga en un mínimo los daños a objetivos no militares 337/, y que en lo tocante a la línea divisoria entre objetivos militares y no militares "puede haber cambios, que no están fijados por las leyes convencionales de la guerra" 338/. A estas y otras objeciones similares el Relator, Von der Heydte, respondió que si se abandonara la distinción entre objetivos militares y civiles, sería imposible determinar la legalidad o ilegalidad de las armas, aparte de las que están formalmente prohibidas, como las armas venenosas. El mantenimiento de la distinción es un requisito sine qua non para la solución del problema de las armas de destrucción masiva 339/. Estuvo de acuerdo en que las distinciones entre zonas industriales, que pueden ser bombardeadas legalmente, y los hogares de los trabajadores, que no pueden serlo, no era fácil de trazar en la práctica, pero no debía permitirse que esas dificultades impidieran hacer la distinción teórica 340/. Puede observarse que Bindschedler señaló particularmente el hecho de que esas armas, como las armas termonucleares y las armas nucleares de gran calibre, el gas en la mayoría de los casos, y las armas bacteriológicas, son ilegales per se, mientras que en el caso de otras armas, son las condiciones en las cuales se emplean y los objetivos contra los que se dirigen las que constituyen los criterios de su ilegalidad 341/.

C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales

141. En una resolución aprobada en la Conferencia de Washington de 1922 sobre la Limitación de Armamentos se pidió el nombramiento de una comisión que representara a los Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Francia, Italia y el Japón para considerar si las normas vigentes del derecho internacional cubrían adecuadamente los nuevos métodos de guerra desarrollados desde la Conferencia de La Haya de 1907 y qué cambios debían hacerse en las normas en vigor 342/.

337/ Feliciano, ibid., vol. 53 (1969-II), pág. 101. Hace notar además que una operación militar será ilegal cuando las armas se utilicen de manera tal que hagan imposible la reducción a un mínimo de los daños causados a los objetivos no militares. Ibid., pág. 102.

338/ Kunz, ibid., vol. 52 (1967-II), pág. 239.

339/ Exposé préliminaire, 13 de marzo de 1961, ibid., pág. 77.

340/ Informe definitivo, abril de 1967, ibid., pág. 182.

341/ Ibid., págs. 213 a 215.

342/ American Journal of International Law, vol. 32, Suplemento (1938), pág. 1; Gran Bretaña, General Report of the Commission of Jurists to Consider and Report upon the Revision of the Rules of Warfare, Cmd. 2201 (1924), pág. 4.

La Comisión, que se reunió en 1922 y en 1923, redactó Reglas sobre Guerra Aérea^{343/}, de las que cuatro artículos se refieren directamente al bombardeo aéreo:

Artículo 22

Queda prohibido el bombardeo aéreo que tenga por objeto aterrorizar a la población civil o destruir o dañar la propiedad privada que no tenga carácter militar o dañar a los no combatientes.

Artículo 23

Queda prohibido el bombardeo aéreo que tenga por objeto exigir el cumplimiento de demandas en especie o el pago de contribuciones en dinero.

Artículo 24

1) El bombardeo aéreo es legítimo solamente cuando se dirige a un objetivo militar, es decir, a un objeto cuya destrucción o daño constituiría una clara ventaja militar para el beligerante.

2) Ese bombardeo es legítimo solamente cuando se dirige exclusivamente a los siguientes objetivos: fuerzas militares, obras militares, establecimientos de depósitos militares, fábricas que constituyen centros importantes y conocidos de fabricación de armas, municiones o suministros claramente militares, líneas de comunicación o de transporte utilizadas con fines militares.

3) Queda prohibido el bombardeo de ciudades, pueblos, aldeas, viviendas, o edificios que no se encuentren en la vecindad inmediata de las operaciones de las fuerzas terrestres. En casos en que los objetivos especificados en el párrafo 2 se encuentren así situados, que no puedan ser bombardeados sin el bombardeo indiscriminado de la población civil, los aviones deben abstenerse de bombardear.

4) En la vecindad inmediata de las operaciones de fuerzas terrestres, el bombardeo de ciudades, pueblos, aldeas, viviendas o edificios, es legítimo a condición de que exista una suposición razonable de que la concentración militar es suficientemente importante para justificar ese bombardeo, teniendo en cuenta el peligro que se causa así a la población civil.

5) Un Estado beligerante debe pagar compensación por daños a las personas o a la propiedad causados por la violación de las disposiciones de este artículo por cualquiera de sus funcionarios o fuerzas.

^{343/} Ibid., pág. 15; American Journal of International Law, vol. 17, Suplemento (1923), pág. 245, e ibid., vol. 32, Suplemento (1938) pág. 12.

Artículo 25

En el bombardeo aéreo, el comandante debe tomar todas las medidas necesarias para no tocar en la medida de lo posible edificios dedicados al culto público, al arte, la ciencia o a fines caritativos, monumentos históricos, buques-hospitales, hospitales y otros lugares donde hay enfermos y heridos, a condición de que esos edificios, objetivos o lugares, no sean utilizados en ese momento con propósitos militares. Esos edificios, objetos y lugares deben indicarse durante el día con señales visibles a los aviones. El uso de señales para indicar otros edificios, objetos, o lugares que no son los que se determinan supra puede considerarse un acto de perfidia. Las señales que se utilizarán en la forma antes mencionado serán en el caso de edificios protegidos en virtud del Convenio de Ginebra, la Cruz Roja sobre fondo blanco, y en el caso de otros edificios protegidos, un gran panel rectangular dividido diagonalmente en dos porciones triangulares, una negra y otra blanca.

Una parte beligerante que desea asegurarse en la noche la protección de los hospitales y otros edificios privilegiados arriba mencionados debe tomar las medidas necesarias para hacer que las señales especiales sean suficientemente visibles.

142. El informe de la Comisión manifestaba expresamente que "quedaba abandonado el criterio de la ciudad defendida, etc., adoptado en el artículo 25 de las Reglas sobre la Guerra Terrestre." 344/

143. Las Reglas de La Haya sobre la Guerra Aérea, tales como se conocieron, nunca fueron incorporadas en ningún tratado.

144. En 1956, el Comité Internacional de la Cruz Roja publicó un "Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempos de guerra" 345/, para que fuera examinado en la XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja que había de celebrarse en Nueva Delhi. Los artículos centrales del Proyecto de reglas que se relacionan directamente con el bombardeo aéreo disponían:

Capítulo II. - Objetivos que no pueden atacarse

Artículo 6

Quedan prohibidos los ataques dirigidos contra la población civil como tal, ya sea con el objeto de aterrorizarla o por cualquier otra razón. Esta prohibición se aplica tanto a los ataques sobre individuos como a los dirigidos contra grupos.

344/ General Report of the Commission of Jurists to consider and report upon the Revision of the Rules of Warfare, op. cit., pág. 27.

345/ C.I.C.R. (septiembre de 1956), Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 38 (1956), páginas 483, 556, 623 y 695. Sobre el contexto jurídico del Proyecto de reglas, véase Mirimanoff-Chilikine, "Protection de la population et des personnes civiles contre les dangers résultant des opérations militaires," Revue Belge de Droit International, 1971, pág. 619 e ibid., 1972, pág. 101.

En consecuencia, también queda prohibido atacar viviendas, instalaciones o ~~xx~~ medios de transporte que sean del uso exclusivo de la población civil y estén ocupados por ésta.

Sin embargo, si los miembros de la población civil, a pesar del Artículo II, están dentro o muy cerca de un objetivo militar, deben aceptar los riesgos que resulten de un ataque directo contra ese objetivo.

Artículo 7

Con el objeto de limitar los peligros que puede correr la población civil, los ataques podrán dirigirse solamente contra objetivos militares.

Solamente podrán considerarse objetivos militares los que pertenezcan a aquellas categorías de objetivos que, en vista de sus características esenciales son reconocidos generalmente como de importancia militar. Esas categorías están enumeradas en un anexo a las presentes reglas.

Sin embargo, incluso si pertenecen a alguna de esas categorías, no pueden considerarse como un objetivo militar si su destrucción total o parcial, en las circunstancias existentes en el momento, no ofrece ninguna ventaja militar.

Capítulo III. - Precauciones en los ataques contra objetivos militares

Artículo 8

La persona encargada de ordenar o lanzar un ataque debe, en primer lugar:

- a) Asegurarse de que el objetivo u objetivos que han de atacarse sean objetivos militares, dentro del significado de las presentes reglas y que están debidamente identificados.

Cuando la ventaja militar que ha de obtenerse deje abierta la elección entre varios objetivos, debe escogerse aquél cuyo ataque implique el menor peligro para la población civil;

- b) Tomar en cuenta la pérdida y destrucción que el ataque, incluso si se realiza con las precauciones prescritas en el artículo 9, puede infligir a la población civil.

Abstenerse del ataque si, después de la debida consideración, es evidente que la pérdida y destrucción serán desproporcionadas a la ventaja militar prevista;

- c) Advertir, siempre que las circunstancias lo permitan, a la población civil en peligro, para permitirle tomar refugio.

Artículo 9

Deben tomarse todas las precauciones posibles, tanto en la elección de armas y métodos que han de emplearse como en la realización del ataque, para asegurar que no se causen pérdidas o daños a la población civil o a sus viviendas, en las vecindades del objetivo, o que esas pérdidas y daños por lo menos se reduzcan a un mínimo.

En particular, en ciudades y otros lugares que tengan una gran población civil, que no se encuentren en la vecindad de las operaciones militares o navales, los ataques deben dirigirse con el mayor grado de precisión. No deben causar pérdidas o destrucciones más allá de los alrededores inmediatos del objetivo atacado.

La persona encargada de llevar a cabo el ataque debe abandonar o interrumpir la operación si se da cuenta de que no pueden respetarse las condiciones establecidas supra.

Artículo 10

Queda prohibido atacar sin distinción, como un solo objetivo, una zona que incluya varios objetivos militares a una distancia el uno del otro, en la que haya elementos de la población civil o viviendas entre los objetivos militares mencionados.

Artículo 11

Las Partes en el conflicto deben, en lo posible, tomar todas las medidas necesarias para proteger a la población civil sometida a su autoridad de los peligros a los que puede estar expuesta en un ataque, en particular sacándola de la vecindad de objetivos militares de las zonas amenazadas. Sin embargo, quedan expresamente reservados los derechos que tiene la población en el caso de traslado o evacuación en virtud del Artículo 49 del Cuarto Convenio de Ginebra, de 12 de agosto de 1949.

Del mismo modo, las partes en el conflicto deben evitar en lo posible la presencia permanente de fuerzas armadas, material militar, establecimientos o instalaciones militares móviles, en ciudades u otros lugares con una gran población civil.

Capítulo IV. - Armas con efectos incontrolables

Artículo 14

Sin perjuicio de la prohibición presente o futura de ciertas armas determinadas, se prohíbe el uso de armas cuyos efectos dañinos - causados en particular por la diseminación de agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radiactivos o de otra índole - puedan extenderse en grado imprevisto o que puedan escapar, en función del espacio o del tiempo, al control de quienes las emplean, poniendo así en peligro a la población civil.

Esta prohibición se aplica también a las armas de acción diferida, cuyos efectos peligrosos podría experimentar la población civil.

Artículo 17

Con el objeto de proteger a la población civil de los peligros que puedan resultar de la destrucción de obras o instalaciones de ingeniería - como presas hidroeléctricas, estaciones de energía nuclear o diques - como resultado de fuerzas naturales o artificiales, se insta a los Estados Partes interesados:

- a) a convenir, en tiempo de paz, un procedimiento especial para asegurar en todas las circunstancias la inmunidad general de esas construcciones cuando existen esencialmente con fines pacíficos;
- b) a convenir, en tiempo de guerra, en dar inmunidad especial, posiblemente sobre la base de las estipulaciones del Artículo 16, a las obras e instalaciones que no tienen, o ya no tienen, ninguna conexión con la dirección de las operaciones militares.

Las estipulaciones anteriores no deben de ningún modo liberar a las Partes en el conflicto de la obligación de tomar las precauciones requeridas por las disposiciones generales de las presentes reglas, particularmente en virtud de los artículos 8 a 11.

145. La Conferencia de Nueva Delhi de la Cruz Roja Internacional aprobó una resolución que declaraba que el Proyecto de reglas se conformaba a las aspiraciones de la Cruz Roja y a las exigencias de la humanidad y transmitía el Proyecto de Reglas a los Gobiernos 346/. El Proyecto de reglas no ha sido incorporado a ningún tratado.

146. En la XX Conferencia Internacional de la Cruz Roja en Viena, se consideró una vez más la cuestión de la protección de la población civil contra los peligros de la guerra moderna. La Conferencia aprobó una resolución 347/ que declaraba que todos los Gobiernos y demás autoridades encargados de la acción en los conflictos armados debían conformarse a cuatro principios básicos, dos de los cuales tienen aplicación particular al bombardeo aéreo. Estos son:

- "- Que está prohibido lanzar ataques contra la población civil como tal;
- Que en todo momento ha de distinguirse entre las personas que participan en las hostilidades y los miembros de la población civil, a fin de que se respete a estos últimos lo más posible."

Estos principios fueron reafirmados por la Asamblea General en la resolución 2444 (XXIII).

346/ Resolución XIII, Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 39 (1957) pág. 684.

347/ Resolución XXVIII, ibid., vol. 47 (1965), pág. 543; International Review of the Red Cross, vol. 5 (1965), pág. 588.

SECCION 7. BOMBAS DE FRAGMENTACION

A. Práctica de los Estados

147. No se hallaron pruebas sobre la práctica de los Estados relativa a las bombas de fragmentación.

B. Doctrina

148. En el contexto del bombardeo aéreo en la guerra de Viet-Nam, varios autores de los Estados Unidos han afirmado que no se ajustaba al derecho internacional el uso de bombas de fragmentación contra tropas en las regiones donde no se efectuaban operaciones militares 348/. Sin pronunciarse sobre la cuestión, Meyrowitz sugiere que las bombas de fragmentación que, al desintegrarse, forman balas de pequeño calibre, podrían considerarse como prohibidas, ya sea por analogía con las balas dum-dum o como armas que causan un daño innecesario 349/.

149. Fleck aconseja la cautela en la formulación de normas relativas a las bombas de fragmentación, porque son importantes desde el punto de vista militar, pero reconoce la importancia de proteger a la población civil y de evitar el uso de armas que causan sufrimiento innecesario 350/. Se ha apuntado que en la guerra aérea hay gran posibilidad de confundir las regiones donde viven los civiles con las designadas como objetivos militares, de modo que es probable que las bombas contra tropas se lancen por error contra los civiles 351/.

150. Como el examen de este tipo de armas se debe al conflicto en Viet-Nam, todavía son muy pocos los pronunciamientos sobre la legalidad del arma y por ello no puede determinarse la opinión que prevalece al respecto.

SECCION 8. MINAS TERRESTRES Y TRAMPAS EXPLOSIVAS

A. Práctica de los Estados

151. Son relativamente pocos los manuales militares que se refieren a las minas terrestres y trampas explosivas. En varios manuales de la República Federal de Alemania, el uso de objetos que parecen inofensivos y que explotan en las manos de

348/ D'Amato, Gould y Woods, loc. cit., págs. 442 y 443; Falk A Viet-Nam Settlement: The View from Hanoi, Policy Memorandum No. 34, Center of International Studies, Princeton University (1968), pág. 4, citado en Petrowski, "Law and the Conduct of the Viet-Nam War", loc. cit., pág. 499.

349/ "Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien", loc. cit., pág. 186.

350/ Loc. cit., págs. 18 y 19.

351/ Taylor, op. cit., págs. 141 y 142.

una persona se caracterizan como violación del artículo 23 b) del estatuto de La Haya, por el cual se prohíbe matar o herir al individuo a traición 352/. En un manual de Austria aparece una prohibición similar 353/.

152. El uso de las minas terrestres no se prohíbe, siempre que no sean colocadas en regiones destinadas a fines pacíficos, según los manuales alemanes 354/. En los manuales de los Estados Unidos 355/ y del Reino Unido 356/, se determina que los explosivos que contienen las minas terrestres no son armas que causan un daño innecesario según el sentido previsto en el artículo 23 e) del Reglamento de La Haya.

B. Doctrina

153. En la medida en que tratan sobre la cuestión, las autoridades en general defienden la legalidad del uso de las minas terrestres 357/. Sin embargo, esta afirmación se limita a veces por la condición de que no se deben usar en forma tal que pongan en peligro a los civiles 358/. Un escritor ha observado que el empleo de minas contra tropas no equivale al uso de armas que causan daño innecesario o que matan a traición, pero que si las minas se usasen en forma tal que afectasen a los civiles, con ello se violaría el artículo 23 b) y e) del Reglamento de La Haya 359/. Castrén declara que deberían prohibirse las minas que quedan armadas durante meses o años y así ponen en peligro a la población civil, a menos que sean colocadas en regiones militares, pero que "el uso general de estas armas ... desalienta la observancia de toda limitación de esta clase" 360/. Meyrowitz señala a la atención las armas primitivas con las que se violaría el artículo 23 del Reglamento de La Haya, armas tales como tubes de fer, bourrés de poudre, de ferraille,

352/ Kriegsvölkerrecht: Leitfadens für den Unterricht, op. cit., pág. 48;
Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 31;
Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 16.

353/ Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 253.

354/ Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 18

355/ United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18.

356/ The Law of War on Land, op. cit., pág. 41, párr. 110, nota 1.

357/ Balladore Pallieri, op. cit., pág. 242; Hyde, op. cit., vol. 3, pág. 1818;
Knackstedt, "Kampfmittel, Verbotene", loc. cit., pág. 187; Greenspan, op. cit.,
págs. 362 y 363; McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 626.

358/ Knackstedt, loc. cit., Greenspan, op. cit., págs. 362 y 363. Balladore
Pallieri sostiene que el uso de las minas contra fuerzas enemigas no viene a ser
ilegal por la posibilidad de causar daños incidentales a civiles, op. cit., pág. 242.

359/ Knackstedt, loc. cit., Stone informa que el Reino Unido sostuvo antes
que los explosivos en las minas terrestres no causan un daño innecesario. Op. cit.,
pág. 558, nota 69.

360/ Op. cit., pág. 192.

de tessons de bouteille, de vieux clous, et qui sont déchargés quand l'ennemi est à moins de dix metres (tubos de hierro; tacos de pólvora, de chatarra, de cascos de botella, de clavos viejos, los cuales se disparan cuando el enemigo se halla en una distancia menor de diez metros 361/.

154. En la doctrina sólo hay referencias fragmentarias a las trampas explosivas. Greenspan las condena por motivo del peligro que crean para los civiles 362/, mientras que McDougal afirma que "los beligerantes no han impugnado seriamente la admisibilidad de las "trampas explosivas" 363/. Castrén declara que debe condenarse la práctica de colocar minas junto a los heridos, a civiles indefensos, o bien a "objetos que se destinan claramente a fines pacíficos" 364/.

155. En países socialistas muchos autores 365/ sostienen que el uso de las minas en la guerra terrestre no es contrario a las disposiciones de los tratados internacionales, los acuerdos y las costumbres que están en vigor. Sin embargo, subrayan que el uso de trampas explosivas es contrario al artículo 23 b) del Reglamento de La Haya. A su juicio, es del todo inadmisibile el uso de minas o trampas explosivas contra los civiles, sobre todo los comprendidos en el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (1949).

SECCION 9. PROYECTILES

A. Práctica de los Estados

156. Sólo hay pruebas escasas de la actitud adoptada por los Estados sobre el uso de proyectiles en la guerra. En un manual de la República Federal de Alemania se requiere que sean contruidos en forma tal que se puedan apuntar con exactitud hacia blancos militares 366/. Los manuales de los Estados Unidos 367/ se limitan a declarar que los explosivos que contienen los "proyectiles de artillería" y "cohetes" no están comprendidos en la prohibición de las armas que causan un daño innecesario.

361/ "Le droit de la guerre dans le conflit vietnamien", loc. cit., pág. 186, nota 77.

362/ Op. cit., pág. 363.

363/ Op. cit., pág. 626.

364/ Op. cit., pág. 192.

365/ Véase G.I. Kozhevnikov, ed., Kurs mezhdunarodnogo prava (1972), cap. XIV; M. Genovski, Osnovi na mezhdunarodnoto pravo (1969).

366/ República Federal de Alemania, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 19.

367/ United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18; Departamento de la Armada, Law of Naval Warfare, págs. 6 a 8, nota 2.

B. Doctrina

157. Al ocuparse de los proyectiles, varios escritores del período posterior a la segunda guerra mundial hicieron un examen retrospectivo de las armas V-1 y V-2 de ese conflicto; otros escritores han tenido en cuenta los misiles balísticos intercontinentales, aunque, si uno de éstos tiene una cabeza nuclear de combate, la cuestión de la legalidad de su uso está comprendida de hecho en la legalidad de las armas nucleares en general.

158. En los países socialistas 368/ muchos escritores consideran que los misiles son armas cuyo uso no prohíbe el derecho internacional. Sin embargo, advierten que hay varias disposiciones en el derecho internacional que a su juicio limitan el uso de los misiles para ciertos fines. A este respecto, se hace referencia, por ejemplo, a la resolución 1884 (XVIII) de la Asamblea General, por la cual se pide a los Estados que se abstengan de colocar en órbita alrededor de la Tierra cualesquiera objetos que lleven armas nucleares u otras clases de armas de destrucción masiva, así como al Tratado de 27 de enero de 1967, sobre los principios que deben regir las actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, en cuyo artículo IV se repite esta prohibición en forma de tratado. También, se hace referencia a los tratados de 1972 concertados entre la URSS y los Estados Unidos. También se subraya que el Tratado sobre la limitación de los sistemas de misiles antibalísticos y el acuerdo provisional sobre ciertas medidas relativas a la limitación de las armas ofensivas estratégicas, que van encaminados principalmente a poner fin a la carrera de armamentos, mediante la limitación de la totalidad de dicha carrera, limitan por consiguiente la posibilidad de usar misiles.

159. Tal como sucede en el caso del bombardeo aéreo, ya sea con armas corrientes o nucleares, los publicistas se preocupan por el hecho de que los misiles no se pueden orientar debidamente, que causarán un grave peligro a la población civil y que surtirán sus efectos sin distinción. La mayoría de las autoridades opinan que un misil, que de otro modo sería lícito, se convertiría en ilícito si no se pudiese limitar.

368/ Véase F.I. Kozhevnikov, ed., Kurs mezhdunarodnogo prava (1972), pág. 376; Y. Nikolaev, "SSSR i SShA (k itogam moskovskikh peregovorov)", Mezhdunarodnaya zhizn, 1972, No. 7; I. Chekrov, Novye problemy mezhdunaradnogo prava (1969), págs. 37 a 50; A.S. Piradov, Kosmos i mezhdunarodnoe pravo (1970), págs. 34 y 35; Kosmos i mezhdunarodnoe sotrudnichestvo (1963); A. Shevchenko "Vazhny vklad v realizatsiyu printsipa razorusheniya (k zaklyucheniyu sovetskoamerikanskikh soglashenii ob ogranichenii strategicheskikh voorusheny)", Sovietskoe gosudarstvo i pravo, 1972, No. 10; A. Bolintineanu, Constideratii asupra elaborarii regimului juridic al spatiului cosmic in lumina principiilor generale ale dreptului international studii juridice (1960); M. Niciu, Flosirea exclusiv in scopuri pasnice a spatiului cosmic-principin fundamental al dreptului cosmic, studia universitatii Babes-Bolyai (1964); A. Bolintineanu, "Dezvoltarea dreptului international cosmic sistratatul cu privire la principiile de explorare si utilizare a spatiului cosmos si corpurilor ceresti", Revista romana de drept, (1967), N. 6; G. Gal, Space law (Budapest, 1969); G. Reintanz, Weltraumrecht (1967).

en lo esencial a blancos militares. Si el misil afectase sin distinción al personal militar y civil, sería ilícito 369/. Von der Heydte lo colocaría en la clase de "armas ciegas" 370/. Kruse lleva más allá esta distinción al observar que si un misil balístico intercontinental sólo tuviese una exactitud relativa en una distancia larga, su legalidad dependería de la legalidad del bombardeo de la región correspondiente 371/. Si el bombardeo de la región correspondiente es legal, la exactitud del arma debe evaluarse con respecto a dicha región.

160. McDougal y Feliciano advierten que los misiles balísticos, que pueden ser lanzados desde el aire o desde la superficie o debajo de la superficie de la tierra o del agua "tal vez sirvan para subrayar que no vienen al caso las distinciones tradicionales sobre la manera de hacer blanco" 372/.

161. O'Connell ha hecho notar el hecho de que el funcionamiento defectuoso y la falla de los sistemas de orientación, así como el desvío de los misiles hacia los blancos incorrectos podría poner en peligro la navegación neutral en el mar 373/. Todavía no se ha efectuado la misma clase de análisis sobre los usos distintos de estas armas en función del derecho internacional y de la nueva tecnología de misiles.

C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales

162. La resolución aprobada por el Institut de Droit International sobre la distinción entre los objetivos militares y los objetos no militares en general, y en particular sobre los problemas relacionados con las armas de destrucción masiva, en su período de sesiones celebrado en Edimburgo en 1969, contenía una disposición que abarcaba a los misiles, a saber:

369/ Spaight, op. cit., pág. 215; Knackstedt, "Kampfmittel, Verbotene", loc. cit., pág. 187; Verdross, op. cit., pág. 479; Spetzler, op. cit., págs. 326, 327 y 331; Kunz, "The laws of War", loc. cit., págs. 332 y 333; Castrén, op. cit., pág. 204; Greenspan, op. cit., págs. 365 a 367; Czesany, op. cit., pág. 150. Sin embargo, se ha observado que las "armas de terror novedosas", V-1 y V-2, no fueron objeto de las acusaciones sobre crímenes de guerra después de la segunda guerra mundial. Phillips, "Air Warfare and Law", George Washington Law Review, vol. 21 (1952), págs. 331 y 332.

370/ "Atomare Kriegsführung und Völkerrecht", loc. cit., pág. 177; Exposé préliminaire, Annuaire de l'institut de Droit International, vol. 52-II (1967), pág. 85.

371/ "Geschosse", Strupp-Schlochauer, op. cit., vol. 1, pág. 675.

372/ Op. cit., pág. 79.

373/ "International Law and Contemporary Naval Operations", British Year Book of International Law, vol. 44 (1970), págs. 61 a 64; "The Legality of Naval Cruise Missiles", American Journal of International Law, vol. 66 (1972), pág. 785.

"El derecho internacional vigente prohíbe el uso de todas las armas que, por su naturaleza, afectan sin distinción tanto a los objetivos militares como a los objetos no militares, o bien a las fuerzas armadas y poblaciones civiles. En particular prohíbe el uso de armas cuyo efecto destructivo es tan amplio que no se puede limitar a objetivos militares concretos o que de otro modo resulta incontrolable (armas con generador propio), así como el uso de las armas "ciegas"" 374/.

163. En el proyecto de normas publicado para el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1956 se mencionaba un dispositivo de seguridad con el cual se tendría que equipar a los misiles:

"Sin perjuicio de las precauciones especificadas en el artículo 9, las armas que puedan causar graves daños a la población civil estarán equipadas, en lo posible, con un dispositivo de seguridad con el cual pasarán a ser inofensivas cuando escapen al control de las personas que las utilizan" 375/.

En el comentario correspondiente se explica que esta disposición va encaminada a abarcar al cohete que se desvía de la red de radar 376/.

SECCION 10. ARMAS DE ACCION DIFERIDA

A. Práctica de los Estados

164. No se han encontrado pruebas, a base de la posición contemporánea de los Estados con respecto a las armas de acción diferida.

B. Doctrina

165. En los países socialistas ciertos escritores consideran que es ilegal el uso de las armas de acción diferida, que por su propia naturaleza son armas apuntadas hacia los no combatientes civiles 377/. Esta opinión se apoya en particular por referencias al artículo 23 del Reglamento de La Haya, cuyo párrafo b) declara que queda prohibido "matar o herir a traición a individuos que pertenezcan a la nación o ejército hostiles", y a las disposiciones del Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra (1949).

374/ Párr. 7, Annuaire de l'Institut de Droit International, vol. 52-II (1969), pág. 377.

375/ Párr. 2 del artículo 15, XIVa. Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra (1956), pág. 115.

376/ Ibid.

377/ Kurs mezhdunarodnogo prava (1969), vol. V, pág. 320; R. Bierzanek, op. cit., pág. 184.

166. Entre los autores de otras partes, Von der Heydte caracteriza como ilegal el uso de las bombas de acción diferida, en particular con respecto al bombardeo de una región que constituye un blanco y que afecte a los civiles 378/. Fauchille juzga que es una perfidia (y que por ello constituye una presunta violación del artículo 24 del estatuto de La Haya) el uso en la primera guerra mundial de las mines dites à retardement (las llamadas minas de acción diferida) que explotaban mucho después de haber salido de la región correspondiente las tropas que las habían colocado 379/. Por otro lado, Castrén considera ilegal el uso de las minas con dispositivos cronológicos de ignición 380/.

167. Varios autores han considerado ilegal el uso de bombas de acción diferida, lo cual se ha alegado respecto a la guerra de Viet-Nam 381/.

168. A juicio de Fleck, antes de prohibir las armas de acción diferida se debería esperar a que se realizara un nuevo estudio 382/.

C. Consideraciones pertinentes a la prohibición del uso derivadas de la actividad de organizaciones y conferencias internacionales

169. El proyecto de reglas publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1956 contenía la disposición que sigue:

"Sin perjuicio de la presente o futura prohibición de ciertas armas determinadas, se prohíbe el uso de armas cuyos efectos dañinos - causados en particular por la diseminación de agentes incendiarios, químicos, bacteriológicos, radiactivos o de otra índole - puedan extenderse en grado imprevisto o que puedan escapar, en función del espacio o del tiempo, al control de quienes las emplean, poniendo así en peligro a la población civil.

"La prohibición se aplica también a las armas de acción diferida, cuyos efectos peligrosos podría experimentar la población civil" 383/.

En el comentario correspondiente se explica que "la disposición examinada sólo abarca las armas cuya acción diferida es determinada por las personas que las usan" 383/.

378/ "Luftbombarment", Strupp-Schlochauer, op. cit., vol. 2, pág. 437.

379/ Op. cit., vol. 2, pág. 127.

380/ Op. cit., pág. 192.

381/ D'Amato, Gould y Woods, loc. cit., págs. 442 y 443; Farer y Petrowski, "The Nuremberg Trials and Objection to Service in the Viet-Nam War", Proceedings of the American Society of International Law, 1969, pág. 152.

382/ Loc. cit., pág. 19.

383/ Artículo 14, XIXa. Conferencia Internacional de la Cruz Roja, Proyecto de reglas para limitar los riesgos que corre la población civil en tiempo de guerra (1956), pág. 14.

384/ Ibid., pág. 113.

SECCION 11. ARMAS NAVALES

A. Práctica de los Estados

a) Minas

170. Las pruebas de las opiniones contemporáneas de los Estados con respecto al empleo de minas en la guerra naval son escasas. También es difícil establecer una separación entre la legalidad del uso de las minas navales y las cuestiones conexas como la interferencia en los derechos de los neutrales, las zonas prohibidas para operaciones bélicas, y el bloqueo.

171. Los pocos ejemplos de instrucciones impartidas a las fuerzas navales sobre el uso de minas, provienen de Estados que son Partes en la Convención No. VIII de La Haya, de 1907, relativa a la colocación de minas submarinas automáticas de contacto 385/. Las instrucciones de Francia 386/, de la República Federal de Alemania 387/, de Grecia 388/, de Suecia 389/ y de los Estados Unidos 390/ se ajustan a la Convención.

385/ Scott . op. cit., pág. 252. Véase capítulo 1 supra. El hecho de que los artículos relacionados con los lugares donde podrían sembrarse minas, se suprimieran del proyecto de tratado considerado en la Conferencia de Paz de La Haya de 1907 provocó una reserva por parte de Gran Bretaña que declaró que "no debe considerarse que el simple hecho de que dicha Convención no prohíbe tal acto o tal procedimiento priva al Gobierno de Su Majestad Británica del derecho de poner en duda la legalidad de dicho acto o procedimiento". Ibid., pág. 345, enumera otras reservas a la Convención. La historia de la redacción de la Convención está descrita en Levie: "Mine Warfare and International Law", Naval War College Review, vol. 24 (1972), No. 8, pág. 27

386/ Instructions du Ministre des Armées sur l'application du droit international en cas de guerre, du 31 décembre 1964, en Kiss, op. cit., vol. 6, pág. 257 (pero con la reserva de que todos los beligerantes sean Partes en la Convención).

387/ Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., págs. 35-36.

388/ Handbook of the Public International Law of the Sea and Prize Law, 25 November, 1949, art. 25. Hecker and Tomson, eds. Völkerrecht und Prisenrecht: Nationale und Internationale Texte zum Seekriegsrecht, Forschungsstelle für Völkerrecht und ausländisches öffentliches Recht der Universität Hamburg, Dokumente, vol. 39 (1965), pág. 168.

389/ Jägerskiöld and Wulff, op. cit., págs. 79-80.

390/ Departamento de Marina: Law of Naval Warfare, págs. 6-3.

El manual alemán añade que el requisito de notificación de la colocación de minas en alta mar y en pasajes abiertos a la navegación neutral puede considerarse como parte del derecho internacional consuetudinario y también se aplica a las minas de control remoto 391/. La acotación en el manual de los Estados Unidos indica que los requisitos contenidos en los artículos 2 y 3 de la Convención bastaban para crear serias dudas acerca de la protección que pudiera proporcionar el tratado a los barcos neutrales, duda que, señala, quedó confirmada por los acontecimientos de las dos guerras mundiales. Añade que "es discutible si estas disposiciones pueden o no ... considerarse aplicables los tipos más modernos de minas (magnéticas y acústicas) o al uso de aeronaves para la colocación de minas" 392/.

172. La historia de la práctica de los Estados en la segunda guerra mundial, señala el uso extremadamente frecuente de minas que hicieron las principales Potencias navales, inclusive de nuevos tipos de minas magnéticas, de operación por presión y acústicas, para propósitos defensivos y ofensivos. Se colocaron en aguas nacionales, en aguas territoriales del enemigo, en estrechos y otros pasajes utilizados por los barcos y en alta mar 393/.

391/ Kriegsvölkerrecht Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 36.

392/ Departamento de Marina. Law of Naval Warfare, págs; 6-8, nota 3. El manual griego citado supra, nota, pág. 168, igualmente sostiene que, en la Convención No. VIII de 1907 de La Haya, no se prevén las minas acústicas y magnéticas.

393/ Véase Roskill, The War at Sea, 4 vols. (1954-1961), vol. 1, págs. 44-45, 55-56, 87-89, 95-102, 126, 143, 280-281, 326-327, 498 y 530; vol. 2, págs. 166-168, 255-256, 392-394 y 434; vol. 3-1, págs. 95-96, 288-289, 352 y 353; vol. 3-2, págs. 19-20, 140-142, 163, 181, 231-232, 258-259, 267-271, 274, 370 y 371 (el último se refiere a la operación "Inanición" contra el Japón); y Morrison, History of United States Naval Operations in World War II, 15 vols. (1948-1962), vol. 1, págs. 136-137; vol. 2, págs. 78-79; vol. 4, págs. 229-230; vol. 6, págs. 110-116; vol. 7, págs. 63-64; vol. 8, págs. 32-33; vol. 9, págs. 44-45, 78-79, 340-342 y 346-348; vol. 11, págs. 41-46, 171-173, 372 y 373.

173. A comienzos de la segunda guerra mundial, hubo quejas en el sentido de que no se hicieron notificaciones adecuadas a los neutrales sobre la colocación de campos de minas 394/. Varios países latinoamericanos sostuvieron que sólo podían usarse minas en aguas territoriales de los beligerantes y no en alta mar, donde estorbarían la libertad de los barcos neutrales, y que las minas sólo debían emplearse para fines defensivos 395/. El Ministro noruego de Relaciones Exteriores declaró que "es ilegal colocar minas con el sólo propósito de interceptar la navegación comercial. Sin embargo, es prácticamente imposible demostrar que las minas no tienen algún objetivo militar" 396/. Una de las justificaciones que se dieron de la primera orden británica de represalia, del 28 de noviembre de 1939, fue que hubo buques británicos, aliados y neutrales hundidos por minas que Alemania colocó "indiscriminadamente y sin notificación" 397/.

174. Durante la guerra de Viet-Nam, los Estados Unidos minaron la bahía de Haiphong de la República Democrática de Viet-Nam. El Gobierno de los Estados Unidos defendió su acción sobre la base, entre otras cosas, de que actuó de conformidad con la Declaración No. VIII de La Haya en el sentido de que

394/ Países Bajos. Overzicht van de voornaamste in verband met den oorlogstoestand door het Ministerie van Buitenlandse Zaken behandelde en voor openbarmaking geschikte aangelegenheden (1940), págs. 14-17; Hackvorth, op. cit., vol. 6, pág. 510 Francia sostuvo que hubo buques franceses y neutrales hundidos por minas colocadas sin notificación por Alemania. Rapport au Président de la République Française, Décret du 27 novembre 1939, en Kiss, op. cit., pág. 258.

395/ Argentina y Venezuela, Whiteman, Digest of International Law (1968) vol. 10, pág. 681. Sin embargo, al Comité de Neutralidad Interamericana no le fue posible llegar a un acuerdo sobre un conjunto de disposiciones que regularan la cuestión. Fenwick, "The Inter-American Neutrality Committee", American Journal of International Law vol. 35 (1941), págs. 31-33.

396/ Whiteman, op. cit., pág. 681. Un manual sueco considera que Gran Bretaña no sembró sus minas de conformidad con las disposiciones del derecho internacional. Jägerskiöld and Wulff, op. cit., pág. 79.

397/ Statutory Rules and Orders, vol. 1939 2, pág. 3606 (No. 1709).

"... /las/ minas que se están empleando no son minas no sujetas prohibidas por el artículo 1 de la Convención de La Haya; no tienen el "solo objeto de interceptar la navegación comercial", que prohíbe el artículo 2 de la Convención; se han tomado todas las precauciones posibles, mediante la notificación y otras medidas, para la seguridad de la navegación pacífica, como lo exige el artículo 3 de la Convención." 398/

Dadas las circunstancias, la aplicación de esta ley podría sugerir que los Estados Unidos consideran que la Convención forma parte del derecho internacional consuetudinario.

175. Varios Estados condenaron la colocación de minas en la bahía de Haiphong. El 11 de mayo de 1972, el Gobierno soviético publicó una declaración en la que, entre otras cosas, señalaba que 399/:

"... En esta forma, los Estados Unidos están tratando de desorganizar las relaciones económicas, comerciales y de otra índole establecidas por la República Democrática de Viet-Nam con otros Estados y privar a la República Democrática de la oportunidad de recibir ayuda para su pueblo ... y de recibir alimentos y otros abastecimientos para la población pacífica ...

"Como consecuencia de todo esto, la guerra está adquiriendo un carácter tal que afecta cada vez más gravemente a los intereses de muchos países.

"La colocación de minas en los alrededores de los puertos de la República Democrática de Viet-Nam, y los intentos realizados para impedir que entren barcos extranjeros en sus aguas territoriales e interiores, están creando una amenaza directa tanto a las naves de muchos Estados, que transportan carga para la población de la República Democrática, como a la vida de los marinos de dichos Estados. Nadie ha dado a los Estados Unidos el derecho de restringir la libertad de navegación de nadie en alta mar. Las medidas adoptadas ... constituyen una grave violación de los principios generalmente reconocidos de libertad de navegación."

176. El Gobierno de China declaró

"Este acto de escalada de la guerra ... constituye una intromisión grave en el territorio y en la soberanía de la República Democrática de Viet-Nam; viola gravemente la libertad de navegación y de comercio internacionales y

398/ Carta del Asesor Jurídico, Departamento de Estado de los Estados Unidos, 6 de junio de 1972. American Journal of International Law, vol. 66 (1972), pág. 838.

399/ Pravda, 12 de mayo de 1972.

atropella deliberadamente la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional público. Constituye una provocación no sólo contra el pueblo vietnamita, sino contra la población del mundo entero." 400/

177. En una declaración hecha por el Gobierno de Bulgaria el 12 de mayo de 1972, se incluía la observación de que "estas acciones son contrarias a las convenciones de Ginebra sobre libertad de navegación. Afectan a los intereses comerciales, económicos y de otro tipo de la República Popular de Bulgaria y de muchos otros países que mantienen relaciones normales con la República Democrática de Viet-Nam, que es un Estado soberano independiente. Estos actos constituyen un peligro real para la gente inocente" 401/.

b) Submarinos

178. Existen, por supuesto, algunas dudas acerca de que el submarino pueda considerarse en sí mismo como una arma. Sin embargo, no puede caber duda alguna de que constituye una plataforma importante para sistemas de armamentos.

179. La práctica de los Estados, cuyo antecedente más reciente data de la segunda guerra mundial, se relaciona no con la legalidad del submarino como una arma de guerra en sí mismo, sino con la forma como se lo emplea. Esta cuestión está casi inextricablemente entrelazada con otros asuntos: injerencia en el transporte marítimo neutral, seguridad de las tripulaciones y pasajeros en tiempos de guerra, armamento de buques mercantes, establecimiento de zonas bélicas, operaciones de guerra económica, derecho de visita e inspección, y represalias.

180. El artículo 22 del Tratado Naval de Londres de 1930 ha declarado como "norma establecida del derecho internacional" que, "en sus operaciones respecto de los barcos mercantes, los submarinos deben ceñirse a las mismas normas del derecho internacional a las que se ciñen las embarcaciones de superficie" y que, en general, los submarinos, si no encuentran resistencia, no deben hundir buques mercantes sin haber puesto previamente a los pasajeros y a la tripulación en un lugar seguro 402/. Cualquiera que haya sido la situación al comienzo de la segunda guerra mundial, la intensificación del conflicto en el mar en 1939 y 1940 llevó a Alemania

400/ Renmin Ribao, 12 de mayo de 1972.

401/ Comunicado de prensa del 12 de mayo de 1972 de la Misión Permanente de la República Popular de Bulgaria ante las Naciones Unidas.

402/ Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXII, pág. 65, en su versión incorporada en el Protocolo Naval de Londres del 6 de noviembre de 1936, ibid., vol. CLXXIII, pág. 353.

a promulgar directrices en el sentido de que se atacara sin advertencia previa a los barcos mercantes armados y barcos en convoy 403/, seguidas por una directriz del Führer del 24 de mayo de 1940, que daba a la armada alemana completa libertad de operaciones en los mares que rodean a Inglaterra 404/. Gran Bretaña levantó las restricciones a los ataques de submarinos contra los barcos mercantes alemanes en el Skagerrak, en mayo de 1940 405/, y, después, se levantaron las restricciones a los ataques de submarinos contra barcos mercantes en otras zonas, en 1940 y 1941 406/. En ciertas ocasiones el derecho de represalia parece haber servido implícitamente como justificación para dichas medidas 407/. Cuando en 1941 los Estados Unidos entraron en la guerra, emprendieron una campaña submarina irrestricta contra el Japón, y no sostuvieron que estuvieran actuando en el ejercicio de ningún derecho de represalia 408/.

181. Existen muy pocas pruebas de las posiciones contemporáneas de los Estados con respecto al uso del submarino en la guerra. En sus operaciones contra buques mercantes, a los submarinos franceses se les exige que se sometan a las mismas normas del derecho internacional que se aplican a los barcos de superficie 409/. En el manual de los Estados Unidos sobre guerra naval se afirma que el Artículo 22 del Tratado Naval de Londres, tal como aparece incorporado en el Protocolo de Londres de 1936, se considera demostrativo del derecho internacional consuetudinario 410/.

403/ Directiva del Führer, 30 de septiembre de 1939, Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Ser. D. vol. 8 (1954), pág. 176, Whiteman, op. cit. págs. 654-655; Telegrama circular del Canciller, Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, 19 de octubre de 1939, Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Ser. D. vol. 8 (1954), págs. 319-320, Whiteman, op. cit., pág. 656; órdenes navales alemanas de 4 de octubre de 1939 y de 7 de noviembre de 1939, ibid., págs. 656-657.

404/ No. 13, 24 de mayo de 1940, Documents on German Foreign Policy 1918-1945, Ser. D. vol. 9 (1956), pág. 427, Whiteman, op. cit., pág. 658.

405/ Discurso del Sr. Churchill, 8 de mayo de 1940, Gran Bretaña, Parliamentary Debates, Cámara de los Comunes (5a. Ser.), vol. 360 (1940), col. 1351, Whiteman, op. cit., pág. 660.

406/ Roskill, op. cit., vol. 1, págs. 172, 334 y 439.

407/ Anuncio del "Bloqueo" alemán, 17 de agosto de 1940, Academia Naval de los Estados Unidos, International Law Documents (1940), pág. 48.

408/ Tucker, loc. cit., págs. 66-67, n. 47, citado en Whiteman, op. cit., pág. 661.

409/ Instructions du Ministre des Armées sur l'application du droit international en temps de guerre, 31 de diciembre de 1964, en Kiss, op. cit., vol. 6, pág. 261.

410/ Ministerio de Marina de los Estados Unidos, Law of Naval Warfare, págs. 5-11, n. 22.

B. Doctrinaa) Minas

182. Un gran número de autoridades expresan su escepticismo acerca de la eficacia de la Convención No. VIII de La Haya para proporcionar seguridad al transporte marítimo pacífico. Como lo señala Tucker, un beligerante sólo tiene que proclamar que su colocación de minas no tiene por "único" objeto interceptar la navegación pacífica, para eludir la prohibición de la Convención. La referencia del artículo 3 a la obligación de tomar "todas las precauciones posibles ... para la seguridad de la navegación pacífica" se aplica "cuando sean empleadas las minas automáticas de contacto sujetas". Tucker interpreta esta disposición en el sentido de que "los beligerantes pueden sembrar minas automáticas de contacto sujetas en cualquier parte de la alta mar". Y no existe ninguna obligación absoluta de notificar a los neutrales de la colocación de un campo de minas 411/. Consideraciones tales como las expresadas, y como las ejemplificadas por la práctica de los beligerantes en la segunda guerra mundial, han llevado a algunos escritores a afirmar que la Convención VIII de La Haya está obsoleta, es ineficaz 412/, y es improbable que se respete en el futuro 413/.

183. Las minas acústicas y magnéticas inventadas durante la segunda guerra mundial, han llevado a ciertos publicistas a aseverar que ellas no están reglamentadas en la Convención VIII de La Haya 414/, que se aplica sólo a las "minas automáticas de contacto", pero no se comparte universalmente esta opinión 415/.

184. Algunos autores, que han examinado la cuestión, sostienen expresamente que la legalidad del uso de minas en alta mar no ha sido denegada por la Convención No. VIII de La Haya 416/, pero, a veces se añade la salvedad de que la cuestión es relativa y que la colocación de minas no debe interferir más allá de lo razonable

411/ Tucker, loc. cit., págs. 303-305.

412/ Stone, op. cit., pág. 584; McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 495, n. 271; Sereni op. cit., pág. 1984.

413/ Fenwick, International Law, 4a. ed., (1965), pág. 699; Colombos, op. cit., pág. 533.

414/ Stone, op. cit., pág. 584; Guggenheim, op. cit., pág. 45, n. 4; Smith, The Law and Custom of the Sea, 3a. ed. (1959), págs. 121-122.

415/ Rousseau, op. cit., pág. 608; Monaco, op. cit., pág. 452, nota 51.

416/ Delbez, op. cit., pág. 547; McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 495; Kruse, "Minen" en Strupp-Schlochauer, op. cit., vol. 2, pág. 539; Balladore Pallieri, op. cit., pág. 244; Powers, "International Law and Open-Ocean Mining". JAG Journal, vol. 15 (1961), pág. 71; Scott, The Hague Peace Conferences of 1899 and 1907 (1911), vol. 1, pág. 583; Levie, loc. cit., pág. 42.

en el derecho de los barcos neutrales a navegar en alta mar 417/. Entre los que sostienen esta opinión, están los escritores de los países socialistas 418/ que señalan que la cuestión del derecho de los beligerantes a colocar minas en alta mar no está decidida específicamente en convenciones, ya que el derecho internacional no hace referencias específicas a las regiones en que se prohíbe colocar minas. Concluyen dichos escritores, que la colocación de minas en alta mar es legítima, de conformidad con el derecho internacional, con tal de que se cumplan los requisitos del artículo 3 de la Convención No. VIII de La Haya.

185. La colocación indiscriminada de minas en la segunda guerra mundial, se ha dado como ejemplo de interferencia ilegal en los derechos de los neutrales 419/, y algunos consideran que la Convención No. VIII de La Haya, con todos sus resquicios, tiene vigencia permanente 420/ e, inclusive, que ha pasado a formar parte del derecho internacional consuetudinario 421/.

b) Submarinos

186. La legalidad del uso del submarino, como arma en sí mismo, no está tratada por las autoridades en la materia. Los contextos legales en los cuales se discute al submarino, son el de la destrucción de los buques mercantes, según el Tratado Naval de Londres de 1930 y el Protocolo Naval de Londres de 1936, y el de la realización de la guerra submarina irrestricta.

187. La práctica de los beligerantes en la segunda guerra mundial, la integración de las flotas mercantes a los esfuerzos bélicos de los beligerantes y la inevitabilidad de los intentos de los beligerantes, de destruir la economía del enemigo en las hostilidades prolongadas han conducido a una cierta falta en las opiniones concluyentes de los tratadistas. Estos se refieren al valor del uso del submarino contra el comercio y a la falta de realidad de impedir que un beligerante destruya barcos que no puede capturar 422/. También se ha comentado la repercusión insatisfactoria que tienen las represalias sobre el derecho 423/.

417/ McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 2; Kruse, loc. cit., pág. 71.

418/ Véase nota 429 infra.

419/ Cansacchi, op. cit., págs. 133-134; Accioly, op. cit., pág. 326.

420/ Ibid., pág. 327; Ghanim, op. cit., págs. 751-752.

421/ Guggenheim, op. cit., pág. 405.

422/ Moreno Quintana, op. cit., vol. 2, pág. 682; Tucker, loc. cit., págs. 64-66, 68-69; Stone, op. cit., págs. 606-607; McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 565 y 628; Rousseau, op. cit., págs. 614-616.

423/ Tucker, loc. cit., pág. 65; Moreno Quintana, op. cit., pág. 680.

188. Algunos se inclinan a concluir que el derecho ha cambiado bajo la fuerza de los acontecimientos, y están prestos a asegurar que los ataques submarinos sin advertencia previa a barcos que llevan carga hacia o desde puertos del enemigo no están prohibidos 424/. McDougal sugiere que la intensidad de las medidas que puedan adoptarse varían según la escala del conflicto y que, en una guerra limitada, rigen las reglas ortodoxas, tales como las del Tratado Naval de Londres de 1930 425/.

189. Muchos de los que han examinado el tema de la guerra submarina, consideran que los requisitos del Tratado Naval de Londres no han perdido su vigencia y que, en realidad, reflejan el estado del derecho internacional consuetudinario 426/. Se considera que la conducta de los beligerantes en las dos guerras mundiales ha consistido, pues, en violar la ley más bien que en negar su fuerza obligatoria para quienes dirigen la guerra en el mar.

190. La declaración del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg de que "no estaba dispuesto a declarar culpable al /almirante/ Doenitz por su conducción de la guerra submarina contra buques mercantes armados británicos" 427/ arroja alguna luz sobre la situación actual del Tratado Naval de Londres de 1930 y el Protocolo Naval de Londres de 1936. El Tribunal continuó con una alusión a las medidas tomadas por Gran Bretaña para integrar sus buques mercantes a su actividad militar, lo que justificaba las medidas tomadas por el almirante Doenitz. Sin embargo, el Tribunal no consideró culpable a Doenitz de violación de los tratados por haber causado el hundimiento de buques neutrales sin advertencia previa en zonas de operaciones. Todas estas pruebas señalan la permanente fuerza obligatoria del Tratado y del Protocolo de Londres 428/.

424/ Stone, op. cit., págs. 606-607; McDougal y Feliciano, op. cit., págs. 626-630 (pero advirtiéndolo que existen circunstancias en las cuales el cumplimiento del deber de situar a los pasajeros y a la tripulación en lugar seguro no pone en peligro la seguridad del submarino); Taylor, op. cit., págs. 37-38; Burke, "Submarine Warfare and International Law", Yearbook of World Policy, vol. 2 (1960), págs. 195-198.

Para una defensa de la legalidad de las medidas adoptadas por Alemania durante la segunda guerra mundial, véase Sohler, U-Bootkrieg und Völkerrecht (1956).

425/ McDougal y Feliciano, op. cit., pág. 632.

426/ Castrén, op. cit., págs. 285 y 289; Oppenheim, op. cit., pág. 490; Balladore Pallieri, op. cit., pág. 281; Cansacchi, op. cit., pág. 124; Podestá Costa, op. cit., pág. 130.

427/ Véase Capítulo III infra.

428/ Oppenheim, op. cit., págs. 492-493; Tucker, loc. cit., págs. 67-70; Robertson, "Submarine Warfare" JAG Journal, vol. 10 (1956), pág. 3, citado por Whiteman en op. cit., vol. 10 (1968), págs. 665-666.

191. Algunas obras publicadas en varios países socialistas ^{429/} muestran una tendencia definida a fortalecer los principios y normas existentes sobre la guerra naval en el sentido de la mayor limitación posible de los efectos destructivos de los conflictos armados en el mar. Se considera que el concepto de "población pacífica", en el contexto de la guerra naval abarca a todos los tripulantes y pasajeros de las naves mercantes, tanto de los Estados beligerantes como de los neutrales, y se considera la necesidad de proteger la navegación pacífica en alta mar, como un argumento crucial en favor de la neutralización de la alta mar, particularmente de aquellas zonas de la alta mar que más frecuentan los buques mercantes. Los escritores socialistas consideran ilegal establecer las llamadas "zonas de combate" en donde son posibles cualquier tipo de acciones arbitrarias, ya que, en la práctica, esto constituye una violación de la libertad de la alta mar. Sobre la base de un análisis de los instrumentos legales internacionales y de la práctica de los Estados, los autores socialistas concluyen que el armar a buques mercantes, en violación de las disposiciones de la Convención VII de La Haya, relativa a la Transformación de Buques Mercantes en Buques de Guerra, pero, con la condición de que se les conceda a dichos buques la calidad jurídica de buques pacíficos, borra la distinción entre objetos militares y no militares. En tales casos, no puede considerarse a los buques como no combatientes o como combatientes legítimos y, por lo tanto, no caen dentro de la protección del derecho internacional.

^{429/} Véase Kurs mezhdunarodnogo prava (1969), vol. V pág. 285; F.I. Kozhevnikov, ed. Kurs mezhdunarodnogo prava, pág. 368; G.M. Melkov, Nekotorye problemy, polnoi demilitarizatsii morskogo dna (1972); A.S. Bakhov, ed., Voenno-morskoï mezhdunarodno-pravovoi spravochnik (1956); G.A. Antselevich, Nekotorye problemy mezhdunarodnogo prava, kasayushchiesya reglamentatsii voennykh deistvii na more (1970); L.A. Ovanashchenko, Mezhdunarodnoe morskoe pravo (1961); V.F. Meshera, "Problema neitralizatsii otkrytogo morya", Uch. Zap, LVIMU, No. XI, 1958; S.V. Molodtsov, Mezhdunarodnopravovoi rezhim otkrytogo morya i kontinentalnogo shelfa (1961); A.L. Kolodkin, Pravovoi rezhim territorialnykh vod i otkrytogo morya (1961); G.F. Kalinkin, "Zapretit ispolzovanie morskogo dna v voennykh tsel'vakh" Mezhdunarodnaya zhizn, 1961, No. 2; V.S. Vereshchtin, Mezhdunarodnopravovoi rezhim otkrytogo morya (1968); A.P. Kositsin, Vooruzhennnye sily i sposoby voiny na more po mezhdunarodnomu pravu (1955); S. Stefanova, Mezhdunarodno-pravovoi rezhim otkrytogo morya: pravovoi rezhim morskikh prostranstv i voennykh korablei (Sbornik perevodov GDR) (1967); K. Biatkowski, "Wojna podwodna w swietle wyroku MTW wchorynmberdze." Roczniki Mazynarki Wojennej, 1966, N. 3; Z. Rotocki, "Miedzynarodowo-prawne aspekty wojny podwodnej", Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Lodzkiego, 1964, vol. 37; E. Glaser, "Explozazea în scopuzi pasnice a spatilor submarine," Studii și cercetari juridice, 1969, N. 1.

192. La mayoría de los autores socialistas concluyen, sobre la base del análisis de los instrumentos internacionales en existencia, que los submarinos son armas tan legítimas como los buques de superficie, con sujeción a la reserva de que ciertos métodos de empleo de ellos - tales como la guerra submarina irrestricta, incluyendo el hundimiento de buques mercantes sin advertencia previa - constituyen una violación del derecho internacional. A este respecto, citan los documentos de la Conferencia de Washington de 1921-1922, el Protocolo de Londres de 1936 y el Acuerdo de Nyon de 1937. Los autores yugoslavos que han escrito sobre leyes de guerra naval, defienden los acuerdos en existencia a este respecto, particularmente la Convención de La Haya 430/.

430/ J. Andrassy, "Häské konvencije", Pomorska enciklopedija (1956);
V. Brajković, "Razvok međjunarodnog pomorskog ratnog prava (do Häskih konvencija)",
Jugoslovenska revija za međjunarodno pravo, 2/1958.

SECCION 12. MODIFICACION DE LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS

A. Práctica de los Estados

193. Al parecer en los Estados Unidos se ha prestado mayor atención que en cualquiera otra parte a la modificación de las condiciones atmosféricas como posible arma de guerra, mediante la producción de lluvia y neblina, la desviación de huracanes y métodos análogos. La cuestión se ha considerado en el contexto más amplio de la modificación del medio ambiente como arma de guerra.

194. El 11 de julio de 1973, el Senado de los Estados Unidos adoptó una resolución que expresaba el sentir del Senado

"de que el Gobierno de los Estados Unidos debe tratar de llegar a un acuerdo con otros gobiernos, incluidos todos los Miembros Permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para concertar un tratado ... que dispondrá la suspensión total de toda investigación, experimentación y empleo de cualquier actividad de modificación geofísica o del medio ambiente como arma de guerra." 431/

La rama ejecutiva del Gobierno no apoyó la resolución 432/. El año anterior, el National Advisory Council on Oceans and Atmosphere de los Estados Unidos había recomendado en su primer informe que se concertara un acuerdo internacional "para evitar que la modificación de las condiciones atmosféricas se utilizara con fines hostiles" 433/.

B. Doctrina

195. Durante dos decenios por lo menos se ha tenido conocimiento de los peligros que plantea la utilización de las modificaciones de las condiciones atmosféricas como arma de guerra 434/. Con el transcurso del tiempo y con la difusión de informaciones en el sentido de que en el conflicto de Viet-Nam se había tratado de utilizar la modificación de las condiciones atmosféricas, varios escritores de los Estados Unidos han instado, con un creciente sentido de urgencia, a que se adopten

431/ Congressional Record, vol. 119 (1973), pág. S-13102 (ed. diaria, 11 de julio de 1973).

432/ Hearings on S. Res. 281 before the Subcommittee on Oceans and International Environment of the Senate Committee on Foreign Relations, 92d. Cong., 2d. Sess. (1972), pág. 3.

433/ Ibid., pág. 155.

434/ H. Taubenfeld, "Weather Modification and Control: Some International Legal Implications". California Law Review, vol. 55 (1967), pág. 495.

medidas encaminadas a poner bajo control el empleo de las modificaciones atmosféricas en la guerra 435/. No disponiendo de información apropiada acerca del estado alcanzado por esta técnica, los que se han ocupado de la cuestión tan sólo pueden sugerir que algunas actividades de este tipo pueden estar reñidas con las prohibiciones sobre daños indiscriminados, armas incontrolables, e inflicción de sufrimientos innecesarios 436/. Se ha sugerido que la producción de lluvia para encubrir actividades militares es una medida análoga a la utilización de cortinas de humo y, por esta razón, no es ilegal 437/.

196. Entre los escritores de los países socialistas se da la opinión de que la utilización de armas tales como "la modificación de las condiciones atmosféricas" no se ha examinado desde el punto de vista del derecho internacional. Sin embargo, se da por sentado que tales armas están destinadas principalmente a alterar el medio ambiente humano, en otras palabras, a crear condiciones que tienen un efecto particularmente adverso sobre el clima y que afectan indistintamente a los combatientes y a los civiles no combatientes. Por ello, se concluye que la utilización de tales armas en estas condiciones es contraria al derecho internacional vigente, artículos 22, 23 y 25 del Reglamento de La Haya de 1967 y el Convenio de Ginebra relativo a la protección de personas civiles en tiempo de guerra, de 1949, y que es necesaria una prohibición específica de su utilización 438/.

435/ R. Taubenfeld y H. Taubenfeld, "Some International Implications of Weather Modification Activities". International Organization, vol. 23 (1969), págs. 832-833; Falk, "Environmental Warfare and Ecocide - Facts, Appraisal, and proposals", en Hearings on S. Res. 281 before the Subcommittee on Oceans and International Environment of the Senate Committee on Foreign Relations, op. cit., pág. 143; y en Oslo Bulletin of Peace Proposals, 1973, No. 1, pág. 90; Davis, "Weather Warfare: Law and Policy", Arizona Law Review, vol. 14 (1973), pág. 688.

436/ Falk, "Environmental Warfare and Ecocide ...", loc. cit.; Davis, loc. cit., pág. 676.

437/ Davis, ibid., págs. 687-688.

438/ Véase F.I. Kozhevnikov, ed. Kurs mezhdunarodnogo prava (1972), cap. XIV.

PARTE II. CLASIFICACION DE ARMAS SEGUN SUS EFECTOS

SECCION 13. ARMAS QUE CAUSAN DAÑOS SUPERFLUOS

A. Práctica de los Estados

197. La generalidad de los manuales militares 439/ incorporan el lenguaje del inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya que prohíbe el empleo de "armas, proyectiles o materias que causen daños superfluos" ("maux superflus" en el texto auténtico francés) 440/.

198. Los manuales mencionan como ejemplos de armas o casos de utilización de armas que causan daños superfluos los siguientes:

- Perdigones de escopeta 441/
- Abrir fuego sobre lugares indefensos 442/
- Proyectiles explosivos e incendiarios con un peso inferior a 400 gramos 443/
- Proyectiles tratados con una sustancia destinada a producir inflamación de heridas 444/

439/ República Federal de Alemania, Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 31; Austria, Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 253, y Krivinyi, op. cit., pág. 10; Francia, Décret No. 66-749 du 1er octobre 1966 portant règlement de discipline générale dans les armées, art. 34, párr. 2, loc. cit., pág. 8860; Países Bajos, Reglamentación de las leyes de la guerra. Cap. III, párr. 14 y Manual del soldado, cap. 7, párr. 10; Suiza, Armée suisse, op. cit., pág. 5; Suecia, Jägerskiöld and Wulff, op. cit., pág. 75; Italia, Legge di Guerra, art. 35, loc. cit., pág. 4307; United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18, y Law of Naval Warfare, págs. 6-8, nota 2; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 41.

440/ Scott, ed., Op. cit. Véase Capítulo I supra.

441/ Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 16.

442/ Ibid., pág. 20.

443/ Ibid., pág. 16.

444/ Ibid., pág. 16; United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18, y Law of Naval Warfare, op. cit., págs. 6 a 8, nota 2; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 41.

- Balas de expansión 445/
- Ciertos tipos de munición de rastro luminoso 446/
- Bayonetas o lanzas arponadas 447/
- Armas venenosas 448/
- proyectiles de configuración irregular
- proyectiles rellenos de vidrio
- Hacer muescas en la superficie de los casquillos de proyectiles o limar sus extremos 449/

199. En general, los manuales no señalan los criterios mediante los que se podría determinar si un arma determinada ocasiona daños superfluos, en contraposición a daños necesarios. Sin embargo, los manuales austriacos explican que los daños superfluos los ocasiona la aplicación de fuerza que no es absolutamente necesaria para la supresión del enemigo o la inflicción de un daño desproporcionado en relación con las ventajas militares que se han de obtener mediante la utilización del arma 450/.

445/ Austria, Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 253 y Krivinyi, op. cit., pág. 10; Países Bajos, Manual del soldado, cap. 7, párr. 10 y Reglamentación de las leyes de la guerra, cap. III, párr. 14; República Federal de Alemania, Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 16.

446/ Países Bajos, Reglamentación de las leyes de la guerra, cap. IV, párr. 14.

447/ Países Bajos, ibid., y Manual del soldado, cap. 7, párr. 10; United States Army Field Manual, op. cit., pág. 18, y Law of Naval Warfare, págs. 6 a 8; Reino Unido, The Law of War on Land, op. cit., pág. 41.

448/ Países Bajos, Manual del soldado, cap. 7, párr. 70. Los Estados Unidos consideran el inciso a) del artículo 23 del Reglamento de La Haya que prohíbe el empleo de veneno o armas envenenadas como una aplicación particular del inciso e) del artículo 23. Carta del Asesor Jurídico General del Departamento de Defensa al Presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, 5 de abril de 1971. International Legal Materials, vol. 10 (1971), pág. 1302.

449/ Los últimos tres ejemplos figuran en los manuales del Ejército y la Marina de los Estados Unidos y en el manual británico mencionados supra.

450/ Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 253 y Krivinyi, op. cit., pág. 10.

200. En las declaraciones de varios Estados se ha reflejado la opinión de que en el empleo de armas las pérdidas de vidas y los daños causados a la propiedad no deben ser desproporcionados frente a las ventajas militares que se han de obtener 451/.

B. Doctrina

201. Todos los que escriben sobre el aspecto del derecho de la guerra relativo a las armas mencionan de ordinario la prohibición del inciso e) del artículo 23 del Reglamento de La Haya contra el empleo de armas que causan daños superfluos. El hecho de que no señale condición alguna para la aplicación de esta prohibición indica que la norma se considera como parte del derecho consuetudinario internacional. Con no poca frecuencia, el inciso e) artículo 23 se menciona simplemente a la par con prohibiciones convencionales y consuetudinarias sobre el empleo de otras armas 452/. Varios tratadistas mencionan el carácter general de la norma y la dificultad de aplicarla a situaciones y armas particulares 453/. Sereni expresa una opinión que comparten otras varias autoridades cuando escribe: "Pero el principio tiene escaso valor práctico, ya que con frecuencia los medios que causan los mayores daños son los que poseen la mayor eficacia militar 454/".

202. Sin embargo, Pinto señala el hecho de que "Sin duda la aplicación a armas prohibidas puede resultar, por deducción, de principios generales que prohíben armas que causen daños superfluos o efectos indiscriminados" 455/. Por ello, muchos juristas internacionales consideran que muchas de las prohibiciones de armas determinadas están comprendidas en el alcance del inciso e) del artículo 23. En su opinión este inciso constituye un principio general fundamental más que una

451/ Armée suisse, op. cit., pág. 6 (párr. 27); Estados Unidos, carta del Consejero General del Departamento de Defensa al Senador Kennedy, 22 de septiembre de 1972, en American Journal of International Law, vol. 67 (1973), págs. 124 y 125.

452/ Cansacchi, op. cit., pág. 78; Guerrero Burgos, op. cit., págs. 64 y 65; Moreno Quintana, op. cit., pág. 648; François, op. cit., pág. 672; Greenspan, op. cit., págs. 315 y 316, 353 a 356; Balladore Pallieri, op. cit., págs. 169 y 170; Djatijoeseoemo, op. cit., pág. 44; Kleen, op. cit., pág. 361.

453/ Guerrero Burgos, op. cit., págs. 64 y 65; François, op. cit., pág. 672.

454/ Op. cit., pág. 1982. Y véase Guggenheim, op. cit., pág. 390 (quien alude a la medida en que los progresos tecnológicos han superado la norma). Stone observa que "por una paradoja sardónica, a medida que la escala de destrucción de nuevas armas tiende a la devastación mediante bombas atómicas o de hidrógeno, su eficacia militar aumenta hasta tal punto que los daños ocasionados a los particulares no pueden (en términos militares) calificarse de innecesarios ..." Op. cit., pág. 558.

455/ Op. cit., pág. 308.

norma auxiliar para tratar con tipos de armas que no se mencionan específicamente en otros tratados o normas consuetudinarias. Entre las armas que diversas autoridades consideran incluidas en la categoría de las que causan daños superfluos se encuentran:

- Las armas nucleares 456/
- El bombardeo de objetivos civiles 457/
- Los proyectiles explosivos e incendiarios de menos de 400 gr., prohibidos por la Declaración de San Petesburgo 458/
- Las balas de expansión 459/
- El napalm y otras armas incendiarias 460/
- El veneno y las armas envenenadas 461/
- Los agentes químicos y bacteriológicos 462/

456/ Menzel, Legalität oder Illegalität der Anwendung von Atomwaffen, pág. 45 y siguientes; Menzel, Atomwaffen, loc. cit., pág. 104; Scheuner, "Die Stellung der Streitkräfte im modernen Völkerrecht", Bundeswehr und Recht, 1965, págs. 52 y 55; Spetzler, op. cit., pág. 373; Rousseau, op. cit. pág. 560.

457/ Castrén, op. cit., págs. 202-203; Rousseau, op. cit., pág. 561.

458/ Rousseau, ibid., pág. 559; Castrén, op. cit., pág. 189; Ghanim, op. cit., pág. 741; Berber, op. cit., pág. 169; Wengler, op. cit., pág. 1396 (pero tan sólo en lo que se refiere a la utilización de municiones de rastreo contra objetivos humanos); Knackstedt, "Kampfmittel, Verbotene", loc. cit., pág. 187; Accioly, op. cit., pág. 310.

459/ Berber, op. cit., pág. 169; Accioly, op. cit., pág. 310; Castrén, op. cit., pág. 189; Rousseau, op. cit., pág. 559; Wengler, op. cit., pág. 1396; von der Heydte, Völkerrecht, vol. 2, pág. 245.

460/ Castrén, op. cit., pág. 190 (si se utilizan contra civiles); Berber, op. cit., pág. 169; Czesany, op. cit., págs. 115-116; Oppenheim, op. cit., pág. 340, nota 3. En opinión de Spetzler la legalidad del uso dependería del objetivo y no consideraría como ilegal el uso de armas incendiarias contra personal militar. Op. cit., págs. 98-101.

461/ Wengler, op. cit., pág. 1396; Rousseau, op. cit., pág. 559, von der Heydte, Völkerrecht, vol. 2, pág. 245; Greenspan, op. cit., pág. 353 (en cuanto a la práctica de poner en un proyectil alguna sustancia que infecte las heridas).

462/ Wengler, op. cit., pág. 1396, von der Heydte, Volkerrecht, vol. 2, pág. 245; Accioly, op. cit., pág. 310. Spetzler considera que la utilidad militar de la guerra química significa que no está prohibida por el inciso e) del artículo 23, pero expresó la opinión de que la guerra bacteriológica, a causa de sus efectos incontrolables, violaría el inciso e) del artículo 23, op. cit., págs. 97 y 100.

- Las bayonetas dentelladas 463/
- Las armas rellenas con clavos y partículas de vidrio 464/
- Los fosos encubiertos provistos de lanzas de acero 465/

203. Se han enunciado diversos criterios para determinar si un arma causa daños superfluos:

1) Se ha sugerido que un arma que cause lesiones a civiles, sin utilidad militar en cuanto hace a la destrucción de la fuerza de combate del enemigo, viola el "principio de humanidad", que es la norma contra la utilización de armas que causan daño superfluo en cualquier otra forma 466/.

2) Algunas veces se hace referencia a la inflicción de heridas inhumanas y a los medios inhumanos de producir la muerte 467/. Así, por ejemplo, se condenan las armas nucleares e incendiarias porque causan una muerte lenta y dolorosa, porque tienen consecuencias de carácter hereditario, porque su efecto tal vez no se experimente durante muchos años, o por el dolor que se deriva de la exposición a las radiaciones 468/. Otros autores rechazan expresamente estos criterios 469/.

3) El arma podría construirse en tal forma que pusiera al enemigo fuera de combate ocasionándole menos daño 470/. En cambio, algunos escritores se muestran bastante escépticos sobre la condenación de un arma como ilegal por el hecho de que haga inevitable la muerte 471/.

463/ Castrén, op. cit., pág. 189.

464/ Ibid., Oppenheim, op. cit., pág. 340, Greenspan, op. cit., pág. 353.

465/ Spetzler, op. cit., pág. 97.

466/ Von der Heydte, Völkerrecht, vol. 2, pág. 243.

467/ Lubrano-Lavadera, Les lois de la guerre et l'occupation militaire (1956), pág. 28.

468/ Euler, op. cit., pág. 151; Randermann, op. cit., pág. 144; Czesany, op. cit., pág. 168. Spaight, op. cit., pág. 275; Wilhelm, "Les conventions de Genève et la guerre aérienne", Revue Internationale de la Croix-Rouge, vol. 34 (1952), pág. 4, nota 1.

469/ Schwarzenberger, op. cit., pág. 49; Spetzler, op. cit., págs. 98 y 99 (en lo tocante a las armas incendiarias).

470/ Wengler, op. cit., pág. 1395.

471/ O'Brien, "Biological/Chemical Warfare and the International Law of War", loc. cit., pág. 18; Spetzler, op. cit., pág. 91.

4) Si existe la posibilidad de escoger entre varias armas para lograr un objetivo militar determinado, el hecho de no elegir la que causa el menor daño tal vez dé origen al empleo de un arma que causa daños superfluos 472/.

5) Las características del arma son tales que produce el sufrimiento por el sufrimiento mismo 473/.

6) La norma es una norma de proporcionalidad. Como lo indican McDougal y Feliciano "... es más bien el carácter innecesario, la superfluidad del daño, la enorme desproporción entre los resultados militares y las lesiones incidentales lo que se considera comúnmente como factor decisivo de ilegitimidad" 474/.

SECCION 14. ARMAS DE EFECTOS INDISCRIMINADOS

204. El tema de la ilegalidad de las armas en razón de que afectan indistintamente a personal y objetivos militares y a la población y objetivos civiles se ha examinado ya en relación con la práctica de los Estados y la doctrina referentes a las siguientes categorías de armas:

Armas químicas y bacteriológicas

Armas incendiarias

Armas nucleares

Bombardeo aéreo tradicional

Bombas de fragmentación

Minas terrestres y explosivos simulados

Misiles

Armas de acción diferida

Armas navales

Por tanto, no parece necesario repetir aquí los puntos examinados.

472/ Brungs, loc. cit., pág. 92.

473/ Spetzler, op. cit., pág. 97, No. 63.

474/ Op. cit., pág. 616, quien cita a Spaight, War Rights on Land, págs. 76-77 (1911); Hall, International Law, 8a. ed., 1924, págs. 836 y 837; Hyde, op. cit., pág. 1814; y Oppenheim, op. cit., pág. 340.

SECCION 15. ARMAS QUE PRODUCEN LA MUERTE A TRAICION

A. Práctica de los Estados

205. El inciso b) del artículo 23 del Reglamento de La Haya 475/ prohíbe matar a traición a individuos pertenecientes a la nación o ejército enemigos.

206. Entre los manuales examinados, solamente en los de Austria y la República Federal de Alemania figura alguna referencia a armas (en contraposición a personas) que producen la muerte a traición. En los manuales austríacos, el veneno y las armas envenenadas, las armas químicas y bacteriológicas y las minas disimuladas, tales como la colocación de explosivos en lápices y juguetes, se califican como ilegales por esa razón 476/. Los manuales alemanes se refieren a objetos llamativos análogos que contienen explosivos o sustancias cáusticas o inflamables y que pueden arrojarse por el aire o ser abandonados por tropas que se retiran 477/.

B. Doctrina

207. Las autoridades en la materia se han referido ocasionalmente al empleo de uno u otro tipo de arma como traicionero. Los rayos gamma invisibles emitidos por las bombas atómicas arrojadas en Hiroshima y Nagasaki han sido calificados como un ejemplo de matanza a traición 478/. Algunos tipos de ataques aéreos han sido igualmente calificados en esa forma 479/.

208. Con mayor frecuencia se ha afirmado que el empleo de armas y minas de acción diferida está reñido con la prohibición de matar individuos a traición 480/.

209. Un autor observa que si "no existe una relación implícita o explícita de confianza entre los beligerantes, es difícil ver una justificación para aplicar la noción de traición a los medios de destrucción" 481/.

475/ Scott, op. cit., pág. 219. Véase Capítulo I supra.

476/ Bundesministerium für Landesverteidigung, op. cit., pág. 252;
Krivinyi, op. cit., pág. 10.

477/ Kriegsvölkerrecht: Leitsätze für die allgemeine Ausbildung, op. cit., pág. 31; Völkerrechtliche Grundsätze der Landkriegführung, op. cit., pág. 16.

478/ Czesany, op. cit., pág. 166.

479/ Ibid., pág. 24. No se ofrecen ejemplos.

480/ Véase Sección 10, supra.

481/ O'brien, "Biological/Chemical Warfare and the International Law of War", loc. cit., pág. 39.